

Ciencia en dictadura: trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina.

Compiladora:
Cecilia Gárgano

4/12/76

NOT SENT

DD004 R

INDICATE
 COLLECT
 CHARGE TO

**DEPARTMENT OF STATE
TELEGRAM**

FROM: Amembassy BUENOS AIRES

CLASSIFICATION: [REDACTED]

E.O. 11652: N/A

TAGS: PINS, TGEN, AR

SUBJECT: Firings and Arrests in Argentine Technological Institutes

ACTION: Secstate, Washington DC

INFO: Amembassy MONTEVIDEO

REF: [REDACTED] BUENOS AIRES

State 83929

ALSO FOR AGRICULTURE, AID, NBS, NASA
MONTEVIDEO FOR AGATT

ARGENTINA PROJECT (S200000044)
U.S. DEPT. OF STATE, A/RPS/IPS
Margaret P. Grafeld, Director
 Release Excise Deny

Exemption(s):
Declassify In Part In Full *Decontrol*
 Classify as Extend as Downgrade to
Date _____ Declassify on _____ Reason _____

DECONTROL

1. Embassy understands that military junta delegates have fired significant numbers of personnel at both the National Institute for Industrial Technology (INTI) and the National Institute for Agricultural Technology (INTA). Also, there have been some arrested in both organizations.

2. At INTA, we understand some 180 have been fired out of 6000 employees, countrywide. We have no rpt no firm figure on number arrested, but believe is is of order of magnitude of twenty (20).

AMB
SCI
POL
FAS
ECOM
POL/R
USIS
CHRON

Ciencia en dictadura: trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina.

Compiladora:

Cecilia Gárgano

001.891:94(82) C48 Ciencia en dictadura : trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina /compiladora Cecilia Gárgano. -- Buenos Aires : INTA, 2015.
171 p. : il.

ISBN N° 978-987-521-661-7

I. Gárgano, Cecilia

CIENCIA – CIENTIFICOS – INVESTIGACION – HISTORIA – ARGENTINA

INTA - DD

Índice

Prólogo	5
Introducción	7
Las ciencias sociales durante la última dictadura: agendas, investigadores e instituciones. (Laura Graciela Rodríguez)	19
Ciencia y dictadura en la SECyT y el Conicet: el modelo de política científico-tecnológica de la Revolución Argentina al Proceso de Reorganización Nacional (1966-1983) (Adriana Feld)	35
Una aproximación a las relaciones entre ciencia, tecnología y política en la CNEA antes de la dictadura: apogeo y ocaso de las experiencias de participación política del personal. (Ana Fernández Larcher)	63
Consensos y disensos sobre el desarrollo nuclear argentino en la última dictadura. (Ana Spivak L'Hoste)	87
Crónicas de un proyecto tecnológico en un Instituto del CONICET: la Planta Modelo Experimental de Agua Pesada (INTEC/INGAR). (Victoria Castro)	99
Investigación, Dictadura y Universidad. El caso del Departamento de Hidrología General y Aplicada de la Universidad Nacional del Litoral (1970-1983). (Gabriel Matharan)	115
Tecnología agropecuaria y dictadura. La intervención militar del INTA. (Cecilia Gárgano)	137

Prólogo

Para un país como la Argentina, que impulsó un primer ciclo de industrialización clausurado por un golpe de estado (1930-1976), que luego de la crisis económica más profunda de su historia, a fines de 2001, intenta dejar atrás un cuarto de siglo de políticas neoliberales y desindustrialización y que, a contracorriente de un proceso de globalización que obstaculiza las estrategias de desarrollo de los países no centrales, se propone recuperar sus capacidades científico-tecnológicas para acompañar un segundo ciclo de transformación de su matriz económica, es central y estratégica la producción de conocimiento sobre las trayectorias políticas de sus instituciones de ciencia y tecnología y de los procesos de construcción –en ocasiones conflictivos y contradictorios– de sus identidades y de sus vínculos siempre frágiles con el contexto socio-económico.

Como explica el sociólogo Claus Offe, la construcción de instituciones “constituye el problema práctico central que enfrentan las sociedades a medida que emergen de un pasado completamente desacreditado”. En el caso argentino, abrir la caja negra de las trayectorias de las instituciones científicas durante la última dictadura –*nuestro* pasado desacreditado– aparece como una condición de posibilidad historiográfica para la comprensión de los proyectos para la ciencia y la tecnología de una sociedad posautoritaria y de su incidencia sobre el sinuoso proceso de reconstrucción democrática.

Desde un enfoque histórico, la temática dominante de este libro, concebido y compilado por la historiadora Cecilia Gárgano, demuestra que la última dictadura –como caso de totalitarismo neoliberal semiperiférico, incluidas sus improvisaciones e inconsistencias– representa un período que hace “retroceder” a los procesos de institucionalización de la ciencia y la tecnología a niveles de vulnerabilidad y contingencia difíciles de calibrar desde el presente. El análisis de las especificidades de este retroceso desde la perspectiva de las políticas institucionales, las ideologías y las memorias colectivas aporta una clave de lectura para la comprensión de las dimensiones políticas del lugar marginal –podría decirse subhistórico– que el proyecto de globalización neoliberal, desde sus inicios, asignó a la producción de conocimiento en los países no centrales.

Cuando se analizan los totalitarismos europeos, surgen categorías como “modernismo reaccionario” (Jeffrey Herf) para encuadrar el proyecto tecnológico de la Alemania nazi, o se caracteriza al fascismo italiano como un proyecto de industrialización y modernización impulsado por una dictadura desarrollista. Como contrapunto semiperiférico, el proyecto económico del último gobierno de facto, junto con las políticas de terrorismo de Estado que acompañaron su consolidación, apuntaron

más bien a la destrucción de algunos rasgos centrales definitorios de la modernidad.

Entonces, en lugar de preguntarnos qué lugar ocuparon la ciencia y la tecnología en el proyecto político y económico de la última dictadura –pregunta intrascendente que nos enfrentaría a retóricas e iniciativas contradictorias–, tal vez es más preciso preguntarnos cómo impactaron las políticas de terrorismo de estado sobre los procesos de institucionalización de la ciencia y la tecnología. Y cómo estos dialogaron con las transformaciones políticas y económicas.

Este libro aporta enfoques y análisis que abordan esta cuestión, y problematizan las continuidades y rupturas en los enfoques y agendas: algunas trayectorias en el ámbito de las ciencias sociales; la intervención militar del INTA y el rol que pasa a ocupar la extensión rural; las políticas del CONICET durante las dos últimas dictaduras; memorias colectivas en tensión sobre la CNEA de aquel período; la politización de los trabajadores de CNEA entre 1973 y 1976 y cómo la intervención militar truncó esta experiencia; la reconstrucción, también en tensión, del Proyecto Experimental Modelo de Agua pesada en el INTEC; la construcción de un área de investigación relacionada con la hidrología en la Universidad Nacional del Litoral desde 1974 hasta 1983.

Finalmente, desde una lectura presentista, los artículos reunidos en este libro son también un indicio de que la historia política e institucional de la ciencia y la tecnología en la Argentina de las últimas décadas es un insumo necesario para cualquier iniciativa de lo que algunos economistas preocupados por los procesos de desarrollo económico llaman “ingeniería institucional”.

Como demuestra *Ciencia en Dictadura. Trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina*, “Ciencia y autoritarismo en la Argentina” es un capítulo crucial para comprender las dinámicas de producción de conocimiento en un país no central, donde las condiciones estructurales no convergen con el relato épico de la “república de la ciencia” o las normativas despolitizadas de enfoques como el de los “sistemas nacionales de innovación” que, por distintos caminos, buscan universalizar la mirada idealizada que sobre las funciones del conocimiento construyen las economías capitalistas avanzadas.

Diego Hurtado

San Martín, 8 de agosto de 2015

Introducción

Cecilia Gárgano¹

El período comprendido por la última y más traumática dictadura militar (1976-1983) que tuvo la Argentina ha sido analizado en forma creciente desde variados y valiosos enfoques. El crecimiento, cuantitativo y cualitativo, de estas indagaciones ha consolidado un campo de estudio en torno a la historia reciente. En este contexto, la producción de ciencia y tecnología durante este período no ha sido, ciertamente, una temática abordada en profundidad en los trabajos del campo ciencia-tecnología-sociedad (CTS). Al mismo tiempo, dentro de la historiografía, tampoco se ha explorado en forma sistemática la situación de las comunidades institucionales dentro de la esfera estatal, ni el impacto de la introducción de mecanismos represivos en los ámbitos de investigación. Mientras que la cuestión científica y tecnológica se encuentra prácticamente ausente en los trabajos centrados en la historia argentina reciente, la dimensión histórica ligada al período comprendido por la última dictadura aparece en los estudios sociales de la ciencia de modo fragmentario. Es a estas problemáticas que este libro busca contribuir, a través de diversos estudios de caso, que recuperan trayectorias institucionales, académicas, políticas, de investigación, en diferentes ámbitos. ¿Cuál fue la situación del complejo científico y tecnológico argentino durante la última dictadura militar? ¿Qué ocurrió durante la intervención de los organismos de ciencia y técnica con la orientación de las investigaciones? ¿Cómo dialogaron estas transformaciones con los cambios económicos, políticos y sociales en curso? ¿Qué continuidades, y qué rupturas, son posibles identificar en la producción de conocimiento y en las políticas científicas? ¿Qué similitudes y qué particularidades pueden observarse en las distintas trayectorias institucionales y áreas de investigación? Estos son algunos de los interrogantes a partir de los que se origina esta producción colectiva. Al mismo tiempo, lejos de presentar un conjunto cerrado de afirmaciones, los trabajos reunidos en este libro presentan realidades y miradas diversas, y buscan generar nuevos cuestionamientos que contribuyan a profundizar y ampliar esta incipiente línea de investigación.

El presente libro está también enmarcado en las actividades derivadas de un Convenio de Cooperación, celebrado entre el INTA y el CONICET en marzo de 2014. Con el objetivo de profundizar la investigación en torno a la intervención militar, durante la última dictadura, del INTA en particular, y del complejo científico-tecnológico en general, este convenio tomó como base mi investigación doctoral y habilitó un nuevo espacio para la indagación.² La articulación institucional entre ambos organismos

¹ Dra. en Historia (UBA), investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica (UNSAM), docente universitaria (Escuela de Humanidades, UNSAM) y becaria posdoctoral (CONICET).

² El convenio fue firmado en marzo de 2014 entre las máximas autoridades de ambas instituciones. Participan de este espacio, en calidad de investigadoras, Ana Spivak L´ Hoste (CONICET-UNSAM), Ana Fernández Larcher

constituye un accionar inédito dentro de estos ámbitos, que asumen de esta forma el compromiso de reconstruir su propia historia, y el desafío de articular estas investigaciones a sus trayectorias presentes. Al mismo tiempo, junto con esta y otras producciones académicas, el trabajo realizado en el marco de dicho convenio busca generar también otro tipo de producciones y acciones de intervención junto con la comunidad. Ejemplo de estas son la conformación de un sitio web, (que recupera materiales documentales y brinda un panorama de la intervención militar del INTA), la realización de materiales audiovisuales, (que reconstruyen distintas experiencias de investigación y extensión rural), y la participación en forma conjunta en diversas actividades junto con la Comisión de Reparación Histórica, integrada por trabajadores del INTA.

Se presentan en esta oportunidad aportes de distintos investigadores e investigadoras que analizan y recuperan trayectorias, agendas, relatos en tensión, desmantelamiento de equipos, surgimiento de líneas de trabajo, políticas científicas, impactos de la violencia estatal y estrategias de acción dentro de diferentes espacios dedicados a la investigación. El libro cumple así uno de sus principales objetivos: abrir un campo de interrogantes y trazar puentes entre investigaciones particulares, que puedan empezar a delinear el rompecabezas de lo sucedido en los ámbitos de investigación tanto con relación a sus comunidades, como a las continuidades y rupturas presentes en la producción de ciencia y tecnología en este período.

Ciencia, tecnología y dictadura: herencias y desafíos

El comienzo de la última dictadura militar produjo un fuerte impacto en los ámbitos de investigación. Los organismos fueron intervenidos y puestos a disposición de las distintas fuerzas, que se repartieron su administración.³ La introducción de mecanismos represivos contó con elementos comunes: implementación de cesantías por “razones de seguridad”, desmantelamiento de equipos e interrupción de líneas de investigación, persecución ideológica, detenciones y secuestros en los propios lugares de trabajo. Como había sucedido ya en 1966 en la Universidad de Buenos Aires, durante la llamada Noche de los Bastones Largos, la complicidad civil encarnada en algunos directivos integrantes de los organismos de ciencia y técnica es reconocida frecuentemente como la herramienta que permitió al accionar militar confeccionar las “listas negras”. Asimismo, las tareas de espionaje, practicadas al interior de las instituciones por personal de inteligencia en los años previos al golpe de 1976, permitieron construir los mapas de datos, que luego fueron utilizados por las fuerzas represivas.⁴ Si bien las universidades nacionales, eje de la vida política

(CONICET-UBA) y Clara Sarsale (FFyL-UBA). La tesis doctoral mencionada, cuya investigación fue financiada por dos becas doctorales otorgadas por CONICET, fue defendida en el mes de noviembre de 2014. Se trata de Gárgano, C., *Ciencia, tecnología y dictadura. Producción de conocimiento e intervención militar en el INTA (1973-1983)*, tesis doctoral en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2014.

³ Dentro de las indagaciones que estudian esta división tripartita, resta indagar qué criterios pesaron en la ubicación del área de ciencia y técnica.

⁴ Al respecto, resultan elocuentes los fondos documentales desclasificados de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) en donde se encuentran disponibles los informes de intelligen-

estudiantil, encabezaron el embate, también las distintas instituciones del complejo científico-tecnológico sufrieron la persecución a sus integrantes.

En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la intervención redundó en centenares de despidos arbitrarios y en el secuestro de 26 trabajadores, de los cuales 16 continúan desaparecidos. Entre los profesionales secuestrados, un grupo de investigadores e ingenieros fue detenido, retenido en un barco, sometido a interrogatorios, y posteriormente liberado.⁵

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Alfredo Giorgi, investigador del Centro de Plásticos y María del Carmen Artero, secretaria del Centro de Química, fueron desaparecidos en 1978.⁶ En este mismo organismo, el área de Electroquímica Aplicada fue desarmada, junto con la implementación de numerosas “bajas”. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), además de ver menoscabado el procedimiento de evaluación de pares por los dispositivos de control instaurados, también sufrió la represión. Dante Guede, quien se desempeñaba en el Observatorio de Radioastronomía de Villa Elisa (La Plata), Martín Toursarkissian y Manuel Ramón Saavedra –que trabajaban en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia– permanecen desaparecidos.⁷ En el INTA, al momento, se contabilizan seis casos de desapariciones, tres asesinatos, un operativo militar que dejó como saldo alrededor de doscientas detenciones y casi ochocientas de cesantías. El carácter preliminar de las cifras da cuenta tanto del estado de las investigaciones en materia judicial, aún en curso, como de la vacancia en este campo de estudios.

Junto con la perseguida y lograda clausura de las actividades gremiales y políticas en estos ámbitos a través del accionar represivo, el propio desarrollo de las tareas científicas y tecnológicas realizadas en el sector público fue parte de las transformaciones económicas del período. En un documento denominado “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, se llamaba a un rol del Estado en el desarrollo de la CyT que no tuviera “prejuicios” respecto del origen de la tecnología o los conocimientos, y promoviera la “eficiencia y ventaja comparativa” de los sectores productivos.⁸ En un contexto de desregulación selectiva de la injerencia estatal en la actividad económica, el marco regulatorio vio modificadas las principales medidas en esta materia. Una de las primeras disposiciones modificó las pautas que regían la inversión extranjera. Años antes, en 1973, durante el gobierno de Cámpora, junto con la restricción a la importación de tecnología en maquinaria y bienes intermedios, se había dispuesto una nueva

cia elaborados al interior de los organismos.

⁵ Véase Hurtado, D., *El sueño de la Argentina atómica*, Buenos Aires, Edhasa, 2014, p.180.

⁶ INTI, “Dictadura y memoria en el INTI. Testimonios sobre desaparecidos y sobrevivientes del INTI '76”, *Saber Cómo*, 39, 2006, p. 2.

⁷ CONICET, *Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Período 1976-1983* Buenos Aires, Eudeba, 1989.

⁸ Junta Militar, *Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional*, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1980, p. 2.

regulación para las inversiones extranjeras directas (la Ley 20.577), que establecía como empresa nacional a aquellas en la que la participación de capitales nacionales representaran el 80% del total o más, y fijaba áreas estratégicas en las que se impedían las inversiones extranjeras: servicios públicos, actividades financieras, producción y comercialización agrícola.⁹

En 1974, una segunda disposición sobre transferencia de tecnología (la Ley 20.794) había restringido los acuerdos de transferencia en los casos en los que la tecnología era de disponibilidad en el país, o en los que no existían garantías suficientes para garantizar el mantenimiento de las licencias derivadas del uso de la tecnología, el precio de la tecnología excedía los beneficios potenciales o era indeterminado, o en los que no había licencias conjuntas obligatorias. Estas disposiciones tendían a regular la actividad, estableciendo protecciones para las producciones locales. Si bien estas medidas, enmarcadas en la retórica del *Plan para la Reconstrucción y Liberación Nacional* elaborado por el gobierno, contenían aspectos difusos, más declarativos que aplicados, y continuaban sin resolver la contradicción fundamental del proceso de industrialización local, avanzaban en la definición de áreas prioritarias de investigación delimitadas en los Planes Nacionales de CyT (Alimentos, Electrónica, Enfermedades endémicas y Vivienda), y se orientaban a una planificación del sector. Iniciada la última dictadura, la Ley 21.382 eliminó las restricciones previas. Cambió la definición de “empresa nacional” a una simple mayoría, suprimió las áreas estratégicas cerradas a las inversiones extranjeras, y omitió las cláusulas dirigidas a evitar abusos en las licencias, eliminando, por ejemplo, prohibiciones al licenciante de establecer los precios de reventa, y favoreciendo así a los inversores extranjeros. Sobre estos aspectos se pronunciaba el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, al afirmar que el Estado debía tener la menor participación posible en los contratos y, en lugar de restringir la transferencia de tecnología “con lo que podría llamarse un complejo de inferioridad, el Estado usará todos sus recursos para ayudar al sector empresarial a actualizar sus actividades también en lo que respecta a la tecnología”.¹⁰ La transformación de la estructura industrial a partir de 1976 disminuyó la demanda de tecnología, al tiempo que la sincronía de las políticas de apertura económica coincidía con la exclusión local del nuevo paradigma tecnológico internacional.¹¹ Cabe aclarar que el carácter dual de la orientación económica del régimen sostuvo un particular modelo de gestión, signado por la combinación de la tecnocracia liberal, liderada por el equipo del ministro Martínez de Hoz, y viejas prácticas corporativas e intervencionistas de ciertas fracciones de la gran burguesía, la burocracia estatal y las fuerzas armadas.¹² Como veremos en algunos de los capítulos

⁹ Adler, E., *The power of ideology*, (Berkeley, University of California Press, 1987).

¹⁰ Martínez De Hoz, J. A., citado en ADLER, Op. Cit., p. 115.

¹¹ Véase Azpiazu, D., Basualdo, E., y Nochteff, H., *La revolución tecnológica y las políticas hegemónicas*, Buenos Aires, Lagasa, 1988; Nochteff, H., “Patrones de Crecimiento y Políticas Tecnológicas en el siglo XX”, *Ciclos*, IV, (6), 1994, pp. 43-70. Estos trabajos, aportes sumamente relevantes para la comprensión de los vínculos entre políticas económicas y desarrollo de las actividades de CyT durante la última dictadura, no buscaron realizar estudios empíricos sobre la producción científica y tecnológica. Es sobre las trayectorias de las diversas áreas que resta profundizar para comprender la dinámica histórica implicada.

¹² Entre otros, Canitrot, A., “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa

reunidos en este libro, el área de CyT no estuvo al margen de estas contradicciones. En este marco, iniciativas que reflejaban las internas existentes –como la creación del Ministerio de Planeamiento en 1976– convivieron con la tendencia creciente de a la liberalización del régimen de producción de CyT, que a su vez se articuló con una fuerte intervención estatal en favor de la consolidación de grupos económicos concentrados a través de diversas estrategias de apuntalamiento. Entre ellas, transferencia de recursos, organización de licitaciones y contratos, y, también, de resultados de investigaciones altamente rentables.

Las leyes que promovían la actividad de capitales concentrados de origen internacional no eran una novedad en las políticas científico-tecnológicas nacionales. Durante las décadas de 1950 y 1960, la promoción de las inversiones extranjeras había permitido a las subsidiarias de las multinacionales establecerse con condiciones ventajosas en ramas como la industria automotriz, química, petroquímica, maquinaria agrícola, y controlar buena parte de la producción manufacturera doméstica. Durante la dictadura encabezada por el general Onganía, los incentivos a la radicación de multinacionales habían implicado un incremento sustancial en las inversiones extranjeras, que ya venían en alza desde los planes desarrollistas sostenidos por el gobierno de Frondizi. No obstante, como señalan Bellini y Rougier, si bien después de 1955 los planteos anti-intervencionistas y liberales nutrieron buena parte de la política económica, el Estado consiguió filtrarse dentro de la estructura de capital de muchas empresas privadas.¹³ Durante la última dictadura el salto fue cualitativo. En solo dos años, el grueso de las empresas industriales que hasta el momento tenían un control mayoritario en manos del Estado dejaron de estarlo por privatización, liquidación o transferencia. El país se había transformado para entonces en un territorio conveniente (y des regulado) para el capital extranjero. En 1977, la tercera ley de transferencia de tecnología (Ley 21.617) eliminó la mayoría de las restricciones previas, allanado el camino para el siguiente paso, la liberalización en extremo, mediante la cuarta ley de transferencia de tecnología (Ley 22.426), descripta como “la más liberal de América Latina” por su efectividad en eliminar los controles y restricciones previas. En este sentido, si bien durante la última dictadura no parece haber existido una “política explícita” orgánica y articulada para el área, es posible marcar que la ausencia de una política científica y tecnológica sistemática convivió con iniciativas que incidieron directamente en la producción local de ciencia y tecnología.¹⁴ Una síntesis de los principales hitos relevantes en materia de disposiciones en CyT correspondientes al período 1973-1983 pueden observarse sintetizados en el siguiente cuadro:

económico del gobierno argentino desde 1976”, *Desarrollo Económico*, 19, 76, pp. 453-475, 1980; Pucciarelli, A. “La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura encubre una vieja práctica corporativa”, en Pucciarelli, A., (editor), *Empresarios, tecnócratas y militares*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2004.

¹³ Belini, C. Y Rougier M., *El Estado Empresario en la industria argentina. Conformación y crisis*. Buenos Aires, Manantial, 2008, p. 296.

¹⁴ Adler, E., Op. Cit., p 111. La categoría de políticas “explícitas e implícitas” en CyT fue elaborada por Amílcar Herrera para indicar la diferencia entre la política “oficial” (cuerpo de disposiciones y normas) y aquella que carece de estructuración formal, pero que expresa la demanda científica y tecnológica vigente. Véase HERRERA, A., “Los determinantes sociales de la política científica en América Latina. Política científica explícita y política científica implícita”, *REDES*, 5, 1995, pp.117-131.

Cuadro: Hitos en el marco regulatorio de la producción de CyT (1973-1983)

Año	Disposición	Contenido
1973	Ley 20.545	Restricción a la importación de tecnología en maquinaria y bienes intermedios
	Ley 20.577	Regulación de las inversiones extranjeras directas: fijación de áreas estratégicas en las que se impedían las IED
1974	Ley 20.794	Regulación de los acuerdos de transferencia de tecnología, si la tecnología era de disponibilidad en el país.
1976	Ley 21.382	Supresión de restricciones previas en materia de IED: eliminación de las áreas estratégicas y omisión de las cláusulas reguladoras de las licencias.
	Creación del Ministerio de Planeamiento	
	Creación del CAICYT	
1977	Ley 21.617	Tercera ley de transferencia de tecnología eliminó la mayoría de las restricciones previas
1978	Desmantelamiento del Ministerio de Planeamiento	
1979	Préstamo del BID	\$66 millones dólares contraídos para ser destinados al área CyT. 42 millones se destinan a CONICET
1980	Desgravación impositiva	Se elimina el impuesto al 0,25% de los créditos bancarios destinados a la industria, base del presupuesto del INTI.
1981	Ley 22.426	Cuarta ley de transferencia de tecnología: efectiva eliminación de controles y restricciones

Fuente: elaboración propia según ADLER, E., Op. Cit.

En un marco de restricción del gasto público, aumento del endeudamiento externo, ajustes salariales y crecimiento de la especulación financiera, como señalamos, también la desregulación del régimen de importación de tecnología afectó la capacidad endógena de investigación y desarrollo. Por otro lado, junto con el desmantelamiento, común a gran parte del sector público, algunas instituciones y áreas de trabajo dentro de estas registraron una aparente continuidad. En este sentido, el impacto no fue simétrico para el conjunto de los organismos, ni para el conjunto de las líneas de trabajo al interior de estos. La distribución de los recursos agrupados en la “Finalidad 8” del presupuesto nacional, el correspondiente al área de CyT, indica que tanto la CNEA como el CONICET incrementaron su participación, mientras que la del INTI descendió fuertemente y la de las universidades disminuyó drásticamente a partir de 1975.¹⁵ Con respecto al INTI, se retrajeron las funciones relacionadas con la transferencia de tecnología al exterior y las acciones ligadas

¹⁵ Además de los capítulos de este libro que abordan la situación del CONICET y de la CNEA, véase Bekerman, F., “El campo científico argentino en los años de plomo: Desplazamientos y reorientación de los recursos”, *Socio-histórica*, 26, 2009, pp. 151-166.; Hurtado, D., “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 13, 2009, pp. 26-74.

al desarrollo tecnológico autónomo, al mismo tiempo que se otorgó prioridad a la prestación de servicios técnicos.¹⁶ La apertura, el endeudamiento y la desregulación incidieron negativamente en su trayectoria en este período. Después de 1976, el INTI pasó a actuar como asesor, mediante procedimientos previstos en la Ley 22.426, de compañías que buscaban incorporar nuevas tecnologías importadas en sus procesos productivos. Este organismo fue puesto en manos de la Marina, y hacia 1980 su presupuesto dependía únicamente de los fondos del Tesoro Nacional.

Durante la última dictadura, el desmantelamiento del sector público convivió con una fuerte intervención estatal en favor de la consolidación de grupos económicos nacionales y extranjeros. Dentro del complejo científico tecnológico, el vaciamiento estatal –más evidente en el caso del INTI y en el contenido del marco (des) regulatorio que acompaña a la actividad– fue una de las caras de una dinámica, cuyo reverso estuvo dado por el fortalecimiento del activo papel del Estado como instrumento de la amplificación de diversos mecanismos de cesión de productos, resultados y conocimientos generados en el ámbito público. Los destinatarios de los conocimientos producidos, junto con los objetos de estudio y los enfoques aplicados, no fueron ajenos a los cambios que en el período registró el proceso de acumulación. La orientación de los conocimientos fue, en muchos casos, supeditada a la promoción de capitales privados y clausurados los debates en torno a esta problemática estructural. Asimismo, algunas instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, y áreas de trabajo dentro de estas, registraron una continuidad, expresada en líneas y planes de investigación. Mientras que es posible rastrear patrones comunes en la implementación de mecanismos represivos durante las intervenciones militares de los principales organismos, como señalamos, se registran impactos asimétricos en las asignaciones y orientaciones de sus presupuestos. En este sentido, los trabajos reunidos en este libro exploran estas trayectorias diversas, así como las contradicciones existentes en estas, tanto en el nivel referido a la implementación de políticas científicas, las asignaciones presupuestarias, como en los relatos construidos en torno al pasado reciente de los organismos. Así, no se trata simplemente de señalar la existencia de experiencias contra corriente de las tendencias del período, como el surgimiento o crecimiento de áreas y líneas de investigación, sino de complejizar el análisis del significado de estas experiencias. En este contexto, resulta fundamental prestar atención al desarrollo de áreas estratégicas y altamente rentables de desarrollo tecnológico (investigaciones en mejoramiento genético vegetal desarrolladas por el INTA, prospecciones de minerales de uso nuclear realizadas por la CNEA e investigaciones en microelectrónica efectuadas por el INTI, entre otras) e identificar qué continuidades y qué rupturas presentó en ellas el ciclo de producción de conocimiento. En este sentido, resta aún profundizar en el estudio de los organismos que en este período crecieron en términos presupuestarios, como

¹⁶ No existe un estudio en profundidad sobre la trayectoria del INTI en este período, esta y algunas otras referencias pueden consultarse en Valeiras, J., “Principales instituciones especializadas en investigación y extensión”, en Oteiza, E. (director), *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992, p.138.

el CONICET y la CNEA, donde también crecieron los consorcios público-privados. En otras palabras, explorar en qué medida formaron parte de la trama corporativa que el Estado generó, asociándose a grupos económicos concentrados y favoreciendo su accionar.

Al mismo tiempo, los estudios centrados en reconstruir perfiles profesionales y experiencias políticas en diversas comunidades de investigación, a los que este libro busca contribuir, permiten profundizar el análisis sobre las modalidades de funcionamiento que adquirió la producción de conocimiento en estos años. También, explorar las rupturas cognitivas, en relación a los contenidos y destinatarios, y sus efectos. Así, si bien hay áreas, como las ciencias sociales, donde contamos con una imagen panorámica de su situación atravesada por elementos comunes, es poco aun lo que sabemos en términos de su efectivo funcionamiento.

El trabajo de Laura Rodríguez, en línea con sus indagaciones sobre universidad y dictadura, aborda, precisamente, el desarrollo de las ciencias sociales, a través del estudio de la revista *Sociológica. Revista Argentina de Ciencias Sociales*, editada con subsidios del CONICET entre 1978 y 1984. Si bien el golpe asestado en las ciencias sociales en este período ha sido señalado, fuera de algunas indagaciones panorámicas o disciplinares, aún resta analizar en profundidad qué rupturas epistemológicas acompañaron esta deriva, y qué construcciones fueron puestas en marcha en estos años en pos de generar nuevos ámbitos académicos. El estudio de Rodríguez aporta en esta línea, a partir de la reconstrucción del perfil intelectual del director de esta publicación, la identificación de sus lazos con círculos católicos de derecha y anticomunistas, y el estudio de distintas trayectorias de investigación. Al mismo tiempo, a partir de este análisis, introduce el funcionamiento de los Institutos del CONICET pertenecientes al área de las Ciencias Sociales y Humanas, y los casos de corrupción que se asociaron a su proliferación.

Por su parte, el capítulo a cargo de Adriana Feld analiza las trayectorias del CONICET y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, haciendo foco en las políticas científicas que moldearon su accionar. A partir de una amplia documentación, indaga las continuidades con relación al diseño de las políticas de la década de 1960 y las implementadas durante la dictadura. Mientras que destaca el impacto de las prácticas represivas, señala cómo la ideología liberal, enfrentada a la planificación, coexiste durante la última dictadura con la implementación de criterios y metodologías previos. En este sentido, la perdurabilidad de elementos ligados a la identificación de prioridades se produce en un contexto general donde la programación pierde terreno. Es, precisamente, en esta “tensión entre liberalismo y planificación” donde el trabajo de Feld tiende también un puente hacia otras indagaciones, pertenecientes al campo de estudios de la historia reciente, que han estudiado el peso de estas tensiones tanto en la orientación de la política económica, como en las internas existentes dentro de las fuerzas armadas.

El área nuclear es también objeto de reflexión, a partir de diversos enfoques y recortes temporales. Los capítulos a cargo de Ana Spivak L´ Hoste y Ana Fernández

Larcher, investigadoras del equipo formado en el marco del Convenio INTA-CONICET que origina esta publicación, se adentran en el espacio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El capítulo a cargo de Ana Fernández Larcher realiza una aproximación etnográfica al proceso de politización experimentado por integrantes de la CNEA durante el tercer gobierno peronista, desmantelado luego durante la última dictadura. Como indica Fernández Larcher, se trata de una institución caracterizada desde sus inicios, al menos desde algunos sectores, por un pretendido apoliticismo. Los cruces entre tecnología y política esbozados en este trabajo permiten repensar la historicidad de esta caracterización. Al mismo tiempo, los conflictos derivados de estas iniciativas, orientadas a reestructurar los objetivos de la institución y a redefinir los términos de participación de los trabajadores de la CNEA en sus orientaciones, resultan un aporte novedoso. Son las trayectorias políticas de los protagonistas las que recupera la autora, abriendo un posible espacio de intercambio con otros estudios, tanto provenientes del campo CTS, como con aquellos que se encuentran indagando la sociabilidad y las diversas formas de intervención registradas en los años previos al último golpe de Estado en distintos ámbitos.

Ana Spivak L´ Hoste, como fruto de su trayectoria de investigación desde la antropología en el ámbito de la CNEA, aborda de lleno las controversias respecto de decisiones tecnológicas, usos del presupuesto público y ejercicio de la violencia de Estado en la institución. Lo hace centrando su foco de análisis en los años comprendidos por la última dictadura, y en las nociones y valoraciones acerca de la tecnología que subyacen a las visiones sobre el pasado reciente de la Comisión. A diferencia de los relatos más difundidos, centrados en la valoración positiva del área nuclear en estos años, la autora muestra y analiza la existencia de otras narraciones que ponen en cuestión esta caracterización. En este sentido, como ha señalado Hurtado, el desorbitante crecimiento de la CNEA fue simultáneo a la intensificación de lazos con la “patria contratista”, mediante la participación de grandes firmas –como Techint– que funcionaron asociadas a los emprendimientos del sector nuclear.¹⁷ El análisis sobre el cambio en la orientación de los proyectos tecnológicos, el impacto del terrorismo de Estado y la existencia de memorias en tensión sobre el pasado reciente de la CNEA aportan a la problematización y ofrecen nuevas dimensiones de análisis.

También centrado en el área nuclear, pero en el ámbito del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Victoria Castro aborda la reconstrucción del proyecto de Planta Experimental Modelo de Agua Pesada, desarrollado entre 1975 y 1982. Este proyecto de tecnología nuclear, desarrollado en articulación con la CNEA y el Instituto de Desarrollo y Diseño (INGAR), también apela a componentes ideológicos sensibles, vinculados en este caso a la autonomía tecnológica. Es a partir de la reconstrucción de diversos relatos de integrantes del Instituto, que

¹⁷ Véase Hurtado, D., *El sueño*, 2014, p. 232.

la autora identifica contradicciones que ponen en tensión la imagen de éxito del proyecto, vigente en gran parte de la comunidad institucional. El efectivo alcance de éste (la planta nunca se puso en funcionamiento), su escala y la participación de proveedores extranjeros aparecen como elementos disruptivos en las crónicas de los entrevistados. El estudio de caso entabla un diálogo con las lecturas, nativas y académicas, que se han construido en torno del área nuclear como una suerte de “isla” de desarrollo tecnológico en medio de una dictadura con un proyecto de carácter desindustrializador.

Situado en el mismo espacio geográfico, la ciudad de Santa Fe, pero en el ámbito universitario, Gabriel Matharán y Oscar Vallejos analizan el surgimiento de un área de investigación en el ámbito del Departamento de Hidrología General y Aplicada (DHGyA) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El estudio de caso permite advertir situaciones que fueron simultáneas y contrapuestas a la tendencia general de desfinanciamiento del espacio universitario, al tiempo que cruzan las contradicciones presentes en las trayectorias de los diversos ámbitos. Así, en el surgimiento de la investigación hidrológica en Santa Fe, el período dictatorial coincidió con la asignación de importantes recursos financieros y con el ingreso de estos conocimientos en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, a través de identificaciones con idearios caros al imaginario que buscaba proyectar el régimen –atravesados por la modernización y la seguridad nacional– el conocimiento producido redundó en un saber, al decir de los autores, “estrictamente técnico”, es decir, no politizado.

Finalmente, el último capítulo se concentra en la intervención militar del INTA, y presenta también un análisis de los años previos al golpe de marzo de 1976. Síntesis de una investigación doctoral más amplia, el trabajo muestra tanto la reconstrucción histórica de los acontecimientos que signaron la historia del organismo en estos años, como un análisis de la orientación de sus actividades. Políticas agropecuarias, instrumentación de un ciclo represivo y transformaciones en el espacio rural, subyacen en los prolegómenos de la intervención. Junto con el impacto de la violencia estatal en los trabajadores del organismo, se realiza una síntesis de las transformaciones presentes en algunos de los contenidos de investigación y se profundiza el análisis de la extensión rural.

El estudio en profundidad de la vinculación entre las principales transformaciones económicas del período y la orientación de la producción científico-tecnológica, así como el análisis de la introducción de mecanismos represivos y su impacto en la orientación de las distintas trayectorias institucionales es, aún, una tarea inconclusa. Resta estudiar cómo fueron implementados los mecanismos represivos en otros organismos y qué impacto tuvieron en sus agendas de investigación, si existieron modificaciones en la división del trabajo dentro de la producción de CyT, en relación con la injerencia estatal en la financiación y la apropiación de los resultados de las investigaciones en sus distintas etapas, así como la conexión entre la producción científica y tecnológica y la orientación de las políticas sectoriales y las proyecciones posteriores de esta organización.

Los distintos casos analizados en este libro dan cuenta de la necesidad de relativizar las periodizaciones canónicas y de centrar la atención en las continuidades históricas que atraviesan diversos procesos, sin por ello perder de vista la especificidad que introduce el inicio del último golpe militar. Estructuración de políticas científicas, puesta en marcha de ciclos represivos y reorganización de agendas de investigación forman parte de estos. Al mismo tiempo, aportan herramientas para analizar las marchas y contra marchas de la producción científica y tecnológica durante la última dictadura, explorando sus conexiones con las transformaciones políticas, económicas y sociales que moldearon el período. Finalmente, la reconstrucción de los distintos ámbitos nos adentra en las experiencias que moldearon las trayectorias institucionales, sus identidades y las formas en las que han construido sus propias historias. La realización de nuevos estudios, asignatura aún pendiente a la que se propone contribuir, permitirá abordar la dinámica histórica de la producción de la ciencia en este período. También, analizar sus implicancias presentes.

Bibliografía

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE: Scientists and Human Rights in Argentina since 1976, Washington, AAAS, 1981.

ADLER, E.: The power of ideology, Berkeley: University of California Press, 1987.

AZPIAZU, D., BASUALDO, E., y NOCHTEFF, H.: La revolución tecnológica y las políticas hegemónicas, Buenos Aires, Lagasa, 1988.

BEKERMAN, F.: “El campo científico argentino en los años de plomo: desplazamientos y reorientación de recursos”, *Sociohistórica*, N.º 26, 2009, pp. 151-166.

BELINI, C. y ROUGIER, M.: El Estado Empresario en la industria Argentina. Conformación y crisis, Buenos Aires, Manantial, 2008.

CANITROT, A.: “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976”, *Desarrollo Económico*, 19, 76 1980, pp. 453-475.

CONICET: Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Período 1976-1983, Buenos Aires, Eudeba, 1989.

FRANCO, M.: Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976, Buenos Aires, FCE, 2012.

GÁRGANO, C.: Producción de conocimiento y construcción de una cartografía represiva en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria argentino (1973-1983), *RBBA Diálogos entre las Ciencias*, 3, 2014, disponible en

periodicos.uesb.br/index.php/rbba/article/download/2762/2685

GÁRGANO, C.: Ciencia, tecnología y dictadura: producción de conocimiento e intervención militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973-1983). Tesis doctoral en Historia, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2014.

HERRERA, A.: “Los determinantes sociales de la política científica en América Latina. Política científica explícita y política científica implícita”, *REDES*, 5, 1995, pp. 117-131.

HURTADO, D.: “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64.

HURTADO, D.: El sueño de la Argentina atómica. Política, tecnología nuclear y desarrollo nacional (1945-2006), Buenos Aires, Edhasa, 2014.

INTI: “Dictadura y memoria en el INTI. Testimonios sobre desaparecidos y sobrevivientes del INTI '76”, *Saber Cómo*, 39, 2006, pp. 3-5.

NOCHTEFF, H.: “Patrones de Crecimiento y Políticas Tecnológicas en el siglo XX”, *Ciclos*, IV, (6), 1994, pp. 43-70.

OTEIZA, E. (director): La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas, Buenos Aires, CEAL, 1992.

- PÉREZ LINDO, A.: *Universidad, política y sociedad*, Buenos Aires, Eudeba, 1985.
- PESTRE, D.: *Ciencia, dinero y política*, Buenos Aires, Buena Visión, 2005.
- PUCCIARELLI, A.: “La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura militar encubre una vieja práctica corporativa”, en Pucciarelli, A. (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, pp. 99-171.
- PAGANO, N.: “Las ciencias sociales durante la dictadura argentina (1976-1981)”. En Devoto, Fernando y Pagano, Nora (ed.) *La historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay*, Buenos Aires, Biblos, 2004, pp. 159-170.
- RODRÍGUEZ, L. y SOPRANO, G.: “La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983)”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, 2009, <http://nuevomundo.revues.org/56023>
- SPIVAK, A.: “Fondos públicos, proyectos tecnológicos y violencia estatal: tensión de memorias de dictadura en una institución tecnocientífica argentina”, *Mana*, en prensa.
- VALEIRAS, J.: “Principales instituciones especializadas en investigación y extensión”, en Oteiza, E. (director), *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992.

Las ciencias sociales durante la última dictadura: agendas, investigadores e instituciones

Laura Graciela Rodríguez
(CONICET/IdIHCS/UNLP)
lau.g.rodrig@gmail.com

En este artículo nos proponemos analizar el desarrollo de las ciencias sociales durante la última dictadura o Proceso de Reorganización Nacional (PRN), a través del estudio de la revista *Sociológica. Revista Argentina de Ciencias Sociales*, editada con subsidios del CONICET, cuyo primer número salió en 1978 y el último en 1984. Estaba dirigida por el filósofo y sociólogo Roberto José Brie, quien fue miembro de las comisiones asesoras del CONICET, integrante del Directorio en 1981 y director del Instituto de Ciencias Sociales (ICIS).¹

A lo largo de estas páginas presentaremos el perfil profesional de Brie y sus vínculos con círculos católicos de derecha y anticomunistas; describiremos los institutos del CONICET pertenecientes al área de las Ciencias Sociales y Humanas y los casos de corrupción que involucraron a Brie; mencionaremos cuáles eran las distintas secciones de la revista: artículos, comentarios y notas bibliográficas, y las otras publicaciones destacadas desde *Sociológica*. Luego, resumiremos el contenido de los 160 proyectos de investigación que seleccionó Brie como parte de una investigación comparada a nivel internacional financiada por Unesco. Por último, plantearemos brevemente cuáles fueron los principales investigadores, temas y centros académicos independientes que continuaron desarrollando investigaciones en el área de las ciencias sociales y que estuvieron por fuera de *Sociológica*.

Argumentaremos que la intención principal de Brie y su grupo al frente de *Sociológica* fue, por un lado, legitimar sus propias producciones y promocionar las investigaciones que se hacían en las universidades privadas católicas y de ciertos institutos del CONICET, en un contexto en el cual las ciencias sociales en general estaban sospechadas de “marxistas”. Por el otro, mostraremos que pretendieron invisibilizar otro conjunto de revistas e investigaciones a cargo de académicos –expulsados de las universidades en la mayoría de los casos– que se estaban llevando a cabo en distintos centros independientes y eran financiados por diversos organismos y fundaciones internacionales. Veremos además, que en publicaciones

¹ Este trabajo es parte de una investigación más extensa que está actualmente en curso. Agradezco la lectura de Germán Soprano, los errores y omisiones son de mi entera responsabilidad. Sobre la universidad durante la última dictadura, ver, entre otros, Rodríguez, L. G.: “La universidad argentina durante la última dictadura: actitudes y trayectorias de los rectores civiles (1976-1983)”, *RBBA. Revista Binacional Brasil-Argentina*, vol. 3, N.º 1, 2014, pp. 135-160.

como *Verbo*, estos profesionales eran tildados de “peligrosos” y sus denunciantes llamaban a las autoridades del PRN a cerrar esos centros.

En definitiva, elegimos analizar el desarrollo de las ciencias sociales desde el estudio de esta revista, porque entendemos que su director pretendía definir a partir de ella y de un modo excluyente qué temas, qué investigadores, qué instituciones científicas, qué publicaciones y qué eventos académicos constituían el campo de las ciencias sociales de la Argentina. En otras palabras, aquello que era publicado por *Sociológica* se esperaba fuera tenido como los saberes y prácticas socialmente reconocidos de las disciplinas sociales de la época.

Brie: entre la ciencia y el anticomunismo

El primer número de *Sociológica. Revista Argentina de Ciencias Sociales* salió en 1978 editado por la Fundación Arché con subsidio del CONICET y el auspicio del Centro de Investigaciones Sociales de la misma fundación, dirigida por el psicólogo católico Alberto Juan Fariña Videla. A partir del siguiente ejemplar, aparecía financiada por CONICET, probablemente porque Fariña Videla fundó ese año su propia revista (ver más adelante). Se publicaron 7 en total, del 1 al 10, con varios ejemplares dobles (2/3, 4/5, 6/7 y 8/9), dado que no se pudo cumplir la periodicidad semestral. Estaba bien encuadrada y tenía entre 170 y 330 páginas.

El director era Roberto José Brie. Según la biografía publicada por la Sociedad Tomista Argentina –de la que era miembro–. Brie “realizó estudios de Filosofía, Sociología y Ciencia Política en las universidades de Buenos Aires, Freiburg, Colonia y Münster” y se recibió de “Doctor en Filosofía por la Universidad de Freiburg”.² Posteriormente trabajó como profesor de Sociología, Filosofía y Metodología de la Investigación en universidades nacionales y en la Católica de La Plata. En los años de 1960 fue de los primeros que ingresaron a la carrera de investigador del CONICET.³ Con el golpe de Estado de 1966 y la intervención a la carrera de sociología de la UBA, pasó a integrar los elencos de profesores titulares, entre los que estaban, además de Brie, Fernando Cuevillas y Luis Bruno Campoy.⁴ En esos años también fue decano de la Facultad de Filosofía de las Universidades Nacionales del Litoral y de Rosario.⁵

En los años de 1970 aparecía como militante y dirigente del Movimiento Unificado Nacionalista Argentino, cercano a la revista *Cabildo* –publicación que cultivaba el antisemitismo–, desde el cual promovía la “guerra contra el comunismo”.⁶ Había

² http://cablemodem.fibertel.com.ar/sta/prof_dr_brie.htm, visitado el 2 noviembre de 2009.

³ Díez, M. A.: *El dependantismo en Argentina. Una historia de los claroscuros del campo académico entre 1966 y 1976*, Tesis doctoral, Universidad Nacional de Cuyo, 2009, p. 44. En esos años también habían entrado al CONICET Gino Germani, Hebe Vessuri y Guillermo O'Donnell, entre otros.

⁴ Díez, op. cit., p. 16; FAIGÓN, M.: “La institucionalización de la sociología nacional y sus estrategias”, *VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata*, 2012.

⁵ http://cablemodem.fibertel.com.ar/sta/prof_dr_brie.htm, visitado el 2 noviembre de 2009

⁶ Orbe, P.: “Entre mitines y misas: la revista *Cabildo* y la red de sociabilidad nacionalista católica (1973-1976)”, *IV Jornadas de Historia Política*, Bahía Blanca, 2009.

escrito uno de los “estudios preliminares” –los otros autores eran Mario Caponnetto y Víctor E. Ordóñez– de una reedición de obras del nacionalista católico Jordán Bruno Genta (*Libre examen y comunismo*). Allí Genta decía que el comunismo era “una empresa satánica contra Dios y contra la naturaleza creada y redimida por el Verbo de Dios” cuyo objetivo era “la destrucción de la Civilización Cristiana”. En 1979 Brie había dado un curso para docentes llamado la “Concepción Católica de la Pedagogía” publicitado en *Cabildo*.⁷ En 1980 aparecía como el coordinador general de las actividades que se organizaban en el Instituto de la Promoción Social Argentina (IPSA), institución fundada por el filósofo tomista Carlos A. Sacheri y vinculada al grupo *Verbo*. En octubre de 1980 fue uno de los responsables del Congreso Internacional sobre la Hispanidad.⁸

En el CONICET, Brie fue miembro de varias comisiones en simultáneo: asesora regional (1973-1975), asesora regional y asesora disciplinar (1976-1978), asesora regional, asesora disciplinar y asesora especial (1979), al año siguiente sumó la de junta calificación para la carrera de investigador. En 1981 fue nombrado en el Directorio.

Los institutos del CONICET y las fundaciones

Brie y un grupo de académicos, que figuraba en el comité de redacción, estuvieron al frente de una serie de institutos y programas que dependían del CONICET, varios de los cuales fueron creados en los años de la dictadura. Mencionaremos a continuación la totalidad de estos y los directores responsables en el área de las Sociales y Humanas:⁹

a) Ciencias Sociales: ICIS (Instituto de Ciencias Sociales), Roberto Brie; CEIL (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales), Floreal H. Forni; UNIUR (Unidad de Investigación para el Urbanismo y la Regionalización), Patricio H. Randle y Raúl Rey Balmaceda como subdirector a cargo; Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR); BIBLEH (Biblioteca Pensamiento Económico del Período Hispano), Oreste Popescu; CIDOL (Centro de Investigación y de Información Legal), Roberto Enrique Luqui.

b) Historia y Antropología: CAEA (Centro Argentino de Etnología Americana), Domingo Mario Califano; CEIFAR (Centro de Estudios Interdisciplinarios de Fronteras Argentinas), Jorge Fermín Comadrán Ruiz; INIGHI (Instituto de Investigaciones Geohistóricas), Ernesto A. Maeder; IBIZI (Instituto Bibliográfico Antonio Zinni), Julio Irazusta y en 1982 Roberto Marfany; INIHID (Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho), Ricardo Teodoro Zorraquín Becú.

⁷ Genta, J. B.: *Acerca de la libertad de enseñar y de la enseñanza de la libertad. Libre examen y comunismo. Guerra contrarrevolucionaria*, Buenos Aires, Dictio, 1976.

⁸ *Verbo*, Madrid, N.º 127, 1980, pp. 945-946.

⁹ CONICET, *Cumplimiento de sus objetivos específicos. 1971-1981*. Buenos Aires, CONICET, 1983, p. 72. Sobre el CONICET en dictadura, ver BEKERMÁN, F.: “Investigación científica bajo el signo militar (1976-1983): la bisagra entre el CONICET y la universidad”, *Alas. Asociación Latinoamericana de Sociología*, 2009, pp. 189-206.

c) Filosofía, Filología y Psicología: CIAFIC (Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultura), Lila Blanca Archideo; CIFINA (Centro de Investigaciones Filosófico-Naturales), Juan Enrique Bolzán; CIIPME (Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental), Horacio J. Rimoldi; ILICOO (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Comparadas sobre Oriente y Occidente), Ismael Quiles; INFIP (Instituto de Filosofía Práctica), Julio Guido Soaje Ramos; PEPSI (Programa de Investigaciones sobre Epidemiología Psiquiátrica), Fernando Pagés Larraya; PIRSUB (Programa de Investigación Realista de la Subjetividad), Alberto Juan Fariña Videla.

d) Educación: COASE, (Comisión Asesora en Ciencias de la Educación (era un Comité Especial, no un instituto ni un centro regional)), Ricardo P. Bruera; IRICE (Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación), Ricardo P. Bruera; PROMEC (Programa para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia en la Escuela Secundaria), Patricio H Randle.

Brie y otros investigadores crearon fundaciones para recibir subsidios del CONICET con el objetivo oficial de financiar la investigación que se realizaba en los institutos. A la salida de la dictadura las fundaciones fueron denunciadas por malversación de fondos. Por ejemplo, en 1980 el filósofo creó FADES (Fundación Argentina de Estudios Sociales) ligada a ICIS; en 1977 Brie y Randle, entre otros, crearon SENOC (Asociación para la Promoción de Sistemas Educativos No Convencionales) vinculado al PROMEC; y Randle y otros fundaron OIKOS en 1976 (Asociación para la Promoción de los Estudios Territoriales y Ambientales) para financiar al UNIUR, de 1975. De acuerdo al *Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET*:

“En las situaciones expuestas sobre FADES, SENOC y OIKOS, queda claro, según los fiscales, que con la excusa de la administración de fondos para el CONICET, estas Fundaciones subsistieron exclusivamente con fondos públicos, se enriquecieron patrimonialmente y llegaron a funcionar como verdaderas empresas privadas, logrando así el desvío y apoderamiento de los fondos previstos y otorgados para la investigación [...] Estas Fundaciones en muy poco tiempo incrementaron más de cien veces el capital social integrado, pero otras como OIKOS elevaron su capital a más de 2.800 veces, todo ellos con caudales públicos sin ningún tipo de aporte de capital privado”.¹⁰

Otras acusadas en el mismo sentido fueron FECIC (de 1971) (Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura), CEINAR; FUNDANORD (creada en 1977) (Fundación para el Desarrollo del Nordeste), CERNEA; y APROCEDE (fundada en 1980) (Asociación para la Promoción del Desarrollo de las Ciencias de la Educación), IRICE.

¹⁰ CONICET: *Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Período 1976-1983*, Buenos Aires, EUDEBA, 1989, pp. 67-8.

Cuando se dio por finalizada la intervención del CONICET y se “normalizó” en 1981, Brie pasó a integrar el comité ejecutivo, convirtiéndose en uno de los investigadores que más cargos y funciones acumuló. De acuerdo al *Informe...*:

“De lo expuesto se desprende que el señor Brie era investigador del CONICET, miembro del Comité Ejecutivo de ese organismo estatal, presidente de la Comisión de Supervisión del Programa de Desarrollo de Centros Regionales y del Programa de Desarrollo del CONICET (PRODECO), administrador de los fondos que se entregaban a tales programas, presidente de la Comisión Asesora de Sociología, director del ICIS y presidente de FADES”.¹¹

Las otras revistas

En las últimas páginas de *Sociológica* se daban a conocer otras revistas autodenominadas científicas y que según Brie, formaban parte del campo de las ciencias sociales. La amplia mayoría –alrededor de diecisiete– fue creada entre 1976 y 1980, era de los institutos y en ocasiones aparecía subsidiada por las fundaciones. Predominaban en ellas académicos que en sus escritos –en esas revistas o en otras como *Cabildo*, *Mikael* y *Verbo*– hacían referencias a Dios, a la Iglesia, a las encíclicas papales y a la idea de Argentina como “nación católica”.¹² En general, adherían a una versión revisionista de la historia, eran hispanistas y contrarios a todas las ideologías que consideraban de izquierda, particularmente el comunismo y el socialismo.

Justo es decir que hubo un grupo de académicos católicos que en sus investigaciones evitaba plantear algunas de estas cuestiones y otro conjunto que ni era religioso ni adhería necesariamente a la ideología represiva del PRN y que publicaba en estas revistas con las limitaciones de la época.

En *Sociológica* se mencionaban, de 1977: *OIKOS. Asociación para la promoción de los estudios territoriales y ambientales*; *Medicina y Sociedad* (Carlos García Díaz); *Filosofar Cristiano*, de la Asociación Católica Interamericana de Filosofía, subvencionada por el CONICET–Córdoba–, cuyos directores eran: Alberto Caturelli (Argentina), Stanislaus Ladusans (Brasil) y Agustín Basave (México).

En 1978 se promocionaron *Psychologica: Revista Argentina de Psicología Realista* (dirigida por Alberto Fariña Videla) de la Fundación Arché; el primer *Boletín CEIL* (Floreal Forni); la reedición de *Ethos: Revista de Filosofía Práctica* (Guido Soaje Ramos, el primer número había salido en 1973) del Instituto de Filosofía Práctica; *Escritos de Filosofía. Academia Nacional de Ciencias* del Centro de Estudios Filosóficos; *Historiografía Rioplatense* (Jorge Bohdziewicz) del Instituto Bibliográfico Antonio Zinny; la revista del CIAFIC (Lila Blanca Archideo); *Boletín del Instituto*

¹¹ CONICET, ob. cit., pp. 51-2.

¹² Hemos reconstruido las trayectorias de algunos de estos académicos y militantes católicos vinculados a *Cabildo* en: RODRÍGUEZ, L. G.: “Los nacionalistas católicos de *Cabildo* y la educación durante la última dictadura en Argentina”, *Anuario de Estudios Americanos*, N.º 1, 2011, pp. 253-277.

Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE) (Ricardo P. Bruera) de la Universidad Nacional de Rosario –CONICET–; y *Revista Histórica* (Isidoro J. Ruiz Moreno) del Instituto Histórico de la Organización Nacional. En 1980 salió la revista *Oriente-Occidente* del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Comparadas sobre Oriente y Occidente (ILICOO) (del padre jesuita Ismael Quiles); y *Moenia. Las murallas interiores de la República* (Félix Adolfo Lamas).

Tres publicaciones fueron financiadas por FUNDANORD: *Revista de Estudios Regionales* (1976) del CERNEA (Ernesto Maeder); *Cuadernos de Geohistoria Regional* (1979) del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (Alfredo Bolsi) y *Folia Histórica del Nordeste* del Instituto de Historia de la Facultad Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (Maeder).

Las revistas fundadas antes de 1976 y publicitadas en *Sociológica* eran: *Revista del CEINAR* ligada a la FECIC (bajo la dirección de Luis Dallanegra Pedraza) (1975); *Revista Argentina de Relaciones Internacionales* (1975) del CEINAR; *Estrategia* (1969) del general de división (RE) Juan E. Guglielmelli; *Scripta Ethnológica* (1973) del CAEA (Mario Califano); y el boletín del *Centro Investigaciones Cuyo (CIC)*, bajo la dirección de Abelardo Pithod.¹³ En este listado Brie incorporó la revista de Chile *Philosophica*, dirigida por el católico tradicionalista Juan Antonio Widow, perteneciente al Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso.

El comité de redacción

El comité de redacción de *Sociológica* estaba integrado inicialmente por 19 académicos y luego se sumaron 5. Ese grupo de 24 permaneció estable hasta el número 9 (1982), aunque a lo largo del tiempo pueden observarse cambios atravesados por la creación de los institutos y las Fundaciones. En el primer comité estaban: Camilo Boasso (Universidad Nacional de Salta), Mario Califano (CAEA-CONICET), Luis Campoy (CONICET-Mendoza), Miguel Ángel de los Ríos (CAEA-CONICET), Eduardo Fariña (UBA), Jorge Ferro (La Plata), Josefina Di Filippo (UBA), Norberto Iannelli (UBA), Ada Lattuca de Chede (Universidad Nacional de Rosario), Ernesto Martina (Universidad Nacional del Nordeste), Héctor Martinotti (UBA), Mario Nascimbene (UCA, Buenos Aires), Enrique Pistoletti (UBA), Abelardo Pithod (CONICET, Mendoza), Patricio H. Randle (UNIUR-CONICET), Juan C. Rego (CONICET-CEIFAR, Mendoza), Néstor D. Roselli (CERNEA, Corrientes), Osvaldo Scasserra (UBA) y Remus Tetu (UN de Bahía Blanca).¹⁴

En el número 2/3 de 1979 aparecieron cinco integrantes nuevos que firmaban como

¹³ Sobre las trayectorias de Alberto Pithod y Guido Soaje Ramos, ver Fares, M. C.: “Tradición y reacción en el Sesquicentenario. La escuela sevillana mendocina”, *Prismas*, N.º 15, 2011, pp. 87-104; Fares, M. C.: 2011a, “Universidad y nacionalismos en la Mendoza postperonista. Itinerarios intelectuales y posiciones historiográficas en los orígenes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”, *Anuario IEHS*, N.º 26, 2011a, pp. 215-238.

¹⁴ El contenido del primer número está desarrollado en APAZA, H.: “Las ciencias sociales bajo el terrorismo de Estado: el proyecto *Sociológica*, 1978–1984”, *XII Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia*, 2009.

investigadores del ICIS-CONICET: Antonio Caponnetto, Enrique del Acebo Ibañez, Marta Fernández, Mario Fittipaldi y Héctor Goglio. Los dos que ya estaban, De los Ríos y Di Filippo, cambiaron su filiación institucional por ICIS. En el número de 1981 (6/7) se eliminaron las referencias a ICIS y el comité de redacción bajó a 19 miembros, en lo que aparentemente fue un error de impresión. En 1982 se ofrecieron por única vez 2 ejemplares de la revista (8/9 y 9), volvieron las referencias a ICIS y los nombres de los 24 integrantes del comité. En el número 9 de 1982 se publicó en tapa que la revista pasaba a estar financiada por FADES Ediciones y se aclaraba que los cheques y giros de la suscripción anual debían hacerse a nombre de la fundación.

La mayoría de estos académicos era egresado de Sociología y algunos tenían dos títulos: Acebo Ibañez, Fernández, Fittipaldi (además era licenciado en Ciencias Políticas), Goglio, Boasso (también antropólogo), Fariña, Pithod (había hecho estudios sobre Psicología experimental), Rego (también matemático), Campoy y Pistoletti. Graduados en Historia eran: Caponnetto, Di Filippo, Lattucca y Nascimbene. En Antropología, Califano y De los Ríos. Egresado de Letras era Ferro, de Arquitectura Randle, y de Psicología Roselli.¹⁵

De todos ellos, Remus Tetu merece una caracterización más extensa, porque su perfil era expresivo del círculo de relaciones de Brie. Tetu era de origen rumano, estaba en el país desde los años de 1950 y había logrado ingresar como profesor en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). De acuerdo a un documento elaborado en 1975 por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Tetu decía tener varios títulos de grado y dos doctorados en ese país (Licenciado en Filosofía y Letras, Licenciado en Derecho, Doctor en Filosofía y Doctor en Derecho), pero no había presentado ninguna certificación en Argentina por lo que se concluía que en realidad Tetu carecía de estudios. Según los dirigentes de CTERA, existían muchos indicios para pensar que en su país había actuado como colaboracionista del ejército nazi de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial.¹⁶ En Argentina, continuaban los gremialistas, su única actividad conocida era de “escritor asiduo” en el diario *La Nueva Provincia*. Recordaban que en 1973, 400 integrantes de la Universidad del Sur con el rector Benamo a la cabeza, le realizó un juicio académico por “falta de idoneidad, como también su intencionada y comprometida actuación a favor de los enemigos de nuestra independencia económica, científica, tecnológica y cultural”.¹⁷ Esta acusación no hizo mella en su carrera, ya que durante la gestión del ministro Oscar Ivanissevich (1974-1975) fue designado interventor de la Universidad Nacional de Comahue (enero 1975) y se le encomendó el despacho de los asuntos de la Universidad del Sur (febrero 1975). El 3 de abril de 1975, un custodio de Tetu asesinó en la puerta de la universidad a David “Watu” Cilleruelo, estudiante de Ingeniería

¹⁵ Como se notará, hay académicos que están ausentes porque no pudimos determinar con exactitud el título de grado.

¹⁶ CTERA: *Universidad: la 'Misión' del caos y la destrucción*, Buenos Aires, 1975. Sobre lo ocurrido en las universidades en eso años, ver Rodríguez, L. G.: “La universidad durante el tercer gobierno peronista (1973-9176)”, *Conflicto social*, vol. 7, N.º 12, 2014, pp. 114-145.

¹⁷ CTERA, ob. cit. Otros datos de la biografía de Remus Tetu están en Orbe, P.: “El ‘proceso de reorganización’ de los claustros: el impacto de la última dictadura en la Universidad Nacional del Sur”, Rodríguez, L. G. “Dossier: Universidad y dictadura”, *PolHis. Revista del Programa Interuniversitario de Historia Política*, en prensa.

y secretario de la Federación Universitaria de Bahía Blanca (FUBB).¹⁸ A pesar de este hecho, Tetu continuó siendo profesor e investigador de la Universidad del Sur, donde dirigió varios proyectos que se publicitaron en *Sociológica* y resumiremos más adelante.

A raíz de las denuncias efectuadas en democracia contra el manejo de fondos de las fundaciones, la última revista de la serie (10, 1983/1984) había cambiado casi completo el comité de redacción. Aparecían: Julio Espínola (Universidad Nacional del Nordeste), Carlos Stoetzer (Frodham, Estados Unidos), Rubén de Hoyos (Wisconsin, Estados Unidos), M. Ballesteros Gaibrois (Universidad Complutense, España), Juan Widow (Universidad de Valparaíso, Chile), Enrique Martín López (Universidad Complutense, España), Raúl Rey Balmaceda (UBA), y H. Beck (Universidad de Bamberg, Alemania). Como puede notarse, esta internacionalización era una búsqueda de legitimidad de Brie en un contexto de devaluación y cuestionamiento a su figura. Seguía presente la leyenda FADES Ediciones, pero todos los argentinos habían eliminado la mención a los institutos y fundaciones dependientes. Del comité original permanecían: Pithod (Universidad Católica de Cuyo, ex-CIC), Randle (UBA, ex-UNIUR), Boasso (Universidad Nacional de Salta), Campoy (Universidad de Cuyo) y Rego (Universidad de Cuyo, ex-CEIFAR). Desaparecieron del comité todos los que integraban el ICIS: Caponnetto, del Acebo Ibañez, Fernández, Di Filippo, De los Ríos, Fittipaldi y Goglio y otros como Remus Tetu, Califano y Ferro. El director Brie continuaba firmando “CONICET, Buenos Aires”.¹⁹

Las secciones de la revista: artículos, comentarios, eventos y notas bibliográficas

En la introducción del número inaugural, Brie explicó que *Sociológica* pretendía cumplir “con el imperativo de una ciencia con sentido social y ético, pero consciente de los perjuicios que la ideologización de la ciencia puede acarrear a la sociedad y, sobre todo, a la ciencia misma”.²⁰ El artículo que le seguía daba cuenta del carácter oficial de la revista: fue escrito por el secretario de Ciencia y Tecnología e interventor del CONICET (1979-1981), Fermín García Marcos. Llevaba el título de “Política, cultura y defensa nacional” y concluía que la única respuesta a la “crisis cultural contemporánea” era retornar “a las fuentes del pensamiento cristiano”, a los “valores antiguos” y a la “restauración de la que hablaba León XIII”.²¹

A excepción de ese primer número, en los siguientes aparecían los artículos clasificados por títulos temáticos. Haciendo un balance general, advertimos que estaban concentrados en el rubro “teoría sociológica” (15 artículos); le seguían otros cinco trabajos de “estructura social argentina”, cinco de “pensamiento social argentino” y cinco de “historia social y política”. Luego, cuatro de “sociología de la ciencia” y cuatro de “sociología médica y ética social”, tres de “sociología

¹⁸ Acerca de lo ocurrido en esos años en la Universidad del Sur, ver Orbe, P., ob. cit.

¹⁹ Diez años después salió el último número 11/12 (1992/1993) con un comité de redacción similar al del número 10.

²⁰ Brie, R.: *Sociológica. Revista argentina de ciencias sociales*, N.º 1, 1978, p. 7.

²¹ García Marcos, F.: “Política, cultura y defensa nacional”, *Sociológica*, N.º 1, 1978, p. 16.

demográfica” y uno para cada título: “política social”, “sociología urbana”, “ciencia política” y “sociología de la cultura”.

Con relación a si adherían a la “sociología de cátedra” o a la “sociología empírica”, en general se sostenía que la sociología debía buscar un equilibrio entre la teoría y la empiria.²² Otra característica de estos sociólogos era que no hacían mención a la figura de Alfredo Poviña, presidente de la Sociedad Argentina de Sociología ni a su contra figura, Gino Germani. En este sentido, procuraron refundar la disciplina, desconociendo a los referentes y las instituciones del período anterior.

También había una sección de “comentarios”, adonde hacían referencia a los eventos académicos, libros que ellos consideraban importantes, o realizaban crónicas generales. El historiador revisionista del grupo *Cabildo*, Antonio Caponnetto, dijo del libro de Rubén Zorrilla, *Cambio social y población en el Pensamiento de Mayo* (editorial de Belgrano, Colección Ensayos, 1978) que era una “obra confusa, insostenible a veces y por momentos, inevitablemente engañosa” porque no criticaba suficientemente al “grupo Rivadavia”. Otros que merecieron una consideración especial fueron *El ejército y la política* de Robert Potash y el libro de Augusto del Noce *Eurocomunismo*, que resultó muy elogiado.

Reseñaron eventos como: “Lo convencional y lo no convencional en materia educativa” organizado por la Facultad de Tecnología de la Universidad de Belgrano (1979); “La abogacía en crisis y la reforma judicial” organizada por el Foro de Estudios sobre la administración de la Justicia (FORES) (1979); “Terceras jornadas sobre modernización del sistema universitario en el mundo contemporáneo” (1980); “La geografía, la historia y los valores nacionales”, simposio organizado por OIKOS-SENOC-Instituto Zinny (1980); “Encuentro de cátedras del área de las ciencias sociales de las Facultades de Agronomía” (1980); primer congreso latinoamericano de ecología urbana (1982); seminario “Evaluación de programas sociales” (1982); y el “Informe sobre la conferencia internacional de dinámica de sistemas” (1983). Además, se hicieron sendas crónicas de las “II y III Jornadas de exposición de investigaciones empíricas” que se realizaron en 1980 y 1981, organizadas por José Luis de Ímaz del Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina (UCA). A diferencia de la mayoría de los eventos de la época, a esas reuniones concurren, además de Brie y su grupo, investigadores que expresaban perspectivas teóricas e ideológicas diferentes, representadas en los centros académicos independientes como el PEHESA, CEDES o el CENEP (ver último apartado).

A esta sección le seguían “Notas bibliográficas” adonde se hacían resúmenes de libros. Una de las primeras se dedicaba a ponderar un trabajo escrito por Brie publicado por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1977, denominado

²² Por ejemplo, esto estaba explicado en el artículo de Boasso, C. A.: “Ciencia social y dimensión empírica del conocimiento”, *Sociológica*, N.º 2/3, 1979. Sobre la diferenciación entre una y otra sociología, ver Blanco, A.: *Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2006.

*Estructura social de los sectores medios rurales: un análisis de la región pampeana.*²³ Por último, estaba el “Catálogo de investigaciones sociales en Argentina”, al que nos referiremos seguidamente.

Catálogo de investigaciones sociales

El catálogo se comenzó a publicar a partir de número 2/3 y era parte de un proyecto del Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO denominado “Estudio Comparativo Internacional sobre Organización y Productividad de las Unidades de Investigación” (ICSOPRU), que incluyó en su segunda etapa a la Argentina, Egipto, India, Corea, Polonia y Ucrania por el período 1977-1981. La investigación había comenzado en 1971 en otros seis países. Los resultados se presentaron en el Congreso Mundial de Sociología realizado en México en 1982.²⁴ Brie fue consignado hasta los años de 1990 como el único responsable del estudio en Argentina. Según explicaba, el catálogo era de carácter informativo acerca de las investigaciones sociales que se realizaban en ese momento en el país con el propósito de “prestar un servicio a la comunidad científica nacional e internacional”.

Los investigadores del ICIS fueron los responsables de llevar a cabo el relevamiento y selección de las “unidades científicas”. A lo largo de los siete números de *Sociológica* se fueron publicando los datos de 160 proyectos y programas resumidos en seis puntos: 1. Institución donde se lleva a cabo el programa o proyecto, 2. Denominación del programa o proyecto, 3. Responsables de estos, 4. Descripción de la investigación, 5. Metodología aplicada, 6. Estado de avance y publicación.

Observando el conjunto, puede distinguirse que la mayoría de los proyectos seleccionados eran del CEIL (28), bajo la dirección de Floreal Forni. El instituto tenía investigadores formados que trabajaban sobre líneas preexistentes y congruentes entre sí: empleo rural, trabajo infantil, migraciones y derecho laboral, entre otros. Le seguían en cantidad, un heterogéneo grupo de proyectos de la UCA (23) sobre la inmigración italiana en Argentina, teoría del Estado, la universidad, religión, economía medieval y Santo Tomás de Aquino, aborígenes de la provincia del Chaco, políticas sociales y personal doméstico, entre otros. Las distintas dependencias (Facultades, centros) de la Universidad Nacional de Rosario (21) también presentaban un importante eclecticismo en los temas: energía nuclear, desarrollo social, migraciones rurales, administración pública, historiografía. El ICIS (15) tenía proyectos vinculados a ISOPRU y otros de carácter variado: estructura ocupacional y comunidades

²³ En colaboración con Elisa C. de Buján, Olga S. de Pazo e Inés del Río. Sobre el INTA en dictadura, ver Gárgano, C.: Ciencia y dictadura: producción pública y apropiación privada de conocimiento científico-tecnológico. Dinámicas de cooptación y transferencia en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), *Crítica y Emancipación*, N.º 10, 2013, pp. 131-170.

²⁴ UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION: *International Comparative Study on the management, productivity and effectiveness of research teams and institutions (ICSOPRU, 1971-1989)*, UNESCO/ICSOPRU/90/10, Paris, 1990, p. 6.

aborígenes de Formosa, sociología de la religión, formación de recursos humanos en Ciencias Agropecuarias, perfil profesional del médico, estudio sobre la ciudad, influencia del pensamiento social cristiano alemán en Argentina y evaluación de la formación en la carrera de grado y posgrado de sociología de la UBA. El Programa de Investigaciones sobre Epidemiología Psiquiátrica (PEPSI), cuyo responsable era Fernando Pagés Larraya (14), estaba concentrado en estudiar la psicosis, patologías mentales, madurez perceptivo-motriz en escolares e isoidias culturales.

De mayor a menor, estaban mencionados los proyectos de las Universidades Nacionales de San Juan (10), Cuyo (4), UBA (4, todos de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina), Sur (3 de Remus Tetu), Córdoba (3), Nordeste (2), Misiones (1), Salta (1) y San Luis (1). Los Institutos que aparecían eran: el Instituto Argentino de Investigación en Zonas Áridas (IADIZA) (7), CEIFAR (5), INIGHI (5), el Centro Regional de Investigación y Desarrollo (CERIDE) (4), Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CRICYT) (1), Centro de Investigaciones de Cuyo (CIC) (1), Centro de Investigación y Orientación Social (CIOS) (1) e Instituto Superior Evangélico de Estudios Psicológicos (ISIDET) (1). Por último, mencionaremos los proyectos que se estaban desarrollando en la Universidad del Salvador (3) y uno que estaba radicado en la Universidad de Yale (Estados Unidos) del politólogo Carlos Escudé.

En total, Brie había seleccionado para la investigación de la Unesco alrededor de 90 proyectos y programas radicados casi todos en Institutos del CONICET y 70 que pertenecían a universidades: 26 de privadas (prácticamente todos de la UCA), 43 de públicas (10 casas de estudio) y uno de una universidad extranjera (Yale).

Investigadores, temas y centros por fuera de *Sociológica* y del CONICET

Existe una coincidencia entre los especialistas en afirmar que, a pesar de las restricciones impuestas por el PRN, varios académicos del área de las ciencias sociales –economistas sociólogos, politólogos e historiadores principalmente– continuaron investigando en instituciones que funcionaban por fuera del aparato estatal y que en la mayoría de los casos habían sido fundadas en los años de 1960 y 1970.²⁵

Las más mencionadas por los distintos analistas son centros que nacieron en el Instituto Di Tella (1958): el Centro de Estudios de Población (CENEP, 1974), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES, 1975) y el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA, 1974). Vinculados al primero estaban Oscar Oszlak, Guillermo O' Donnell, Marcelo Cavarozzi, Liliana de Riz, Adolfo Canitrot, Elizabeth Jelin, María del Carmen Feijoo y Jorge Balán; y al segundo, Osvaldo Barsky, Leandro Gutiérrez, Hilda Sabato y Jorge Schvarzer, entre otros. Del

²⁵ Pagano, N.: "Las ciencias sociales durante la dictadura argentina (1976-1981). En Devoto, Fernando y Pagano, Nora (ed.) *La historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay*, Buenos Aires, Biblos, 2004, pp. 159-170; Vessuri, H.: "Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas", en Oteiza, E. (dir.) *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 339-363.

CISEA surgió el Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA, 1978). Una de las líneas más importantes fue la coordinada por Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero, dedicados a estudiar el mundo urbano y la cultura popular. Estuvieron socialmente próximos de este grupo Ricardo González, Juan Suriano, Ema Cibotti, Carlos Altamirano, Néstor García Canclini, Juan Carlos Korol, Beatriz Sarlo e Hilda Sabato. Varios de sus miembros fundaron la revista cultural *Punto de Vista* (1978).

Otros centros importantes fueron la Fundación Bariloche (1963), el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES, 1960) y el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO, 1966). Existían circuitos de circulación de académicos y trabajos que se presentaban en el CEDES y el IDES, y luego eran publicados en la revista *Desarrollo Económico*.²⁶ Dicha revista salió ininterrumpidamente durante el PRN y pueden leerse allí resultados de investigaciones que lograron sortear la censura e incorporar perspectivas disciplinares y metodológicas renovadas, que serían profundizadas en el período democrático posterior. Entre 1976 y 1983 publicaron en *Desarrollo Económico* académicos que estaban vinculados a los centros independientes, pero también al CONICET y a las universidades: Guillermo O'Donnell, Oscar Oszlak, Aldo Ferrer, Adolfo Canitrot, Roberto Frenkel, Hilda Sabato, Carlos Mayo, Darío Braun, Carlos Reboratti, Catalina Wainerman, Carlos Escudé y Leopoldo Bartolomé. Algunos como Floreal Forni, Mario Nascimbene y Mario Boleda habían publicado también en *Sociológica*.

En *Desarrollo Económico* se plantearon temas como las características de los regímenes burocrático-autoritarios, el restablecimiento de las políticas de raíz liberal a partir de 1976, críticas al programa económico del gobierno del PRN, varios artículos sobre la inmigración en distintas provincias, la estructura agraria y las particularidades del área pampeana en perspectiva histórica y actual, entre otros.²⁷

Desde los inicios y durante el PRN, estos centros académicos independientes fueron financiados por diversos organismos como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, 1967), agencias suecas (SAREC), norteamericanas (Fundaciones Ford y Rockefeller, Andrew Mellon Foundation, Inter-American Foundation) y canadienses (IDRC).²⁸

Este financiamiento internacional abrió un conjunto de situaciones complejas, ya que, según los especialistas, generó una diferenciación entre unos pocos investigadores que podían acceder a los fondos y una mayoría que se vio forzada a trabajar por contratos que tenían la duración del proyecto, con la consiguiente

²⁶ Pagano, N. op. cit., p. 162.

²⁷ Un análisis de algunas de estas obras está en Pagano, op. cit. Un panorama de los libros que se publicaron en esos años también está en Di Tella, T.: "La sociología argentina en una perspectiva de veinte años", *Desarrollo Económico*, vol. 20, N.º 79, 1980, pp. 299-327.

²⁸ Pagano, op. cit.

incertidumbre personal e institucional sobre la continuidad de los recursos.²⁹ Así también, se incorporaron problemas que eran prioritarios para las agencias, pero no siempre se correspondían con los intereses de los centros o de los investigadores.³⁰

Es preciso mencionar además, que varios de estos centros sufrieron la persecución ideológica y el exilio forzado de sus integrantes. En textos oficiales y revistas de la extrema derecha argentina –con las cuales Brie estaba vinculado– se ocupaban de acusarlos en forma sistemática. Por ejemplo, el Consejo Hispanoamericano de Estudiantes, reunido en el país en 1980, elaboró un documento donde denunciaban, entre otras cosas, que la Fundación Ford apoyaba “el accionar subversivo internacional”, y que la Unesco, Fundación Bariloche, CEDES, CLACSO y FLACSO buscaban “expandir el cáncer revolucionario”.³¹ El problema, concluían, era que continuaban “funcionando a la luz del día” y por lo tanto era necesario exigir a las autoridades del PRN que se cerraran.

Reflexiones finales

En este artículo analizamos la revista *Sociológica*, con el propósito de mostrar cómo el director Brie y su grupo intentaron delimitar el campo oficial de las ciencias sociales en la Argentina, estableciendo cuáles eran los académicos, las instituciones científicas y las publicaciones merecedoras de reconocimiento en el país y en el exterior. En simultáneo, buscaron invisibilizar otro conjunto de investigadores, centros y revistas que coexistieron en los años de la última dictadura, a quienes acusaron de “subversivos”.

Brie fue uno de los primeros universitarios en ingresar a la carrera de investigador del CONICET y llegó a ocupar un lugar en el directorio en 1981. Estaba ligado a referentes de la derecha católica, anticomunistas y antisemitas (estos últimos del grupo *Cabildo*) que apoyaron la represión a los científicos, varios de los cuales eran miembros del comité de redacción o escribían en *Sociológica*, como Antonio Caponnetto, Mario Caponnetto, Patricio H. Randle, Remus Tetu, Abelardo Pithod y Jorge Ferro. Junto a otros académicos fundaron Institutos del CONICET (ICIS, UNIUR, CEINAR, CERNEA e IRICE) y Fundaciones (FADES, SENOC, OIKOS, FECIC, FUNDANOR y APROCEDE) a través de las cuales captaron fondos públicos que gastaron en actividades que no tenían relación con la investigación. En los años democráticos fueron denunciados por malversación.

Entre 1976 y 1980 aparecieron diecisiete revistas nuevas pertenecientes a los institutos. Estas y unas pocas más eran publicadas en *Sociológica* con el objetivo de comunicar donde se hacía ciencia en la Argentina y cuáles eran los canales de difusión.

²⁹ Calderón, F. y Provoste, P.: “La construcción institucional de las ciencias sociales en América Latina”, *David y Goliath. Revista de CLACSO*, N.º 55, 1989, p. 75; Vessuri, op. cit., p. 357.

³⁰ Calderón y Provoste, op. cit., p. 75.

³¹ Consejo Hispanoamericano de Estudiantes [en adelante CHE], “La subversión científica”, *Verbo*, N.º 209, 1980, p. 55.

En este sentido, debe ubicarse a *Sociológica* dentro de este proceso, recordemos que su primer número apareció en 1978. La revista, a pesar de autodenominarse de “ciencias sociales”, tuvo preferencia por los temas referidos a la sociología y sus distintas ramas. El primer artículo del número inaugural contaba con la participación del interventor del CONICET, García Marcos, quien escribió que había que “retornar a las fuentes del pensamiento cristiano”.

De este conjunto, quedaban afuera investigadores, instituciones y revistas como *Desarrollo Económico*, que también se dedicaban a las ciencias sociales. En suma, en *Sociológica* se ignoró la existencia de un importante sector de académicos que se encontraban vinculados a centros (CEDES, CENEP, IDES, entre otros) que eran financiados por fundaciones y organismos privados (CLACSO, Fundación Ford y Rockefeller, entre otras). Muchos de ellos habían sido expulsados de las universidades públicas acusados de “subversivos”.

Como ya señalamos, dentro de este panorama hubo excepciones: se dio el caso de académicos que publicaron en *Sociológica* que estuvieron lejos de adherir a la ideología del PRN. Asimismo, detectamos que algunos –Floreal Forni, Mario Nascimbene y Mario Boleda– que colaboraron también con *Desarrollo Económico*. Del mismo modo, se dieron cruces y circulaciones en ciertos eventos, por ejemplo, en las jornadas que organizaba el sociólogo De Ímaz en la UCA.

En relación con el programa de la Unesco y la difusión de las investigaciones que se realizaban en Argentina, Brie seleccionó 160 proyectos de distintas instituciones. Dos de las más promocionadas fueron el ICIS –cuyo director era Brie– y la universidad privada confesional, la UCA. Los títulos de los proyectos al interior de esas instituciones eran muy variados, lo que hacía pensar que no existió, desde el Ministerio de Cultura y Educación, la imposición de alguna agenda de temas en particular. Hubo otro conjunto de instituciones mencionadas, como el CEIL o PEPSI que mostraban una tradición investigativa propia y mayor coherencia entre la formación de los académicos y su trabajo, al igual que los otros institutos mencionados, que contaban con mucho menos proyectos. Las pesquisas realizadas en las restantes diez universidades nacionales mostraban también una gran variedad temática, al tiempo que exhibían la ausencia por la interrupción abrupta de líneas de investigación llevadas a cabo por los académicos que fueron exonerados, exiliados y víctimas de la represión desatada antes (1974-1976) y durante el PRN.

Bibliografía

APAZA, H.: “Las ciencias sociales bajo el terrorismo de Estado: el proyecto *Sociológica*, 1978 – 1984”, *XII Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia*, 2009.

BEKERMAN, F.: “Investigación científica bajo el signo militar (1976- 1983): la bisagra entre el CONICET y la universidad”, *Alas. Asociación Latinoamericana de Sociología*, 2009, pp. 189-206.

BLANCO, A.: *Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2006.

CALDERÓN, F. y PROVOSTE, P.: “La construcción institucional de las ciencias sociales en América Latina”,

David y Goliath. Revista de CLACSO, N.º 55, 1989, pp. 66-79.

DIEZ, M. A.: *El dependentismo en Argentina. Una historia de los claroscuros del campo académico entre 1966 y 1976*, tesis doctoral, Universidad Nacional de Cuyo, 2009.

DI TELLA, T.: “La sociología argentina en una perspectiva de veinte años”, *Desarrollo Económico*, vol. 20, N.º 79, 1980, pp. 299-327.

FAIGÓN, M.: “La institucionalización de la sociología nacional y sus estrategias”, *VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata*, 2012.

FARES, M. C.: “Tradición y reacción en el Sesquicentenario. La escuela sevillana mendocina”, *Prismas*, N.º 15, 2011, p. 87-104.

FARES, M. C.: 2011a, “Universidad y nacionalismos en la Mendoza posperonista. Itinerarios intelectuales y posiciones historiográficas en los orígenes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”, *Anuario IEHS*, N.º 26, 2011a, pp. 215-238.

GÁRGANO, C.: “Ciencia y dictadura: producción pública y apropiación privada de conocimiento científico-tecnológico. Dinámicas de cooptación y transferencia en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)”, *Crítica y Emancipación*, N.º 10, 2013, pp. 131-170.

ORBE, P.: “El ‘proceso de reorganización’ de los claustros: el impacto de la última dictadura en la Universidad Nacional del Sur”, RODRÍGUEZ, L. G. “Dossier: Universidad y dictadura”, *PolHis. Revista del Programa Interuniversitario de Historia Política*, en prensa. ORBE, P.: “Entre mitines y misas: la revista *Cabildo* y la red de sociabilidad nacionalista católica (1973-1976)”, *IV Jornadas de Historia Política*, Bahía Blanca, 2009.

PAGANO, N.: “Las ciencias sociales durante la dictadura argentina (1976-1981). En Devoto, Fernando y Pagano, Nora (ed.) *La historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay*, Buenos Aires, Biblos, 2004, pp. 159-170.

RODRÍGUEZ, L. G.: “La universidad argentina durante la última dictadura: actitudes y trayectorias de los rectores civiles (1976-1983)”, *RBBA. Revista Binacional Brasil-Argentina*, vol. 3, N.º 1, 2014, pp. 135-160.

RODRÍGUEZ, L. G.: “La universidad durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)”, *Conflicto social*, vol. 7, N.º 12, 2014a, pp. 114-145.

RODRÍGUEZ, L. G.: “Los nacionalistas católicos de *Cabildo* y la educación durante la última dictadura en Argentina”, en *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 68, N.º 1, 2011, pp. 253-277.

VESSURI, H.: “Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas”, en OTEIZA, E. (dir.) *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 339-363.

Fuentes

Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Período 1976-1983. Buenos Aires, EUDEBA, 1989.

CONICET. Cumplimiento de sus objetivos específicos. 1971-1981. Buenos Aires, mayo 1983.

CTERA (1975) *Universidad: la ‘Misión’ del caos y la destrucción*. Documento preparado y diagramado por las secretarías de la rama universitaria y de relaciones gremiales de la CTERA y su edición fue costeadada con el aporte de los docentes. Buenos Aires, julio.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *International Comparative Study on the management, productivity and effectiveness of research teams and institutions (ICSOPRU, 1971-1989)*, UNESCO/ICSOPRU/90/10, Paris, August 1990.

Ciencia y dictadura en la SECyT y el Conicet: el modelo de política científico-tecnológica de la Revolución Argentina al Proceso de Reorganización Nacional (1966-1983)

Adriana Feld
CONICET-UNQ
Centro CTS (U. Maimónides)

Introducción

Sin dudas, ciertos rasgos salientes de la última dictadura, como las prácticas represivas, o las políticas económicas liberales, asociadas en ocasiones con estrategias pro-corporativas de una fracción del elenco gubernamental,³² han generado transformaciones significativas en las políticas de ciencia y tecnología (PCyT), tanto en lo referido a los aspectos organizacionales como a las agendas de investigación, la magnitud de los recursos disponibles y la capacidad para implementar políticas acordes a la misión de cada organismo público de investigación. Sin embargo, difícilmente pueda aseverarse que ese mismo contexto haya producido resultados o desempeños análogos en todos los organismos públicos de investigación que, por otra parte, tienen objetivos, conducciones e historias bien diferentes.³³

Reconociendo esas especificidades institucionales este artículo analiza las transformaciones producidas en el Conicet y en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, guiado por el interrogante acerca de cómo se resolvieron las tensiones (emergentes ya en la década de 1960) entre *laissez faire* y planificación/orientación de la investigación. Se trata de una tensión que, como señala Canelo, tuvo una expresión mucho más amplia en aquella generada entre la propuesta de sectores nacionalistas y desarrollistas de las Fuerzas Armadas de crear un Ministerio de Planificación y los postulados del liberalismo enquistados en el “Superministerio” de Economía a cargo de Martínez de Hoz.³⁴ Desde luego, esa tensión no puede trasladarse automáticamente

³² Sobre el concepto de “liberalismo corporativo” véase Pucciarelli, A. (2004), “La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura militar encubre una vieja práctica corporativa”, en Pucciarelli, A. (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 99-171.

³³ Sobre la CNEA véase Hurtado, D.: “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *CTS. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64. El caso del INTA ha sido analizado en Gárgano, C.: “La reorganización de las agendas de investigación y extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)”, *Realidad Económica*, N.º 258, 2011, pp. 120-149.

³⁴ Según Canelo, la acción del Ministerio de Planificación, efectivamente creado en septiembre de 1976, quedó prácticamente congelada a fines de 1977, luego de la renuncia de su principal promotor, Ramón G. Díaz Bessone, a raíz de las diferencias mantenidas con el Ministerio de Economía. Canelo, P.: “La política contra la economía: elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización

a los organismos aquí analizados, pero marca una línea de indagación interesante para las PCyT.

Para responder al interrogante planteado nos concentraremos en dos ejes de análisis: el primero, referido a la función y a la inserción del Conicet dentro de un sector del “sistema público de investigación”,³⁵ integrado por universidades y organismos de formulación de PCyT; el segundo, referido tanto a las agendas de investigación como a la modalidad de orientación, evaluación y financiamiento de la investigación. El supuesto del que partimos es que las transformaciones producidas en ambos ejes trascienden tanto el recorte temporal centrado en el “Proceso de Reorganización Nacional” como los factores de índole estrictamente nacional. Por lo tanto, consideramos aquí dos motores de cambio: por un lado, las tensiones crecientes luego de 1966 entre la escalada de prácticas estatales represivas y la radicalización del campo académico; por otro lado la emergencia de un nuevo paradigma internacional de PCyT, difundido por organismos internacionales (sobre todo Unesco y OEA) y en cuya implementación jugaron un rol muy importante algunos organismos financieros (como el BID).³⁶

Adopción y naufragio de un nuevo modelo de política científico-tecnológica: la Política en las políticas

En 1968, con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la Secretaría del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Seconacyt), se produjo en la Argentina una reconfiguración del modelo institucional y de la modalidad de diseño de las PCyT. Hasta entonces, al menos en términos formales, el Conicet, creado en 1958, se había considerado el principal organismo de política científica. Si bien la ley de creación del Conicet proponía una misión bastante ambiciosa orientada a “promover, coordinar y orientar las investigaciones en el campo de las ciencias puras y de las aplicadas”, además de “fijar un orden de prioridades que contemplen las necesidades del país”, lo cierto es que su escaso presupuesto lo confinó a cumplir funciones más bien modestas.³⁷ Conducido por un directorio organizado basado en

Nacional (1976-1981)”, en Pucciarelli, A. (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, pp. 219-312.

³⁵ Para el uso de este concepto nos basamos en Whitley, R.: “Reconfiguring the Public Sciences: The Impact of Governance Changes on Authority and Innovation in Public Science Systems”, en Whitley, R., Glaeser, J. y Engwall, L. (ed.), *Reconfiguring Knowledge Production: Changing Authority Relationships in the Sciences and their Consequences for Intellectual Innovation*, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 3-47.

³⁶ Una abundante literatura señala el carácter mimético que han tenido las políticas de ciencia y tecnología en América Latina e identifica el rol difusor de organismos internacionales. Al respecto, pueden verse Amadeo, E.: “Los consejos nacionales de ciencia y tecnología en América Latina”, *Comercio Exterior*, vol. 28, N.º 12, pp. 1439-1447, 1978; Oteiza, E.: “El complejo científico y tecnológico argentino en la segunda mitad del siglo xx: la transferencia de modelos institucionales”, en Oteiza, E. (dir.), *La política de investigación científica y tecnológica en la Argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 115-125; Dagnino, R. y Thomas, H.: “La política científica y tecnológica en América Latina: nuevos escenarios y el papel de la comunidad de investigación”, *Redes*, vol. 6, N.º 13, 1999, pp. 49-74; Albornoz, M. y Gordon, A.: “La política de ciencia y tecnología en Argentina desde la recuperación de la democracia (1983-2009)”, en Albornoz, M. y Sebastian, J. (ed.), *Trayectorias de las políticas científicas y universitarias de Argentina y España*, Madrid, CSIC, 2011; Finnemore, M.: “International Organizations as Teachers of Norms: The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy”, *International Organization*, vol. 47, N.º 4, 1993, pp. 565-597.

³⁷ Entre 1961 y 1966, el presupuesto del Conicet no logró superar el 8,49% del presupuesto destinado a los prin-

un sistema de representación disciplinaria, este organismo funcionó dentro de la órbita de la Presidencia de la Nación sin una definición explícita de criterios para la distribución de recursos. Por lo tanto, el desarrollo de la investigación en esos años fue fuertemente dependiente de los proyectos institucionales, delineados en organismos sectoriales de investigación o en los diversos niveles de las universidades públicas (facultades, departamentos o laboratorios).

En ese marco, el Conicet, junto con fundaciones estadounidenses como la Ford y la Rockefeller, se constituyeron en instrumentos para financiar proyectos originados en los diversos niveles del ámbito universitario o en institutos privados. Por lo tanto, el Consejo puede considerarse como una “agencia”³⁸ de promoción de la investigación encargada de repartir fondos sobre la base de la evaluación por pares y a criterios de excelencia entre cuatro finalidades: a) un programa de becas internas y externas; b) un programa de subsidios de investigación; c) un escalafón para la carrera del investigador científico, cuyos integrantes podían radicarse en diversas instituciones; d) un escalafón de personal técnico de apoyo análogo al de la carrera del investigador.

A pesar de que la creación del Conicet supuso la puesta en marcha de una novedosa maquinaria de promoción y evaluación y de que el organismo contribuyó a instalar nuevos criterios académicos, la modalidad de “convocatorias abiertas”, tanto para la carrera como para las becas y subsidios, sin previa definición de cargos o cupos por relevancia temática, supuso la puesta en marcha de una política orientada por la demanda académica, que algunos autores han identificado con el rótulo de “liberal”.³⁹ Eso produjo una fuerte concentración de becas (61,7%), subsidios (59,4%) y miembros de la carrera (69,4%) en Buenos Aires, que albergaba arriba del 40% de la población universitaria. Lo mismo se constata respecto de la concentración disciplinaria, puesto que las ciencias médicas, con una sólida tradición de investigación, atrajeron los porcentajes más altos de recursos para las tres categorías entre 1958 y 1966: 30,3% de las becas, 25,7% de los fondos para subsidios y 33,3% de los ingresos a carrera.⁴⁰

Este modelo, discutido en diversas ocasiones en el propio directorio del Conicet, fue

cipales organismos descentralizados de CyT. Si se suman, para ese mismo período, los gastos de investigación de las universidades y el presupuesto del Conicet, los recursos de este último nunca representaron más del 15,4%. Cifras elaboradas con base en UNESCO: *Política científica y organización de la investigación científica en la Argentina*, Montevideo, Oficina de Ciencias de la Unesco para América Latina, 1970.

³⁸ Se usa aquí la noción de “agencia” no en un sentido estricto, sino como contraposición a los modelos de Consejo dotados de funciones de planificación y definición de políticas.

³⁹ Kreimer, P.: “Institucionalización de la ciencia argentina: dimensiones internacionales y relaciones centro-periferia”, en Lugones, G. y Flores, J. (ed.), *Intérpretes e interpretaciones en la Argentina del Bicentenario*, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2010, pp. 121-137.

⁴⁰ Cifras elaboradas con base en Conicet: *Memoria de actividades, febrero de 1958-agosto de 1959*, Buenos Aires, 1959; Conicet: *Memoria. Actividades del año 1960. Reseña general de la labor realizada desde febrero de 1958*, Buenos Aires, 1960; Conicet: *Memoria de actividades, 1º de febrero de 1961-31 de enero de 1962*, Buenos Aires, 1963; Conicet: *Memoria de actividades, 1º de febrero de 1962-31 de enero de 1963*, Buenos Aires, 1964a; Conicet: *Memoria de actividades, 31 de enero de 1963-1º de febrero de 1964*, Buenos Aires, 1964b; Conicet: *Memoria de actividades, 1º de febrero de 1964-31 de enero de 1965*, Buenos Aires, 1965; Conicet: *Memoria de actividades, 1º de febrero de 1965-31 de enero de 1966*, Buenos Aires, 1967a; Conicet: *Informe de sus actividades. Año 1966*, Buenos Aires, 1967.

fuertemente cuestionado luego del golpe de 1966. En ese cuestionamiento influyeron tres factores: a) la difusión internacional de un nuevo paradigma de PCyT⁴¹; b) la orientación tecnocrática del gobierno militar instaurado en 1966; c) la emergencia local de una reflexión crítica (en términos analíticos y normativos) sobre las PCyT y el desarrollo de la investigación en contextos periféricos.⁴² Fue en ese contexto que se crearon el Conacyt y la Seconacyt.

Mientras el Conacyt era un organismo de perfil más bien político, integrado por el presidente de la nación y los diversos ministros y comandantes en jefe, la Seconacyt era su contraparte técnica, encargada de: a) reunir y evaluar los antecedentes necesarios para el proceso de formulación de la política; b) proponer la asignación y distribución adecuada de recursos en función de objetivos y prioridades identificadas en planes y programas; c) analizar y evaluar programas y proyectos; d) coordinar sus actividades con las de las Secretarías del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE). Los nuevos organismos planteaban, pues, un cambio de dirección en los procesos de formulación e implementación de políticas, que apuntaba enlazar la planificación de la investigación con la planificación económico-social y a invertir la relación conceptual entre productores y usuarios del conocimiento, pasando de una perspectiva *science push* hacia otra *demand pull*. A su vez, se pretendía introducir cierta coherencia y eficacia en un panorama institucional que se consideraba “balcanizado”.

Sobre la base de este nuevo modelo, en 1969, la Seconacyt llevó a cabo un estudio de diagnóstico que evaluaba no solo el potencial científico y el grado de eficiencia organizativa de la infraestructura científico-tecnológica, sino también la orientación del esfuerzo en función de necesidades económicas y sociales.⁴³ Respecto de la orientación de la investigación, el estudio mostraba (entre otros indicadores) un marcado predominio de gastos en actividades de investigación básica (30%) y aplicada (49%), respecto de las actividades de desarrollo (21%), llegando a la conclusión de que el esfuerzo de los institutos encuestados estaba poco orientado hacia propósitos de desarrollo económico, particularmente en lo referido a la industria.⁴⁴ En cuanto a la eficiencia organizativa, el documento hacía hincapié en dos falencias. En primer lugar, señalaba la atomización del panorama institucional, debido al predominio –

⁴¹ Sobre los sucesivos paradigmas o modelos de PCyT véanse Elzinga, A. y Jamison, A.: “El cambio de las agendas políticas en ciencia y tecnología”, en Sanz Menéndez, L. y M. J. Santesmases, M. J. (comps.), *Ciencia y Estado, Zona Abierta*, N.º 75-76, 1996, pp. 91-132; Ruivo, B.: “‘Phases’ or ‘paradigms’ of science policy?”, *Science and Public Policy*, vol. 21, N.º 3, 1994, pp. 157-164; Velho, L.: “La ciencia y los paradigmas de política científica, tecnológica y de innovación”, en Arellano Hernández y Kreimer, P. (dirs.), *Estudio social de la ciencia y la tecnología desde América Latina*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2011, pp. 99-125; Sanz Menéndez, L.: *Estado, ciencia y tecnología en España: 1939-1097*, Madrid, Alianza Editorial, 1997.

⁴² Al respecto véanse Feld, A.: “Las primeras reflexiones sobre la ciencia y la tecnología en la Argentina: 1968-1973”, *Redes*, vol. 17, N.º 32, 2011, pp. 185-221; Feld, A. y Kreimer, P.: “La science en débat en Amérique Latine. Perspectives ‘radicales’ au début des années 1970 en Argentine”, *Revue d’Anthropologie des Connaissances*, vol. 5, N.º 2, 2012, pp. 29-58.

⁴³ SECONACYT: *Potencial científico y técnico nacional: institutos de investigación de los sectores público, universitario y privado de bien público. Resultados de la encuesta llevada a cabo durante 1969*, Buenos Aires, 1971a.

⁴⁴ En cuanto a los proyectos de investigación, un 27% correspondían a investigación básica, un 55% a investigación aplicada y un 16% a desarrollo.

muy marcado en las universidades– de institutos de pequeñas dimensiones⁴⁵ y al alto porcentaje de investigadores (35%) que trabajaban en forma independiente y sin vinculación con otros grupos. En segundo lugar, la encuesta revelaba una ineficiente distribución regional de los recursos científicos y tecnológicos, debido a la gran concentración en el área metropolitana y pampeana: solo el área metropolitana contenía un tercio de los institutos de investigación y alrededor de la mitad de los recursos (personal y gastos corrientes).⁴⁶

Este documento fue la base para la elaboración de los tres planes de CyT, que se sucedieron entre 1971 y 1975, en los que se definían prioridades de un modo más o menos laxo y se proponían diversos criterios de financiamiento.⁴⁷ El más específico en cuanto al establecimiento de prioridades fue el plan de CyT para 1975/76, en el que se explicitaron cuatro programas nacionales: tecnología de alimentos, electrónica, enfermedades endémicas, vivienda. Sin embargo, pese a la voluntad inicial de conferirle al nuevo organismo la función de planificación y coordinación de los organismos públicos de investigación, durante la década de 1970 la Secretaría de CyT recibió una porción muy acotada del presupuesto destinado a I+D (cuadro 1) y padeció una debilidad crónica para orientar la producción de conocimiento. A fines de 1981, Juan Rogelio Rodríguez, titular de dicho organismo, reclamaba una mayor injerencia en el asesoramiento del Poder Ejecutivo y en la distribución del presupuesto para la finalidad 8 (ciencia y tecnología) entre las diversas instituciones con el objeto de encuadrar mejor los temas de investigación:

Los institutos que conforman el sistema de Ciencia y Técnica del país y las universidades nacionales gestionan sus presupuestos anuales para este fin a través de sus respectivos Ministerios [...] sin que en ningún momento haya habido una compatibilización científico-técnica, a nivel de detalle, del conjunto de dichos presupuestos.

Ello proporciona a los referidos institutos y universidades una exagerada libertad para la selección de los temas de investigación y, como resultado, una criticable y descoordinada superposición de esfuerzos (p. 28).⁴⁸

⁴⁵ Por ejemplo, un 30% de los institutos empleaba cinco o menos científicos y apenas un 15% tenía un tamaño razonable, empleando veinte o más científicos.

⁴⁶ Aráoz, A.: *Aspectos cuantitativos de la ciencia argentina*, Departamento de Asuntos Científicos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Washington, OEA, 1974.

⁴⁷ SECONACYT: *Plan nacional de ciencia y técnica 1971-1975: objetivos, metas, líneas de acción*, Buenos Aires, 1971b; SUBCYT: *Política nacional en ciencia y técnica: plan operativo 1973*, Buenos Aires, La Secretaría, 1972; SECYT: *Lineamientos de acción inmediata 1975/76 en ciencia y tecnología*, Buenos Aires, SECYT, s/f.

⁴⁸ *Esto es Tecnología y Modernización*: “Explica la SUBCYT las causas de su escaso rendimiento”, año 1, N.º 5, 1981, pp. 25-29.

Cuadro 1: Participación de la Secretaría en la Finalidad 8.

Año	Secretaría/F8
1972	2,40%
1973	8,80%
1974	5,80%
1975	8,90%
1976	5,00%
1977	9,20%
1978	5,70%
1979	4,70%
1980	3,10%
1981	2,70%
1982	2,30%

Fuente: SUBCyT: *Informe de situación*, Buenos Aires, 1982.

Los motivos de esta debilidad son varios, pero aquí nos concentraremos en aquellos que se encuentran en la intersección entre la creciente politización y radicalización del campo académico y la escalada de prácticas estatales represivas iniciada en 1966.⁴⁹ En efecto, el origen del Conacyt/Seconacyt quedó asociado a un gobierno militar que, desde el episodio conocido como la “Noche de los Bastones Largos”, atentó contra las universidades, tanto en lo referido a la preciada autonomía como al desarrollo de la investigación en algunas casas de estudio (en especial, la de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA). De igual modo, las tendencias tecnocráticas tuvieron su contracara en las tendencias autoritarias del gobierno que, bajo el lema de conferir una racionalidad técnica a las políticas, también aplicó filtros ideológicos en la Secretaría y el Conicet, sea para la designación de cargos de responsabilidad o para el otorgamiento de becas, subsidios e ingresos a la carrera del investigador.

En el caso del Conicet, que hasta 1966 había funcionado con absoluta autonomía, se implementó un cambio en el mecanismo de designación de miembros del directorio, que apuntó a incrementar el control del gobierno sobre la composición ideológica del cuerpo: en dos memorándums reservados dirigidos a la Presidencia en 1967 y 1969 se señalaban como objetivos la “eliminación del grupo izquierdista” y la “disminución del poder del grupo Houssay-Deulofeu” en el directorio y en las respectivas comisiones (p. 132).⁵⁰ Asimismo, desde 1967, los mecanismos de evaluación del Conicet se vieron afectados por los instrumentos de control ideológico impuestos por la legislación referida a la represión del comunismo (Ley 17.401), que prohibía el otorgamiento de becas, subsidios o ingresos a carrera de candidatos tildados de comunistas.

Complementariamente, el gobierno inició un proceso de racionalización

⁴⁹ Sobre este tema véase Franco, M.: *Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

⁵⁰ Citado en Hurtado, D.: *La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso: 1930-2000*, Buenos Aires, Edhasa, 2010.

administrativa del sector público, que le permitió colocar figuras más afines al régimen en puestos de responsabilidad. En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, encargada de implementar la racionalización, propuso disolver las comisiones asesoras y reemplazar al directorio por un Consejo Asesor, con el objeto de “dejar toda su responsabilidad y ejecutividad en poder del presidente”.⁵¹ La nueva estructura orgánica del Consejo fue aprobada en septiembre de 1969 e incluía, además de las comisiones asesoras (mantenidas gracias a una serie de engorrosas negociaciones), una Secretaría Ejecutiva, a cargo de Ángel Molero, y una Secretaría Científica, puesta en manos de Carlos Alberto Sacheri.⁵² Molero, que se incorporó al equipo administrativo del Conicet poco tiempo después de la creación del organismo, fue descrito por Rolando García (integrante del directorio entre 1958 y 1965) como un “hombre de los servicios”.⁵³

En 1968, cuando ocupaba el cargo de Prosecretario y Secretario Ejecutivo interino, Molero asistió a los cursos de Defensa Nacional dictados por la Escuela Nacional de Guerra, de los que debían participar miembros de las Fuerzas Armadas, representantes de las “fuerzas vivas” y funcionarios de la administración pública de alta jerarquía. Un año antes, el entonces Secretario Ejecutivo del Consejo, arquitecto Hinsch, también había asistido a los cursos de la Escuela Nacional de Guerra y tendría un importante rol en la aplicación de la legislación de represión del comunismo a los mecanismos de evaluación del Consejo. Durante una reunión secreta mantenida por el directorio para discutir el tema, Houssay propondría mantener al Consejo relativamente al margen de la aplicación de ley: cuando un buen candidato fuera tildado de comunista, el asunto debía pasarse a la SIDE para que esta informara su decisión. Por el contrario, la intervención de Hinsch apuntó a asegurar el cumplimiento de la ley y resguardar, al mismo tiempo, la posición de la SIDE:

Evidentemente, el SIDE como todo organismo de seguridad nacional tiene que tomar para su acción efectiva ciertas precauciones, de igual manera que las entidades similares inglesas y americanas el CIA y el M16, ya que le resulta embarazoso que estas cosas salgan al público. Concretamente hay que hacer la consulta previa y cuando existe la calificación de comunista, sencillamente denegar el subsidio o la beca.⁵⁴

Respecto de Carlos Alberto Sacheri, un artículo de la revista *Ciencia Nueva* lo identificaba como el presidente del grupo “La ciudad católica argentina” y “uno de los sustentadores más conspicuos” de ideas antisemitas, antiliberales y anticomunistas

⁵¹ Conicet: Acta de la 216.^a reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 23 de febrero de 1968; Conicet: Acta de la 243.^a reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 25 de abril de 1969.

⁵² Conicet: Acta de la 252.^a reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 26 de septiembre de 1969.

⁵³ Entrevista a Rolando García, realizada por Diego Hurtado, 18 de octubre de 2004 (inédita).

⁵⁴ Conicet: Acta de la 213.^a reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 15 de diciembre de 1967.

(p. 3).⁵⁵ En 1971, una investigación publicada en la revista *Panorama* ponía de relieve que ese sector de la burocracia había ido ganando preeminencia en el Consejo:

En esos mismos años una nueva fuerza, menos evidente pero cada vez más poderosa, se constituyó a lo largo de los pasillos y en las discretas oficinas de la calle Rivadavia. El gobierno del Consejo ha derivado, lenta pero inexorablemente, de las octogenarias manos de Bernardo Houssay a las más jóvenes de los funcionarios permanentes. Su lealtad –es claro– no está comprometida ya con el vetusto Nobel sino con sus colegas de la Casa Rosada (p. 26).⁵⁶

En el caso de la Seconacyt, el gobierno también se encargó de tomar los “recaudos ideológicos” necesarios. Entre los “candidatos” que circulaban en las altas esferas del gobierno para conducir la Secretaría figuraban Alberto C. Taquini (director del Centro de Investigaciones Cardiológicas de la Facultad de Medicina de la UBA), Jorge Sabato (gerente de tecnología de la CNEA) y Carlos Mallmann (director de la Fundación Bariloche).⁵⁷ La candidatura de Sabato fue descartada ante una advertencia de Castex: “Ojo, General, que este tipo es brillante pero no se va a quedar callado. ¿No le cabe un bozal? Dijo Onganía. No, respondió Castex. Entonces, a buscar otro”.⁵⁸ Descartada la “candidatura” de Sabato, Castex apoyó la de Mallmann, evaluando que Onganía parecía dispuesto a darle un lugar si se le explicaba que “la izquierda era mucho menos peligrosa si la teníamos ubicada sirviendo al país”.⁵⁹ Sin embargo, al menos dos factores terminaron inclinando la balanza a favor de Taquini: por un lado, la insistencia de Mallmann en trasladar la Seconacyt a Bariloche en caso de asumir el cargo; por otro, un informe secreto que advertía (en relación con Mallmann) que “aunque carecía de antecedentes, se hacía aconsejable su no designación” (p. 151).⁶⁰ Consultado sobre su designación al frente de la Secretaría, Taquini hizo referencia a dos factores.⁶¹ El primero de ellos, era la proyección pública que había obtenido a través de la publicación de artículos en medios de comunicación y de su colaboración en el diseño del Programa de Desarrollo Científico de la UNESCO para América Latina. El otro factor era su vínculo con algunos funcionarios cercanos a Onganía: por un lado, su previo contacto con Castex, originado en la Compañía de Jesús –cuya Academia del Plata había presidido años antes–, con quien mantuvo conversaciones sobre política científica antes de su designación⁶²; por otro lado, sus

⁵⁵ *Ciencia Nueva*: “Barranca abajo”, Año I, N.º 5, 1970, p. 3.

⁵⁶ Basualdo, A. et al.: “Ciencia Argentina. La sucesión de Houssay”, *Panorama*, año III, N.º 201, 2 al 8 de Marzo de 1971, pp. 22-31.

⁵⁷ Castex, M. N.: *El Escorial de Onganía*, Buenos Aires, Ediciones Hespérides, 1981.

⁵⁸ Entrevista a Mariano N. Castex, realizada por Pablo Kreimer, 1988 (inérita).

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Castex, op. cit.

⁶¹ Entrevista a Alberto C. Taquini, realizada por autor anónimo, Archivo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales, 1987.

⁶² Este segundo factor resulta significativo puesto en el contexto de la creciente inserción de redes católicas

estrechas relaciones con algunos generales, entre ellos, Alcides López Aufranc y Juan Lavícoli.⁶³

La injerencia de la SIDE en estos organismos no tardó en salir a la luz y convertirse en uno de los ejes de la crítica y de la creciente agitación del campo académico.⁶⁴ En 1972, un editorial de la revista *Ciencia Nueva* denunciaba que: “Si hay científicos en el Conacyt los hay en tanto que funcionarios y si la participación en el Conicet se reduce a la integración de las comisiones asesoras, por encima de sus consejos tiene la SIDE poder de decisión, poco o nada puede decir la comunidad científica sobre la ‘conducción del proceso’” (p. 4).⁶⁵ Las acusaciones autoritarismo, arbitrariedad y control ideológico se enlazaban también con el carácter estrictamente tecnocrático de las políticas y con las demandas de participación de la comunidad científica. En mayo de 1970, otro editorial de *Ciencia Nueva* titulado “Conacyt. Una montaña de papel” denunciaba que el Conacyt “ha hecho proyectos de fichas, proyectos de recuentos, proyectos de censos, proyectos de encuestas, proyectos de proyectos, y también muchas fichas, algunos recuentos, algún censo, alguna encuesta y ningún proyecto fundamental” (p. 3).⁶⁶ Al año siguiente, la misma revista publicó otro artículo sumamente crítico del plan de ciencia y tecnología, en el que destacaba: a) el carácter inalcanzable de las metas planteadas en términos cuantitativos; b) la falta de especificaciones en cuanto a las áreas y especialidades entre las que se distribuirían los recursos; c) la priorización de la estructura científica por sobre el establecimiento de objetivos de desarrollo hacia los cuales orientar el esfuerzo; d) la exclusión de la comunidad científica de la elaboración del plan que, según el editorial, “fue realizado exclusivamente por la Secretaría del Conacyt sin consulta con los organismos de investigación, centros, comisiones, universidades y demás entidades directamente afectadas”: “Sólo es necesario que se reconozca –exhortaba el editorial– que son preferentemente los científicos a quienes corresponde participar en el análisis de la problemática y la proyección de su propia actividad” (p. 4).⁶⁷

En ese clima, Houssay reconocía que el Consejo se encontraba atravesado por luchas entre “grupos que [querían] poder”, grupos “de izquierda y católicos”.⁶⁸ La

en el Estado durante la Revolución Argentina. Al respecto, véase Giorgi, G. I.: “Redes católicas y Estado en la ‘revolución argentina’”, *Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião*, año 12, N.º 12, 2010, pp. 53-78.

⁶³ Resulta sugerente, para explicar estos vínculos, la indicación de Rouquié, según la cual el hermano de Taquini, el general Ernesto E. Taquini, ocupó el cargo de Secretario de Informaciones del Estado en 1963. Rouquié, A.: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, t. II, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

⁶⁴ A principios de 1968, el Arq. Hirsch expresaba ante el directorio del Conicet su desagrado por la publicación (“con lujo de detalles”) en el periódico *Propósitos* y en la revista *Inédito* de la reunión secreta efectuada para el tratamiento de la ley de represión del comunismo. Véase Conicet: Acta de la 216.ª reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 23 de febrero de 1968.

⁶⁵ *Ciencia Nueva*: “Higos y manzanas”, año III, N.º 17, 1972, p. 4.

⁶⁶ *Ciencia Nueva*: “Conacyt, ‘Una montaña de papel’”, año I, N.º 5, 1970, pp. 3-4.

⁶⁷ *Ciencia Nueva*: “Planes que no son tales”, año I, N.º 10, 1971, pp. 3-4.

⁶⁸ Basualdo *et al*, *op. cit.* Unos años antes también afirmaba ante el directorio: “se trata de una campaña derrotista, perfectamente definida que tiene dos orígenes: los grupos comunistas interesados en desprestigiar a cualquier institución y otros con ansias de poder que hacen correr toda clase de rumores, aun los más absurdos, además de algunos de carácter personal”. Fragmento extraído de Conicet: Acta de la 217.ª reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 8 de marzo de 1968.

convalecencia y posterior fallecimiento de Houssay empeoró aún más la situación. Ese año, el semanario *Panorama* publicó un artículo titulado “Ciencia Argentina: la sucesión de Houssay”, en el que, anticipándose pocos meses a su muerte, advertía: “si Houssay deja el campo libre a la lucha de trenzas, es seguro que no volverá a aparecer una figura central y fuerte, capaz de afianzar el aparato científico y protagonizar la verdadera revolución en él y en sus relaciones con el país”.⁶⁹ Con la muerte de Houssay y la negativa de Luis F. Leloir (ya entonces Premio Nobel) a hacerse cargo de la sucesión, ningún candidato reuniría la legitimidad y autoridad suficiente como para presidir el organismo, lidiar con un Poder Ejecutivo cada vez más “intervencionista” y con corrientes políticas en pugna que comenzaban a trasladar sus conflictos al “espacio más o menos autónomo de la ciencia”. Según un protagonista de aquellos años: “La muerte de Houssay, el 21 de septiembre de 1971, abrió la puerta a la debacle [...] Se había roto el sistema de control científico y bastaba acercarse al poder”.⁷⁰

Paralelamente a las profusas críticas dirigidas al gobierno y a los organismos de política científica, la perspectiva del retorno a un régimen democrático abierta por el Gran Acuerdo Nacional, inspiró la conformación de comités o consejos dentro de diversas agrupaciones políticas, que tenían el propósito de delinear propuestas de PCyT. En julio de 1972 se constituyó el Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Justicialista (CT-MNJ), una agrupación alineada hacia la izquierda del espectro político peronista, presidida por Rolando García. Entre otras recomendaciones, esta agrupación propuso una reestructuración integral de los ministerios y del sistema de planificación, que incluía la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología destinado a centralizar “los planes de política científica dispersos en numerosos organismos oficiales” (p. 21).⁷¹ Con el retorno democrático la propuesta fue recogida por el presidente Héctor Cámpora en su discurso de asunción presidencial del 25 de mayo de 1973, en el que no solo prometía la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que además hacía alusión a muchos de los tópicos discutidos desde fines de los años 60: el cientificismo, los efectos nocivos de la importación/transferencia de tecnología, la dependencia cultural, etc.⁷²

Sin embargo, en el marco del creciente enfrentamiento entre las tendencias de derecha e izquierda del peronismo producida durante la “primavera camporista”, la iniciativa de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología quedaría trunca. El ciclo de tomas de diversas entidades públicas (universidades, hospitales, etc.) y privadas

⁶⁹ Refiriéndose a las “trenzas” el semanario vaticinaba: “Es posible, también, que la lista que la SIDE confeccionó cuando Onganía soñaba con la Secretaría del Conacyt vuelva a ser tomada en cuenta por Levingston en el momento de reemplazar a Houssay [...] Los opinantes aseguran que Alberto Taquini, enemigo de Houssay, trataría de tender un cable desde el Palacio del Congreso (donde funciona el Conacyt), que cruzaría la calle Rivadavia y llegaría sin trabas hasta el codiciado sillón houssaiano”. Véase Basualdo *et al*, *op. cit.*, pp. 30 y 31.

⁷⁰ Entrevista a B. Frydman, realizada por María Caldelari, 1987 (inédita).

⁷¹ *Gobierno Peronista*: “Universidad. Elementos para una discusión del problema universitario”, Buenos Aires, Editorial del Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista, 1973.

⁷² Cámpora, H. J.: “Texto del mensaje del Presidente de la Nación, Doctor Héctor J. Cámpora, ante ambas Cámaras, en el Honorable Congreso de la Nación dedicado a ‘Ciencia y Tecnología’ al asumir el mando el 25 de mayo de 1973”, *Informaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas*, N.º 95, 1973, pp. 1-11.

(empresas) llevadas a cabo por organizaciones y grupos de base en oposición a la continuidad de funcionarios de la dictadura, o bien, por organizaciones políticas de derecha y de izquierda para expresar la confrontación entre ambas tendencias del peronismo, es un buen indicador del clima político de la época, que afectó también a la Secretaría de CyT, al Conicet y a las universidades.⁷³ En ese contexto, a principios de junio de 1973, un grupo de becarios, técnicos e investigadores del Conicet que venían organizando una resistencia a las autoridades de la dictadura que aún ocupaban cargos en el Consejo, llevó a cabo una asamblea en la que denunció la discriminación ideológica y solicitó una apertura del debate sobre las políticas científicas. Cuatro días más tarde, la Alianza Libertadora Nacionalista tomó el organismo y exhibió carteles con la siguiente consigna: “No entrarán ni gorilas ni marxistas”; “No a Rolando García ni a su comparsa troska” (p. 385).⁷⁴

Para poner fin a las presiones provenientes de diversos sectores, en 1973 el gobierno intervino el Conicet y la Secretaría (a partir de entonces SECYT), transfiriendo ambos organismos a la órbita del Ministerio de Educación, donde convivirían con las universidades hasta finales de 1981. Durante la gestión de Jorge A. Taiana en el Ministerio de Educación, Julio Olivera fue designado al frente de la SECYT, por considerársele un actor independiente de la pugna entre diversos actores políticos. Sin embargo, en julio de 1974, luego del fallecimiento de Perón, el Ministerio de Educación pasó a manos de Oscar Ivanissevich, perteneciente a los sectores más conservadores del catolicismo y del peronismo, con quien Olivera mantuvo un fuerte entredicho que derivó en su renuncia. Olivera había sostenido que: “la Argentina –sumadas las inversiones públicas y privadas– destina sólo 0,4 por ciento de su producto bruto a la investigación científica y técnica, cuando el promedio mundial es 1,4 por ciento y, según recomendación de las Naciones Unidas, el porcentaje no debería nunca ser inferior a 0,5 por ciento aún en los países más pobres de la Tierra” (p. 14).⁷⁵ En contrapartida, en uno de sus discursos, Ivanissevich respondió que:

Se sabe que la investigación científica en todas sus variedades exige un gasto que no pueden soportar los países en desarrollo, por el simple apotegma de: primero vivir y después filosofar [...] Nuestra Secretaría de Ciencia y Técnica tiene un presupuesto de 24.000 millones de pesos anuales, cuyo destino se pierde en la noche del tiempo, y aún no he logrado saber cuántos inventos realizan estos investigadores, cuyos sueldos van de 400 mil pesos a 800 mil pesos mensuales (p. 14).⁷⁶

Por otra parte, el ministro señalaría que “la investigación pura [debía] realizarse fuera de las universidades, en las empresas particulares o en los institutos

⁷³ Nievas, F.: “Cámpora: primavera-otoño. Las tomas”, en Pucciarelli, A. (ed.), *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, Buenos Aires, Eudeba, 1999, pp. 353-292.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Olivera, J. H. G.: “Responde Olivera”, *Cuestionario*, año II, N.º 18, 1974, p. 14.

⁷⁶ Ivanissevich, O.: “Primo vivere, dopo filosofare”, *Cuestionario*, año II, N.º 18, 1974, p. 14.

para-universitarios”.⁷⁷ En ese marco, el foco de su política universitaria fue la depuración de todo vestigio de ideologías de izquierda y la concentración en la formación de profesionales.

El golpe de 1976 encontraría a las tres instituciones (Universidades, Conicet y SECyT) reunidas bajo un Ministerio de Cultura y Educación en el que, hasta 1983, se sucedieron cinco ministros, todos ellos católicos conservadores, para quienes la “masificación” de la universidad estaba indisociablemente ligada al fenómeno de la “subversión”⁷⁸. En ese marco, el proyecto para las universidades contempló algunos de los propósitos planteados ya en 1974; entre ellos, el “redimensionamiento” y “reordenamiento” del sistema, implementados a través del cierre de carreras, institutos, e incluso, universidades enteras (como en el caso de Luján), el establecimiento de exámenes de ingreso, de cupos por carrera y de aranceles de cursada. Paralelamente, se implementaron mecanismos de control y depuración ideológica que provocaron cesantías masivas, renuncias y exilio de una parte considerable de los profesores/investigadores.⁷⁹ También el Conicet estuvo sometido a las prácticas represivas que caracterizaron a este período: un trabajo reciente ha calculado que unos 679 individuos (personal y becarios) se “desvincularon” del organismo entre 1976 y 1983.⁸⁰ En cuanto a la Secretaría, un artículo publicado en 1981 por la revista *Cabildo* destacaba que la SECyT, creada por Perón, estaba llena de “activistas de ultra izquierda” y que el gobierno debió “pasar la escoba” por allí (p. 271).⁸¹

Además de las prácticas represivas, la ideología liberal prevaleciente durante la última dictadura militar produjo un quiebre en la relevancia concedida hasta entonces a la planificación. En ese marco, el principal organismo de PCyT permaneció dentro de la órbita del Ministerio de Educación, funcionando con un acotado presupuesto. Aun así, algunos documentos muestran la continuidad de ciertas prácticas iniciadas a fines de la década de 1960 con relación al diseño de las PCyT. En efecto, no solo se institucionalizó la realización periódica de diagnósticos, sino que también los criterios, la metodología y el marco conceptual utilizados en el diagnóstico de 1969 fueron aplicados a los Relevamientos de Recursos y Actividades en Ciencia y Tecnología (RRACyT) realizados en 1982 y 1988, permitiendo interesantes comparaciones e institucionalizando una particular concepción de lo que se requería medir y, por lo tanto, modificar.⁸² Además, es posible encontrar algunas continuidades respecto de

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Rodríguez, L. G.: “Los nacionalistas católicos de *Cabildo* y la educación durante la última dictadura en Argentina”, *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 68, N.º 1, 2011, pp. 253-277.

⁷⁹ Sobre las universidades pueden consultarse Pérez Lindo, A., *Universidad, política y sociedad*, Buenos Aires, Eudeba, 1985; Kauffmann, C.: *Dictadura y Educación (Tomo 1). Universidad y grupos académicos argentinos (1976-1983)*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2001; Rodríguez, L. y Soprano, G.: “La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983)”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, 2009, <<http://nuevomundo.revues.org/56023>>, consultado el 27 de mayo de 2010.

⁸⁰ Bekerman, F.: “El campo científico argentino en los años de plomo: desplazamientos y reorientación de recursos”, *Sociohistórica*, N.º 26, 2009, pp. 151-166; Bekerman, F.: “La expansión de las *research capacities* en tiempos de dictadura: la política de creación de institutos en el Conicet y su impacto en la estructura del sistema científico argentino (1974-1983)”, *Estudios*, N.º 25, 2011, pp. 121-139.

⁸¹ Citado en Rodríguez, 2011, op. cit.

⁸² SUBCYT: *Relevamiento de recursos y actividades en ciencia y tecnología 1982. Informe de los resultados obte-*

los objetivos planteados en los planes de ciencia y tecnología de la primera mitad de la década de 1970. Por un lado, en 1980 la SECyT elaboró una resolución en la que fijó diez objetivos de política científica que hundían sus raíces en las líneas de acción promovidas por el organismo desde principios de la década de 1970: “A estos diez objetivos específicos –afirmaba un documento del Conicet– los podemos encontrar en las normas dictadas por el Gobierno Nacional o la SECyT en 1971, 1973, 1976 y en los años siguientes hasta nuestros días” (p. 9).⁸³ Finalmente, a lo largo de estos años continuarían funcionando los cuatro programas nacionales antes mencionados, a los que se agregarían cuatro programas más: energía no convencional (1977), radiopropagación (1980), recursos naturales renovables (1980), petroquímica (1980), biotecnología e ingeniería genética (1982). Más allá del carácter formal, o incluso retórico, que pudieron haber tenido estas iniciativas proclamadas en los documentos oficiales, su mera enunciación revela que, en buena medida, el modelo de PCyT concebido a fines de la década de 1960 continuaba operando como idea-fuerza. En la sección siguiente indagamos la expresión de algunas de esas continuidades en el modelo institucional que asumió el Conicet.

1. La nueva función del Conicet como organismo de ejecución

1.1. *Expansión institucional y nuevos mecanismos de financiamiento de la investigación*

A pesar de los paralelismos entre el Conicet y las universidades en materia de control/depuración ideológica, existen diferencias significativas en la evolución de ambas instituciones en términos presupuestarios. Si bien ya en 1974 Ivanissevich había expresado que la investigación debía hacerse en institutos para-universitarios, fue a partir de 1976 que el Ministerio de Educación implementó una política efectiva de transferencia de recursos para investigación desde las universidades hacia el Conicet, considerado como un ámbito más controlable y menos vulnerables a la agitación política.⁸⁴

En ese marco, el presupuesto del Conicet creció de manera sostenida (a excepción de una leve baja en 1972 y en 1977), llegando a septuplicarse entre 1970 y 1981.⁸⁵ En buena medida, eso respondió a la nueva política del Consejo, iniciada luego de 1966, caracterizada por la profusa incorporación de institutos (nuevos o preexistentes) a la estructura orgánico-funcional del organismo, que marcó un viraje en su misión desde la promoción hacia la ejecución de la investigación. Probablemente, uno de los elementos que contribuyó tanto a ese viraje como al cambio de la relación del Conicet con las universidades haya sido la sanción, en 1973, del estatuto de la carrera del investigador: hasta entonces la carrera era un instrumento para el pago de

nidos, Buenos Aires, SUBCYT, 1983; SECYT: *Relevamiento de recursos y actividades en ciencia y tecnología 1988. Resultados preliminares*, Buenos Aires, SECYT, 1989.

⁸³ Conicet: *Conicet. Cumplimiento de sus objetivos específicos 1971-1981*, Buenos Aires, 1983.

⁸⁴ Bekerman, 2009, op. cit.

⁸⁵ Conicet, 1983, op. cit.

adicionales a profesores universitarios que hacían investigación; a partir de 1973 la figura del investigador adquiría contornos definidos, no necesariamente asociados a la universidad.⁸⁶

Si bien la creación de institutos propios estaba contemplada en el estatuto de 1958, hasta 1966 el Consejo mantuvo una estrategia gradual en esa materia, argumentando que primero había que consolidar las instituciones existentes y formar a los investigadores necesarios para ponerlas en marcha. La creación de apenas tres institutos entre 1958 y 1966 había estado motivada por la eventual oferta de fondos, instrumental o colaboración extranjeras (a excepción del INALI). Sin embargo, el escenario creado por la violenta intervención de la Universidad en 1966 y la masiva renuncia de docentes e investigadores contribuyó a instalar la cuestión de la creación de nuevos institutos, afianzada luego con la creación de la Seconacyt, que el Conicet percibió como una amenaza a sus funciones.⁸⁷

Por supuesto, las motivaciones para incorporar nuevos institutos residían, para algunos, en la necesidad de albergar a los profesores universitarios desplazados por la intervención y, para otros, en el imperativo de sustraer la investigación al clima de agitación político-social que afectaba a las universidades en aquellos años. Así, entre 1966 y 1967, diversos proyectos de institutos se presentaron y discutieron infructuosamente en el directorio, puesto que, como informara la Secretaría General de la Presidencia, debían postergarse “hasta tanto lo permita el presupuesto, volcándose los recursos existentes al mantenimiento de lo actual y no a la creación de nuevas instituciones que correrían la misma suerte presupuestaria que las que ya están actuando en ese ámbito”.⁸⁸ Recién en 1969, ya instalado el control de la SIDE y resuelto el proceso de racionalización administrativa, el presupuesto del Consejo se duplicó respecto de 1967 y 1968 y se inició lentamente la política de incorporación de institutos. Esta tendencia se profundizaría durante la última dictadura militar con la transferencia de recursos para investigación desde las universidades hacia el Conicet y la obtención de un préstamo del BID (1979) destinado a ciencia y tecnología.⁸⁹

Si en 1976 el Conicet contaba con 55 institutos, para 1981 alcanzaría los 100. El incremento en la cantidad de institutos fue acompañado por un aumento del personal de investigación. Como muestran el cuadro 2 y el gráfico A, entre el período 1972-1976 y el período 1977-1981 se produjo un importante incremento de las becas internas y externas y de los ingresos a las carreras del investigador y del técnico, con

⁸⁶ Hurtado, 2010, op. cit.

⁸⁷ Según Castex, a pesar de que “la idea de Onganía, bastante sensata, era bloquearle el poder a Houssay a través de la Secretaría General de la Presidencia”, y de que él mismo no acordaba con la política del organismo y con su presidente, consideraba que la remoción de un Premio Nobel del máximo cargo directivo de una institución que durante los últimos años había simbolizado la modernización del aparato científico nacional, hubiera resultado una medida sumamente impopular y, probablemente, contraproducente (Entrevista citada).

⁸⁸ Conicet: Acta de la 210.ª reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 13 de octubre de 1967.

⁸⁹ Sobre el préstamo del BID de 1979 véase Bekerman, F. y Algañaraz, V.: “El préstamo BID-Conicet: un caso de dependencia financiera en la política científica de la dictadura militar (1976-1983)”, ponencia presentada en el II Workshop sobre Dependencia Académica, Mendoza, del 3 al 6 de noviembre de 2010. Conviene destacar que el anterior préstamo del BID (1962) se había destinado principalmente a las universidades.

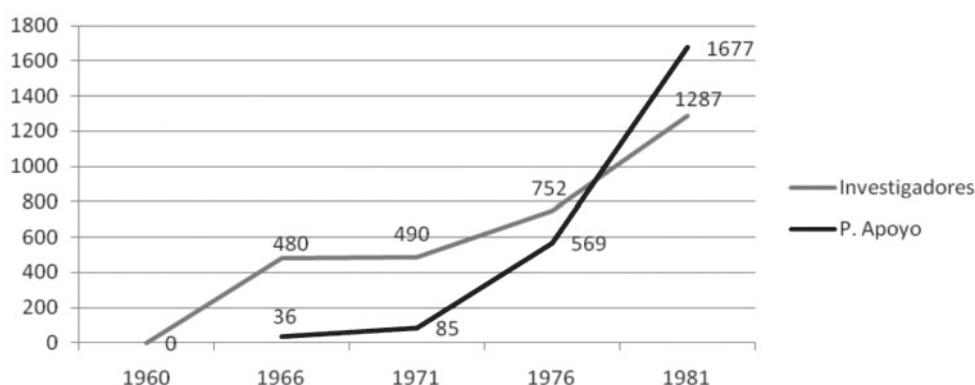
el que se superó ampliamente la cantidad de recursos humanos financiados entre 1958 y 1966.

Cuadro 2: Comparativo de becas internas y externas por períodos: valores absolutos, promedios anuales y porcentaje de becas internas y externas sobre el total (1958-1981).

	Becas externas			Becas internas		
	Total	Promedio anual	Porcentaje	Total	Promedio anual	Porcentaje
1958-1966	536	59,5	38,2%	865	96,1	61,7%
1972-1976	181	20,5	11,3%	1409	281,8	88,6%
1977-1981	513	102,6	11,3%	4017	803,4	88,6%

Fuentes: Elaboración propia con base en Conicet, 1959, op. cit; Conicet, 1960, op. cit; Conicet, 1963, op. cit; Conicet, 1964a, op. cit; Conicet, 1964b, op. cit; Conicet, 1965, op. cit; Conicet, 1967a, op. cit; Conicet, 1967b, op. cit; Conicet, 1983, op. cit.

Gráfico A: Evolución de la cantidad de investigadores y personal de apoyo

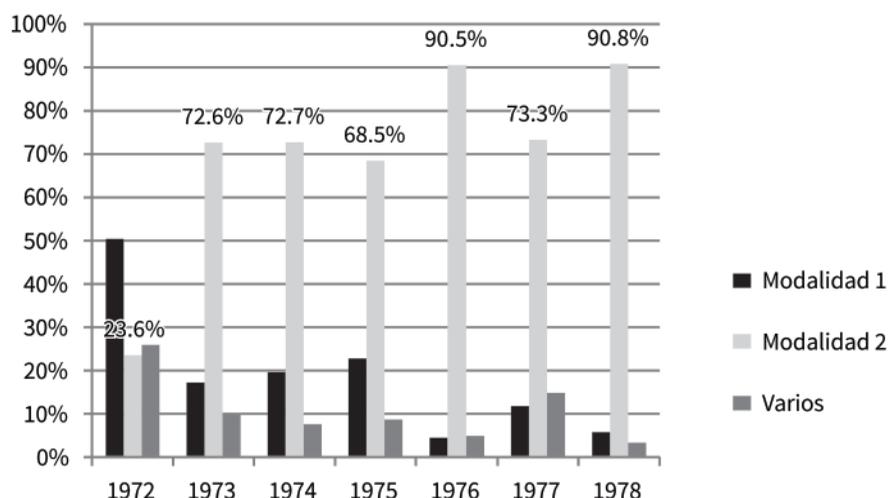


Fuentes: Elaboración propia con base en Conicet, 1959, op. cit; Conicet, 1960, op. cit; Conicet, 1963, op. cit; Conicet, 1964a, op. cit; Conicet, 1964b, op. cit; Conicet, 1965, op. cit; Conicet, 1967a, op. cit; Conicet, 1967b, op. cit; Conicet, 1983, op. cit.

La expansión institucional del Conicet y su conversión a organismo ejecutor de la investigación coincidió con el establecimiento de nuevos mecanismos de financiamiento y gestión institucional. Entre 1958 y 1966 los subsidios del Conicet se entregaban sobre la base de evaluaciones *ex ante* de proyectos de investigación individuales, o bien, de solicitudes para viajes, compra de equipamiento, mejoramiento de bibliotecas, etc. (modalidad 1), que se clasificaban luego por finalidad y, sobre todo, por disciplina con el objeto de mantener un cupo de fondos para cada grupo disciplinario, basado en las solicitudes de subsidios de los años precedentes. Por el contrario, desde 1972, las partidas para subsidios incorporaron la categoría “programas de desarrollo” (modalidad 2), sin especificar disciplina o finalidad. Así, si se toma en consideración la distribución de los montos para subsidios entre ambas modalidades (gráfico B), se observa que los “programas de desarrollo” (o modalidad 2) fueron incrementando su participación dentro del rubro “subsidios”,

en detrimento de la modalidad 1: en 1978, menos del 10% de los fondos se destinó a la modalidad 1, mientras que el resto se destinó a “programas de desarrollo”, sin especificar el campo o disciplina.

Gráfico B: Evolución de la modalidad de financiamiento⁹⁰



Fuente: Elaboración propia con base en Conicet: *Informaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (1972-1978)*.

Gottfredi ha señalado que los subsidios otorgados a estos “programas de desarrollo” estaban destinados al financiamiento de institutos del Conicet, o bien, a programas de instituciones que luego pasarían a incorporarse al Conicet.⁹¹ Refiriéndose a esta cuestión, Caldelari *et al.* han sostenido que, durante la última dictadura, se inauguró en el Conicet “un nuevo modelo de institucionalización de los equipos científicos y de organización del trabajo”: “los subsidios dejaron de ser exclusivamente (...) de carácter individual, para ser otorgados como presupuestos para el mantenimiento global de institutos”.⁹² Es decir, los programas e institutos comenzaron a ser financiados sobre la base de partidas globales no competitivas que, por la tanto, se renovaban periódicamente de un modo *cuasi* automático. En 1983, comparando el “sistema de institutos” con el “sistema de subsidios”, Leloir y Santaló subrayaban las ventajas de los subsidios, debido a su mayor “sensibilidad” a la evaluación y su flexibilidad en escenarios inflacionarios, a pesar de que el “sistema de institutos” redundaba en una mayor estabilidad.⁹³ Con menos eufemismos, Osvaldo Reig afirmaba que “Los institutos recibieron un apoyo económico muy importante con

⁹⁰ Los datos consignados en uno de los boletines de 1974, otro de 1976 y otro 1977, no se incorporaron al presente cuadro, debido a la imposibilidad de acceder a dichos documentos.

⁹¹ Entrevista a J. C. Gottfredi, realizada por la autora, marzo de 2013 (inédita).

⁹² Caldelari, M. *et al.*: “Instituciones de promoción y gobierno de las actividades de investigación”, en Oteiza, E. (dir.), *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 168-193.

⁹³ Quid: “El Conicet y la investigación. Los científicos destacan la trascendencia del apoyo recibido”, vol. II, N.º 17, 1983, pp. 353-359.

escaso o nulo control de producción y rendimiento para programas de investigación escuetamente esbozados”.⁹⁴

Esta modalidad de financiamiento conllevó, a su vez, una transformación en el mecanismo de evaluación e incorporación de personal, puesto que se delegó en los directores de instituto la potestad de proponer la designación o promoción de investigadores, personal de apoyo y becarios, recortando el papel de las Comisiones Asesoras disciplinarias.⁹⁵ Según un documento publicado durante el retorno de la democracia, el financiamiento de los institutos a través de *block grants* dio lugar a prácticas arbitrarias o discrecionales: “la mayoría de los directores ejercía un poder casi total sobre el resto del plantel de investigadores, becarios y personal de apoyo a la investigación: al ser ellos quienes distribuían los fondos para personal, el equipamiento y la infraestructura según su criterio, numerosos fueron los casos en que simpatías o antipatías personales significaron privilegios o marginaciones”.⁹⁶ Paralelamente al debilitamiento de las Comisiones Asesoras por disciplina, la proliferación de institutos y su centralidad como unidades de financiamiento determinó la creación, en 1979, de una Comisión Asesora de Institutos, que en 1981 se diversificó en diversas Comisiones Asesoras de Supervisión y Evaluación Científica de Centros e Institutos (CASEC). Entre las funciones atribuidas a este órgano se destacaban: “programación de las investigaciones, equipamiento, formación de personal, ingreso, promoción y egreso de su personal, evaluación institucional y de la actuación de sus directores”, asesoramiento en la creación de nuevos institutos, o la expansión fusión o supresión de los ya existentes.⁹⁷ Constituidas progresivamente sobre la base de criterios disciplinarios, la cantidad de Comisiones creció hasta alcanzar un total de dieciséis en 1983. En 1985, Reig denunciaba que dichas Comisiones estaban integradas por los propios directores de los institutos, lo que favorecía el desarrollo de estrategias de apoyo mutuo:

El mantenimiento y la estabilidad del sistema estaba también garantizado por peculiares procedimientos y estructuras de protección paralelas. Los institutos,

⁹⁴ Reig, O.: “Autoridad y autoritarismos en la ciencia argentina”, *Plural*, año I, N.º 1, 1985, <<http://www.escenariosalternativos.org/default.asp?seccion=revistas1&subseccion=revistas1¬a=1597>>, consultado el 7 de abril de 2012.

⁹⁵ Caldelari *et al*, op. cit.

⁹⁶ Conicet: *Aportes para una memoria*, Buenos Aires, Eudeba, 1989, p. 3. La apertura de cierto margen para comportamientos arbitrarios y poco transparentes también dio lugar a casos de manejo espurio de subsidios de investigación a través de una trama institucional constituida por fundaciones privadas e institutos del Conicet, denunciada luego del restablecimiento del régimen democrático en los siguientes términos: “A través de asociaciones y fundaciones constituidas generalmente durante el régimen militar e integradas, por lo demás, casi siempre, por funcionarios del Conicet o personas allegadas a ellos, se tramitaron y concedieron cuantiosos subsidios por parte del organismo, los que fueron otorgados a veces en forma directa a dichas fundaciones y asociaciones, y otras veces a personas o institutos a cargo de programas de investigación, pero que cedían a aquellas entidades la administración de los recursos. Cuando ocurrió esto último, las fundaciones y asociaciones efectuaban colocaciones financieras con los fondos, hasta el momento de su utilización efectiva, y se apropiaban de las rentas. Mediante los subsidios directos y la capitalización de las referidas rentas, las fundaciones y asociaciones lograron un enorme incremento patrimonial, fundamentalmente en bienes inmuebles”. Véase Conicet: *Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el Conicet. Período 76-83*, Buenos Aires, Eudeba, 1989.

⁹⁷ Conicet, 1983, op. cit.

programas y centros y sus directores y miembros sólo eran evaluados por otros directores de institutos que recibían similares privilegios y que constituían comisiones ad hoc, dentro del Conicet, las CASEC. Este procedimiento favoreció una modalidad de apoyo mutuo indiscriminado que corrompió la estrictez requerida por un sistema de evaluación académica.⁹⁸

De ese modo, las diversas fuentes evidencian un cambio en los mecanismos de financiamiento y evaluación, al tiempo que cuestionan la transparencia de dichos mecanismos. En la sección siguiente nos centraremos en la indagación de los criterios que guiaron la expansión institucional del Conicet.

2.2. ¿Expansión liberal o programática? Regionalización y agendas de investigación

Según algunos testimonios posteriores a la última dictadura militar, la falta de criterios claros para incorporar nuevos institutos dio lugar a una notable heterogeneidad en la calidad, la masa crítica de recursos y la pertinencia/relevancia temática entre los diversos institutos:

La temática de estos centros no tiene consistencia en la jerarquía e importancia de los temas de investigación: desde el estudio global de las zonas áridas hasta la fisiología del sueño en los peludos y comadreas. Tampoco se evitó la superposición: se crearon tres institutos limnológicos en la cuenca del Río de la Plata-Paraná: uno en Ensenada, otro en Santa Fe y un tercero en Corrientes; las relaciones entre ellos fueron prácticamente nulas. Tampoco hubo criterios de interdisciplinariedad o masa crítica: un instituto giraba alrededor de un investigador, o podía albergar varias decenas de investigadores independientes. Ni tuvieron lugar razones de significación o nivel académicos: se crearon institutos de excelencia verdadera, liderados por investigadores de idoneidad indiscutida, y se fundaron otros, ya sea institutos, centros o programas, para dar albergue a submediocres sin antecedentes suficientes ni respetabilidad académica alguna.⁹⁹

Lo que el testimonio de Reig pone de relieve es, pues, un panorama en el que, por un lado, se diluyen las prioridades de investigación y, por otro, los mecanismos de gestión autoritarios o discrecionales no necesariamente implicaron un descenso

⁹⁸ Reig, op. cit.

⁹⁹ Ibid.

generalizado de la calidad académica. En relación con esta última cuestión, un trabajo reciente ha mostrado que muchos de los institutos creados antes de 1976 y dirigidos por investigadores de prestigio internacional continuaron integrando el organigrama del Conicet, al tiempo que se crearon nuevos institutos dirigidos por investigadores con relativo capital académico y otros liderados por sujetos marginales en términos académicos.¹⁰⁰ Por otra parte, según documentos oficiales elaborados durante la última dictadura (diagnósticos, planes, documentos programáticos), el incremento de recursos estuvo acompañado por mejoras organizacionales, tendientes a resolver tres tipos de problemas señalados en el diagnóstico realizado por la Seconacyt en 1969: el de la atomización de investigadores y proyectos de investigación, el de la concentración de recursos en investigación básica y el de la centralización geográfica de recursos en el área metropolitana.

En primer lugar, la autoevaluación que realizó el Conicet en 1981 recogía esta preocupación y enfatizaba que, entre los períodos 1972-1976 y 1977-1981, había mejorado la relación cuantitativa investigadores/personal de apoyo e investigadores/becarios en las magnitudes consignadas en el cuadro 3.¹⁰¹ Según el informe, la política de fortalecimiento de grupos de investigación había permitido importantes cambios en la configuración institucional: un 57% de los institutos albergaban entre 11 y 40 personas, un 19% entre 41 y 70, un 6% más de 70 y un 17,5% estaba integrado por 10 o menos personas.¹⁰²

Cuadro 3: Personal de apoyo y becarios internos en relación con el total de investigadores.

	1972-1976	1977-1981
P. Apoyo/Investigadores	0,612	1,158
Becarios int./Investigadores	0,406	0,762

Fuente: Conicet, 1983, op. cit.

En segundo lugar, desde 1967 se produjo un crecimiento de la participación relativa de recursos humanos en el área de ciencias tecnológicas, que fue paralelo a la disminución de la participación de las ciencias médicas, percibidas desde fines de los 60 como privilegiadas y sobredimensionadas (ver cuadros 4, 5 y 6). Coincidiendo con esta perspectiva, Casalet ha señalado que casi un cuarto del personal científico radicado en institutos de dependencia múltiple de todo el país (entre los que predominan los institutos del Conicet) se ubicaba en el campo de la tecnología industrial.¹⁰³

¹⁰⁰ Bekerman, 2011, op. cit.

¹⁰¹ De hecho, parte de la estrategia de fortalecimiento institucional fue la apertura, durante la primera mitad de la década de 1970, de cupos de becas para institutos vinculados al Consejo.

¹⁰² Conicet, 1983, op. cit.

¹⁰³ Casalet, M.: "Recursos humanos de investigación en el complejo científico y tecnológico: evolución del empleo y políticas de recursos humanos del Conicet", en Oteiza, E. (ed.), *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 235-258.

Cuadro 4: Investigadores y personal de apoyo. Evolución de la participación relativa por disciplina y por período (1961-1981)¹⁰⁴

Disciplinas/ períodos 1961-1966		Participación relativa			
		1967-1971****	1971-1976	1977-1981	
Cs. Naturales*	Investig.	25,4%	24,1%	27,0%	30,5%
	P. Apoyo		42,4%	41,3%	37,4%
Cs. Médicas	Investig.	33,3%	32,2%	25,2%	19,4%
	P. Apoyo		27,7%	22,1%	16,3%
Cs. Tecnológicas	Investig.	3,1%	4,3%	6,6%	10,5%
	P. Apoyo		5,9%	14,4%	18,2%
Cs. Humanas**	Investig.	8,2%	8,6%	13,8%	15,2%
	P. Apoyo		3,5%	9,7%	12,2%
Cs. Exactas***	Investig.	30,0%	30,8%	27,4%	24,4%
	P. Apoyo		14,1%	8,4%	5,4%
Cs. Químicas	Investig.				
	P. Apoyo		7,1%	4,0%	10,4%

Fuentes: Elaboración propia con base en Conicet, 1959, op. cit; Conicet, 1960, op. cit; Conicet, 1963, op. cit; Conicet, 1964a, op. cit; Conicet, 1964b, op. cit; Conicet, 1965, op. cit; Conicet, 1967a, op. cit; Conicet, 1967b, op. cit; Conicet, 1983, op. cit.

Cuadro 5: Becas internas. Evolución de la participación relativa por disciplina y por período (1958-1981)¹⁰⁵

Disciplinas/ períodos	1958-1966	1972-1976	1977-1981
Cs. Naturales*	14,90%	22,40%	22,90%
Cs. Médicas	34,90%	20,40%	19,30%
Cs. Tecnológicas	10,10%	12,50%	16%
Cs. Humanas**	11,80%	21,40%	19,80%
Cs. Exactas***	5,30%	9,90%	8%
Cs. Químicas	23%	13,50%	14,40%

Fuentes: Elaboración propia con base en Conicet, 1959, op. cit; Conicet, 1960, op. cit; Conicet, 1963, op. cit; Conicet, 1964a, op. cit; Conicet, 1964b, op. cit; Conicet, 1965, op. cit; Conicet, 1967a, op. cit; Conicet, 1967b, op. cit; Conicet, 1983, op. cit.

¹⁰⁴ * Para el período 1958-1966 se incluyen en este grupo los recursos humanos clasificados entonces en los grupos "Cs. Biológicas" y "Cs. de la Tierra".

** Para el período 1958-1966 se incluyen en ese grupo los recursos humanos clasificados entonces en los grupos "Arqueología, Antropología e Historia", "Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas" y "Filosofía, Psicología, Filología y Educación".

*** Para el período 1958-1966 se incluyen en ese grupo los recursos humanos clasificados entonces en los grupos "Matemática, Física y Astronomía" y "Ciencias Químicas".

**** Dado que la carrera del personal de apoyo se creó en 1965, la cantidad de integrantes acumulada hasta 1966 se agrupó con los totales y porcentajes del período 1967-1971.

¹⁰⁵ Se aplican a este cuadro las mismas aclaraciones referidas al período 1958-1966 consignadas en el cuadro anterior. El período 1967-1971 ha sido excluido del cuadro, puesto que carecemos de datos.

Cuadro 6: Becas externas. Evolución de la participación relativa por disciplina y por período (1958-1981)¹⁰⁶

Disciplinas/ períodos	1958-1966	1972-1976	1977-1981
Cs. Naturales*	13,70%	10,50%	28,50%
Cs. Médicas	23%	11%	11,5%
Cs. Tecnológicas	13,80%	17,70%	19,30%
Cs. Humanas**	19,80%	11%	11,70%
Cs. Exactas***	17%	32%	17,30%
Cs. Químicas	12,70%	17,70%	11,70%

Fuentes: Elaboración propia con base en Conicet, 1959, op. cit; Conicet, 1960, op. cit; Conicet, 1963, op. cit; Conicet, 1964a, op. cit; Conicet, 1964b, op. cit; Conicet, 1965, op. cit; Conicet, 1967a, op. cit; Conicet, 1967b, op. cit; Conicet, 1983, op. cit.

En tercer lugar, el porcentaje de institutos, programas y servicios del Conicet radicados en el interior del país ascendió del 21% en 1975 al 30% en 1981.¹⁰⁷ Esta relativa descentralización de la investigación respondió a una clara política de fomento del desarrollo científico-tecnológico regional, que comenzó a ser tematizada tanto en el propio Conicet como en el gobierno a fines de la década de 1960.¹⁰⁸ Sin lugar a dudas, la expresión más clara de esta preocupación fue la creación de centros regionales. Entre 1971 y 1972, el Consejo firmó una serie de cartas de intención para la creación de centros regionales de investigación con las Universidades Nacionales del Sur (1971), del Nordeste (1971), de Cuyo (1972), del Litoral (1972), de Tucumán (1972), y con los gobiernos de las provincias de Corrientes, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.¹⁰⁹

Según Orlando Villamayor, presidente del Conicet luego del fallecimiento de Houssay, los centros regionales cumplirían con las siguientes funciones: a) realización de investigación básica y aplicada a los recursos naturales y problemas de la región en que se encontraba inserto; b) vinculación con las universidades de la región de forma tal de no sustraerles personal científico y posibilitar la colaboración entre el personal de las universidades y otras dependencias del centro; c) establecimiento de infraestructura y servicios (grandes aparatos, centros de cómputo y de información, bioterio, talleres electrónicos, de vidrio y generales, etc.) que, por la magnitud de la inversión o del tiempo de utilización, no pudieran ser adquiridos por los institutos en forma individual; d) incorporación de institutos, laboratorios, plantas piloto, etc., pertenecientes a distintas jurisdicciones públicas (nacionales, provinciales,

¹⁰⁶ Ídem.

¹⁰⁷ Conicet, 1983, op. cit.

¹⁰⁸ En 1969 el directorio del Conicet mantuvo una reunión con las comisiones asesoras regionales, en la que se planteó la necesidad de idear instrumentos de promoción que favorecieran la radicación de investigadores e institutos en el interior del país. En 1977 se establecerían políticas de estímulo a la radicación de investigadores y becarios fuera del área metropolitana y pampeana, que implicaban el pago de un 30% adicional en sueldos o estipendios (36% en el caso de zona alejada, inhóspita o desértica). Al respecto véanse Conicet: Acta de la 257.ª reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 12 de diciembre de 1969; Conicet, 1983, op. cit.

¹⁰⁹ Conicet: "Centros Regionales", *Informaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas*, N.º 94, 1973, pp. 22-24.

municipales) o privadas; e) interacción entre los distintos institutos o laboratorios para promover la realización de programas interdisciplinarios.¹¹⁰

En 1977, el Conicet creó una oficina especial para gestionar un préstamo del BID destinado al fortalecimiento regional, que obtuvo finalmente en mayo de 1979. El monto total del préstamo ascendía a USD 42 millones (a los que deben sumarse U\$ 85 millones aportados por el Tesoro Nacional) y estaba destinado a financiar el Programa de Desarrollo de Centros Regionales ubicados en Mendoza (CRICYT), Santa Fe (CERIDE), Bahía Blanca (CRIBABB) y Puerto Madryn (CENPAT).¹¹¹ Según el primer informe realizado por el Programa BID-Conicet, la organización de estos centros, es decir, la selección de sus campos de investigación prioritarios, se basó en distintos documentos de planificación económica y científico-tecnológica, tanto sectorial como regional, elaborados en los diez años previos. Entre los criterios de selección se destacaban: a) la madurez o la masa crítica de recursos existente en ciertos campos; b) las prioridades/necesidades regionales; c) la presencia de una demanda social, económica o política, identificada a través de las solicitudes presentadas por empresas públicas o privadas y autoridades nacionales o provinciales a los institutos de investigación; d) la evaluación de criterios macroeconómicos como el impacto multisectorial o la generación de economías de escala, la reducción de importaciones, de pagos por tecnología y servicios técnicos en ciertos sectores. A partir de estos criterios se escogieron 24 líneas y 93 proyectos de investigación para 8 institutos distribuidos en los 4 centros regionales que abarcaba el Programa (cuadro 7). Adicionalmente, el Conicet debía presentar al BID informes anuales con los avances de cada proyecto y una evaluación ex-post al concluir el quinto año del último desembolso (Conicet, 1980). Los informes finales consignaban, pues, los resultados obtenidos en cada proyecto tanto en términos cualitativos como cuantitativos, desagregando la producción académica (publicaciones en revistas internacionales), la formación de recursos humanos, los desarrollos tecnológicos y la transferencia de conocimientos (patentes e informes técnicos para el sector productivo y otros).¹¹²

De ese modo, tanto los criterios de selección y evaluación de líneas de investigación, como las líneas escogidas señalan una continuidad con el modelo de PCyT configurado a fines de la década de 1960 y con algunos campos y sectores identificados como prioritarios. Una breve descripción de los casos del CRIBABB y el CERIDE, que

¹¹⁰ Villamayor, O.: "Problemas de la investigación científica argentina", *Informaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas*, N.º 93, 1973, pp. 26-30 y 39-42.

¹¹¹ Conicet: "Programa de Desarrollo de Centros Regionales", BID-Conicet, Buenos Aires, 1980. Aunque los institutos insertos en estos centros representaban un pequeño porcentaje del total de institutos del Conicet, recibieron un alto porcentaje de los recursos del organismo destinados a personal, equipamiento, becas y obras públicas. En 1985, se estimaba que la inversión total en el Programa, incluyendo el aporte del BID y de la contraparte local, había sido de U\$ 111.655.464, destinándose un 33,3% de esa suma a gastos indirectos (sobre todo construcciones y gastos financieros, pero también ingeniería y administración, gastos de funcionamiento de la oficina ejecutora y obras complementarias) y el otro 66,7% a gastos directos (25% a equipos, 21% a aumento de personal, 12% a gastos de funcionamiento, 13% a becas y 1,3% a consultores). Además de los centros contemplados en el Programa BID-Conicet, también se crearon los de Ushuaia (CADIC), Rosario (CERIDER) y el Nordeste (CERNEA). Véase Conicet: *Programa BID-Conicet. Informe general del año 1985*, s/f, <<http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=AR0121#doc>>, consultado el 10 de marzo de 2014.

¹¹² Véase, por ejemplo, Conicet, s/f, op. cit.

fueron los centros regionales que más fondos recibieron en casi todos los rubros de financiamiento, ofrece algunos indicios en ese sentido (ver cuadro 16)¹¹³: a) ambos incluyen líneas de investigación vinculadas al programa nacional de tecnología de alimentos y de petroquímica; b) ambos contienen líneas de investigación para las cuales, a principios de la década de 1970, se elaboraron planes (oceanografía en el CRIBABB) o instrumentos de promoción industrial (petroquímica en ambos y celulosa y papel en el CERIDE). Adicionalmente, en los otros dos centros regionales (CRICyT y CENPAT) predominaron las temáticas vinculadas a condiciones geográficas o ambientales propias de sus regiones. Lo que pone de relieve esta esquemática presentación de la agenda de investigación del Conicet enfocada a través de los centros regionales es que estos inclinaron la balanza desde el financiamiento de “disciplinas” hacia el financiamiento de “campos” multi e interdisciplinarios emergentes (como la oceanografía y la petroquímica), o bien, desde las “ciencias de laboratorio” hacia las plantas piloto y las “ciencias de terreno” (por ejemplo, las ciencias ambientales).

Cuadro 7: Programa de Desarrollo Regional BID-Conicet. Líneas de investigación por Instituto y por Centro Regional.

Centro Regional	Institutos	Líneas de investigación
Bahía Blanca (CRI-BABB)	Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)	Ciencias geológicas y geofísicas
		Química Marina
	Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB)	Bioquímica del Sistema Nervioso Central
		Implicancias bioquímicas en tecnologías de alimentos y medicina experimental
	Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI)	Tecnología de alimentos
Tecnología petroquímica		
Santa Fe (CERIDE)	Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC)	Tecnología química y petroquímica
		Celulosa y papel
		Energía y carboquímica
		Tecnología de alimentos
		Medioambiente
		Productos químicos a partir de recursos renovables
		Materiales y componentes electrónicos
		Control de procesos por computadora

¹¹³ Mientras que el primero absorbió un 28,7% de los recursos, el segundo concentró el 32,7%. Conicet, s/f, op. cit.

Mendoza (CRICyT)	Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA)	Ecología de recursos vegetales de Zonas Áridas
		Fauna de zonas áridas
		Ambiente humano y vivienda en zonas áridas
	Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA)	Inventario y evolución de cuerpos de hielo
		Meteorología, climatología y paleoclima
		Nivología, glaciología y geocriología
Laboratorio de Reproducción y Lactancia	Reproducción y lactancia	
Puerto Madryn (CEN-PAT)		Ecología de zonas áridas
		Biología marina
		Física ambiental

Fuente: Conicet, 1980, op. cit.

Conclusiones

En los años inmediatamente posteriores a la creación del Conacyt y la Seconacyt, se sucedieron planes de ciencia y tecnología al ritmo de los cambios de gobierno, en una dinámica donde Política y políticas se imbricaron en una tensión constante y ningún plan alcanzó la fase de implementación, al tiempo que la Secretaría perdía relevancia dentro de la jerarquía del aparato estatal. Por otra parte, la creación de organismos de política reorientó la misión del Conicet como “organismo promotor” hacia la de “organismo ejecutor”, a través de un proceso de progresiva incorporación de institutos propios sin criterios demasiado claros. La fase más represiva del régimen democrático vigente en 1973-1976 y la última dictadura militar terminarían de consolidar esa nueva misión: primero, aplicando medidas represivas y arbitrarias en las universidades y luego, también, transfiriendo sus recursos al Conicet.¹¹⁴

A pesar de la marcada inestabilidad política, muchos de los elementos del modelo encarnado en el Conacyt y la Seconacyt continuaron formando parte de la retórica sobre los objetivos institucionales hasta fines de la década de 1970. Su efectiva implementación solo fue posible en el marco de constreñimientos internacionales considerablemente más firmes: en 1979, el préstamo del BID al Conicet se concretó sobre la base de un acuerdo que regulaba tanto las modalidades y criterios de formulación y evaluación de las políticas, como la definición de una agenda de investigación. No obstante, podemos concluir que lo que se configuró en estos años fue un sistema dual: por un lado, el amplio abanico de institutos, gestionados por los respectivos directores con un alto grado de discrecionalidad en lo referido a la orientación temática y al manejo de los recursos humanos y financieros; por otro lado,

¹¹⁴ Bekerman, 2009, op. cit.

la orientación de los recursos humanos hacia las ciencias tecnológicas, los programas nacionales y los centros regionales del Proyecto BID-Conicet, articulados en torno al paradigma de planificación y selección de prioridades, aunque implementado en un marco en el que la planificación, como práctica gubernamental en términos más amplios, fue perdiendo relevancia. Es pues, a la luz de esta dualidad que cobra interés la tensión entre liberalismo y planificación señalada en la introducción, pues puede ser un interesante hilo conductor de futuras indagaciones sobre las políticas de ciencia y tecnología centradas en los actores que intervinieron sobre estos organismos.

Bibliografía y fuentes

ALBORNOZ, M. y GORDON, A.: “La política de ciencia y tecnología en Argentina desde la recuperación de la democracia (1983-2009)”, en ALBORNOZ, M. y SEBASTIÁN, J. (ed.), *Trayectorias de las políticas científicas y universitarias de Argentina y España*, Madrid, CSIC, 2011.

AMADEO, E.: “Los consejos nacionales de ciencia y tecnología en América Latina”, *Comercio Exterior*, vol. 28, N.º 12, 1978, pp. 1439-1447.

ARÁOZ, A.: *Aspectos cuantitativos de la ciencia argentina*, Washington, oea, Departamento de Asuntos Científicos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, 1974.

BASUALDO, A. et al.: “Ciencia Argentina. La sucesión de Houssay”, *Panorama*, año III, N.º 201, del 2 al 8 de marzo, 1971, pp. 22-31.

BEKERMAN, F.: “El campo científico argentino en los años de plomo: desplazamientos y reorientación de recursos”, *Sociohistórica*, N.º 26, 2009, pp. 151-166.

BEKERMAN, F.: “La expansión de las *research capacities* en tiempos de dictadura: la política de creación de institutos en el Conicet y su impacto en la estructura del sistema científico argentino (1974-1983)”, *Estudios*, N.º 25, 2011, pp. 121-139.

BEKERMAN, F. y ALGAÑARAZ V.: *El préstamo BID-Conicet: un caso de dependencia financiera en la política científica de la dictadura militar (1976-1983)*, Ponencia presentada en el II Workshop sobre Dependencia Académica, Mendoza, del 3 al 6 de noviembre de 2010.

CALDELARI, M. et al.: Instituciones de promoción y gobierno de las actividades de investigación, en OTEIZA, E., *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 87-125.

CÁMPORA, H.J.: “Texto del mensaje del Presidente de la Nación, Doctor Héctor J. Cámpora, ante ambas Cámaras, en el Honorable Congreso de la Nación dedicado a ‘Ciencia y Tecnología’ al asumir el mando el 25 de mayo de 1973”, *Informaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas*, N.º 95, 1973, pp. 1-11.

CANELO, P.: “La política contra la economía: elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1981)”, en PUCCIARELLI, A. (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004, pp. 219-312.

CASALET, M.: “Recursos humanos de investigación en el complejo científico y tecnológico: evolución del empleo y políticas de recursos humanos del Conicet”, en OTEIZA, E. (ed.), *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 235-258.

CASTEX, M. N.: entrevista personal realizada por Pablo Kreimer, invierno de 1988 (inédita).

CASTEX, M. N.: *El Escorial de Onganía*, Buenos Aires, Ediciones Hespérides, 1981.

CIENCIA NUEVA: “Barranca abajo”, año I, N.º 5, 1970, p. 3.

CIENCIA NUEVA: “CONACYT, ‘Una montaña de papel’”, año I, N.º 5, 1970, pp. 3-4.

CIENCIA NUEVA: “Planes que no son tales”, año II, N.º 10, 1971, pp. 3-4.

CIENCIA NUEVA: “Higos y manzanas”, año III, N.º 17, 1972, p. 4.

CONICET: *Memoria de actividades, febrero de 1958-agosto de 1959*, Buenos Aires, 1959.

CONICET: *Memoria. Actividades del año 1960. Reseña general de la labor realizada desde febrero de 1958*, Buenos Aires, 1960.

CONICET: *Memoria de actividades, 1º de febrero de 1961-31 de enero de 1962*, Buenos Aires, 1963.

CONICET: *Memoria de actividades, 1º de febrero de 1962-31 de enero de 1963*, Buenos Aires, 1964.

CONICET: *Memoria de actividades, 31 de enero de 1963-1º de febrero de 1964*, Buenos Aires, 1964.

CONICET: *Memoria de actividades, 1º de febrero de 1964-31 de enero de 1965*, Buenos Aires, 1965.

CONICET: *Memoria de actividades, 1º de febrero de 1965-31 de enero de 1966*, Buenos Aires, 1967.

CONICET: *Informe de sus actividades. Año 1966*, Buenos Aires, 1967.

CONICET: Acta de la 210.º reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 13 de octubre de 1967.

CONICET: Acta de la 213.º reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 15 de diciembre de 1967.

CONICET: Acta de la 216.º reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 23 de febrero de 1968.

CONICET: Acta de la 217.º reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 8 de marzo de 1968.

CONICET: Acta de la 243.º reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 25 de abril de 1969.

CONICET: Acta de la 252.º reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 26 de septiembre de 1969.

CONICET: Acta de la 257.º reunión de directorio, Dirección de Control Legal y Técnico, 12 de diciembre de 1969.

CONICET: “Centros regionales”, *Informaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas*, N.º 94, 1973, pp. 22-24.

CONICET: *Informaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas*, 1972-1978.

CONICET: *Programa de desarrollo de Centros Regionales*, BID-Conicet, Buenos Aires, 1980.

CONICET: *Conicet. Cumplimiento de sus objetivos específicos 1971-1981*, Buenos Aires, 1983.

CONICET: *Aportes para una memoria*, Buenos Aires, Eudeba, 1989.

CONICET: *Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el Conicet. Período 76-83*, Buenos Aires, Eudeba, 1989.

CONICET: *Programa BID-Conicet. Informe general del año 1985*, s/a, <<http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=AR0121#doc>>, consultado el 10 de marzo de 2014.

DAGNINO, R. y THOMAS, H.: “La política científica y tecnológica en América Latina: nuevos escenarios y el papel de la comunidad de investigación”, *Redes*, vol. 6, N.º 13, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 1999, pp. 49-74.

ELZINGA, A. y JAMISON, A.: “El cambio de las agendas políticas en ciencia y tecnología”, en SANZ MENÉNDEZ, L. y SANTESMASES, M. J. (comps.), *Ciencia y Estado, Zona Abierta*, N.ºs 75-76, 1996, pp. 91-132.

ESTO ES TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN, “Explica la SUBCyT las causas de su escaso rendimiento”, *Esto es Tecnología y Modernización*, año 1, N.º 5, pp. 25-29.

FELD, A.: “Las primeras reflexiones sobre la ciencia y la tecnología en la Argentina: 1968-1973”, *Redes*, vol. 17, N.º 32, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2011, pp. 185-221.

FELD, A.: *Ciencia y política(s) en la Argentina: 1943-1983*. Editorial de la UNQ, Colección CTS, Bernal, 2015.

FELD, A. y KREIMER, P.: “La science en débat en Amérique Latine. Perspectives ‘radicales’ au début des années 1970 en Argentine”, *Revue d’Anthropologie des Connaissances*, vol. 5, N.º 2, pp. 29-58.

FINNEMORE, M.: “International Organizations as Teachers of Norms: The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy”, *International Organization*, vol. 47, N.º 4, 1993, pp. 565-597.

FRANCO, M.: *Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

FRYDMAN, B.: entrevista realizada por María Caldelari en 1987 (inédita).

GARCÍA, R.: entrevista realizada por Diego Hurtado el 18 de octubre de 2004 (inédita).

GÁRGANO, C.: “La reorganización de las agendas de investigación y extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)”, *Realidad Económica*, N.º 258, 2011, pp. 120-149.

GIORGI, G. I.: “Redes católicas y Estado en la ‘revolución argentina’”, *Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião*, año 12, N.º 12, 2010, pp. 53-78.

GOBIERNO PERONISTA: “Universidad. Elementos para una discusión del problema universitario”, Buenos Aires, Editorial del Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista, 1973.

- GOTTIFREDI, J. C.: entrevista realizada en marzo de 2013.
- HURTADO, D.: "Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)", *Revista CTS*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64.
- HURTADO, D.: *La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso 1930-2000*, Buenos Aires, Edhasa, 2010.
- IVANISSEVICH, O.: "Primo vivere, dopo filosofare", *Cuestionario*, año II, N.º 18, 1974, p. 14.
- KAUFFMANN, C.: *Dictadura y Educación (Tomo 1). Universidad y grupos académicos argentinos (1976-1983)*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2001.
- KREIMER, P.: "Institucionalización de la ciencia argentina: dimensiones internacionales y relaciones centro-periferia", en LUGONES, G. y FLORES, J. (ed.), *Intérpretes e interpretaciones en la Argentina del Bicentenario*, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2010, pp. 121-137.
- NIEVAS, F.: "Cámpora: primavera-otoño. Las tomas", en PUCCIARELLI, A. (ed.), *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999, pp. 292-353.
- OLIVERA, J. H. G.: "Responde Olivera", *Cuestionario*, año II, N.º 18, 1974, p. 14.
- OTEIZA, E.: "El complejo científico y tecnológico argentino en la segunda mitad del siglo xx: la transferencia de modelos institucionales", en OTEIZA, E. (dir.), *La política de investigación científica y tecnológica en la Argentina. Historia y perspectivas*, Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 115-125.
- PÉREZ LINDO, A.: *Universidad, política y sociedad*, Buenos Aires, Eudeba, 1985.
- PUCCIARELLI, A., "La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura militar encubre una vieja práctica corporativa", en PUCCIARELLI, A. (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, pp. 99-171.
- QUID, "El Conicet y la investigación. Los científicos destacan la trascendencia del apoyo recibido", vol. II, N.º 17, 1983, pp. 353-359.
- REIG, O.: "Autoridad y autoritarismos en la ciencia argentina", *Plural*, año I, N.º 1, 1985 <<http://www.escenariosalternativos.org/default.asp?seccion=revistas1&subseccion=revistas1¬a=1597>>, consultado el 7 de Abril de 2012.
- RODRÍGUEZ, L.: "Los nacionalistas católicos de *Cabildo* y la educación durante la última dictadura en Argentina", *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 68, N.º 1, 2011, pp. 253-277.
- RODRÍGUEZ, L. y SOPRANO, G.: "La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983)", *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, 2009, <<http://nuevomundo.revues.org/56023>>.
- ROUQUIÉ, A.: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, t. II, Buenos Aires, Hyspamerica, 1986.
- RUIVO, B.: "'Phases' or 'paradigms' of science policy?", *Science and Public Policy*, vol. 21, N.º 3, 1994, pp. 157-164.
- SANZ MENÉNDEZ, L.: *Estado, ciencia y tecnología en España: 1939-1097*, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
- SECONACYT: "Potencial científico y técnico nacional: institutos de investigación de los sectores público, universitario y privado de bien público", Resultados de la encuesta llevada a cabo durante 1969, Buenos Aires, 1971.
- SECONACYT: *Plan nacional de ciencia y técnica 1971-1975: objetivos, metas, líneas de acción*, Buenos Aires, 1971.
- SECYT: *Relevamiento de recursos y actividades en ciencia y tecnología 1988. Resultados preliminares*, Buenos Aires, SECYT, 1989.
- SECYT: *Lineamientos de acción inmediata 1975/76 en ciencia y tecnología*, Buenos Aires, SECYT, s/a.
- SUBCYT: *Política nacional en ciencia y técnica: plan operativo 1973*, Buenos Aires, La Secretaría, 1972.
- SUBCYT: *Informe de situación*, Buenos Aires, 1982.
- SUBCYT: *Relevamiento de recursos y actividades en ciencia y tecnología 1982. Informe de los resultados obtenidos*, Buenos Aires, SUBCYT, 1983.
- TAQUINI, A. C.: entrevista inédita de autor anónimo, Archivo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales, 1987.
- UNESCO: *Política científica y organización de la investigación científica en la Argentina*, Montevideo, Oficina de Ciencias de la UNESCO para América Latina, 1970.
- VELHO, L.: "La ciencia y los paradigmas de política científica, tecnológica y de innovación", en ARELLANO HERNÁNDEZ A. y KREIMER P. (dirs.), *Estudio social de la ciencia y la tecnología desde América Latina*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2011.
- VILLAMAYOR, O.: "Problemas de la investigación científica argentina", *Informaciones del Consejo Nacional*

de Investigaciones Científicas y Técnicas, N.º 93, 1973, pp. 26-30 y 39-42.

WHITLEY, R.: "Reconfiguring the Public Sciences: The Impact of Governance Changes on Authority and Innovation in Public Science Systems", en WHITLEY, R.; GLAESER, J. y ENGWALL L. (ed.), *Reconfiguring Knowledge Production: Changing Authority Relationships in the Sciences and their Consequences for Intellectual Innovation*, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 3-47.

Una aproximación a las relaciones entre ciencia, tecnología y política en la CNEA antes de la dictadura: apogeo y ocaso de las experiencias de participación política del personal

Ana Fernández Larcher
(CONICET/UBA)

Introducción

Este artículo plantea una aproximación etnográfica a las relaciones entre ciencia, tecnología y política en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a partir del análisis de las experiencias de politización de un grupo de profesionales y técnicos del organismo durante el tercer gobierno peronista (1973-1976). El recorte temporal y el particular énfasis en los hechos ocurridos en CNEA entre mayo y diciembre de 1973, sitúan la mirada en el período constitucional previo al golpe de Estado de 1976, no solo para examinar la singularidad de las acciones que –en aquellos años– protagonizó un sector del personal, sino para indagar y comprender algunos de los sucesos menos estudiados en la historia de la Comisión, como los que tuvieron lugar bajo la última dictadura (1976-1983).¹

Dos objetivos guiarán el trabajo: por un lado, analizar las concepciones nativas sobre ciertos acontecimientos del pasado que ponen en entredicho el relativo «aislamiento» atribuido a la CNEA en relación con los vaivenes de la política nacional de la segunda mitad del siglo XX.² Por el otro, explorar las formas de «involucramiento político»³ de

¹ En el último decenio, el interés por abordar las características y los efectos de la intervención militar en la CNEA bajo el terrorismo de Estado, se tradujo en la publicación de un corpus de trabajos académicos de autores pertenecientes a disciplinas diversas, entre los que cabe mencionar: Hurtado, D.: “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, Vol. 5, N.º13, 2009, pp. 27-64; Hurtado, D.: *El sueño de la Argentina atómica. Política, tecnología nuclear y desarrollo nacional (1945-2006)*, Buenos Aires, Edhasa, 2014, pp. 175-238; Spivak, A. y Gárgano, C.: “Memoria, historia reciente y estudios CTS: una revisión de las tensiones en torno a las trayectorias de CNEA e INTA durante la última dictadura argentina (1976-1983)”. En: Arellano, A.; Kreimer, P.; Velho, L. y Vessuri, H., (ed.), *Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la ciencia, la tecnología y el conocimiento*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014, p. 101-112; Spivak, A.: “Fondos públicos, proyectos tecnológicos y violencia estatal: tensión de memorias de dictadura en una institución tecnocientífica argentina”, *Revista Mana*, 2015, en prensa; Rodríguez, M.: “Avatares de la energía nuclear en Argentina. Análisis y contextualización del Plan Nuclear de 1979”, *H-industri@*, Año 8, N.º15, 2014.

² Como explica Vessuri, «la industria atómica quedó como uno de los pocos enclaves [del polo científico-tecnológico] relativamente aislados. Estuvo protegida de los vaivenes de las crisis políticas locales, de las fluctuaciones económicas y de las prácticas distributivas y clientelistas por la alianza de los científicos, académicos y militares». Vessuri, H.: “O inventamos o erramos”. *La ciencia como idea-fuerza en América Latina*. Buenos Aires, Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 2007, p. 197.

³ Para una aproximación al concepto de «involucramiento político», ver Quirós, J.: *El porqué de los que van*. Pe-

los trabajadores –a comienzos de los setenta– y sus condiciones de posibilidad en una institución caracterizada desde sus inicios por su «apoliticismo».⁴

El texto parte de la hipótesis de que existe una relación entre los hechos que se precipitaron en CNEA tras el ascenso de Héctor Cámpora a la presidencia (1973) y los episodios de violencia registrados contra un sector del personal a raíz de la intervención institucional decretada por el régimen de facto, en 1976.⁵ Desde esta perspectiva, el foco del capítulo estará puesto en abordar dichos acontecimientos como parte de un mismo proceso, atravesado por las experiencias y los recuerdos de sus diversos protagonistas.⁶

La primera sección plantea los interrogantes que orientan el trabajo y presenta algunas notas sobre la metodología utilizada. Los apartados 2 y 3 analizan una serie de fuentes producidas entre mayo y diciembre de 1973, con el objeto de reconstruir la peculiar situación que –en ese período– atravesó la CNEA y contrastarla con los relatos sobre su pretendido aislamiento del contexto político más amplio. Puestas en relación con las fuentes examinadas, las memorias de un conjunto de profesionales sobre aquel pasado permiten indagar –a la vez– de qué manera dichos sucesos afectaron la dinámica institucional y dieron lugar a experiencias de politización entre el personal. La cuarta sección explora algunas dimensiones de la intervención militar en la CNEA a la luz de los acontecimientos y las acciones protagonizadas por un grupo de trabajadores durante el tercer gobierno peronista. A modo de epílogo, se ofrece una reflexión sobre el papel transformador de la política en la Comisión y su capacidad de promover –en esos años– nuevas prácticas al interior del organismo.

Algunas notas sobre el campo y la perspectiva analítica adoptada

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue creada el 31 de mayo de 1950 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952), como parte de las iniciativas impulsadas por el gobierno en el ámbito de la ciencia y la técnica para incidir sobre los sectores estratégicos de la economía y fomentar la industrialización.⁷ A fin de avanzar en la construcción de capacidades autónomas y diversificar las fuentes de energía en el país, el decreto presidencial N° 10.936/50 designó a la CNEA como ente encargado de promover y coordinar las actividades de investigación y desarrollo (I+D), nuclear y asesorar al Estado argentino en el nuevo campo de conocimientos científico-tecnológicos.

ronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida). Buenos Aires, Antropofagia, 2011, p. 18.

⁴ Marzorati, Z.: “Plantear utopías. La formación de la comunidad científica: CNEA (1950-1955)”. *Cuadernos de Antropología Social*, N.º 18, 2003, p. 133. Sobre este punto, Marzorati recoge un sugestivo testimonio en su artículo “Plantear Utopías...”: «Cuando se crea la Comisión [de Energía Atómica], los físicos y matemáticos que fueron consultados pusieron como condición que no hubiera política (...) Como en su mayoría los científicos eran antiperonistas, fue necesario prescindir de la ideología de [quienes] se iniciaban en ese [campo] de la ciencia y ofrecer un ámbito apolítico en el que pudieran desarrollar sus investigaciones» (El subrayado es mío).

⁵ Decreto N°20/1976, publicado en el Boletín Oficial el 6 de abril de 1976. Disponible en: <http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle>.

⁶ Cabe señalar que en este trabajo no se abordarán en profundidad las cuestiones referidas a los cambios y continuidades en las agendas de investigación de CNEA durante última la dictadura, tema desarrollado en este volumen, en el capítulo de Ana Spivak L’Hoste.

⁷ Hurtado, D., 2014, op. cit., p. 42.

A diferencia de otras instituciones públicas de I+D como el INTA, el INTI y el CONICET –creadas en los años de la autodenominada «Revolución Libertadora» (1955-1958)– la historia de la CNEA se vinculó desde el comienzo a la de las Fuerzas Armadas y, en particular, a la Marina de Guerra, designada por el Poder Ejecutivo para presidir la entidad durante más de tres décadas (1952-1983). Como argumentan diversos autores,⁸ la persistencia de la Armada al frente del organismo mantuvo al campo nuclear parcialmente «protegido»⁹ de los avatares económico-políticos que periódicamente asolaban al país garantizando, a un tiempo, la «continuidad» y el desarrollo de proyectos de alto impacto científico a nivel nacional y latinoamericano.¹⁰ Dicha visión, arraigada en la cultura institucional y extendida en parte de la literatura sobre la CNEA, contrasta –sin embargo– con los relatos de un sector del personal sobre la trayectoria de la Comisión y el impacto que tuvieron en ella los conflictos y las oscilaciones de la política nacional hacia la segunda mitad del siglo XX, en especial, a comienzos de los años setenta, con el retorno del peronismo al poder.¹¹ En mayo de 1973, el ascenso de Héctor Cámpora a la presidencia inauguró un nuevo período constitucional seguido de una explosión de energía política ligada a grandes expectativas de transformación. Las discusiones sobre el rumbo que adoptaría dicho proceso involucraron a vastos sectores de la sociedad, entre los que cabe destacar al campo científico-tecnológico.

En su artículo “*Las primeras reflexiones sobre la ciencia y la tecnología en la Argentina: 1968-1973*”, Adriana Feld examina el modo en que a fines de los sesenta y principios de los setenta, «la ciencia y la tecnología fueron retomadas en la arena pública como un asunto estratégico».¹² Como subraya la autora, en aquellos años se puso en evidencia cierto «malestar» con la forma en que estaban organizadas las actividades científicas y tecnológicas y, en particular, una preocupación común por imaginar modos de intervención para modificar el papel que debían desempeñar dichas actividades en los procesos de desarrollo nacional y latinoamericano.¹³

La CNEA no estuvo al margen de las discusiones ni del clima de efervescencia política

⁸ Oszlak, O.: “Política y organización estatal de las actividades científico-técnicas en la Argentina: Crítica de modelos y prescripciones corrientes”, Doc. CEDES, *Serie Estudios Sociales*, N°2, 1976, p. 41; Marzorati, op. cit., p. 131; Harriague, S. et al.: “Una mirada a la CNEA de los primeros años, con vistas al futuro”, Buenos Aires, XXXIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN), 2006, p. 5; Vessuri, H., op. cit., 197. Con distintos matices, los autores citados aluden en sus textos a la estabilidad institucional que habría caracterizado a la CNEA desde sus inicios, hasta mediados de los años '80, dando coherencia y «continuidad» a sus objetivos científico-tecnológicos.

⁹ Utilizo las comillas («») para resaltar en el texto las expresiones o categorías que figuran en la bibliografía consultada sobre la CNEA, escrita tanto por autores externos como por aquellos vinculados profesionalmente a la institución. El uso de las *cursivas* o *italicas* hará referencia, por su parte, a las categorías nativas de los actores sobre los que trata el capítulo.

¹⁰ Agradezco los comentarios de Ana Spivak con relación a los usos nativos de los conceptos de *protección* y *continuidad*. Sobre este punto, ver Spivak, A.: “Un pueblito lejano de ingenieros y físicos: Primeras aproximaciones etnográficas al Instituto Balseiro”, Rosario, *Il Jornadas de la Cuenca del Plata*, 2002, pp. 13-15.

¹¹ Fischbarg, A. y Cosso, O.: s/t. Trabajo presentado en el marco del Seminario “Instituciones de Ciencia y Tecnología”. Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, Universidad de Buenos Aires, 2011.

¹² Feld, A.: “Las primeras reflexiones sobre la ciencia y la tecnología en la Argentina: 1968-1973”, *Revista Redes*, Vol. 17, N° 32, 2011, p. 185.

¹³ En el caso concreto de la Argentina, Feld examina la creación de «espacios institucionales para la producción y discusión de conocimiento acerca de la ciencia y la tecnología», e indica la diversidad de perspectivas teóricas, temáticas e ideológicas que guiaron en ellos los debates sobre la función y el sentido social de la práctica científica, su relación con la política y la ideología, el compromiso y la responsabilidad ética de los investigadores, y los límites y posibilidades del desarrollo tecnológico del país. Feld, A.: op. cit., p. 185-187.

señalado. A lo largo de 1973, un grupo de profesionales y técnicos promovió una serie de iniciativas orientadas a reestructurar los objetivos de la institución y sentar las bases de una nueva *política nuclear* en sintonía con los lineamientos del tercer gobierno peronista.¹⁴

Con una mirada que buscará articular las perspectivas histórica y etnográfica, este trabajo se propone indagar las concepciones nativas sobre dichos sucesos para explorar cómo el nuevo contexto afectó la dinámica institucional y dio lugar a experiencias de «politización» que quedaron truncadas por la intervención del organismo bajo la última dictadura. En tal sentido, las preguntas que guiarán el análisis son: ¿cómo se vivió en CNEA el período signado por el retorno del peronismo al gobierno? ¿Cuál fue su impacto en el modo tradicional de organización del personal? ¿En qué medida las acciones impulsadas por los trabajadores suscitaron cambios en la Comisión? Y ¿cómo se manifiestan en el presente sus recuerdos sobre aquel pasado?

El interés por abordar las experiencias políticas del personal de la CNEA y sus remembranzas sobre ciertos aspectos de la historia institucional, responde a tres razones fundamentales. En primer lugar, a la escasez de estudios referidos a la trayectoria de los organismos públicos de investigación y desarrollo y su interacción con otros ámbitos o esferas de la actividad social.¹⁵ En segundo lugar, a la visión generalizada –entre nativos y académicos– sobre la supuesta neutralidad o asepsia ideológica de las instituciones tecnocientíficas, concebidas como ambientes no politizados o espacios donde las dimensiones política y técnica se representan de manera escindida.¹⁶ Finalmente, al registro de relatos y experiencias disímiles sobre el período señalado, que expresan la «tensión de memorias»¹⁷ en la construcción del pasado en CNEA y ponen de relieve sentidos y valoraciones diversas sobre la pertenencia institucional, la función social de la ciencia y la tecnología y el compromiso de los trabajadores del sector con la sociedad.

El artículo presenta algunas reflexiones derivadas del análisis del material de campo reunido entre 2010 y 2015 en el marco de una investigación etnográfica en curso que

¹⁴ CNEA. «Mecanismos de participación del personal». Documento elaborado por la Mesa de Trabajo N° 7. Buenos Aires, CNEA. 30 de octubre de 1973, p. 3.

Para una aproximación a las concepciones del general Perón sobre las políticas de desarrollo científico-tecnológico en Argentina, ver Perón, J.D.: *Proyecto Nacional*. Buenos Aires, CS Ediciones, 2005, pp. 175-187.

¹⁵ En *La ciencia argentina*, Diego Hurtado refiere a la ausencia de una tradición reflexiva en el país orientada a producir conocimientos sobre las actividades del sector científico-tecnológico y advierte sobre los efectos nocivos de dicha carencia al plantearse «cómo es posible formular políticas para [aquel] sector si se desconocen las trayectorias de sus instituciones, [...] el impacto que tuvieron [en] sus desempeños las variadas formas de inestabilidad económica y política [de] la historia argentina del siglo XX, o la evolución de sus contactos con otras esferas de la actividad social». Hurtado, D.: *La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso: 1930-2000*. Buenos Aires, Edhasa, 2010, p. 11.

¹⁶ En su libro *Cogitamus*, Bruno Latour advierte sobre las visiones –académicas y de sentido común– que han tendido a caracterizar a las ciencias y las técnicas como disciplinas «demasiado autónomas» de la vida cotidiana y propone convertir a la «autonomía de las ciencias» en un objeto de estudio y «reemplazar la metáfora de la escisión necesaria entre ciencia y política por otra metáfora [...] mediante la cual podamos representar [y repensar sus] vínculos». Latour, B.: *Cogitamus. Seis cartas sobre las humanidades científicas*. España, Paidós. 2012, p. 31.

¹⁷ Spivak, A., 2015, op. cit., p. 4.

triangula los datos obtenidos en terreno,¹⁸ con la lectura de fuentes¹⁹ y bibliografía específica sobre la historia del organismo. Dadas las características del tema en estudio, el método empleado combina las técnicas de entrevista y observación participante con el «trabajo de archivo» que –en este caso– incluyó visitas a la Biblioteca Nacional y la revisión de documentos técnicos, políticos y administrativos elaborados por el personal de la CNEA.

En las páginas que siguen, el eje del capítulo estará puesto en recuperar los recuerdos y vivencias de los trabajadores sobre los hechos que tuvieron lugar entre 1973 y 1976 y las «tensiones interpretativas»²⁰ ligadas a los procesos de construcción de memoria(s) en la Comisión. En tal sentido, se tomará en cuenta el potencial heurístico o analítico de las «narrativas», consideradas como una herramienta para recapitular la experiencia pasada y explorar en las prácticas discursivas de los sujetos las formas de penetración del pasado en el presente.²¹

La «irrupción» de la política en CNEA: el retorno del peronismo y las tensiones derivadas de la politización del personal

El 25 de mayo de 1973, el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima puso fin a dieciocho años de proscripción del peronismo. Como explican diversos autores,²² la asunción a la presidencia de Héctor Cámpora estuvo precedida por un ciclo de movilización y protesta social contra la autodenominada «Revolución Argentina» (1966-1973), que forzó la decisión militar de abrir paso a una nueva etapa constitucional.²³ En la visión de Maristella Svampa, la «primavera camporista»²⁴ se caracterizó por la imagen de una sociedad movilizada que asoció el retorno de Perón con la posibilidad de introducir cambios de tipo estructural en el rumbo económico y sociopolítico del país.

La «efervescencia» política del período se expresó en una agitación social sin

¹⁸ Me refiero, concretamente, a una serie de entrevistas y diálogos informales mantenidos con un grupo de trabajadores activos y desvinculados de la Comisión, en su mayoría hombres entre los 60 y los 75 años. Los encuentros con ellos fueron realizados entre 2010 y 2015, en dos instancias diversas: la primera, en el marco de mis actividades como becaria del organismo, en el Grupo de Gestión del Conocimiento Nuclear (2009-2012); la segunda, como parte del trabajo de campo que realicé con mayor sistematicidad desde 2013, a raíz de la obtención de una beca doctoral del CONICET para estudiar las características y las consecuencias de la represión en la CNEA, bajo la última dictadura militar (1976-1983).

¹⁹ El corpus de fuentes analizadas incluye: artículos periodísticos del período mayo-junio de 1973; Actas de la Asociación de Profesionales de CNEA (APCNEA), y un conjunto de documentos elaborados por el personal en el marco de las iniciativas propuestas por el «Consejo Coordinador» (1973) para estudiar los objetivos y la reestructuración de la CNEA, en sintonía con las políticas impulsadas por el tercer gobierno peronista (1973-1976).

²⁰ Spivak, A. y Gárgano, C., op. cit., p. 6.

²¹ Visacovsky, S.: «Cuando las sociedades conciben el pasado como “memoria”: Un análisis sobre verdad histórica, justicia y prácticas sociales de narración a partir de un caso argentino». *Revista Antípoda*, N°4, 2007, p. 60. Disponible en: file:///C:/Users/Administrador/Downloads/-data-Revista_No_04-04_Miradas_1.pdf.

²² De Riz, L.: *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista*. Buenos Aires, Hyspamerica Ediciones, 1987; Nievas, F.: «Las tomas durante el gobierno de Cámpora» Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 2000; Romero, L. A.: «La primavera de los setenta», en: Tchach, C. (comp), *La política en consignas. Memorias de los setenta*. Rosario, Homo Sapiens, 2003; Svampa, M.: «El populismo imposible y sus actores», en: James, D., *Nueva Historia Argentina, 1955-1976*. Buenos Aires, Sudamericana, Tomo IX, 2003.

²³ Franco, M.: *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 39.

²⁴ Svampa, M., op. cit., p. 9.

precedentes que desbordó los canales previstos por la institucionalización y se manifestaron «el ciclo de tomas de hospitales, universidades, empresas y entidades públicas y privadas» en los meses de mayo y junio.²⁵ Como apunta Nievas, las ocupaciones no fueron «una práctica restringida al activismo. Personas que no participaban [en] política se lanzaron en aquellos días a las tomas de sus lugares de trabajo, de estudio e, incluso, de ámbitos relativamente ajenos a sus actividades».²⁶ La «primavera de los pueblos» se expandió por la sociedad. «La acción colectiva, organizada y altamente democrática [se tornó] bastante usual. Las asambleas [eran] tan cotidianas como masivas. Lo colectivo influía decisivamente sobre lo individual»²⁷ y, como pocas veces –advierte Romero– la primacía de la política fue postulada.²⁸

La «*fiebre ocupacionista*»²⁹ tuvo su correlato en varios centros y dependencias del polo tecnocientífico nacional, que no permanecieron ajenos al clima de movilización señalado. En efecto, entre el 6 y el 15 de junio de 1973, los principales diarios del país,³⁰ registraron las «tomas» en tres de sus organismos: el CONICET, la CNEA y el INTA. En cada uno de ellos, las acciones impulsadas por los gremios y el personal cobraron diferentes matices en función de los objetivos y reivindicaciones de sus trabajadores.³¹ No obstante, en los tres casos, es posible advertir un interés común entre los motivos que dieron lugar a las «ocupaciones»: el reemplazo o remoción de las autoridades institucionales, designadas en sus cargos en los años de proscripción del peronismo.

Dicho reclamo caracterizó lo que Nievas denomina «tomas anticontinuidistas» para describir las acciones realizadas en los entes públicos o estatales a fin de garantizar la «no-continuidad» de los funcionarios indeseados en sus puestos directivos. Según el autor, la medida consistía en «tomar» los espacios de trabajo y mantener la ocupación hasta tanto el gobierno ratificara a las autoridades elegidas por el personal de manera

²⁵ Franco, M., op. cit., p. 41. Con relación a este punto, Fabián Nievas señala que «en apenas doce días, del 4 al 15 de junio, se produjeron más de 500 tomas de distinto tipo en todo el país» Nievas, F., op. cit., p. 50.

²⁶ Nievas, F., op. cit., p. 76.

²⁷ Nievas, F., op. cit., p. 45.

²⁸ Romero, L. A., op. cit., p. 2.

²⁹ El martes 12 de junio de 1973, el diario Clarín se refería con esa expresión a la ola de ocupaciones iniciadas en el país a fines de mayo, tras la asunción presidencial de Héctor Cámpora. Nievas, F., op. cit., p. 37.

³⁰ A los fines de la investigación, fueron consultados en la Biblioteca Nacional los diarios La Prensa, Clarín, La Nación, La Razón y La Opinión, publicados entre el 25 de mayo y el 20 de junio de 1973.

³¹ Para una aproximación a las características de la «toma» del edificio del CONICET, ubicado en la calle Rivadavia 1917, ver Nievas, F., op. cit., pp. 320-322. Según el sociólogo, la ocupación del Consejo por sectores de la Juventud Peronista y la Alianza Libertadora Nacional «para impedir que grupos *trotskistas* y *gorilas* perturben el normal proceso revolucionario y popular», se habría producido entre el 5 y el 9 de junio de 1973. Por su parte, los diarios La Prensa (12-06-1973) y La Opinión (12-06-1973), sitúan el fin de la «toma» el día 12 de junio, tras el nombramiento de Vicente Cicardo como interventor del CONICET.

En el caso del INTA, los documentos y las fuentes consultados revelan que, entre el 6 y el 15 de junio, se produjeron ocupaciones en distintas dependencias y regionales del Instituto, encabezadas por diferentes gremios o asociaciones del personal. Así, por ejemplo, Nievas señala que el 6 de junio «fue ocupado por afiliados a APINTA el edificio central de INTA [Capital], desconociendo las autoridades del mismo y a la espera de que nombraran nuevos directivos», Nievas, F., op. cit., p. 220. En tanto, el periódico Política Obrera, del 22 de junio de 1973, refiere a la situación en INTA Castelar, ocupado por miembros de la Comisión Directiva de ATE, con reivindicaciones de corte más político y gremial. Para completar el cuadro de las «tomas» en el INTA, se sugiere ver Nievas, F., op. cit., p. 270-271 y las notas del diario Clarín y La Prensa, del 9 y el 14 de junio, respectivamente.

provisoria o designara en su reemplazo a los nuevos interventores.³² En CNEA –afirma el sociólogo– la acción cobró especial relevancia, pues allí se encontraba el almirante Oscar Quihillalt al frente del organismo desde 1955.³³

El 7 de junio, la prensa local refería a la peculiar situación en el Centro Atómico Ezeiza (CAE),³⁴ una de las dependencias de CNEA ubicada en la provincia de Buenos Aires:

«Ayer el [CAE] fue ocupado por [sus propios trabajadores], en demanda de la intervención estatal a la conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica [...] [Los ocupantes] resolvieron “repudiar a las actuales autoridades, herederas del régimen anterior y propiciar la intervención de la CNEA por el Gobierno Popular”, según consta en un acta labrada en forma conjunta por los profesionales, técnicos y administrativos del establecimiento».³⁵

El clima de agitación y el «estado de Asamblea permanente»³⁶ en la CNEA datan, sin embargo, del mes de mayo y los primeros días de junio, cuando desde los distintos Centros se organizaron una serie de reuniones para tratar asuntos de carácter gremial y discutir mejoras en las condiciones laborales.³⁷ La documentación consultada alude, asimismo, al proceso de formación de «Comisiones Coordinadoras»³⁸ en varias de las reparticiones de la institución.

Como recuerda uno de mis entrevistados, «las *Coordinadoras* surgieron como una iniciativa para organizar a los trabajadores tras la asunción de Cámpora y plantear un conjunto de medidas reivindicativas como, por ejemplo, la necesidad de producir un recambio de las autoridades».³⁹ En este sentido, se trató de un modo novedoso de reunir o convocar al personal no afiliado a las asociaciones y gremios históricos del organismo: las Asociaciones de Profesionales y Técnicos de la CNEA (APCNEA y ATCNEA, respectivamente) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).⁴⁰

³² Nievas, F., op. cit., p. 82.

³³ Nievas, F., op. cit., pp. 84 y 271. De acuerdo con Nievas, la «toma» en la Comisión se habría iniciado el 6 de junio de 1973, en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), ubicado en la localidad homónima de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el sociólogo no refiere en su tesis a la situación experimentada en otras dependencias de la CNEA y tampoco señala en qué fecha se habría puesto fin a la ocupación.

³⁴ Uno de los tres Centros Atómicos de la CNEA, además del Centro Atómico Constituyentes (CAC), ubicado en el cruce de la Avenida homónima y General Paz (pcia. de Buenos Aires), y el Centro Atómico Bariloche (CAB), emplazado en esa ciudad patagónica.

³⁵ Diario Clarín, jueves 7 de junio de 1973, p. 14.

³⁶ Ver APCNEA, Acta N°148, 4 de junio de 1973, p. 34.

³⁷ APCNEA, Acta N°148, 4 de junio de 1973, pp. 30-31.

³⁸ Ver APCNEA, Acta N°149, 8 de junio de 1973, pp. 35-36.

³⁹ Entrevista con Oscar, Doctor en Física con más de 40 años de trayectoria profesional en la CNEA. 14 de febrero de 2014. A fin de preservar el anonimato de mis interlocutores, he optado por reemplazar sus verdaderos nombres por otros ficticios.

⁴⁰ Como puede leerse en su página web (<http://www.apcnean.org.ar>), la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEA) fue creada el 18 de abril de 1966 por un grupo de investigadores y tecnólogos de la CNEA y, desde el año 2005, cuenta con Personería Gremial. ATCNEA, en tanto, se creó el 1 de abril de 1970, según consta en el sitio: <https://es-la.facebook.com/pages/Atcnea-Asociación-de-Técnicos-de-la-CNEA/525102084168305>

El 10 de junio de 1973, una «Solicitada» del diario Clarín publicada por dichas agrupaciones y «las Coordinadoras de Sede Central, Centro Atómico Constituyentes [y] Centro Atómico Ezeiza»,⁴¹ resumía en cinco puntos la opinión –expresada por amplia mayoría– sobre el rumbo que debía seguir la Comisión:

«1º) La CNEA debe encuadrarse en la política general del país trazada por el Gobierno Nacional, [y]

2º) Expresa [su] deseo de [ser] intervenida por el Poder Ejecutivo [...]

3º) El personal [no] condiciona al Gobierno [al] no presentar candidatos, pero le solicita que no sea nombrado ningún personaje que haya tenido gravitación en este proceso de 18 años (Gerentes, Asesores, Presidente).

4º) Las Asambleas [entienden] que el pedido de intervención tiene claro sentido de apoyo al Gobierno Popular.

5º) Se ofrece al Gobierno [la] colaboración de las Mesas de Trabajo que se han constituido para la discusión de objetivos, planes y estructura [institucionales]».⁴²

Respecto al tercer punto del «comunicado», varios de mis interlocutores señalan que, antes de la designación de Iraolagoitia como interventor de la CNEA,⁴³ un sector del personal propuso al físico Antonio Misetich como candidato a la presidencia:⁴⁴

«El 25 de mayo de 1973 hubo grupos que rajaron [de sus puestos] a todos los *viejos* –recuerda Héctor. Esos tipos tomaron la “manija” de la Comisión. Eran de los que... [...] Yo no sé cuándo entró, pero el “movimiento revolucionario” –llámalo como quieras– quiso ponerlo de presidente a Misetich y los *viejos*, sean peronistas o no peronistas, lo fueron a buscar a Iraolagoitia. Y fueron a buscarlo para que se haga cargo de la Comisión, para evitar que nombraran a Antonio...».⁴⁵

La visión de Héctor contrasta con la de Adolfo,⁴⁶ uno de los profesionales de CNEA identificados con dicho «*movimiento*». Como señala el químico:

«Armamos una “Agrupación Peronista” en la Comisión y los tipos dijeron: “¡Ay, ay, ay!

⁴¹ Diario Clarín, domingo 10 de junio de 1973, p. 16.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Pedro Iraolagoitia fue el primer presidente y hombre de la Marina a cargo de la CNEA (1952-1955). Como advierte Julio –otro de mis entrevistados– «Iraola había sido edecán de Perón y existía entre ambos una relación estrecha. Cuando se produce el golpe de Estado de 1955, Iraolagoitia renuncia a su puesto en CNEA, en un gesto de lealtad a Perón. Por eso, en el '73, Perón lo nombra interventor; por un tema de confianza». Entrevista con Julio, Ingeniero Químico que ingresó a la CNEA en 1969 y se desempeñó en la institución hasta marzo de 1976, tras ser secuestrado a pocos días del Golpe. 5 de junio de 2015.

La noticia de la intervención del Poder Ejecutivo en la CNEA y el nombramiento de Iraolagoitia como su interventor, fue publicada en los diarios La Prensa, La Opinión y La Razón, el 12 de junio de 1973.

⁴⁴ Misetich fue uno de los 16 desaparecidos de la CNEA durante la última dictadura. Para muchos de mis entrevistados, Antonio estuvo vinculado al espacio político «Montoneros».

⁴⁵ Entrevista con Héctor, Doctor en Química con más de 35 años de trayectoria en CNEA y, actualmente, retirado de la Comisión. 9 de mayo de 2014.

⁴⁶ Entrevista con Adolfo, Licenciado en Química y profesional de la CNEA entre 1968 y 1976, año en que fue secuestrado y trasladado ilegalmente a dependencias de la Marina, donde permaneció detenido por espacio de un mes junto a otros trabajadores de la Comisión. Luego, fue puesto a disposición del PEN y reubicado en la cárcel de Devoto, de donde logró salir en octubre de 1976 a condición de abandonar el país. 22 de octubre de 2014.

¡Ay, ay, ay! Estos *pibes* se están organizando”...

Inmediatamente se mueve el “*statu quo*” en la CNEA y buscan a ver ¡quién puede venir rápidamente a apagar el incendio! Y ahí redescubren a Iraolagoitia, que había sido edecán de Perón, que nadie podía discutir que fuera peronista, pero... ¡Obviamente! Para nosotros, que teníamos 30 años, era un tipo grande, un *abuelito*, que ya estaba bastante aplacado...».⁴⁷

El escenario descrito en estas páginas pone en cuestión la imagen metafórica de la CNEA como un «enclave» aislado del contexto político nacional,⁴⁸ y permite pensar a los meses de mayo y junio de 1973 como un período singular en su trayectoria, que alteró la dinámica institucional y produjo modificaciones a nivel de las jerarquías, las relaciones laborales y el «principio de autoridad» vigente. En palabras de Horacio:

«1973 fue un año muy revulsivo políticamente... Hasta el año '73, en la CNEA había una “*mística*”... Es decir, la persona que ingresaba a la Comisión de Energía Atómica pensaba que entraba a un lugar de excelencia y, de alguna manera, que formaba parte de la institución y que se sacrificaba por la institución... Eso duró prácticamente hasta 1973, por razones que a lo mejor no vienen al caso. Mucho de ello tiene que ver con una política...

Luego del '73, se pierde la “*mística*” entre otras cosas. Y se pierde algo que es tanto o más importante que la “*mística*”. Se pierde la cadena de mandos: se pierde el respeto por el superior, se empieza a cuestionar la validez del superior como una entidad jerárquica que ordenaba el sistema [...] Entonces, se empiezan a juzgar otras cosas que [no sólo tienen que ver con] la cuestión técnica...»⁴⁹

El clima de «*movilización*» representado en los discursos de mis interlocutores, no solo impulsó cambios en la dirección y en la estructura organizativa de la CNEA, sino que dio lugar –también– a experiencias de «*politización*» entre el personal, como la creación de la «Agrupación Peronista»,⁵⁰ que tendría un papel destacado en los años previos al Golpe de 1976. De este modo, la «*participación masiva*»⁵¹ de profesionales, técnicos y administrativos en la redefinición de los objetivos institucionales puso en juego sentidos de la política que cuestionaron el «*apoliticismo*» atribuido a la CNEA, al dejar traslucir las preferencias ideológico-partidarias de sus trabajadores. Como refiere Oscar, «a esa altura, no se negaba cuál era la pertenencia política de cada

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Vessuri, H., op. cit., p. 197.

⁴⁹ Entrevista con Horacio, Licenciado en Física, con más de 30 años de trayectoria en la CNEA. 8 de abril de 2010.

⁵⁰ Como explica Adolfo, «la Agrupación Peronista se crea porque era una manera de decir: ya que nadie nos representa acá... Porque la Asociación de Profesionales estaba cooptada por el comunismo [...]

Lo más importante de todo es que no había una sola “AP-CNEA” en la Comisión: porque “AP” significa “Asociación de Profesionales” de la Comisión... La Asociación de Profesionales era la asociación de todos aquellos que tenían un título universitario... ¡¿Y los demás?!... ¡¿Y los demás?!... No podían entrar.

Entonces, nosotros lo que decíamos era: Nuestra AP-CNEA está abierta a todos, hasta para el que sirve el café [...] O sea que la Agrupación Peronista era de todos aquellos que querían aportar y la idea era hacer una Comisión de Energía Atómica mejor; una Comisión de Energía Atómica de todos». Segunda entrevista con Adolfo. 13 de mayo de 2015.

⁵¹ APCNEA, Acta N°150, 11 de junio de 1973, pp. 36-37.

uno [...] Todos en esa época *militamos*, y no sólo *militamos*, sino que lo hacíamos públicamente... Así que, no había duda de a qué sector pertenecíamos; cuáles eran nuestras simpatías...».⁵²

Los recuerdos sobre aquel período distan, sin embargo, de ser homogéneos. Por el contrario, la irrupción de la política en CNEA y el entusiasmo que produjo para muchos la posibilidad de introducir cambios en las metas fijadas por el organismo, fue vivida por otros con profundo malestar. En la visión de Jorge,

«El '73 fue un desastre [...] En ese momento, la Comisión se paralizó. En nombre de la democracia, todo el mundo discutía... Y hubo una parálisis total [...]

La energía nuclear es un tema difícil y, además, cambia con el tiempo. Por ponerte un ejemplo: yo, si en este momento me desconecto de la actividad durante dos o tres meses, pierdo el “*training*”. Bueno, cuando un grupo de nosotros vio que el mundo seguía caminando y nosotros, acá estábamos, perdiendo el tiempo, decidimos juntarnos en un cuartito [al] cual lo llamábamos “*el cementerio de elefantes*”, y nos dábamos clase entre nosotros. Cada uno estudiaba un tema nuevo y se lo decía a los otros... Nos pasamos así casi un año... ¡Un desastre! Y entonces, todo el mundo empezó a buscar horizontes para sobrevivir y, bueno, un compañero mío consiguió un empleo en Brasil y se fue a Brasil; un grupo –del cual yo participé– ayudó a empezar el primer programa nuclear en [otro país] y, entonces, me fui a trabajar un tiempo [allí]».⁵³

En la misma línea que Jorge, Héctor alude al '73 como una «época catastrófica» y –a partir de su experiencia– señala cómo los acontecimientos que tuvieron lugar en la CNEA alteraron la constitución y la dinámica de los equipos de trabajo:

«Cuando yo volví –porque había salido al exterior a principios de mayo y después del 20 de junio volví a mi laboratorio– me encontré con un cartel diciendo “Perón o muerte”... O sea, tipos que jamás me habían planteado cuestiones políticas, habían decidido manejar el laboratorio en forma de asamblea. Y me dijeron que firmara un decálogo, porque si no, no hablaban conmigo...

Eso es para pintarte la mentalidad... No te digo que yo haya sido un tipo fantástico o al revés. Lo que te digo es: yo había armado ese grupo; había buscado la forma de incorporarlo al presupuesto de CNEA, unos como contratados, otros como becarios, etc. Había conseguido gente para limpiar el laboratorio, técnicos para ayudar en las tareas, y me encontré con que todos habían decidido que yo me fuera... Y yo me fui. Tiré 12 años de trabajo en cinco minutos. Todo lo que había hecho desde mayo del '61 hasta mayo del '73, lo tiré; pasé a hacer otra cosa. O sea, no volví a ese tema más. No te digo que me lo olvidé, pero no volví a trabajar en ese tema más...».⁵⁴

⁵² Segunda entrevista con Oscar. 4 de julio de 2014.

⁵³ Entrevista con Jorge, Ingeniero retirado de CNEA y vinculado, actualmente, a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 14 de mayo de 2014.

⁵⁴ Entrevista con Héctor, op. cit.

Los relatos de mis interlocutores exponen sus diferentes miradas y apreciaciones sobre el impacto que produjo en la Comisión el retorno del peronismo al poder. El contraste de las experiencias vividas por los profesionales evidencia, asimismo, el clima de conflicto y las tensiones derivadas de la *politización*⁵⁵ de un sector del personal que, en el nuevo contexto, manifestó su interés de «llevar adelante un proceso emancipatorio en la CNEA».⁵⁶

Más allá de las prácticas disruptivas del orden institucional, como las «tomas» o la «ocupación» de los lugares de trabajo y la organización de «asambleas masivas» para debatir cuestiones de política interna, entre junio y diciembre de 1973, la *politización* de los trabajadores se expresó también en un conjunto de iniciativas orientadas a redefinir la *política nuclear* en sintonía con los lineamientos del tercer gobierno peronista.

A fin de encuadrar los objetivos institucionales en la política general del nuevo gobierno, el personal de la CNEA organizó en aquellos meses el «Consejo Coordinador (COCO)», que contó con la participación de profesionales, técnicos y administrativos del organismo en las actividades dirigidas a replantear las estrategias de desarrollo para el sector. En el próximo apartado, veremos de qué manera el «COCO» puso en juego una diversidad de sentidos sobre la función social de la ciencia y la tecnología y el compromiso que debían asumir los trabajadores nucleares en los procesos de cambio.

Hacia la consolidación de una nueva *política nuclear*: el «Consejo Coordinador» y la reestructuración de los objetivos institucionales

«Un Plan Nuclear debe ser el compromiso de todos los trabajadores de la CNEA con el pueblo para la realización de una política nuclear que genere los máximos beneficios políticos, sociales, culturales y económicos para el país».⁵⁷

El 15 de junio de 1973, a solo tres días de su nombramiento como interventor de la CNEA, Iraolagoitia convocó a su despacho a los representantes de las Coordinadoras del CAE, el CAC y Sede Central (SC), y a las Comisiones Directivas de APCNEA, ATCNEA y UPCN, para solicitarles que elaborasen un informe referido a la instalación de la segunda Central Nuclear (CN),⁵⁸ que se emplazaría en Córdoba, en la localidad de Río Tercero. Como se desprende del documento, la consulta de la Dirección al personal, era un hecho «auspicioso» que marcaba una «nueva etapa» en la CNEA, al poner fin al «aislamiento» que, hasta entonces, había caracterizado a dicha relación.⁵⁹

⁵⁵ Como señala Rubén, en el '73 «hubo un chispazo de *politizar* la CNEA [con] las “mesas de trabajo” y toda esa historia del peronismo que volvía, que generaron cuestiones de política partidaria...». Entrevista con Rubén, Ing. Mecánico, con más de 35 años de trayectoria en la Comisión y, actualmente, retirado del organismo. 6 de junio de 2013.

⁵⁶ Entrevista con Adolfo, op. cit.

⁵⁷ CNEA. Informe sobre la Central Nuclear II. 3 de agosto de 1973, p. 6.

⁵⁸ «En 1967, mientras se concretaba la compra de la [primera central, Atucha I], la CNEA había iniciado [el] estudio de factibilidad para una segunda central del doble de potencia, destinada a la región central del país. [...] Se esperaba que [dicha] central entrara en servicio a fines de 1978». Hurtado, D.: *El sueño de la Argentina Atómica*, 2014, p. 145.

⁵⁹ CNEA. Informe sobre la Central Nuclear II. 3 de agosto de 1973, p. III.

Más allá de su objetivo inmediato,⁶⁰ el Informe incluyó también un diagnóstico de situación sobre la realidad institucional y propuso algunas líneas de acción para definir una *política* y un *plan nuclear*, inspirados en dos de las ideas rectoras de la época: la «liberación» y el «interés popular».⁶¹ En estas páginas, la atención estará puesta en recuperar los fundamentos de esa nueva *política*, forjada al calor de las transformaciones que –a nivel social, cultural y económico– impulsó el gobierno peronista.⁶²

Alrededor de un centenar de profesionales y técnicos, participaron en los *Grupos de Trabajo* creados para estudiar los diversos aspectos del problema, pues se partía de la presunción de que nadie estaba «mejor capacitado que el personal de la [CNEA para] proponer la adecuación del sector al cumplimiento de los objetivos emergentes de un Plan Nuclear».⁶³

En la visión de los trabajadores, dicho *Plan*, debía abarcar y regular las siguientes actividades: «1) La instalación de Centrales Nucleares; 2) El ciclo de combustible; 3) El aprovisionamiento de agua pesada; 4) La provisión de radioisótopos; 5) La formación de profesionales y técnicos especializados; [y] 6) [Las prácticas de] investigación y desarrollo».⁶⁴

El *Plan*, por otra parte, debía enmarcarse en una *política* orientada a lograr un desarrollo nuclear independiente y a satisfacer la demanda local de abastecimiento de energía eléctrica, como parte de un «Plan Energético Nacional», encuadrado en los objetivos de independencia económica y soberanía política.⁶⁵

Según el Informe, la implementación de dicha estrategia se realizaría a través de la explotación de los recursos uraníferos del país; el monopolio estatal de los yacimientos de mineral radiactivo y las plantas industriales vinculadas a las distintas etapas del ciclo de combustible; la promoción de una infraestructura de I+D para favorecer el desarrollo de capacidades «autónomas»; y la adopción de una línea de reactores de potencia que garantizara la participación de la industria, la tecnología y la ingeniería nacionales en el diseño y la ejecución de proyectos.⁶⁶

El fin último de la *política nuclear* y el de la CNEA –como organismo idóneo para implementarla– radicaba, pues, en el dominio completo e independiente de la tecnología y la ingeniería nucleares. No obstante, para quienes redactaron el documento, el éxito en la concreción de aquel programa, dependía –entre otros factores– de la posibilidad de llevar a cabo una verdadera reforma en la estructura

⁶⁰ «Responder si el módulo de la Central, su emplazamiento y el momento en que se decide su instalación son los correctos, o necesitan un estudio más profundo».

Como resultado del Informe elaborado por el personal de la CNEA en agosto de 1973 surge que, a fin de construir la segunda Central Nuclear, debía firmarse «el contrato con el Consorcio AECL-Italmimpianti. Pero también [que] nunca más [debían] repetirse los procedimientos aplicados a la gestación, decisión y compra de dicha Central, pues las decisiones [en esa materia] no podían ser tomadas por una estructura personalista y una dirección autoritaria», como la que –hasta entonces– había caracterizado a la Comisión de Energía Atómica. *Ibidem*, p. 2-7.

⁶¹ *Ibidem*, p.3.

⁶² Los aspectos «técnicos» contenidos en dicho Informe y en los documentos elaborados por el Consejo Coordinador (1973), no serán analizados en profundidad en este trabajo y serán objeto de una futura investigación antropológica.

⁶³ CNEA. Informe sobre la Central Nuclear II, op. cit., p. III.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 154.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 151.

⁶⁶ *Ibidem*, pp. 151-152.

de la Comisión, que asegurase la máxima representación y participación del personal en la planificación institucional. Con ese objeto, el 29 de junio de 1973, se organizó el «Consejo Coordinador (COCO)» para estudiar la reestructuración de la CNEA y conciliar los objetivos institucionales con las metas de desarrollo fijadas por el nuevo gobierno.⁶⁷

El llamado a participar del «COCO» se extendió a profesionales, administrativos y técnicos de todas las dependencias y regionales de la Comisión.⁶⁸ Alrededor de 250 agentes colaboraron en forma esporádica o permanente con las más de veinte *mesas de trabajo*, creadas para discutir el rumbo que debía adoptar el organismo ante la nueva coyuntura política.⁶⁹

El primero de diciembre, tras dos meses de debates, los organizadores del Consejo elevaron a las autoridades institucionales los resultados del estudio. Entre ellos, destaca un documento elaborado por la *mesa* dedicada al análisis de la *política nuclear*. El texto describe los *problemas políticos* identificados por el personal de la CNEA y el modo en que se concibió –en aquel momento– la posibilidad de esbozar una *política sectorial*.

Dichos «problemas» fueron clasificados en tres tipos: 1) los de la política interna de CNEA; 2) los de la política institucional y su relación con los intereses del Estado; y 3) los de la *política nuclear* y el esfuerzo argentino por cortar los lazos de «dependencia tecnológica» con los países centrales.⁷⁰

Sobre el primer punto, los trabajadores denunciaron la existencia de una *grave crisis* en la Comisión debida, principalmente, al fuerte arraigo que –desde fines de los sesenta y comienzos de los setenta– había alcanzado la ideología «desarrollista» y su defensa de la «autonomía productiva».⁷¹ En la visión del personal, el *desarrollismo* consistió en una *pseudopolítica* orientada a resolver solo necesidades «coyunturales», alejadas del objetivo principal de la CNEA que suponía adquirir el dominio *completo e independiente* de la tecnología y la ingeniería nuclear.⁷²

⁶⁷ Para una aproximación al contexto de surgimiento de la experiencia del Consejo Coordinador (COCO) en la CNEA, ver Fernández Larcher, A.: «Entre la “mística” y la “politización”. Análisis de las tensiones interpretativas sobre la memoria institucional de la CNEA (1973)». En: Revista Kula. Antropólogos del Atlántico Sur, N°11, 2015, pp. 24-41. Disponible en: <http://www.revistakula.com.ar/wp-content/uploads/2015/05/3-FERNANDEZ-LARCHER.pdf>

⁶⁸ Entre octubre y diciembre de 1973, «personal obrero, administrativo, técnico y científico, reunido en una misma mesa de trabajo, pudo volcar sus inquietudes y opiniones sobre los distintos temas [propuestos por el Consejo Coordinador]. Además, se sumó la concurrencia de representantes del interior del país: Bariloche, Mendoza, Salta, Patagonia, Huemul, Malargüe, Córdoba, hecho sin precedentes en la CNEA». CNEA. «Anteproyecto», Resultados producidos por las Mesas de Trabajo del Consejo Coordinador. Buenos Aires, CNEA. 1° diciembre 1973, p. 2.

⁶⁹ Las *mesas de trabajo* fueron concebidas en función de las áreas, las actividades y temáticas prioritarias definidas por la CNEA. Entre ellas, destacan: la *mesa* dedicada a estudiar la *política nuclear*; la *mesa* de ciclo de combustible; la *mesa* de industria nacional; la de reprocesamiento; la de ingeniería, etc. En este capítulo, nos referiremos principalmente a los resultados que arrojó la primera de las *mesas* señaladas.

⁷⁰ Desde mediados de los '60, señala Feld, «la evidencia en torno a los límites de la industrialización sustitutiva [...] incentivó la emergencia de nuevas perspectivas de pensamiento, como fue la “teoría de la dependencia”, [cuyos más reconocidos exponentes fueron] Cardoso y Faletto. Estos autores consideraban que un punto de partida fundamental era refutar las teorías de la modernización [y para ello] se propusieron elaborar un modelo integrado de desarrollo, en el cual desarrollo y subdesarrollo eran vistos como dos caras de una misma moneda, y no como etapas sucesivas de un modelo universal». Feld, A., op. cit., pp. 199-200.

⁷¹ Para una crítica de las concepciones «desarrollistas» en Ciencia y Economía, ver Varsavsky, O.: *Ciencia, Política y Cientificismo*. Caracas, Venezuela, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2007.

⁷² «Lo estratégico es en la política nuclear, la creación, consolidación y dominio de la tecnología nuclear. Es

Con relación al segundo punto, la definición de la política institucional sobre la base de los requerimientos energéticos del país, respondió a la voluntad de liberar a la Argentina de la «dependencia» en ese campo. Si bien la *autonomía de decisión* y la *autonomía productiva* eran premisas necesarias para consolidar una política independiente en naciones periféricas como la nuestra, quienes intervinieron en el debate las consideraron insuficientes al no poder subsanar la cuestión de la dependencia.⁷³ De hecho, según los especialistas, las formas de *autonomía* denotaban que el país solo estaba en condiciones de hacer frente al problema *coyuntural* que planteaba la demanda energética, en lugar de fomentar el desarrollo local de tecnologías para la producción de nucleoelectricidad.

Respecto del último punto, el objetivo de la *política de liberación* propugnada por quienes participaron del COCO, radicó en cortar los lazos de la dependencia tecnológica con potencias como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o Canadá, para auspiciar la producción nacional. En ese entonces, recuerda Oscar, «los impulsores del Consejo eran partidarios de la idea –hoy tal vez ingenua– de construir un reactor *celeste y blanco*».⁷⁴

Otro de los temas abordados en las *mesas de trabajo* fue el de la *coparticipación* del personal en la planificación, dirección y control de gestión de la CNEA. De acuerdo con el documento elaborado por la *mesa 7*, el dispositivo privilegiado para garantizar la intervención de los trabajadores en los asuntos institucionales fue la *codecisión*, que promovía su participación en los órganos directivos, a través del *voto*. Asimismo, se apuntaba la necesidad de que la *cogestión* fuera hecha de *abajo hacia arriba*, partiendo de las unidades de trabajo existentes.⁷⁵

Las conclusiones del documento ilustran de qué manera las reivindicaciones del personal se inscribieron en el marco más amplio de las experiencias «combativas» de la clase trabajadora:

«El camino recorrido en pos de la Liberación Nacional y Social, a lo largo de años de lucha, ha cimentado en los trabajadores una tradición política, económica y social que los habilita para participar activamente de la vida de las instituciones en todos sus [espacios directivos]. Por lo tanto, el sistema que buscamos para la CNEA [deberá impulsar] la inserción del Personal en la totalidad de los ámbitos de discusión y toma de decisiones»⁷⁶.

Para muchos de los profesionales y técnicos implicados en su organización, «el COCO

decir, es saber y poder construir centrales nucleares, elementos combustibles y agua pesada. Lo coyuntural, es resolver el problema que crea la demanda de energía eléctrica: la compra de centrales, etc.». CNEA. “Anteproyecto”, op. cit., p. 25.

⁷³ En la perspectiva de los trabajadores, esas «autonomías» significaban, en definitiva, que Argentina solo tenía la capacidad de determinar qué tipo de central convenía comprar y cuáles eran los suministros que se debían proveer. *Ibidem*, p. 12.

⁷⁴ Primera entrevista con Oscar, op. cit.

⁷⁵ CNEA. “Mecanismos de participación del personal”, op. cit., 1973.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 31.

fue una experiencia única»,⁷⁷ que trascendió los debates sobre la política interna y sectorial y puso en juego otros sentidos de lo político, asociados a la función de la actividad científico-tecnológica y al compromiso que debían asumir los trabajadores en los procesos de cambio.

Según Oscar, «El Consejo articuló una propuesta sólida desde el punto de vista estratégico y técnico [y] se organizó con el espíritu de *generosidad* de la época... Esa *generosidad* se vio reflejada en que varios de sus participantes, sacrificaron sus intereses y bienestar en función de la mejora [del organismo]. En otras palabras, hubo gente que se propuso modificar aspectos de la estructura organizacional, siendo consciente de que dicha modificación sería en perjuicio de su propio grupo de trabajo... Además, fue una experiencia profundamente *democrática*, que se planteó terminar con la *burocracia institucional*».⁷⁸

La *generosidad* y el *sacrificio* en pos de un interés colectivo se relacionan con la mirada de Adolfo sobre el «Consejo Coordinador». Para el químico, se trató de una instancia que «sirvió para que *nosotros* expresáramos, como trabajadores de la CNEA, una opinión sobre qué hacer en el nuevo contexto»:

«El COCO fue [algo] que se creó en la interface entre el “mundo moderado” de la Comisión y [los] tipos pensantes, que eran los sectores más “radicalizados”... Un tipo que te dice “¡Pará, pará, pará! ¿No te parece que la conducción de una entidad como la nuclear tendría que ser un tema central de análisis y definir los criterios de quiénes tienen que ser los dirigentes; con qué conceptos de *solidaridad*, de *respeto* por el prójimo, de atención de las *necesidades* de los trabajadores?»».⁷⁹

Los recuerdos sobre el «COCO» y su repercusión en la CNEA son disímiles y objeto de «tensiones interpretativas» entre los profesionales consultados. Así, mientras Oscar y Adolfo reivindican su carácter *estratégico* y *democrático*, Rubén y Miguel cuestionan la experiencia –desde el punto de vista técnico– y la definen como un proyecto o iniciativa del «personal», a tono con el clima de *efervescencia* política que signó el retorno del peronismo al gobierno. En palabras de Rubén,

«Cuando asume Cámpora, acá se hace una especie de *efervescencia* que, evidentemente, estaba latente, porque si no, no se explica, y se generan cosas. Y una de las cosas que se genera, son las llamadas *mesas de trabajo* ¿Qué eran las *mesas de trabajo*? Bueno, “A ver, qué se hace...” Suponete: Esta es la Gerencia de Ambientales, entonces, se hacía una *mesa de trabajo* para discutir todo, desde el que limpiaba hasta el gerente, todos discutiendo qué había que hacer en *Ambientales* para la “nueva Argentina”; esa que se iba a crear y qué se yo...

Algunos casos, pareció –por lo menos de los que yo vi– pareció al principio que iban

⁷⁷ Entrevista con Aníbal, Dr. En Física, actualmente, retirado de la Comisión. 12 de agosto de 2013.

⁷⁸ Primera entrevista con Oscar, op. cit.

⁷⁹ Primera entrevista con Adolfo, op. cit.

por buen camino. Pero después, pasa como en las Asambleas de la facultad, ¿viste? Se empieza a derivar y a derivar, a derivar, a derivar, y entonces los que tienen ganas de hacer algo se cansan y se van. Y quedan los tipos a los que les gusta escucharse; y dale... Entonces, no pasaba nada... ¡Pero aparecían “los iluminados”! Porque ahí aparecen “los iluminados”: Tipos que querían hacer el mundo cuadrado. ¡El globo terráqueo, cuadrado!... ¡Y el globo terráqueo no es cuadrado!...»⁸⁰

Sergio,⁸¹ en tanto, señala que «En el '73 se da un análisis crítico de hacia dónde tenía que ir la Comisión... Bueno, ahí la problemática convocó a gran parte del personal y esta discusión se transformó rápidamente –o estuvo *teñida* rápidamente– de discusiones políticas de otro tipo... Digamos... Las cosas se fijaban también en función del posicionamiento político».

Los dichos de Rubén y Sergio ilustran cómo la agitación social del período *tiñó políticamente* las discusiones en las *mesas de trabajo* del «Consejo Coordinador». En el mismo sentido, se expresa Miguel, para quien «el COCO no tuvo un rol significativo en la CNEA, ni el peso que normalmente le atribuyen... Fue realizado para *liberar la olla a presión*; para permitir la participación del personal luego de años de dictadura. Los que concurren a las *mesas*, estaban decididos a jugar un rol *político*; nada más».⁸²

Los acontecimientos analizados en la sección anterior y los que se sucedieron a raíz de la organización del «Consejo» ponen de relieve la centralidad que –en 1973– adquirió la política en CNEA, al permear todas las dimensiones de la vida institucional. Más allá del valor «positivo» o «negativo» con que se juzgaron las experiencias de *politización*, hay consenso entre los profesionales consultados en describir al período como un momento de inflexión en la trayectoria del organismo que puso en cuestión una estructura organizativa donde «cada sector [actuaba como] un compartimento estanco»⁸³ y en la que se alentaba una visión «elitista y divorciada de la realidad nacional».⁸⁴

En el próximo apartado, veremos cómo los hechos que tuvieron lugar en la CNEA tras el triunfo electoral de Cámpora precipitaron –en 1976– los episodios de violencia contra un sector del personal identificado por sus actividades políticas dentro y fuera del organismo. La perspectiva procesual adoptada permitirá, a la vez, indagar la proyección del programa nuclear propuesto por el «COCO» y explorar los usos o reapropiaciones de los que fue objeto, bajo la última dictadura.

De las fiestas mayas a la caza de brujas: la intervención militar de la CNEA y el ocaso de las experiencias de politización

«A nosotros nos eliminan de la Comisión por secuestro y desaparición...».⁸⁵

⁸⁰ Entrevista con Rubén, op. cit.

⁸¹ Entrevista con Sergio, Ingeniero Agrónomo, actualmente retirado de la CNEA. 29 de enero de 2013.

⁸² Entrevista con Miguel, Ingeniero con más de 40 años de trayectoria en la CNEA. 1 de octubre de 2014.

⁸³ CNEA, Informe sobre la Central Nuclear II, op. cit, p. 220.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 555.

⁸⁵ Segunda entrevista con Adolfo, op. cit.

El primero de julio de 1974, la muerte de Perón causó una honda conmoción en el país.⁸⁶ Como advierte Marina Franco,

«Los largos meses que siguieron hasta marzo de 1976, se sucedieron en medio de una profunda crisis y una descomposición política crecientes, que facilitaron el aumento de la presión militar para definir la ruptura del orden institucional. [...] Así, sin el liderazgo mediador [del viejo caudillo] y en el enervado clima político [de la época], el frágil equilibrio se resquebrajó rápidamente a favor de los sectores más a la derecha del peronismo y de la explosión extrema de la violencia política».⁸⁷

Varios de mis interlocutores recuerdan amargamente cómo la *efervescencia* y la agitación social que caracterizaron los días del «camporismo», se fueron disipando tras la muerte de Perón y la *derechización* del movimiento. «En el '74, comienza un período de *derechización* brutal –apunta Adolfo. Muerto Perón, se *derechiza* todo y empiezan las persecuciones jodidas».⁸⁸

En un artículo compilado en «*Ruptura y reconstrucción de la ciencia argentina*», Ernesto Maqueda, Doctor en Física y trabajador de la CNEA, refiere al impacto de la *derechización* y la escalada represiva en la Comisión de Energía Atómica: «La caza de brujas desatada en el país a partir de 1974 se [reflejó] en la CNEA a través de libelos, publicaciones e informes de inteligencia que [denunciaron] los “soviets” nucleares».⁸⁹ Al respecto, Oscar señala que, en una ocasión, mientras caminaba por la calle Florida, le «repartieron un *volante* donde se instaba a terminar con la *infiltración comunista* en la Comisión y se brindaba una lista con los nombres de muchos de los profesionales del Departamento de Física. Lamentablemente –confiesa mi entrevistado– en el '76 tuve que quemar ese papelito...».⁹⁰

El clima de persecución, conflictividad social y violencia política, que alcanzaría su punto álgido con la irrupción de la dictadura (1976-1983), puso fin a las experiencias de *politización* entre el personal de la CNEA. En estas páginas, analizaremos algunos aspectos de la intervención militar del organismo, a la luz de los hechos descritos en los apartados anteriores.

En lo relativo a cuestiones de política interna y sectorial –tal como fuera planteado en las *mesas de trabajo* del «Consejo Coordinador»– los años que precedieron al Golpe (1974-1976) y la instauración del gobierno autoritario, agotaron las posibilidades de participación del personal en la planificación institucional. El nombramiento de Castro Madero como interventor de la CNEA por la Junta Militar, retrotrajo a la

⁸⁶ Svampa, M., op. cit., p. 21.

⁸⁷ Franco, M., op. cit., pp. 112-113.

⁸⁸ Segunda entrevista con Adolfo, op. cit.

⁸⁹ Expresión utilizada para referir a los miembros del Departamento de Física de la CNEA, presidido en aquellos años por la Doctora Emma Pérez Ferreira. MAQUEDA, E.: “Ciencia y tecnología en la actividad nuclear”. En: *Ruptura y reconstrucción de la ciencia argentina*, 2009, p. 67. Disponible en: http://www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/Ruptura_y_reconstruccion.pdf.

⁹⁰ Primera entrevista con Oscar, op. cit.

institución a la situación previa al ascenso del peronismo, en la que las decisiones sobre el rumbo de la política científico-tecnológica se dirimían a nivel de la Dirección, sin consultar a los trabajadores.

Un hecho cobró especial relevancia en aquel contexto: la presentación, en 1974, de un esbozo de *Plan Nuclear* al Congreso, que fijaba metas y objetivos institucionales para el decenio 1975/1985.⁹¹ Dicho programa surgido –en parte– al calor de los debates que propició el «COCO» fue utilizado como «insumo» del Plan de 1979,⁹² impulsado por el entonces presidente de la Comisión. Como apunta Rodríguez, «el Plan Nuclear de 1979 y el cierre del ciclo de combustible no fueron ideas originales de Castro Madero, sino que formaban parte de las propuestas que el plantel científico de CNEA quería hacer llegar al gobierno desde la década anterior. Incluso muchos de los objetivos de 1979 habían sido fijados ya en el Plan de 1975/1985».⁹³

Sobre el «uso» o «reapropiación» que el marino hizo del proyecto elaborado en las *mesas de trabajo* del «COCO», Eduardo señala, «Castro Madero toma el *Plan Nuclear* que habían hecho los *muchachos* (y cuando te digo los *muchachos*, eso quiere decir *la militancia*). Vos cuando ves el *Plan Nuclear* que habían hecho los *muchachos* y lo comparás con el del '79, es lo mismo. Salvo pequeñas variaciones como el caso de las Centrales Nucleares. Pero el Decreto del '78, del Plan Nuclear del '79, bueno, ese Decreto que fija los planes y objetivos de la República Argentina, es muy parecido a lo que habían hecho los *muchachos* en el '73-'74».⁹⁴

Igual que Eduardo, Aníbal advierte que el programa que surgió de la experiencia política del «COCO» fue «básicamente el mismo que llevó adelante Castro Madero, con una salvedad muy importante: [el del Consejo] señalaba que todas las cosas tenía que hacerlas la CNEA. El de Castro, al contrario, daba lugar a que las cosas fueran hechas por “empresas amigas”. Pero el esbozo del *Plan* era el mismo; con la misma cantidad de Centrales, etc.».⁹⁵

A diferencia de Quihillalt e Iraolagoitia, Castro Madero se doctoró en Física en el Instituto Balseiro y, según Rubén, «era un enamorado de la CNEA»,⁹⁶ con un profundo conocimiento de la actividad nuclear. Ese hecho, sumado a que –bajo su gestión

⁹¹ En su texto “Tecnología nuclear y cooperación regional en el Cono Sur”, Greño Velasco refiere «al programa elaborado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para el período 1975/85 [...] Con una masa de inversión aproximada a los 5.000 millones de dólares, el Plan Nuclear argentino, [se estructuró] sobre la base de cuatro [tópico]s centrales]: suministro de energía, radioisótopos y radiaciones, investigaciones nucleares y protección radiológica y seguridad nuclear. En 1974 –apunta el autor– [el programa] fue presentado al Congreso, retirado, presentado y vuelto a retirar». Greño Velasco, J.E.: “Tecnología nuclear y cooperación regional en el Cono Sur”, 1977, pp. 197-198.

⁹² El 29 de enero de 1979, el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, sancionó el Decreto N° 302/79 que declaraba de interés nacional el Plan Nuclear presentado por la CNEA, que fijaba la construcción, puesta en marcha y operación de cuatro centrales nucleares. Decreto N°302/1979, publicado en el Boletín Oficial el 14 de febrero de 1979. Disponible en: <http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle>.

⁹³ Rodríguez, M., op. cit., p. 50.

⁹⁴ Entrevista con Eduardo, ex trabajador de la CNEA y, actualmente, personal de la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN). 10 de septiembre de 2013.

⁹⁵ Entrevista con Aníbal, op. cit.

⁹⁶ Entrevista con Rubén, op. cit.

(1976-1983)– el organismo contó con un presupuesto millonario que le permitió consolidar varios de los proyectos en marcha, exaltó su figura dentro y fuera de la Comisión. Sin embargo, tal reconocimiento supone una visión parcial sobre su actuación como Delegado de la Junta Militar, en un período en que la CNEA sufrió el secuestro y desaparición de veintiséis personas y el despido arbitrario de cientos de trabajadores.⁹⁷

Entre los profesionales detenidos, cabe destacar al *grupo de Reprocesamiento*,⁹⁸ «un sector ligado al peronismo y a la política, y con mucha gravitación [en 1973]». ⁹⁹ Según Oscar, el *grupo de Repro* fue el que «de alguna manera, manejó todo durante las “fiestas mayas” [...] Después del 25 de mayo del ‘73, [fueron los que impulsaron] la remoción de las autoridades y gerentes de la CNEA...».¹⁰⁰

En el mismo sentido, Julio señala que «por su actividad política y laboral [y] su involucramiento en la *caída* de Quihillalt, el grupo estaba *marcado* y, por eso mismo, a pocos días del Golpe, prácticamente todos sus miembros fueron desaparecidos». ¹⁰¹ Así, la orientación política y la participación de dichos profesionales en las experiencias de *politización* descritas en las otras secciones del capítulo, habrían constituido –para mis interlocutores– el motivo principal de su detención.

Además de los diez trabajadores vinculados al *grupo de Repro* y a la *Agrupación Peronista*,¹⁰² entre febrero de 1976 y noviembre de 1978, fueron secuestrados otros 16 agentes de la CNEA que, a la fecha, continúan desaparecidos. En la visión de Oscar, el motivo de esos secuestros, puede explicarse a raíz de la actividad realizada por ellos fuera de la Comisión pues se trató, mayoritariamente, de personas con alguna militancia o participación política en organizaciones como Montoneros, la Juventud Universitaria Peronista (JUP), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PTS).

⁹⁷ En un trabajo sobre las consecuencias de la represión militar en la CNEA –presentado en la X Reunión de Antropólogos del Mercosur– indagué las características de la violencia institucional bajo la gestión de Castro Madero (1976-1983) y señalé cómo esas prácticas dieron lugar a nuevas formas de organización política entre los trabajadores nucleares que hicieron posible la creación de la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la CNEA (CDCHPCNEA) y el establecimiento de una serie de objetivos y de acciones ideadas por sus miembros para reparar las violaciones cometidas contra el personal.

Fernández Larcher, A.: “Consecuencias de la violencia de Estado en organismos públicos nacionales: Un intento de reconstrucción etnográfica de las prácticas sobre Derechos Humanos al interior de la CNEA”. X Reunión de Antropólogos del Mercosur (RAM) “Situación, actuar e imaginar antropologías desde el Cono Sur”. Ciudad de Córdoba, Argentina. 10 al 13 de julio de 2013.

⁹⁸ Una síntesis sobre la conformación y la trayectoria del «grupo de reprocesamiento» en CNEA, puede verse en Hurtado, D., 2014, op. cit., pp-186-187.

⁹⁹ Entrevista con Sergio, op. cit.

¹⁰⁰ Segunda entrevista con Oscar, op. cit.

¹⁰¹ Primera entrevista con Julio. 13 de mayo de 2014.

¹⁰² «Los testimonios de los diez “ex-detenidos-desaparecidos”, coinciden en que una vez producida su detención, fueron trasladados a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde permanecieron tabicados por unos días. Luego, miembros de aquella Fuerza los condujeron al buque “Bahía Aguirre” –anclado en dependencias de la Marina– donde los torturaron e interrogaron. La mayoría de ellos, permanecieron alrededor de un mes encerrados en pequeños compartimientos o camarotes, sometidos a todo tipo de vejaciones. Finalmente, fueron declarados “inocentes” y enviados a los penales de Devoto y Sierra Chica, quedando a disposición del PEN, sin que se les labrara ninguna causa». Fernández Larcher, A., 2013, op. cit., p. 8.

Como tantas otras entidades de la esfera pública y del campo tecnocientífico, «la CNEA no estuvo al margen de las políticas del terrorismo de Estado»¹⁰³ aplicadas por la dictadura. La «tensión de memorias» sobre lo acaecido en la institución en ese período, constituye el objeto de análisis del capítulo de Ana Spivak que integra este volumen. En esta sección, hemos abordado solo uno de los aspectos relativos a la intervención militar en la Comisión de Energía Atómica: el que esboza las continuidades y rupturas con los años signados por el retorno del peronismo, tal como se desprende de los relatos de mis interlocutores.

Reflexiones finales

La perspectiva histórico-etnográfica adoptada en el capítulo permitió abordar los hechos descritos en estas páginas como parte de un «proceso»¹⁰⁴ atravesado por las experiencias y los recuerdos de sus diversos protagonistas. El análisis de las fuentes y su relectura a la luz de los relatos de un grupo de profesionales de larga trayectoria en la CNEA habilitaron, asimismo, una reflexión sobre el lugar y el papel de la política en la Comisión, bajo el tercer gobierno peronista (1973-1976).

El impacto del contexto político nacional en los asuntos institucionales fue vivido por mis entrevistados como un desvío o inflexión en el rumbo del organismo, que se materializó en un conjunto de prácticas e iniciativas impulsadas por un sector del personal para redefinir sus metas, estructura y objetivos. Más allá de sus resultados y del modo en que fueron juzgadas, dichas acciones tuvieron un efecto transformador en la CNEA, al trastocar la dinámica institucional y producir un quiebre en la percepción sobre su pretendido «aislamiento» de la vida política argentina.

Las experiencias de *politicización* de los trabajadores –en ese período– pusieron en evidencia una serie de conflictos poco considerados en la literatura nativa y académica sobre la Comisión y la historia de sus logros científico-tecnológicos. Como vimos, las tensiones se expresaron en la disputa por *democratizar* o «llevar adelante un proceso emancipatorio» que pusiera fin al *elitismo* en la CNEA y a su «política divorciada de la realidad nacional». En este sentido, las prácticas orientadas a lograr la *participación* del personal en los asuntos de planificación interna, constituyeron el horizonte de expectativas de los trabajadores «movilizados».

El clima de *efervescencia* que signó el retorno del peronismo activó, también, el debate ideológico y las cuestiones de política partidaria pues, como explica Sergio, «era un momento donde la discusión dejaba muchas veces de tener que ver con lo que debíamos tratar internamente, que era la política científica...».¹⁰⁵

¹⁰³ Hurtado, D., 2014, op. cit, p. 179.

¹⁰⁴ Utilizo este concepto en los mismos términos que Boivín y Rosato, para referir a los hechos narrados por los propios actores. Boivín, M. y Rosato, A.: “Los tipos de análisis: etnográfico, comparativo y procesual. Diferencias, semejanzas y cruces”. En: VII Jornadas Santiago Wallace de Investigación en Antropología Social. Universidad de Buenos Aires. 27 al 29 de noviembre de 2013, p. 2.

¹⁰⁵ Entrevista con Sergio, op. cit.

Otro de los niveles en los que se manifestó el conflicto fue el «generacional». En efecto, como señalaron varios de mis entrevistados, en 1973, los *muchachos* «tomaron la manija» de la Comisión, y removieron a los *viejos* de sus puestos directivos. Como recuerda Adolfo, «se descontaba que *nosotros* no podíamos manejar cosas como hacían los *viejos*... ¡Claro! Teníamos un defecto bestial: éramos *pibes*».¹⁰⁶

A partir de las fuentes y las *narrativas* de mis interlocutores, he intentado mostrar que la política fue –en el período estudiado– una dimensión básica de las prácticas sociales y las experiencias de los trabajadores,¹⁰⁷ que puso en juego una diversidad de sentidos sobre su actividad laboral y la función que debían asumir ante los procesos de cambio. De este modo, uno de los objetivos del trabajo consistió en relativizar la visión de las instituciones tecnocientíficas como ambientes no politizados o espacios donde la política y la técnica se representan de manera escindida. Así, el foco del capítulo estuvo puesto en explorar en situaciones concretas los sentidos y las formas de expresión de la política en la CNEA.

Los recuerdos sobre la *primavera camporista* ilustran en qué medida los contextos más amplios afectaron la dinámica institucional y las prácticas y representaciones de los trabajadores nucleares. Más allá de las tensiones u opiniones encontradas sobre aquellos años, las referencias al período suelen ser escasas y, cuando afloran en el recuerdo de sus protagonistas, parecen contrariar las «historias sagradas»¹⁰⁸ de la Comisión.

En este sentido, como propone Da Silva Catela, cabe preguntarse –al estudiar la trayectoria de la CNEA– los motivos de la *selectividad* de la memoria; esto es: «¿qué cosas se recuerdan y cuáles se olvidan? ¿Por qué? [O] en palabras de Ricoeur, ¿de qué hay recuerdo? [y] ¿de quién es la memoria?».¹⁰⁹

Lejos de querer zanjar esas discusiones, una de las apuestas del trabajo consistió en hacer visibles las lecturas discordantes sobre aquel pasado y en problematizar la existencia de una cultura institucional, que habría permanecido inalterable al paso del tiempo y a los avatares socioeconómicos y políticos de la Argentina. Lo que está en juego –y deberá profundizarse en otras aproximaciones al campo– es la posibilidad de comprender y poner en diálogo las diferentes visiones sobre la historia y el presente de la CNEA, con un enfoque etnográfico que permita recuperar la historicidad de lo que se recuerda.¹¹⁰

¹⁰⁶ Primera entrevista con Adolfo, op. cit.

¹⁰⁷ Grimberg, M.: “Poder, políticas y vida cotidiana. Un estudio antropológico sobre protesta y resistencia social en el área Metropolitana de Buenos Aires”. Revista de Sociología y Política Curitiba, 2009, Vol. 17, Nº 32, p. 85. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=23814275006>

¹⁰⁸ Para una aproximación al concepto de «historias sagradas», ver Visacovsky, S.: “El temor a escribir sobre historias sagradas”. En: Frederic, S. y Soprano, G. (comps.), *Cultura y Política en Etnografías sobre la Argentina*. Universidad Nacional de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2005, pp. 271-313.

¹⁰⁹ Da Silva Catela, L.: “Pasados en conflicto. De memorias dominantes, subterráneas y denegadas”. En: Bohoslavsky, E., Franco, M., Iglesias, M. y Lvovich, D. (ed.), *Problemas de historia reciente del Cono Sur*, Buenos Aires, UNGS-UNSAM, 2010, p. 102.

¹¹⁰ Spivak, A. y Gárgano, C., op. cit., p. 108.

Bibliografía

BOIVÍN, M. y ROSATO, A.: “Los tipos de análisis: etnográfico, comparativo y procesual. Diferencias, semejanzas y cruces”. En: *VII Jornadas Santiago Wallace de Investigación en Antropología Social*. Universidad de Buenos Aires. 27 al 29 de noviembre de 2013.

DA SILVA CATELA, L.: “Pasados en conflicto. De memorias dominantes, subterráneas y denegadas”. En: Bohoslavsky, E., Franco, M., Iglesias, M. y Lvovich, D. (ed.), *Problemas de Historia reciente del Cono Sur*, Buenos Aires, UNGS-UNSAM, 2010.

DE RIZ, L.: *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista*. Buenos Aires, Hyspamerica Ediciones, 1987.

FELD, A.: “Las primeras reflexiones sobre la ciencia y la tecnología en la Argentina: 1968-1973”, *Revista Redes*, Vol. 17, N° 32, 2011, pp. 185-221.

FERNÁNDEZ LARCHER, A.: “Consecuencias de la violencia de Estado en organismos públicos nacionales: Un intento de reconstrucción etnográfica de las prácticas sobre Derechos Humanos al interior de la CNEA”. *X Reunión de Antropólogos del Mercosur (RAM) “Situarse, actuar e imaginar antropologías desde el Cono Sur”*. Ciudad de Córdoba, Argentina. 10 al 13 de julio de 2013.

FERNÁNDEZ LARCHER, A.: “Entre la “mística” y la “politización”. Análisis de las tensiones interpretativas sobre la memoria institucional de la CNEA (1973)”. En: *Revista Kula. Antropólogos del Atlántico Sur*, N°11, 2015, pp. 24-41. Disponible en:

<http://www.revistakula.com.ar/wp-content/uploads/2015/05/3-FERNANDEZ-LARCHER.pdf>

FISCHBARG, A. y COSSO, O.: s/t. Trabajo presentado en el marco del Seminario “Instituciones de Ciencia y Tecnología”. Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, Universidad de Buenos Aires, 2011.

FRANCO, M.: *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

GREÑO VELASCO, J.E.: “Tecnología nuclear y cooperación regional en el Cono Sur”, 1977, pp. 193-211. Disponible en: <file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Dialnet-TecnologiaNuclearYCooperacionRegionalEnElConoSur-2496167.pdf>

GRIMBERG, M.: “Poder, políticas y vida cotidiana. Un estudio antropológico sobre protesta y resistencia social en el área Metropolitana de Buenos Aires”. *Revista de Sociología y Política Curitiba*, 2009, Vol. 17, N° 32, pp. 83-94. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=23814275006>

HARRIAGUE, S. et al.: “Una mirada a la CNEA de los primeros años, con vistas al futuro”. Buenos Aires, XXXIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN), 2006.

HURTADO, D.: “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, Vol. 5, N°13, 2009, pp. 27-64.

HURTADO, D.: *La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso: 1930-2000*. Buenos Aires, Edhasa, 2010.

HURTADO, D.: *El sueño de la Argentina atómica. Política, tecnología nuclear y desarrollo nacional (1945-2006)*, Buenos Aires, Edhasa, 2014.

LATOUR, B.: *Cogitamus. Seis cartas sobre las humanidades científicas*. España, Paidós. 2012.

MAQUEDA, E.: “Ciencia y tecnología en la actividad nuclear”. En: *Ruptura y reconstrucción de la ciencia argentina*, 2009, pp. 64-69. Disponible en:

http://www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/Ruptura_y_reconstruccion.pdf.

MARZORATI, Z.: “Plantear utopías. La formación de la comunidad científica: CNEA (1950-1955)”. *Cuadernos de Antropología Social*, N° 18, 2003, pp. 123-140. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n18/n18a09.pdf>

NIEVAS, F.: “Las tomas durante el gobierno de Cámpora”. Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 2000.

OSZLAK, O.: “Política y organización estatal de las actividades científico-técnicas en la Argentina: Crítica de modelos y prescripciones corrientes”, Doc. CEDES, *Serie Estudios Sociales*, N°2, 1976.

PERÓN, J.D.: *Proyecto Nacional*. Buenos Aires, CS Ediciones, 2005, pp. 175-187.

QUIRÓS, J.: *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida)*. Buenos Aires, Antropofagia, 2011.

RODRÍGUEZ, M.: “Avatares de la energía nuclear en Argentina. Análisis y contextualización del Plan Nuclear de 1979”, *H-industri@*, Año 8, N°15, 2014, pp. 30-55. Disponible en: <http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/730/1352>

ROMERO, L. A.: “La primavera de los ‘70”, en: Tchach, C. (comp), *La política en consignas. Memorias de los*

setenta. Rosario, Homo Sapiens, 2003.

SPIVAK, A.: "Un pueblito lejano de ingenieros y físicos: Primeras aproximaciones etnográficas al Instituto Balseiro", Rosario, *II Jornadas de la Cuenca del Plata*, 2002.

SPIVAK, A.: "Fondos públicos, proyectos tecnológicos y violencia estatal: tensión de memorias de dictadura en una institución tecnocientífica argentina", *Revista Mana*, 2015, en prensa.

SPIVAK, A. y GÁRGANO, C.: "Memoria, historia reciente y estudios CTS: una revisión de las tensiones en torno a las trayectorias de CNEA e INTA durante la última dictadura argentina (1976-1983)". En: Arellano, A.; Kreimer, P.; Velho, L. y Vessuri, H., (ed.), *Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la ciencia, la tecnología y el conocimiento*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014, p. 101-112.

SVAMPA, M.: "El populismo imposible y sus actores", en: James, D., *Nueva Historia Argentina, 1955-1976*. Buenos Aires, Sudamericana, Tomo IX, 2003. Disponible en: <http://maristellavampa.net/publicaciones-ensayos.shtml>

VARSÁVSKY, O.: *Ciencia, Política y Cientificismo*. Caracas, Venezuela, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2007.

VESSURI, H.: "O inventamos o erramos". *La ciencia como idea-fuerza en América Latina*. Buenos Aires, Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 2007.

VISACOVSKY, S.: "El temor a escribir sobre historias sagradas". En: Frederic, S. y Soprano, G. (comps.), *Cultura y Política en Etnografías sobre la Argentina*. Universidad Nacional de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 2005, pp. 271-313.

VISACOVSKY, S.: "Cuando las sociedades conciben el pasado como "memoria": Un análisis sobre verdad histórica, justicia y prácticas sociales de narración a partir de un caso argentino". *Revista Antípoda*, N°4, 2007, pp. 49-74. Disponible en:

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/-data-Revista_No_04-04_Miradas_1.pdf.

Fuentes

APCNEA, Acta N°148, 4 de junio de 1973.

APCNEA, Acta N°149, 8 de junio de 1973.

APCNEA, Acta N°150, 11 de junio de 1973.

APCNEAN, Sitio web de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear: <http://www.apcnean.org.ar/>

ATCNEA, Sitio web de la Asociación de Técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica: <https://es-la.facebook.com/pages/Atcnea-Asociación-de-Técnicos-de-la-CNEA/525102084168305>

CLARÍN, "Ocuparon y piden la intervención de Organismos Técnico-Científicos", Sección Gremiales, Jueves 7 de junio de 1973, p. 14

CLARÍN, "Ayer se produjeron nuevas ocupaciones", Sección Gremiales, Sábado 9 de junio de 1973, p. 10.

CLARÍN, "Solicitada", Sección Gremiales, Domingo 10 de junio de 1973, p. 16.

CNEA. Informe sobre la Central Nuclear II. Buenos Aires, CNEA. 3 de agosto de 1973.

CNEA. "Mecanismos de participación del personal". Documento elaborado por la Mesa de Trabajo N° 7. Buenos Aires, CNEA. 30 de octubre de 1973.

CNEA. "Anteproyecto" Resultados producidos por las Mesas de Trabajo del Consejo Coordinador. Buenos Aires, CNEA. 1° diciembre 1973.

DECRETO N° 20/1976. Boletín Oficial, 29 de marzo de 1976. Disponible en:

<http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle>.

DECRETO N° 302/1979, Boletín Oficial, 14 de febrero de 1979. Disponible en:

<http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle>.

DIARIO POLÍTICA OBRERA, "La ocupación de INTA Castelar", 22 de junio de 1973, p. 6.

LA OPINIÓN, "Intervinieron dos centros tecnológicos", Sección Educación, Martes 12 de junio de 1973, p. 21.

LA PRENSA, "Designáronse interventores en tres organismos", Sección Primera, Martes 12 de junio de 1973, p. 13.

LA PRENSA, "Nuevas ocupaciones en el INTA", Sección Primera, Jueves 14 de junio de 1973, p. 4.

Consensos y disensos sobre el desarrollo nuclear argentino en la última dictadura

Ana Spivak L'Hoste
(CONICET-UNSAM)

Introducción

Una de las cosas que más llamó mi atención en el trabajo de campo que realicé en distintos ámbitos de la CNEA desde hace más de una década es la tensión que tiene a la lectura sobre lo acaecido en la institución durante la última dictadura cívico-militar. Una tensión que articula sentidos y valoraciones sobre los eventos, individuos y proyectos así como sobre los cambios que se sucedieron en la institución durante ese período.

Es frecuente leer y escuchar que CNEA atravesó una de sus mejores etapas –si no la mejor– durante ese régimen dictatorial. Se leen y escuchan afirmaciones de este tipo en diálogos con miembros de la institución, en artículos periodísticos o de divulgación, en documentos institucionales y en distintos trabajos académicos¹. Llama la atención esta lectura respecto de la institución durante la dictadura, período mayormente asociado a la violencia política y al terrorismo de estado² así como a la especulación financiera y a la desindustrialización.³ Período que, a su vez, agudizó las dificultades que venían enfrentando los organismos dedicados a la formación y producción tecnocientífica –intervención de universidades, docentes desaparecidos, despedidos y exiliados, reducción de presupuesto y personal, etc.–.⁴ Un último factor hace aún más llamativa esa lectura. Se trata de la diversidad de voces que la expresan: antiguas autoridades, analistas, administradores y personal activo y retirado de la CNEA.

¹ Entre los trabajos académicos que así califican el período dictatorial en CNEA se destacan, entre otros, Ciapusio, H.: “Sabato y la tecnología”, en Ciapusio, H. (ed.) *Repensando la política tecnológica. Homenaje a Sabato*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1994, pp. 11-78, Albornoz, M.: *Política Científica*. Maestría de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Universidad Virtual de Quilmes, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1999, Albornoz, M.: “Argentina: oportunidades y obstáculos”, *Revista TodaVIA*, vol. 7, 2004, pp. s/n. Consultado en www.revistatodavia.com.ar el 15 de marzo de 2007 y Hurtado, D. “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64.

² Palermo, V. y Novaro, M.: *La Dictadura militar (1976-1983)*. Buenos Aires, Paidós, 2003.

³ Schavarzer, J.: “Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de Martínez de Hoz”, *Desarrollo Económico*, vol. 23, N.º 91, 1983, pp. 395-422.

⁴ Para profundizar sobre los efectos de la dictadura en universidades y organismos de producción de ciencia y tecnología argentinos ver Oteiza, E.: *La Política de Investigación Científica y Tecnológica Argentina. Historia y Perspectivas*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992, Perez Lindo, A.: *Universidad, Política y Sociedad*. Buenos Aires, Eudeba, 1985, Kauffman, C.: *Dictadura y educación. Tomo 2*. Buenos Aires, Mino y Davila, 2003, Hurtado, D. “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64 y La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso: 1930-2000. Buenos Aires, Edhasa, 2010 y Bekerman, F.: “La expansión de las research capacities en tiempos de dictadura: la política de creación de institutos en el CONICET y su impacto en la estructura del sistema científico argentino (1974-1983)”, *Estudios*, N.º 25, 2011, pp. 121-140.

Ahora bien, esta no es la única lectura sobre el régimen dictatorial en la institución. La interpretación del pasado, por más consensual u homogénea que aparezca, nunca es única ni compartida por la totalidad del grupo al que refiere, sino que se abre a marcos alternativos respecto de hechos que se relatan. En este caso, se abre a lecturas que confrontan esta línea de interpretación y, sobre todo, su valoración positiva.

El propósito de este texto es analizar la tensión interpretativa y valorativa que atraviesa la historia de la etapa dictatorial en CNEA. Una tensión tan histórica como vigente, que involucra actores, relatos y acciones e invita a profundizar sobre la disputa que tiene a ese período como objeto. Una disputa en la que convergen controversias respecto de decisiones tecnológicas, sobre los usos del presupuesto público y sobre la violencia de estado en la institución. Controversias que, además, operan como excusa para revisar las nociones y valoraciones acerca de la tecnología que subyacen a la tensión en cuestión.

A esos fines abordaré materiales elaborados en el marco del trabajo de campo que realicé en torno de la institución desde comienzos de los años 2000.⁵ Un trabajo de campo multisituado que, multiplicando lugares de observación, participación y reflexión,⁶ me llevó a registrar entrevistas de carácter abierto, diálogos informales y eventos así como acceder a materiales históricos, informes técnicos, discusiones colectivas o privadas vía correo electrónico, documentos institucionales y textos publicados o inéditos escritos por interlocutores de campo. En todo caso se trata de materiales que explicitan interpretaciones y valoraciones del mundo al cual refieren y habilitan la comprensión, siempre parcial, de las experiencias de los actores sociales que formaron parte de ese mundo.⁷

La CNEA se creó en 1950 durante el gobierno de Juan Domingo Perón con el objetivo de asesorar al estado nacional en materia nuclear y coordinar las actividades relativas a ese campo tecnocientífico. Sus primeros años se asocian a la formación de recursos humanos y primeros pasos en investigación y desarrollo (I+D) en disciplinas y técnicas ligadas a distintas áreas de la física, a la radioquímica, la minería y los metales. Con el cambio de gobierno en 1955 y otras autoridades en la institución se pusieron en marcha nuevos proyectos, algunos de ellos de corte más tecnológico como la construcción de reactores de investigación. En el año 1964 la CNEA realizó un estudio de factibilidad para incorporar la tecnología nuclear en la matriz energética argentina. Esta actividad, sin precedentes en el país,⁸ derivó en la decisión de construir

⁵ Este trabajo de campo sumó, desde el año 2001, estancias de distinta duración en varios ámbitos de la institución –inclusive la realización de una beca de perfeccionamiento de 14 meses en la sede central de CNEA–.

⁶ Marcus, G.: “Ethnography in/of the world system: the emergence of multisited ethnography”, *Annual Review of Anthropology* N.º 24, 1995, pp. 95-117.

⁷ Chafe, W.: “Some things that narratives tell about the mind”, en Britton, B. y Pellegrini A. (ed.) *Narrative thought and narrative language*, Londres, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1990, pp. 79-98 y Bruner, J.: *La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

⁸ Hurtado, D.: “Excelencia versus contingencia: origen y consolidación del Instituto Balseiro”, *Ciencia Hoy*, vol. 15, N.º 88, 2005, pp. 14-19 y Hurtado, D. “De ‘átomos para la paz’ a los reactores de potencia. Tecnología nuclear y diplomacia en la Argentina (1955-1976)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 2, N.º 4, 2005a, pp.41-66.

Atucha 1, primer reactor de potencia en actividad desde 1974 en Lima, provincia de Buenos Aires, y luego el CANDU, que opera en Embalse Río Tercero, Córdoba, desde 1984.

Durante la última dictadura la política nuclear fue prioridad de agenda. Sobre la base de lineamientos previos, fundamentalmente la expansión de la tecnología nuclear en la matriz energética, se diseñó un plan para construir 4 nuevas centrales atómicas.⁹ Las autoridades de la CNEA establecidas por la junta militar contaron con un aumento de presupuesto para lanzar e impulsar una serie de proyectos ligados al desarrollo nuclear (creación de empresas, compra de equipos, programas de I+D) pese a la oposición internacional al desarrollo de actividades nucleares en Argentina derivada de la negativa a firmar, por parte de las autoridades nacionales, los tratados relativos al control de la proliferación de material nuclear.¹⁰

Esta suerte de breve línea de tiempo institucional fue reconstruida a partir estudios elaborados mayormente por investigadores de la historia y las ciencias sociales que fueron publicados en libros y revistas académicas. El matiz descriptivo de esta línea temporal apunta a dar un marco general que permita encuadrar la discusión que se erige en torno del fragmento de historia de la CNEA delimitado por la dictadura. Más precisamente, encuadrar aquello que refiere a los hechos, actores y procesos que se ponen en tensión respecto de ese período. Ahora bien, en las páginas que siguen la descripción más despojada de los acontecimientos quedará de lado. Puntualmente, trabajaré al nivel de las interpretaciones y valoraciones que realizan tanto los académicos cuyos textos consulté para elaborar esa síntesis histórica como las diversas voces que desde la institución recuerdan esa etapa. Voces que, además, entramadas o retomadas en las investigaciones que historiadores y científicos sociales realizaron sobre la CNEA reafirman las controversias que orientan el análisis que aquí presento.

Controversias y dictadura

Pese a la débil situación de la economía argentina cuando asumió la junta militar, y a diferencia de lo sucedido en la mayor parte de las universidades y centros de I+D, el presupuesto de la CNEA creció,¹¹ ligado a la importancia con que se proyectaba al desarrollo nuclear con fines pacíficos.¹² Esa proyección tomó forma con la aprobación

⁹ Alcañiz, I.: "Cincuenta años de política nuclear en la Argentina", *Ciencia Hoy* vol. 15, N.º 88, 2005, pp. 20-25.

¹⁰ En la tecnología nuclear se combinan usos pacíficos y bélicos. Luego de las explosiones atómicas que cerraron la Segunda Guerra Mundial los países que ya manejaban dicha tecnología intentaron restringir y controlar su desarrollo. A esos fines se formularon una serie de tratados internacionales para evitar la proliferación de material atómico e impedir la construcción de nuevo armamento nuclear. Ahora bien, no todos los países adhirieron a dichos tratados al momento de su elaboración. Argentina, por ejemplo, argumentando que el acuerdo a estos impedía el desarrollo de tecnologías estratégicas para el desarrollo nacional –siempre pensando en usos pacíficos– no firmó o ratificó los tratados hasta entrados los años 90 (Tlatelolco en 1992 y el Tratado de No Proliferación (TNP) en 1994).

¹¹ Castro Madero, presidente de la CNEA de ese período, estimaba, en un escrito de 1976, que el monto global de ese presupuesto hasta 1985 sería de 5.500 millones de dólares, 3.500 millones de los cuales serían insumos nacionales provistos por el Tesoro Nacional (Hurtado, D., 2009, op.cit).

¹² Como sugiere Hymans, pese a los rumores acerca de un eventual interés por el desarrollo armamentístico

en 1979 de un plan que autorizaba la construcción de cuatro reactores de potencia y plantas tecnológicas dirigidas a completar el ciclo del combustible nuclear. La puesta en marcha de ese plan multiplicó por cuatro el presupuesto institucional superando los 1.000 millones de dólares anuales.¹³

El incremento presupuestario de la CNEA durante la dictadura condensa la primera controversia respecto del período. Por un lado, dicho incremento es objeto de una apreciación positiva que lo asocia a la expansión de las actividades y proyectos de I+D y la generación de competencias tecnológicas consideradas deseables para cualquier país, más aún en el caso de las tecnologías de alta sensibilidad estratégica y simbólica como la nuclear en los años 70 estrechamente ligada al desarrollo industrial vía la posibilidad de provisión energética. Pero por otro lado aparece también una lectura crítica respecto de este incremento presupuestario. Una lectura que cuestiona la gestión y el uso del presupuesto principalmente en la marcha de los proyectos de envergadura como los vinculados a la construcción de centrales nucleares o las plantas de reprocesamiento y enriquecimiento. El hermetismo de las negociaciones con los responsables de obra y proveedores, los cronogramas incumplibles, la firma de contratos inmanejables para una institución de las características de CNEA (I+D) y el incumplimiento de los objetivos propuestos son algunos de los argumentos.¹⁴ Otros argumentos se centran en los efectos que tuvo la disponibilidad de grandes partidas del presupuesto en la adquisición de insumos. Los emprendimientos de las primeras décadas de la CNEA se hicieron con una creciente participación de la industria local. Esto se debió, en parte, a razones de índole ideológicas,¹⁵ y en parte, económicas. En esta última dirección, las restricciones de presupuesto previas a 1976 obligaron a buscar proveedores en el país con el amparo en leyes de promoción del consumo de productos nacionales. Ahora bien, el cambio de escala del presupuesto puso fin a esas restricciones permitiendo adquirir, en el mercado internacional, bienes y servicios, y llevando así a la pérdida de capacidades para buscar opciones de adquirir insumos en el país y al desmantelamiento de la red de proveedores locales.

El segundo eje de controversias se focaliza en torno de los proyectos en marcha en

nuclear, no hay pruebas que indiquen que los proyectos de la CNEA tuvieran otro fin que los usos pacíficos de dicha tecnología (2001).

¹³ (Poneman, 1987: 174-75 citado en Hurtado, D. "Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)", *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 39).

¹⁴ Muchas de las obras lanzadas en este período –excepto la fábrica de combustibles Conuar y la central nuclear de Embalse– quedaron inconclusas y otras, como la planta de agua pesada, se terminaron mucho después con un costo muy superior del proyectado. Así, parte de esos proyectos "se convirtió en un sumidero de fondos, que solo servían para pagarles los supuestos improductivos a los grandes contratistas" afirma Quilici, D. en: "Desarrollo de proveedores para la industria nuclear argentina. Visión desde las Centrales Nucleares", *H-industria. Revista de historia de la industria argentina y latinoamericana*, Año 2, N.º 1, 2010, pp. s/n. Consultado el 14 de mayo de 2008 en www.hindustria.com.ar/images/client_gallery/QuiliciH-industria2008nro1. Así, los mencionados proyectos operaron como funcionales, afirma Hurtado (2009, op.cit), a la estructura corporativa de la economía argentina y sobredimensionando, a su vez, la capacidad económica del país.

¹⁵ Los responsables intelectuales del desarrollo nuclear en el país proyectaban al sector como base de para un desarrollo autónomo nacional y, específicamente, como industria industrializante, como afirman Sabato, J. y Martín, J. M: en "La construction d'une centrale nucléaire en Argentine et ses conséquences sur le processus d'industrialisation du pays", *Tiers-Monde*, vol. 8, N.º 31, 1967, pp. 723-730. Es decir, proyectaban al sector nuclear como creador de industrias a partir del estímulo de la producción en el país de insumos y componentes.

la CNEA durante la dictadura. Contrastando la tendencia de precarización industrial que caracterizó el período,¹⁶ el sector nuclear persiste como nicho de búsqueda de autonomía y desarrollo de la industria.¹⁷ Aunque los objetivos del plan nuclear aprobado en 1979 no se alcanzaron en su totalidad, efectivamente se pusieron en marcha, en esos años, obras de envergadura destinadas a la producción energética y al desarrollo de capacidades en tecnología nuclear. Entre ellas se destacan la culminación de la construcción de la central atómica Candu,¹⁸ y el comienzo de la tercera, Atucha 2.¹⁹ También se crearon la fábrica de combustibles para reactores, Conuar,²⁰ la empresa INVAP,²¹ y se inició la construcción de las plantas de reprocesamiento de plutonio y de enriquecimiento de uranio. Es, en parte, la suma de estos desarrollos lo que justifica afirmaciones como que durante la dictadura CNEA “concretó buena parte de sus logros tecnológicos más importantes”.²² Sin embargo la alta valoración de esos proyectos tiene su contraparte. Otras voces remarcan como esos proyectos, costosos y de compleja realización, desestabilizaron las lógicas de trabajo y los objetivos que se habían afianzado en los años previos consolidando a CNEA como organismo de formación de profesionales y técnicos, I+D y producción tecnológica en función de las necesidades y condiciones locales:

“Lo que yo no sé es si no fue en ese entonces cuando desapareció el gran objetivo, todos juntos alcanzar la autonomía nuclear, todos juntos lograr la autonomía de ciclo combustible. Eso pasó a ser: una parte, el proyecto de elementos combustibles, otra parte, el proyecto de celdas calientes, otra parte: reprocesamiento, y cada uno se auto alimentaba de esos servicios genéricos y de esas demanda)”.²³

Desde esta perspectiva, la dictadura cambió el rumbo de la CNEA que pasó de orientarse según un propósito institucional a administrar proyectos específicos que operaban como unidades diferenciadas cuya ejecución superó las competencias

¹⁶ Schavarzer, J.: “Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de Martínez de Hoz”, *Desarrollo Económico*, vol. 23, N.º 91, 1983, pp. 395-422.

¹⁷ Hurtado, D. “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64.

¹⁸ Construida en Embalse y formalmente inaugurada en mayo de 1983, esta central contó para su construcción con poco más del 50% de participación nacional (Hurtado, 2009, op. cit).

¹⁹ La licitación para construir Atucha 2 se abrió en 1979 previendo la participación nacional en la ingeniería de suministros, montaje y puesta en marcha (Quilici, 2008, op. cit). La adjudicataria fue la empresa alemana Siemens KWU. Sin embargo, las obras se detuvieron a mediados de los años 80 retomándose recién en 2006 (y poniéndose en funcionamiento recién en el año 2014) con dos décadas de pérdida de experiencia en el sector.

²⁰ La historia de esta fábrica de elementos combustibles nucleares se puede consultar en Quilici, D. “La fabricación de los elementos combustibles para los reactores nucleares de potencia en Argentina: Un caso de inversiones productivas realizadas por un organismo de ciencia y técnica”, *Revista de CNEA*, Año 10, N.º 37-38, 2010, pp.: 23-39.

²¹ INVAP S. E. es una empresa que pertenece a la CNEA y a la provincia de Río Negro dedicada a diseñar, producir y vender productos tecnológicos (fundamentalmente de las áreas nuclear y espacial) en el mercado local e internacional.

²² Hurtado, D. “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 2.

²³ Lerch es un ingeniero que ejerció como personal de la institución y luego fue proveedor en algunos de sus proyectos específicos. Esta cita está tomada de Lerch, C.: “Investigación científica y desarrollo tecnológico. Extensión y servicios”, en las actas del seminario *Análisis de Instituciones Científicas y Tecnológicas. La Comisión Nacional de Energía Atómica*, Buenos Aires, Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Buenos Aires, 1994, pp. s/n.

institucionales. Otros dos argumentos discuten la apreciación positiva de los proyectos de la CNEA de esos años. El primero relativiza el papel de sus autoridades en la creación de INVAP, recordando que, aun creada en 1976, la empresa se desprendió de un laboratorio preexistente (Investigaciones Aplicadas del Centro Atómico Bariloche) apropiándose consecuentemente de las capacidades y recursos allí formados. El segundo cuestiona a los proyectos de reprocesamiento de plutonio y enriquecimiento de uranio:

“CNEA separó 450 miligramos de plutonio en una pequeña planta de piloto, la PR1 en 1970 (...) esa experiencia se perdió. (...) después vinieron los enormes desastres realizados por la gestión de la dictadura como la LPR,²⁴ que no llegó a nada y además era muy difícil de justificar económicamente (...) Respecto a enriquecimiento de uranio enriquecer se enriqueció, pero como ya te dije se entró en un marasmo de malas gestiones y sin saber para que se enriquecía que llevó al fracaso del dominio de la tecnología que además era una tecnología por difusión gaseosa que hoy prácticamente está abandonada”.

Afirma, en un diálogo personal, un ingeniero que participó de algunas etapas del proyecto de reprocesamiento. Y revisa, en esta afirmación, el valor de los resultados de un desarrollo de tecnología a la luz de sus efectos económicos preguntándose, por un lado, el sentido de destinar una parte central del presupuesto para enriquecer uranio sin proyecciones concretas de uso y, por otro lado, sobre el cambio de escala de un programa de investigación, en este caso el de reprocesamiento, sin analizar su factibilidad ni sus potencialidades económicas.

A las controversias respecto del presupuesto ejecutado por la CNEA y sus proyectos tecnológicos se suma otro eje: la tensión de lecturas acerca de los efectos del terrorismo de estado en la institución. Un eje de tensión entrama interpretaciones y apreciaciones respecto de las violencia ejercida por el gobierno militar al seno de la CNEA y, centralmente, de las responsabilidades de Castro Madero, su presidente. En palabras de un profesional entrevistado:

“Cuando se produce el golpe (...) me echan del Comahue y me echan del CONICET y ahí entonces entré a Invap (...). Eso tuvo cierto interés porque con mis antecedentes políticos este no iba a pasar el filtro de la SIDE. Entonces hubo un acuerdo entre Baroto²⁵ y Castro Madero de que me admitían medio bajo cuerda sin cumplir con los con las inspecciones del caso (...) y decidimos quedarnos con la protección de Castro Madero”.

Pone en evidencia, con sus palabras, los dos argumentos centrales que particularizan

²⁴ LPR nombra a la Planta de Reprocesamiento de Plutonio que comenzó a construirse en Ezeiza tras la experiencia de los proyectos pilotos denominados PR1 y PR2 y cuya obra se detuvo en 1991 –tras pagar cerca de 40 millones de dólares a Techint, la principal empresa contratista– debido a exigencias norteamericanas (Hurtado, 2009, op. cit).

²⁵ Baroto era, en ese momento, la autoridad máxima de INVAP S. E., empresa cuyos accionarios conformaban la propia CNEA y el estado provincial de Río Negro.

los efectos de la violencia dictatorial en la CNEA. El primero de ellos es el de la *protección*. El segundo, ligado al anterior, es la posibilidad de desarrollo profesional en la institución más allá del posicionamiento político e ideológico del trabajador. En ese sentido numerosos testimonios dan cuenta de cómo en distintas dependencias de la CNEA se protegió a sus trabajadores y de cómo, además, el responsable de esa protección era su presidente. Breve, estos testimonios subrayan que, mientras en otras instituciones de ciencia y tecnología hubo trabajadores expulsados, exiliados o desaparecidos, en la CNEA, gracias a Castro Madero y a su vinculación con la Marina (fuerza que integraba) se garantizó la continuidad de buena parte de su personal a pesar de sus posiciones políticas e ideológicas.

Ahora bien otros testimonios mencionan, tensionando la idea de protección, tanto el impacto de la violencia de estado en el cotidiano de los trabajadores protegidos como sus propias limitaciones. Entre los impactos se destacan la existencia de listas negras en la institución, los acuerdos entre las autoridades con aquellos que se protegía, las restricciones de los protegidos para progresar profesionalmente (no tenían acceso a subsidios, a ascensos en sus carreras, a viajes por ejemplo), la política de premios y castigos y el silencio de autoridades y colegas que acompañó esta situación durante todo el período. Las limitaciones de esa protección refieren, más precisamente, a los detenidos, desaparecidos y cesanteados de la institución. Según informa la Comisión de Derechos Humanos de la CNEA durante la dictadura hubo más de 25 secuestrados, 15 de los cuales continúan desaparecidos, 107 prescindidos y 120 cesanteados. En dicho período se contabilizan, también, al menos 370 renuncias, muchas de ellas, debido a la persecución política e ideológica y otros tantos trabajadores que, sin renunciar, descubrieron que trabajaban con doble legajo –el segundo con información sobre actividades o posiciones políticas– y en condiciones de ocultamiento y la amenaza de despido o detención.

Apuntes sobre tecnología a modo de cierre

Las tres controversias que organizan, a los fines de este análisis, las interpretaciones y valoraciones sobre la dictadura en CNEA –sobre la partida presupuestaria y sus usos, sobre los proyectos y sobre los efectos de la violencia de estado– tienen al menos un denominador común al que quiero referirme en estos párrafos finales. Este consiste en que dichas controversias se erigen a partir de posicionamientos, más o menos explícitos según el interlocutor o la fuente, acerca de qué es la tecnología y de cuál es su valor para el desarrollo del país. Con el fin de introducir esta última reflexión presentaré dos últimos materiales. El primero es una cita textual del libro derivado de mi tesis doctoral. El segundo es parte de un diálogo personal por escrito con uno de mis interlocutores de campo, un ingeniero de larga trayectoria en la institución a propósito de un texto que reseña el proyecto de enriquecimiento de uranio.

Fragmento 1:

“Como afirma Alcañiz, al final de la dictadura el programa nuclear “se aproximaba al control del ciclo completo de combustible, desde la minería del uranio,

su enriquecimiento y la fabricación de los elementos combustibles, hasta el procesamiento del combustible gastado y la disposición de la basura radiactiva” (2005: 24). Una serie de resultados que se consideran excepcionales para un país en desarrollo (Hurtado, 2010) y que, pese a ser impulsados por la junta militar a cargo del gobierno, se justificaban por razones de desarrollo económico más que de potencialidades bélicas (Hymans, 2001).²⁶

Fragmento 2:

“Como creo que se demuestra a medida que se avanza con el texto que nunca se llegó al dominio de la tecnología. Vos Ana sabés, por tu formación, que tecnología es tener la capacidad de producir industrialmente a precios competitivos, sí es un producto o servicio comercial, y a cualquier precio “pagable” si es una cuestión estratégica. (...) Ellos en Pilca [por Pilcaniyeu, la localidad en que se sitúa la planta donde se llevó a cabo el proyecto] se largaron a construir una planta industrial sin ningún estudio económico serio además de que no tenían a quien carajo venderle el supuesto uranio enriquecido. Yo te quiero insistir que los proyectos que heredó o se crearon durante la gestión de CM [por Castro Madero] que llegaron a feliz término, fueron conducidos por gente que se había formado en las épocas gloriosas de la CNEA: el RA 6 con la tradición del RA 1 y el RA 3; el TANDAR bajo la dirección de la escuela de física de Buenos Aires. El desarrollo de los EECC [elementos combustibles] y posteriormente CONUAR en el marco del Dpto. de Metalurgia. En cambio en reprocesamiento [por el proyecto de reprocesamiento de plutonio] se produce un total recambio, solo en la producción de uranio metálico (exitosa) quedan algunos históricos”.

El fragmento de mi trabajo doctoral replica la tesis que destaca como logros tecnológicos a los avances realizados durante la dictadura en el campo nuclear. Desde esta perspectiva, como señala esta síntesis de voces de perfil académico, los desarrollos diseñados y puestos en marcha en esta materia, considerada como estratégica en las esferas nacional e internacional por sus potencialidades en energía y defensa, implican un paso más respecto de las capacidades tecnocientíficas alcanzadas en las etapas previas. E implican, asimismo, un cambio de escala –de inversión, de envergadura de los proyectos, de objetivos– siempre en coherencia con opciones tecnopolíticas y económicas que guiaron el devenir institucional: la orientación pacífica del campo nuclear, la búsqueda de creciente autonomía nacional y el impulso a la participación de la industria local en sus distintos emprendimientos. Sobre la base de este análisis, el avance en la resolución de complejidades técnicas, la apuesta a desarrollar competencias tecnológicas que pocos países manejan (en un contexto internacional en el cual, además, había una fuerte regulación y vigilancia respecto del desarrollo y manejo de dichas competencias) y el alcance de resultados en los distintos proyectos es rescatado positivamente. No importa tanto de qué tipo de resultado se trate –los gramos de uranio que se enriquezcan, por ejemplo– ni a qué se destinen, los costos financieros o políticos que acompañen a esos resultados

²⁶ Spivak L'Hoste, A.: *El Balseiro. Memoria y emotividad en una institución científica*. La Plata, Al margen, 2010.

ni la batería de disposiciones o mecanismos decisorios que hubiera orientado la ejecución del proyecto en cuestión. El éxito no solo es leído por la calidad o apropiabilidad de cada resultado específico, sino en términos de reposicionamiento e incremento de las competencias del país en materia de desarrollo de tecnologías estratégicas. Más estratégicas cuando el contexto nacional se asume como periférico respecto del marco geopolítico hegemónico y se reconocen sus potencialidades para la industrialización.

Ahora bien, el segundo fragmento de campo revisa esa apreciación del desarrollo tecnológico directamente asociada al carácter estratégico, la generación de competencias y al reposicionamiento nacional. Desde la perspectiva de este ingeniero, la tecnología es tecnología, valga la reiteración del término, si redundan en procesos o productos industriales cuyos precios sean competitivos –o pagables en el caso de las estratégicas, aclara–. El tipo de resultado y sus proyecciones de uso y venta importan para hablar de tecnología. Por eso, a su juicio, la cantidad de uranio que se enriqueció con una tecnología que al día de hoy resulta casi obsoleta, no tiene valor tecnológico específico. En esa misma dirección, cuestiona el cambio de escala de algunos de los proyectos. El de reprocesamiento de plutonio que pasó de una exitosa escala de laboratorio a una planta industrial de elevados costos que nunca se terminó de construir, por ejemplo.²⁷ Para este interlocutor los logros tecnológicos de este período se ligan con modalidades de trabajo y escalas de proyectos con antecedentes directos –los reactores de investigación, el diseño de combustible– y con competencias que ya se manejaban en la institución.

La primera posición se para en la continuidad de la apuesta nuclear en la ampliación de la matriz energética nacional para caracterizar el avance tecnológico de dicho período más allá de que algunos proyectos no hayan llegado a buen puerto o de que las erogaciones públicas hayan sido sobredimensionadas. La segunda postura cuestiona esa evaluación revisando los mecanismos, decisiones y supuestos sobre tecnología de dichos proyectos a la luz de lo que considera logros anteriores. En todo caso, cada posición hace eco de distintas formas de concebir y evaluar aquello que se define como tecnología. Distintas formas que, además, coexisten tanto en el pasado de la institución al que las interpretaciones y valoraciones refieren como en el presente desde el cual estas se activan.

Breve epílogo

Este texto tiene un final inconcluso. Un final que se abre, en realidad, hacia ese presente en el cual no solo es válido que las interpretaciones y las valoraciones dialoguen sobre dictadura y tecnología, como intenté hacer en los párrafos anteriores, sino abordar con mayor profundidad las huellas concretas que dejaron las decisiones tecnocientíficas tomadas durante ese período, los caminos que se

²⁷ En este cambio de escala de los proyectos, la violencia de estado evidencia algunas marcas. Al menos en los muchos proyectos que quedaron trunchos o cuyos objetivos y dimensiones fueron reorientados a partir del alejamiento forzoso de quienes los habían creado o eran los responsables de su desarrollo y la imposición vertical de nuevos coordinadores de proyectos y autoridades en los distintos niveles de la institución.

interrumpieron o se reorientaron y las transformaciones institucionales a la luz de las dinámicas y opciones tecnológicas actuales. Esa tarea es enormemente fértil tanto en el caso de la CNEA así como en tantas otras instituciones tecnocientíficas del país. Tal vez este intento de explorar algunos de esos rastros en las controversias presentadas contribuya a realzar su vacancia y vigencia aportando algunas pistas para su problematización.

Bibliografía

ALBORNOZ, M.: *Política Científica*. Maestría de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Universidad Virtual de Quilmes, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1999.

ALBORNOZ, M.: "Argentina: oportunidades y obstáculos", *Revista TodaVIA*, vol. 7, 2004, pp. s/n. Consultado en www.revistatodavia.com.ar el 15 de marzo de 2007.

ALCAÑIZ, I.: "Cincuenta años de política nuclear en la Argentina", *Ciencia Hoy* vol. 15, N.º 88, 2005, pp. 20-25.

BEKERMAN, F.: "La expansión de las research capacities en tiempos de dictadura: la política de creación de institutos en el CONICET y su impacto en la estructura del sistema científico argentino (1974-1983)", *Estudios*, N.º 25, 2011, pp. 121-140.

BRIOZZO, F., SBAFFONI, M., HARRIAGUE, S. y QUILICI, D.: "A 40 años de la inauguración del RA-3: anécdotas, historias y algunas enseñanzas", *Revista de CNEA*, Año 7, N.º (27-28, 2007: 30-37).

BRUNER, J.: *La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

CIAPUSCIO, H.: "Sabato y la tecnología", en CIAPUSCIO, H. (ed.) *Repensando la política tecnológica. Homenaje a Sabato*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1994, pp. 11-78.

CHAFE, W.: "Some things that narratives tell about the mind", en BRITTON, B. y PELLEGRINI A. (ed.) *Narrative thought and narrative language*, Londres, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1990, pp. 79-98.

GUBER, R.: "Las manos de la memoria", *Desarrollo Económico* vol. 36, N.º 141, pp. 423-442.

HURTADO, D.: "Excelencia versus contingencia: origen y consolidación del Instituto Balseiro", *Ciencia Hoy*, vol. 15, N.º 88, 2005, pp. 14-19.

--- "De 'Átomos para la paz' a los reactores de potencia. Tecnología nuclear y diplomacia en la Argentina (1955-1976)", *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 2, N.º 4, 2005a, pp. 41-66.

--- "Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)", *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64.

--- *La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso: 1930-2000*. Buenos Aires, Edhasa, 2010.

HYMANS, J.: "Of Gauchos and gringos: why Argentina never wanted the bomb, and why America thought it did", *Security Studies*, vol. 10, N.º 3, 2001, pp. 153-85.

KAUFFMAN, C.: *Dictadura y educación. Tomo 2*. Buenos Aires, Mino y Davila, 2003.

LERCH, C.: "Investigación científica y desarrollo tecnológico. Extensión y servicios", en las actas del seminario *Análisis de Instituciones Científicas y Tecnológicas. La Comisión Nacional de Energía Atómica*, Buenos Aires, Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Buenos Aires, 1994, pp. s/n.

MAQUEDA, E.: "Ciencia y Tecnología en la actividad nuclear" en las actas del seminario *Ruptura y reconstrucción de la ciencia argentina*. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2007, pp. s/n.

MARCUS, G.: "Ethnography in/of the world system: the emergence of multisited ethnography", *Annual Review of Anthropology* N.º 24, 1995, pp. 95-117.

OTEIZA, E.: *La Política de Investigación Científica y Tecnológica Argentina. Historia y Perspectivas*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.

PALERMO, V. y NOVARO, M.: *La Dictadura militar (1976-1983)*. Buenos Aires, Paidós, 2003.

PÉREZ LINDO, A.: *Universidad, Política y Sociedad*. Buenos Aires, Eudeba, 1985.

QUILICI, D.: "Desarrollo de proveedores para la industria nuclear argentina. Visión desde las Centrales Nucleares", *H-industria. Revista de historia de la industria argentina y latinoamericana*, Año 2, N.º 1, 2010, pp. s/n. Consultado el 14 de mayo de 2008 en www.hindustria.com.ar/images/client_gallery/QuiliciH-industria2008nro1.

--- “La fabricación de los elementos combustibles para los reactores nucleares de potencia en Argentina: Un caso de inversiones productivas realizadas por un organismo de ciencia y técnica”, *Revista de CNEA*, Año 10, N.º 37-38, 2010, pp.: 23-39.

SABATO, J. y MARTIN, J. M.: “La construction d’une centrale nucléaire en Argentine et ses conséquences sur le processus d’industrialisation du pays”, *Tiers-Monde*, vol. 8, N.º 31, 1967, pp. 723-730.

SANTOS, E.: *El diablo de Maxwell*, Bariloche, Mimeo, (s/f)

SCHAVARZER, J.: “Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de Martínez de Hoz”, *Desarrollo Económico*, vol. 23, N.º 91, 1983, pp. 395-422.

SPIVAK L’HOSTE, A.: *El Balseiro. Memoria y emotividad en una institución científica*. La Plata, Al margen, 2010.

Crónicas de un proyecto tecnológico en un Instituto del CONICET: la Planta Modelo Experimental de Agua Pesada (INTEC/INGAR)

Victoria Castro
(SINEP/CONICET)

Introducción

Tomé contacto por primera vez con el Instituto para el Desarrollo Tecnológico de la Industria Química (en adelante INTEC), a principios de 2009 cuando –por cuestiones laborales– debí entrevistar a un investigador que, *a priori*, allí se desempeñaba. Fui citada en el edificio que el instituto tiene en la calle Güemes, en el centro de la ciudad de Santa Fe. Luego de realizar mi entrevista, el investigador me ofreció hacer una visita a su instituto y me condujo dos cuadras hasta otro edificio, perteneciente en realidad al Instituto de Desarrollo y Diseño (en adelante INGAR). Dada mi confusión, pregunté sobre la filiación institucional de mi anfitrión a lo que respondió: *somos como una gran familia, muchos investigadores de INGAR eran antes del INTEC*. Él pertenecía, en realidad, al INGAR.

Sus palabras hicieron eco cuando, en 2013, ingresé como personal administrativo del CONICET en el INTEC y el entonces director me dijo *Te vas a sentir como en tu casa, acá nos conocemos todos* para darme la bienvenida. Meses más tarde, escuché a un investigador del INTEC argumentaba, en contra de una mudanza programada, que ese edificio había sido *su casa*. Ahora bien este investigador no solo explicitó, en su argumentación contra la mudanza, un fuerte arraigo y sentido de pertenencia respecto del espacio físico de su lugar de trabajo, también avanzó en conectar ese espacio con el pasado de la institución. Porque con ese espacio físico que él defendía se reconocía todo lo que el Dr. Cassano había hecho por ellos y por ese instituto, agregaba asociando el edificio a un pasado específico –el pasado fundacional– y a la figura del fundador.

Alberto Cassano, químico de formación, regresó de Estados Unidos en julio de 1968 luego de realizar su Doctorado en Ingeniería en la Universidad de California. En 1971 creó el Departamento de Graduados de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (en adelante UNL) con el propósito de abrir el primer doctorado en ingeniería de la Argentina.¹ En 1972 se incorporó al Departamento de Graduados Ramón Cerro, tercer doctor en Ingeniería que tuvo el país. Paralelamente, se amplió el espacio de trabajo, se incrementó el personal (hasta formar un grupo de aproximadamente 25 personas) y se envió al primer becario a formarse en el exterior.

¹ Cassano formó un grupo de investigación dentro del Departamento de Química Industrial. Para ello reclutó a dos estudiantes, Rabera y Cerdá, y a dos docentes La Cava e Irazoqui. A ese grupo se lo conoció como el “Grupo de Graduados”. En 1971 se constituyeron como Departamento de Graduados de la Facultad de Ingeniería Química. Un año más tarde tenían 2 directores de investigación, 4 colaboradores principales, 8 principiantes y 6 técnicos. MATHARAN, G.: “Investigación y Universidad. El caso de la investigación química en catálisis heterogénea (1959-1972)”, VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2012, p.15.

Las actividades proyectadas para el Departamento de Graduados formaban parte, en realidad, de un plan de acción a largo plazo –redactado por el propio Cassano– con eje, por un lado, en la formación de recursos humanos altamente calificados y, por otro lado, en la creación de un centro multidisciplinario de investigación conformado por diferentes institutos. Sin embargo, la propuesta de creación de institutos, al menos en ese año, no prosperó, pese a que CONICET, la UNL y el Gobierno provincial de Santa Fe firmaran un convenio para armar el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas que los encuadraría.²

Hacia 1975 el Departamento de Graduados de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL fue visitado por miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que estaban explorando las capacidades de investigación y desarrollo existentes en el país para desarrollar un proyecto de diseño de una planta piloto de agua pesada.³ Ese mismo año, aunque de manera independiente, desde el Departamento de Graduados se reactivaron las negociaciones para crear un instituto, frustradas por el fracaso del convenio entre CONICET y la Universidad. Estas nuevas negociaciones llegaron a buen puerto cuando en junio de 1975 se crea el INTEC como instituto de doble dependencia, rectorado de la UNL y CONICET,⁴ y se nombra a Alberto Cassano como primer director.⁵ La dependencia directa respecto del rectorado de la universidad (y no de la Facultad de Ingeniería Química a partir de la cual había surgido el Departamento de Graduados) apuntaba, según el propio Cassano, no solo a lograr una estructura institucional más ágil y con cierto grado de autonomía, sino a posicionarse desde una concepción multi e interdisciplinaria en la producción tecnológica.⁶ Una posición que se enmarcaba en una serie de discusiones que tenían como eje la producción de ciencia y de tecnología en el país, a la relación entre ambas en realidad, a los tipos de conocimiento (básico, aplicado, desarrollo de productos), finalidades y prioridades relativos a esa producción, y que ha sido ampliamente analizadas desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología tanto a nivel local como internacional.⁷

² El 1976, un año después del fracaso de ese convenio, un CONICET en expansión a raíz de la política científica y tecnológica instaurada por el gobierno militar que focalizaba en la institución como estrategia de debilitamiento del rol de las universidades, consideradas como foco de conflicto, reflató la iniciativa de crear Centros Regionales. Con el apoyo de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se fundaron, en ese marco el CERIDE en Santa Fe (con la dirección de Cassano hasta 1979), el CENPAT en Puerto Madryn, el CRIBABB en Bahía Blanca y el CRICYT en Mendoza. Para un análisis de la expansión del CONICET y la creación de institutos durante la dictadura ver Bekerman, F.: *Reestructuración y dinámica del campo científico argentino durante la dictadura militar: el rol del financiamiento externo y las trayectorias académicas*. IECSAL-UNESCO, 2012. p. 2.

³ El ingeniero Aníbal Núñez, del área de Agua Pesada de la CNEA, visitó, además del Departamento de Graduados, a los grupos de Ingeniería Química de Bahía Blanca y de Ingeniería Química y Tecnología Química de la Universidad Nacional de La Plata.

⁴ Según el Convenio rubricado por el Rector de la Universidad Nacional del Litoral Dr. Celestino A. Marini y el Interventor del CONICET Dr. Vicente H. Cicardo y protocolizado por Resolución de Consejo Superior N.º 120, se establece el 25 de junio de 1975, como fecha de creación del Instituto. Un año y medio después, en diciembre de 1976 se crea el Centro Regional (CERIDE) y el INTEC junto al Instituto Nacional de Limnología (INALI) –creado en 1962– se integran a este.

⁵ En el INTEC, como sucedió en otros institutos creados en el mismo período, las autoridades “eran jóvenes, con poca antigüedad como miembros en la carrera del investigador (...) Constituían el grupo con mayor nivel de internacionalización: habían obtenido su doctorado en el exterior y becas de investigación en un país extranjero”. Bekerman, 2012 op.cit.

⁶ Cassano, A., “Análisis de un caso de Transferencia Tecnológica”, INTEC, Archivo de Dirección, 1980.

⁷ Para una profundización sobre estas discusiones ver Hurtado, D. “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y*

Lo que sigue no pretende detallar la historia del proyecto de desarrollo de agua pesada ni enumerar los acontecimientos que acompañan la consolidación del INTEC y la creación del INGAR en torno a este. Las páginas que continúan intentan, a partir de la articulación de documentos institucionales con las voces de algunos protagonistas, esbozar algunos de los aspectos centrales de un proceso complejo que involucró instituciones, actores, decisiones técnicas y políticas, obstáculos y expectativas en un contexto específico, el de la última dictadura cívico militar en Argentina. Un proceso no abordado con anterioridad y del cual se desprenden, al menos por ahora, más interrogantes que respuestas.

El proyecto de Planta piloto de agua pesada: los antecedentes

“Nuestra tarea estuvo asociada con la producción de energía nuclear para fines pacíficos con el empleo del uranio no enriquecido, lo que representa menor eficiencia que el que se usa en la mayor parte de los países desarrollados y que se denomina uranio enriquecido”.⁸

Esta cita, proveniente de uno de los últimos textos elaborados por Cassano antes de su muerte, el 12 de julio de 2014, permite introducir al proyecto que, según los entrevistados, consolidó la puesta en marcha del INTEC y derivó en la creación del INGAR, el proyecto se inició como Planta Piloto y luego pasó a Planta Modelo Experimental de Agua Pesada. Comencemos dando algunos datos acerca de este insumo de la tecnología nuclear y de los motivos en función de los cuales se decidió encarar dicho proyecto.

El agua pesada, que modera del flujo de neutrones y actúa como elemento de refrigeración, es un componente necesario para el funcionamiento de los reactores nucleares de producción de nucleoelectricidad que utilizan uranio natural como combustible. Ese es el caso de las tres centrales nucleares en funcionamiento en Argentina.⁹ La opción de utilizar este tipo de combustible, que incluye agua pesada como insumo, comenzó a tomar forma en el estudio de factibilidad que se desarrolló con vistas a incluir a la energía nuclear en la matriz energética argentina a fines de la década del 60. Una opción que se justificaba con fundamentos materiales –la disponibilidad de mineral uranio en el país– tanto como políticos: la búsqueda de independencia tecnológica¹⁰ y el incremento de capacidades autónomas en sectores claves de la industria asociados al desarrollo de tecnología nuclear (producción de elementos combustibles inclusive).¹¹ Esta misma opción se replicó cuando se decidió

Sociedad, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64) y Oteiza, E.: La Política de Investigación Científica y Tecnológica Argentina. Historia y Perspectivas. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.

⁸ Cassano, A. “*Las atracciones de la ingeniería química: una profesión que reclama por todo*”, Logros y errores en ingeniería y la educación del ingeniero, ANCEFN: Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Buenos Aires, 2015, pp. 11.

⁹ Atucha 1, en funcionamiento desde 1974, Embalse, desde 1983 y Atucha 2 desde 2014 utilizan uranio natural (o ligeramente enriquecido) en sus elementos combustibles. Hay otro tipo de reactores que funcionan con uranio enriquecido y agua liviana.

¹⁰ El uso de uranio enriquecido suponía una dependencia respecto de los proveedores de ese material ya que Argentina no contaba con la tecnología necesaria para enriquecer el uranio.

¹¹ Hurtado, D., “Cultura tecnológico-política sectorial en contexto semiperiférico: el desarrollo nuclear en

construir la segunda central de potencia, Embalse, emplazada en Río Tercero, con similares fundamentos.

En esa línea de pensamiento que apuntaba a explotar e impulsar recursos locales (sean minerales, humanos o industriales), el desarrollo nuclear argentino, con arraigo en CNEA, se propuso avanzar más allá de la elección del uranio natural. Avanzar, por ejemplo, en aquellas tecnologías anexas a la producción de nucleoelectricidad, como la de agua pesada, que resultaban estratégicas (sin agua pesada se paraliza el reactor) y respecto de las cuales se estaba inicialmente en situación de dependencia de un proveedor externo. Una dependencia riesgosa en tanto dicho insumo, como otros asociados a la tecnología nuclear, era un producto sensible y de acceso restringido debido a su eventual uso para el desarrollo de armamento nuclear. Una dependencia más riesgosa aún con el endurecimiento de las restricciones del mercado nuclear internacional luego de que la India detonara en 1974 su primer explosivo atómico y por la negativa argentina del firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).¹² En este marco la CNEA, que ya venía analizando el problema de la producción de agua pesada como parte del cierre del ciclo combustible,¹³ reactiva la discusión sobre cómo lograr autonomía en el abastecimiento de ese insumo hasta entonces importado desde Canadá. Con base primero en el Grupo de Procesos Químicos y luego del área de Agua Pesada de la institución, en 1975 concreta un Estudio de Factibilidad referido a la instalación, en el país, de una Planta de Agua Pesada.¹⁴ Con los resultados de ese estudio en mano, y para relevar las capacidades para llevarlo a cabo, personal de CNEA visita Santa Fe.

Consecuencia de esa visita, de los vínculos personales y profesionales que la motivaron y de las negociaciones que le siguieron, se firma en diciembre de ese mismo año el Convenio entre la UNL, el CONICET (en representación del recién creado INTEC) y la CNEA, con el propósito de diseñar un equipo, en escala reducida, para caracterizar las principales propiedades físico-químicas de un proceso para producir agua pesada, en principio a través de la simulación de una pequeña porción de una columna de intercambio isotópico. Más específicamente, el objetivo fue tratar de entender y probar una muy pequeña parte del funcionamiento de lo que podía ser considerada su base fundamental de operación, y de una envergadura que no excedía de una experiencia piloto de pequeña-mediana escala”.¹⁵

la Argentina (1945-1994)”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, vol.7, N.º 21, 2012, pp. 163-192. El autor sostiene que la elección de uranio natural es un elemento central de la tecnopolítica nuclear argentina frente a la tendencia de la época a nivel internacional de abandonar esta línea por la del uranio enriquecido.

¹² Argentina se negó a firmar el TNP, abierto a la firma en junio de 1968, argumentando su carácter discriminatorio que restringía el desarrollo de proyectos de investigación, inclusive sin fines bélicos, entre los países firmantes (aunque no la destrucción de armamento en aquellos que ya lo poseían). (Hurtado, 2012, op. cit.).

¹³ El cierre del ciclo combustible implica la posibilidad de desarrollar localmente todos los insumos involucrados en el funcionamiento de un reactor productor de nucleoelectricidad, desde la extracción del uranio, la fabricación de los elementos, los componentes necesarios para el funcionamiento hasta el reprocesamiento del material radiactivo para su depósito final.

¹⁴ *Agua Pesada Argentina*, (en línea) Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEA), Seccional Arroyito, 29/09/2011, Disponible en: http://www.apcnean.org.ar/publicacion.php?id_publicacion=174, consultado el 5 de enero de 2015.

¹⁵ Cassano, 2015, op. cit. p.14.

El proyecto, bajo la Dirección General del Dr. Cassano y la Dirección Técnica del Dr. Cerro, debía comenzar el 1º de marzo de 1976. El CONICET y la UNL realizarían el aporte de personal. CONICET otorgaría, además, las becas de iniciación y el respaldo en algunas adquisiciones de bienes de capital y de infraestructura, mientras la CNEA contribuiría con fondos para la ejecución y el compromiso de inversiones de importancia conforme su avance. Así “...nos empezamos a zambullir en un pedacito de lo que era una planta de agua pesada, lo que equivalía a sumergirnos profundamente, aunque sin querer, en el Plan de los Reactores Nucleares que trabajan con agua pesada”.¹⁶

El desarrollo de una planta de agua pesada “es ingeniería moderna pero no exótica a partir del intercambio de deuterio”.¹⁷ Técnicamente su producción supone el reemplazo de los dos átomos de hidrógeno presentes en una molécula de agua por dos átomos de uno de sus isótopos, denominado deuterio, que posee una masa superior a la del átomo de hidrógeno. El convenio original contemplaba los análisis y estudios correspondientes que permitieran proponer a la CNEA opciones para la reacción elegida y el tamaño óptimo que debería tener una “Planta Piloto de Agua Pesada”. La misma reacción podía realizarse, al menos, con nueve alternativas tecnológicas diferentes, el INTEC exploró siete de ellas y recomendó una. La opción sugerida consistía en construir en tamaño piloto uno o dos platos de una columna de intercambio isotópico, al estilo de las plantas de agua pesada existentes en Canadá, utilizando el sistema sulfídrico-agua (SH₂-H₂O).¹⁸

De Planta Piloto a Planta Modelo Experimental: el proyecto y sus contingencias

La denominada Junta Militar, que asumió tras el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, planteó un violento reordenamiento tanto en materia política y social como económica. Este se tradujo en profundos cambios tanto en la estructura industrial, como en los enfoques de política económica. En esta última dirección, el ministro de economía, Martínez de Hoz, se propuso refundar la economía aplicando medidas en consonancia con una política neoliberal que se caracterizaban por la apertura del mercado y la especulación financiera. Estos cambios significaron la desarticulación y precarización de la matriz industrial nacional.¹⁹

Contrariamente, esta tendencia no afectó, como ya se mencionó, algunos de los procesos ligados al crecimiento del CONICET (en particular de su número de institutos de investigación) ni al sector nuclear, que contó con “con un importante apoyo durante la última dictadura militar, en contraste con el desmantelamiento de la investigación universitaria producido en aquella época”.²⁰ Considerando que los

¹⁶ R. Cerro, entrevista personal, 6 de febrero de 2015.

¹⁷ R. Cerro, ídem.

¹⁸ Cassano, 2015, op cit.

¹⁹ Para ampliar información en relación con el carácter regresivo de la reestructuración industrial en la Argentina ver Schorr, Martín. La desindustrialización como eje del proyecto refundacional de la economía y la sociedad en Argentina, 1976-1983. *Am. Lat. Hist. Econ* [online]. 2012, vol.19, n.º3, pp. 31-56. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-22532012000300002&lng=es&nrm=iso, consultado el 7 de junio de 2015.

²⁰ Albornoz, M. y Gordon, A., “La política de ciencia y tecnología en Argentina desde la recuperación de la democracia (1983–2009). en Mario Albornoz y Jesús Sebastián (Ed.) Trayectorias de las políticas científicas y universitarias de Argentina y España, CSIC, Madrid, 2011, pp. 67-122.

militares jugaban un papel decisivo en el avance de las áreas estratégicas orientadas a la industrialización del país –entre ellas la energética y con el sostén de la junta de gobierno, Castro Madero, físico y marino, presidente de la CNEA desde 1976, aprobó en 1979 el diseño de un plan nuclear de propósitos civiles. Un plan que autorizaba la construcción de 4 centrales nucleares de 600 Mw de potencia y que, a pesar de la débil situación de la economía argentina, multiplicaría el presupuesto de la CNEA superando los 1.000 millones de dólares anuales.²¹ Estas centrales, como la de Atucha 1 ya en marcha, funcionarían a uranio natural moderado con agua pesada. El plan nuclear incluía, además de la construcción de las nuevas centrales, el desarrollo de las instalaciones complementarias para el funcionamiento de esta tecnología nuclear.²² Entre estas instalaciones, las correspondientes a la producción de agua pesada que CNEA ya había iniciado en vínculo con INTEC.

La nueva coyuntura, sumada a los avances de la ejecución del cronograma del convenio inicial entre CNEA y CONICET-INTEC, derivó en una propuesta de cambio de escala del proyecto que la CNEA aceptó.²³ Como sugiere uno de los entrevistados “...después de un año que hicimos un reporte a Antúnez, Castro Madero y Núñez, era evidente que ese proceso con un poco más se podía producir no una cantidad muy grande, pero sí una cantidad de agua pesada que sirviera para reactores experimentales y se convino en hacer un proceso que produjera 20 toneladas por año”.²⁴

La aceptación del cambio de escala del proyecto, más allá de naturalización de una continuidad entre una primera y una segunda etapa de este que sugiere el citado testimonio, lo transforma, a partir de abril de 1976, en un programa de mayor envergadura tanto en términos científico-tecnológicos, como presupuestarios. Era un plan ambicioso y una oportunidad única para el novel instituto. Pero con el advenimiento del golpe de Estado, el grupo sufrió varias bajas. “El 26 de marzo hubo cuatro personas que desaparecieron. A uno lo metieron preso, uno había salido del país, hoy vive en Italia, y a los otros dos los habían metido presos y salieron del país. Ellos estaban trabajando en el proyecto y después del 24 de marzo no pudieron trabajar más”.²⁵

El cambio propuesto significó también un nuevo cronograma, un nuevo presupuesto que multiplicaba por veinte los aportes monetarios de la CNEA (USD1.000.000 por año hasta 1979) y la duplicación de recursos humanos en relación con el convenio anterior. Como contrapartida, el grupo de trabajo conformado debía dedicarse full time al proyecto.²⁶

²¹ Hurtado, D. “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64.

²² Decreto N.º 302/1979, Norma consultada a través de InfoLEG, base de datos del Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/ane-xos/220000-224999/223803/norma.htm>.

²³ La nueva propuesta del INTEC consistía en la ejecución de una Planta que contemplara la construcción de un módulo completo experimental y la elaboración de proyectos para seis rangos diferentes de producción de agua pesada, con la idea de replicar el rango de 20 por 10 y producir las 200 toneladas/año establecidas como meta, para fines de 1980, en el programa de la CNEA. (Cassano, 2015, op. cit.).

²⁴ R. Cerro, entrevista personal, 6 de febrero de 2015.

²⁵ R. Cerro, entrevista personal, 28 de mayo de 2015.

²⁶ Cassano, A., “El sociólogo y político que nunca fue”, *Revista Ciencia e Investigación, Reseñas*, tomo I, N.º 1,

Así, la CNEA acuerda en encomendar a INTEC “el diseño de una Planta Piloto de Agua Pesada que permita la construcción y operación de la misma a fin de obtener toda la información técnica y la experiencia necesaria para diseñar, construir y operar una Planta Industrial que produzca 400t/año de agua pesada grado reactor (99,8% D2O)”.²⁷ Para el INTEC esto implicaba, en concreto, trabajar en la determinación conceptual del proceso y desarrollar la ingeniería básica (descripción y el diseño de todos los equipos de la planta) que tuviera como producto la elaboración de un pliego de licitación que detalle sus procedimientos y especificaciones técnicas. Un nuevo convenio suscripto en enero de 1977 entre el CONICET, a través del INTEC y la CNEA, que fue denominado Planta Modelo Experimental de Agua Pesada (PMEAP) reemplazó al convenio anterior.²⁸ Como sugiere uno de los entrevistados, el objetivo final que motivaba a la CNEA “era tener una planta que hiciera lo mismo en cantidad que cualquiera de las que había en el mundo”²⁹ y, consecuentemente, lograr el abastecimiento local de un recurso estratégico. Sin embargo, para alcanzar ese fin había que empezar a investigar y producir en una escala intermedia “que pruebe la tecnología e incluso pueda hacer correcciones antes de pasar a la escala industrial”. Pruebas y correcciones que no se contemplaban ni podían realizarse a la escala de laboratorio del proyecto piloto original. Además de la elaboración del pliego de licitación, correspondía al personal del INTEC participar de la evaluación de las ofertas que se realizarían en torno a este así como supervisar el desarrollo de la posterior ingeniería de detalle (luego como veremos a cargo del INGAR), de la construcción, montaje y puesta en marcha por parte de la empresa adjudicataria de la licitación.

“El grupo de Cassano tenía experiencia en investigación académica, pero no en hacer una planta y mucho menos una planta con una tecnología que no estaba en los libros, que era estratégicamente guardada. Esa decisión, la CNEA la ratificó consiguiendo los recursos, hablando con CONICET y consiguiéndonos cargos de investigador. Nosotros teníamos antecedentes pero había que conseguir los cargos. Todo fue un gran acuerdo entre las partes, la CNEA, el CONICET y la UNL reconocieron que estábamos haciendo un trabajo importante”.³⁰

A fines del 76 el grupo de trabajo, que inicialmente estaba conformado por 12 investigadores de la UNL, 1 profesional, 2 ayudantes de investigación, 5 técnicos y 5 administrativos, se había duplicado y sumaba casi cincuenta personas.³¹ Las incorporaciones se fueron produciendo bajo las modalidades de ingreso a la Carrera de Personal Científico del CONICET para el caso de los investigadores, algunos con doble designación CONICET/UNL. También se sumaron profesionales y técnicos como

2013, pp. 59-72.

²⁷ Convenio CNEA-INTEC, INTEC, Archivo de Dirección, 1977.

²⁸ Los alcances del primer convenio suscripto en 1976 involucraban la exploración y el análisis de las alternativas tecnológicas para la producción de agua pesada en una escala reducida (2,5 toneladas por año).

²⁹ M. Chiovetta, entrevista personal, 31 de marzo de 2015.

³⁰ M. Chiovetta, entrevista personal, 31 de marzo de 2015.

³¹ INTEC. Organigrama de Trabajo Programa Planta Piloto de Agua Pesada, Archivo de Dirección, 1976.

Personal de Apoyo del CONICET o con designación de cargo docente en UNL y en una proporción menor por contrato con fondos directos de la CNEA. Los ayudantes de investigación ingresaron como becarios del CONICET.³²

En marzo de 1978 se entregó el pliego total con la descripción y diseño de todo el equipamiento de la planta que en 1979 se abrió a licitación. Las copias del pliego de licitación fueron vendidas sin restricciones a todos aquellos que se presentaron como interesados en hacerse cargo de la construcción de la planta, aunque en algunos casos el interés fuera más conocer el contenido de los pliegos que participar con propuesta concreta (por ejemplo, las Embajadas de Pakistán y de Estados Unidos). Tras analizar alrededor de 10 ofertas se eligió como adjudicatario para la construcción de la Planta Modelo Experimental de Agua Pesada a un consorcio nacional en ese entonces conformado por la empresa petrolera ASTRA CAPSA junto con AESA.³³ La empresa comenzó a trabajar en la ingeniería de detalle de la planta ya emplazada en los terrenos donde estaba en funcionamiento la central nuclear Atucha 1 (Lima, provincia de Buenos Aires).

En relación con los requerimientos de personal para las tareas posteriores a la licitación representaban contar con capacidad de contratación y mantener la capacidad de diseño para la supervisión de la ingeniería de detalle sobre la base de la ingeniería básica propuesta; la inspección de la construcción y montaje por parte de la empresa adjudicataria; la responsabilidad de la puesta en marcha incluyendo los manuales de operación, las políticas de puesta en marcha y parada, el régimen de seguridad, los programas de mantenimiento y la capacitación del personal de la CNEA para la operación.³⁴

La CNEA tenía restricciones en la contratación de personal, el CONICET y la UNL por su parte carecían de capacidad jurídica para su contratación, aun tratándose de un proyecto nacional, lo que les imposibilitaba absorber dentro de su estructura, gente que hacía desarrollo y transferencia tecnológica. Con el objetivo de asumir las tareas de ingeniería de detalle y de seguimiento de proceso de construcción y supervisión de la planta Modelo Experimental de Agua Pesada y facilitar los mecanismos de incorporación de personal para proyectos de transferencia, se crea, en septiembre de 1980, el Instituto de Desarrollo y Diseño Ingeniería Argentina (INGAR).

“El objetivo grande de ingeniería básica estaba cumplido y entregado, ahora se volvía una cosa más de ingeniería, entonces se decidió crear el INGAR para que hiciera eso”.³⁵ Este nuevo instituto nació por convenio entre el CONICET y la Fundación para el Arte, la Educación, la Ciencia y la Tecnología (ARCIEN) creada en 1977 como asociación civil sin fines de lucro. Entre los objetivos de dicha asociación se incluían

³² INTEC. Aclaraciones sobre fuentes de financiamiento institucionales del Programa “Planta Piloto de Agua Pesada”, Refuerzos Necesarios, Archivo de Dirección, 1976.

³³ Alfredo Evangelista SA (AESAs) había incursionado tiempo antes en la explotación minera en Mendoza para la obtención de uranio enriquecido para la CNEA, creando Minera Sierra Pintada SA www.aesa.com.ar/historia.html.

³⁴ Cassano, 2015, op cit.

³⁵ M. Chiovetta, entrevista personal, 31 de marzo de 2015.

la gestión tecnológica y la administración de subsidios, entre ellos los recursos adjudicados al proyecto de agua pesada (importaciones, compra de insumos y equipos, contrataciones etc.) y la promoción de actividades artísticas a nivel local a través de un consejo asesor cultural, integrado por músicos, periodistas, escritores, pintores y artistas plásticos.

Con el retorno a la democracia, este tipo de fundaciones recibió, por parte de CONICET, un fuerte cuestionamiento a su accionar y el manejo de sus fondos.³⁶ Sin embargo algunos testimonios rescatan aspectos operativos de su funcionamiento. En este sentido el Dr. Cerro –ex director del INGAR– sostiene: “La Fundación no fue una cáscara, fue creada para hacer transferencia de tecnología; la contratación privada se la usó para la inversión de fondos y la parte del arte fue muy fuerte”.³⁷ La base de creación del INGAR fue parte del grupo de gente que dentro del INTEC desarrolló el Proyecto de Agua Pesada. Este grupo, que desde 1976 había adquirido una experiencia muy valiosa en el desarrollo y diseño de procesos. Por esta razón, el CONICET y la Fundación ARCIEN toman la decisión de preservar esta capacidad de ejecución que había sido creada gracias a la demanda de un proyecto tan especial.³⁸ “Con el dinero que mandaba la CNEA se hacían las compras para el proyecto, por requerimiento de los directores que también formaban parte de la fundación (...). Nosotros recibíamos los fondos y con eso hacíamos las licitaciones, las compras y se contrataba gente con todas las de la ley”.³⁹

Con el Dr. Cerro como su director, treinta integrantes del INTEC (que en ese momento contaba con unos 70 miembros), la mayoría participantes del Proyecto de Agua Pesada y con un perfil más ingenieril que académico⁴⁰, pasaron a formar parte del INGAR. Allí continuó el convenio con la CNEA desde 1981 hasta su finalización, en 1984. INGAR continúa con sus actividades hasta el presente, pero ese año, y con una inversión total cercana a los 100.000.000 de dólares, termina, junto a la empresa concesionaria, las tareas establecidas en el contrato de adjudicación. La Planta Modelo Experimental de Agua Pesada estaba construida, pero no en funcionamiento. La Argentina poseía el conocimiento necesario para el control de una tecnología propia en la producción de agua pesada.

Un final de proyecto con interrogantes

“En el plano de la ciencia y la tecnología, el estereotipo de que los gobiernos militares fueron “anticientíficos” remite a la intervención de las universidades pero omite que la inversión en ciencia y tecnología fue relativamente alta y que se dio gran impulso

³⁶ CONICET. Informe sobre Investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET, período 76-83. EUDEBA, 1989.

³⁷ R. Cerro, entrevista personal, 28 de mayo de 2015.

³⁸ INGAR, Memoria Anual, 1981, pp.2.

³⁹ C. Chiliberti, entrevista personal, 30 de marzo de 2015.

⁴⁰ *INTEC era una sola cosa, cuando pasan a ser más de 70 personas una parte pasa a formar el INGAR y quedan en el INTEC los más académicos y Ramón llevó a un grupo que eran los que seguían haciendo Ingeniería* (M. Baltanás, entrevista personal, 30 de marzo de 2015).

a la investigación en temas nucleares y espaciales, como consecuencia de lo cual el sedimento de capacidad en física y en ciertas tecnologías complejas constituye hoy un activo del cual la ciencia argentina se enorgullece, sin cuestionar mucho su origen”.⁴¹

Pese a los procesos de industrialización y maduración tecnológica interrumpidos de la etapa dictatorial⁴², la ausencia de la agenda pública relativa a la ciencia y tecnología y la desarticulación de universidades e instituciones especializadas como consecuencia de las políticas implementadas por Martínez de Hoz⁴³, algunos nichos de desarrollo se mantuvieron. Es el caso, como anticipa la cita que encabeza este apartado, de los proyectos relacionados con el área nuclear, más precisamente con las aplicaciones de esta tecnología en materia energética, en los cuales, según la visión de algunos actores, continuó vigente la búsqueda de autonomía asociada al desarrollo nacional.⁴⁴ El proyecto de Planta Modelo experimental de Agua Pesada desarrollado por INTEC e INGAR que fue descrito en las páginas anteriores se enmarca, según las fuentes y testimonios consultados, en este tipo de proyectos. Ahora bien, en las fuentes y testimonios consultados para elaborar esta primera y parcial crónica del proyecto de agua pesada coexisten las afirmaciones de autonomía tecnológica y desarrollo nacional con elementos propios del tránsito del período dictatorial.

Mientras por un lado se afirma que el proyecto “tenía tanto peso que todas las puertas se abrieron” y se destaca el “entusiasmo y carisma porque era algo lindo, algo para la patria”⁴⁵ que lo caracterizaba, también se mencionan las dificultades a las que debió enfrentarse debido a las condiciones políticas del período, desde la persecución de algunos de los integrantes del proyecto a las restricciones para la compra de insumos “sensibles” en el exterior por la desconfianza que el gobierno militar provocaba y, sobre todo, por su negativa a la firma de los tratados relativos al control de la proliferación nuclear. El propio rol de la fundación ARCIEN, operativo al funcionamiento del proyecto (por ejemplo, para ejecutar las adquisiciones necesarias), pero asimismo cuestionado su formato en una denuncia que englobó las fundaciones asociadas a CONICET en ese período (discrecionalidad respecto al uso de los fondos, malversación)⁴⁶ también se orientan en la misma dirección. Las tensiones

⁴¹ Albornoz, M. y Gordon, A., 2011, op. cit., p.1.

⁴² Nochteff, H. “Reestructuración industrial en la Argentina: regresión estructural e insuficiencia de los enfoques predominantes”, *Desarrollo Económico*, Instituto de Desarrollo Económico y Social, vol. 31, N.º 123, pp. 339-358 Buenos Aires, 1991.

⁴³ Nun, J. “Argentina: El estado y las actividades científicas y tecnológicas”. REDES, Vol. II, N.º 3, pp. 59-98, Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1995.

⁴⁴ Hurtado, D., 2009, op.cit.

⁴⁵ R. Cerro, entrevista personal, 6 de febrero de 2015.

⁴⁶ En 1989 CONICET publica un “Informe sobre Investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET, período 76-83”, el documento daba cuenta de la intervención de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Justicia Federal en lo criminal y correccional de la Capital Federal en pos de avanzar en el cese y esclarecimiento de denuncias respecto de la sistemática derivación de recursos del organismo durante el régimen militar mediante el cual se produjo la capitalización y enriquecimiento de asociaciones y fundaciones. En su página 5 afirmaba que “a través de asociaciones y fundaciones constituidas generalmente durante el mismo régimen militar, se tramitaron y concedieron cuantiosos subsidios por parte del organismo (...) las fundaciones y asociaciones efectuaban colocaciones financieras con los fondos y se apropiaban de las rentas. Mediante los subsidios directos y la capitalización de las referidas rentas lograron un enorme incremento patrimonial, fundamental-

que esta coexistencia presenta son uno de los focos de interrogación que se deriva de esta primera aproximación analítica a este proyecto de desarrollo de tecnología. Un foco de interrogación acerca de esta excepcionalidad que supone el desarrollo nuclear en la dictadura en términos de inversión, incremento de personal, apoyo a los proyectos, pero también prácticas autoritarias, manejos financieros cuestionados y persecuciones políticas, como revelan tanto algunos de los testimonios como la bibliografía.⁴⁷

Pero no es el único espacio de interrogación. También generan interrogantes los contrastes que suponen haber alcanzado la tecnología para construir la planta experimental de agua pesada de manera autónoma, haberla construido efectivamente, respecto de la compra llave en mano la planta industrial de Arroyito que suministraría efectivamente el agua pesada a los reactores argentinos desde la década del 90.

“Se ha de producir en un plazo muy breve, la total ruptura del control externo en esta área de tecnología nuclear sensitiva, dado que a partir del momento en que se compruebe que la Planta Experimental funciona y opera satisfactoriamente, ya no existirá ningún tipo de dependencia en esta tecnología particular”, afirmaba Cassano en 1980.⁴⁸ Efectivamente, la información contenida en los pliegos del llamado a licitación fue la prueba de la posibilidad de desarrollar la tecnología en el país. Ahora bien, según resaltan algunos testimonios, este logro tecnológico local generó un cambio en el contexto internacional de oferta tecnológica de agua pesada en el país, que significó la apertura del mercado externo de proveedores para la construcción de una planta industrial tras una negativa que se reiteraba hasta ese entonces.

“...les preguntamos a los canadienses por qué ahora se había abierto el mercado y en ese momento aparecían las ofertas. La respuesta fue muy simple: ‘Hemos estudiado el pliego de la licitación de la Planta Experimental. Ustedes ya lograron desarrollar la tecnología y el proyecto, con ajustes, va a funcionar. Para qué vamos a perder la oportunidad de hacer un buen negocio’. Esa fue la confirmación de que no nos habíamos equivocado por mucho”.⁴⁹

Consecuencia de esta apertura de mercado, en 1980 se aprueba el contrato entre CNEA y una empresa suiza para la provisión “llave en mano” de una Planta Industrial de Agua Pesada a instalarse en Arroyito, provincia de Neuquén, que abastecería del insumo a las centrales nucleares argentinas (Atucha 1 ya en funcionamiento y

mente en bienes inmuebles”. (CONICET, op. cit. 1989). En esta línea, el Dr. Cerro señala en la entrevista del 28 de mayo de 2015 *Existieron fundaciones que nunca hicieron otra cosa que manejar fondos de CONICET, cuando vuelve la democracia CONICET reclama los edificios que construyó ARCIEN con el dinero aportado y solicita a través de la fiscalía los libros de contabilidad. Los edificios se donaron y los libros entregados y devueltos sin observaciones.*

⁴⁷ Hurtado, D., 2009, op. cit., Spivak L'Hoste, A. “Fondos públicos, proyectos tecnológicos y violencia estatal: tensión de memorias de dictadura en una institución tecnocientífica argentina, *Revista MANA*, 2015, en prensa.

⁴⁸ Cassano, A. 1980, op.cit., pp. s/n.

⁴⁹ Cassano, A. 2015, op.cit., p. 12.

Embalse en construcción).⁵⁰ Aunque los santafecinos no hubieran quedado del todo afuera ya que participaron, a pedido de la CNEA, del proceso de evaluación de ofertas, se optó por una planta que utiliza una tecnología diferente a la que se proponía en los pliegos de licitación de la Planta Modelo Experimental.⁵¹

Y aquí emerge entonces ese segundo interrogante. Porque la puesta en marcha, los ensayos y producción real de la Planta Modelo Experimental de Agua Pesada se hizo pensando en un módulo industrial –con tecnología nacional– inspirado en esta. Y asumiendo, además, que la ejecución del módulo experimental proporcionaba la independencia tecnológica en el tema. Ahora bien, el esfuerzo financiero y humano puesto en el desarrollo de la planta así como en su construcción en el predio de Atucha 1 contrasta con el hecho de que, aún concluida, la planta nunca se puso en funcionamiento. Y contrasta asimismo con la posterior compra llave en mano de una planta industrial, que operaba con una tecnología diferente a la desarrollada en Santa Fe. Otro argumento que complementa este contraste, como sugiere uno de los entrevistados, es que tanto la Planta Experimental como el agua pesada que allí podría producirse no poseían salvaguardias, lo que significaba la libre disposición de la producción nacional y su uso. Disponer de Agua Pesada propia podría haber perfilado a Argentina como proveedor de dicho insumo. Pero esta opción, y pese a los argumentos de búsqueda de autonomía tecnológica que atraviesan las crónicas de los entrevistados, se dejó de lado con la compra llave en mano de la planta de Arroyito y la correspondiente aceptación de las restricciones y salvaguardias implicadas en dicha adquisición.

Hay explicaciones para este último interrogante. En esa dirección, el Director Técnico del Proyecto argumenta la imposibilidad de contar con una producción a escala industrial con tecnología nacional según los plazos requeridos para la marcha del Plan Nuclear. Además de cuestiones de cronograma y de lo perentorio de dichos plazos, el hecho de que Argentina no hubiera ratificado el Tratado de Tlatelolco (ratificado luego en 1994), se convertía en un obstáculo que Estados Unidos ponía a cada paso de la negociación con Canadá –proveedor del agua pesada de Atucha 1– para la adquisición de dicho insumo acelerando la urgencia⁵². “La conducción técnica de la CNEA analizó la necesidad de agua pesada para nuestros reactores. En ese momento era imprescindible para poder llevar adelante el plan de reactores argentino, tener agua pesada”.⁵³ Ahora bien, independientemente de estos argumentos, el contraste que supone esta compra final respecto de la defensa del desarrollo de competencias

⁵⁰ Los plazos para la ejecución de la PIAP de Arroyito por parte de la firma Sulzer Brothers no se cumplieron y ENSI SA (una empresa creada por CNEA y la provincia de Neuquén) concluye las obras y pone en marcha la planta en septiembre 1994. http://www.apcnean.org.ar/publicacion.php?id_publicacion=174.

⁵¹ La decisión del cambio de tecnología tuvo que ver con el hecho que la empresa suiza ofrecía una alternativa, de la cual no existían plantas construidas y a un costo menor que la que presentaba Canadá. (M. Chiovetta, entrevista personal, 31 de marzo de 2015).

⁵² La administración Carter prohibió a proveedores norteamericanos de tecnología nuclear toda venta a países que no hubieran firmado el TNP. Para respaldar esta política, Canadá anunció que no vendería agua pesada a la Argentina para la central de Embalse. (Hurtado, D. 2009, op.cit.)

⁵³ M. Chiovetta. entrevista personal, 31 de marzo de 2015.

locales en la generación de tecnología nuclear y, sobre todo, la búsqueda de autonomía obligan a revisar los objetivos, finalidades y plazos establecidos así como los procesos de toma de decisión asociados a ellos.

Algunos corolarios a modo de cierre

Afirma Cassano que la concreción de la Planta Modelo Experimental de Agua Pesada “...fue el mejor indicio de que habíamos hecho una excelente obra y, el principal miembro del Club de Londres, aplicó toda su potencia para romper lo que no había logrado hacer mientras trabajábamos nosotros con el INGAR (...) solo quedaron los recuerdos de una excepcional aventura con toda certeza exitosa, en el campo del desarrollo de tecnología autónoma...”⁵⁴ Porque, más allá de que la resolución final haya sido la compra llave en mano de una planta para la producción de agua pesada en escala industrial, y que esta resolución aparezca como una decepción en algunos de los testimonios consultados, la aventura –retomando los términos de Cassano– se describe exitosa en algunas de sus consecuencias. Fundamentalmente en lo que implicó en la generación de competencias (profesionales, tecnológicas e institucionales) que efectivamente se derivan de todo este proceso. Competencias que se cruzan, además, con las motivaciones originales del director del proyecto que era la formación en doctores en ingeniería y el encuadre institucional en Argentina de dicha formación. En línea con lo expresado por Cassano, el recuerdo de Cerro rescata aspectos positivos “Aquí teníamos a lo mejor de lo mejor, era como si fuéramos en MIT de la Argentina y la gente que teníamos era la mejor que se podía conseguir. Habiendo estado en el exterior, yo sabía que los investigadores no eran ni más inteligentes ni más vivos que nosotros, de manera que si ellos lo podían hacer, nosotros lo podíamos hacer”.⁵⁵

El diseño y la ejecución del proyecto piloto y luego modelo experimental de agua pesada le permitió al INTEC primero y posteriormente al INGAR, crear y consolidar el primer grupo de trabajo que abordó líneas de investigación que eran orientadas específicamente a la industria nuclear en Santa Fe, pero que luego excedió dicha industria. Se trata del grupo de “Ingeniería de Procesos” que inició, de manera fundacional en Santa Fe y en el país, y en función del proyecto de agua pesada, trabajos en Simulación y Control de Procesos y Diseño asistido por computadoras. En esa época, existían a nivel académico, solo dos lugares en el mundo (Inglaterra y Estados Unidos) donde se trabajaba con modelos computacionales que simulaban el comportamiento completo de una planta química. Por iniciativa del Director Técnico del proyecto, el Dr. Cerro, y a pesar de las dificultades que implicó el acceso al instrumental técnico,⁵⁶ el equipo de Santa Fe se propuso desarrollar un programa de

⁵⁴ Cassano, A. 2015, op. cit., pp. 42.

⁵⁵ R. Cerro, entrevista personal, 28 de mayo de 2015.

⁵⁶ Como durante las primeras etapas del proyecto no se contaba con los equipos necesarios se estableció un contrato para hacer uso de la computadora que había adquirido pocos años antes la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, razón por la cual algunos integrantes del grupo viajaban en forma semanal y rotativa a Buenos Aires.

computadora que simulara matemáticamente el funcionamiento de una planta, su ingeniería, completa. El programa, que fue la base a partir de la cual se desarrollaron los pliegos de licitación, se diseñó y se desarrolló por computadora investigando, produciendo teóricamente y aplicando toda la información necesaria a esos fines. El resultado fue el desarrollo del primer simulador de procesos de agua pesada que existió por esos años en el país y que fue denominado PROSPRO (Programa de Simulación de Procesos).⁵⁷

Hacia 1980 el grupo ejecutor del proyecto de Agua Pesada en Santa Fe se encontraba ejecutando 25 proyectos más, de otra envergadura, algunos de contenido básico. Esto les permitió, hacer funcionar la alta calificación obtenida de la mano de la capacidad de dirección de investigaciones, inusual en ese momento, fuera del cordón Capital Federal-La Plata. “La idea importante no era la planta de agua pesada sino la proyección de lo que tenía que ser el INTEC, asegurarse de que se iba a hacer el doctorado, por lo tanto que se iba a seguir haciendo investigación de calidad”.⁵⁸ INTEC y el doctorado, dice Mario Chiovetta en este testimonio, resaltando no solamente el valor de la consolidación de una institución prácticamente creada en torno a este proyecto (y que hoy cuenta con 40 años de trayectoria⁵⁹), sino también de lo que implicaba la formación doctoral en ese marco. Una formación de investigadores y técnicos de nivel realizada de forma local, en número y calidad acorde con las necesidades de la región y el país, que reemplazó la necesidad de enviar estudiantes de posgrado para formarse en el extranjero. Formación que, en tanto objetivo institucional del INTEC,⁶⁰ comenzó a materializarse como consecuencia de la experiencia alcanzada en el proyecto de agua pesada que reseñan estas páginas. Como señalamos, sus alcances en términos de desarrollo de tecnología, las implicancias derivadas del cambio de escala operado, y las persecuciones políticas que sufrieron algunos de sus miembros, son elementos que forman parte de su trayectoria. Al mismo tiempo, el proyecto contribuyó a dar paso al primer doctorado

⁵⁷ La antesala del PROSPRO fue el primer simulador ligado a una base de datos denominado SIMBAD y desarrollado por el mismo grupo, “Cuando empezamos a configurar la ingeniería básica de la planta, una de las cosas que hicimos fue comprar un programa de administración de bases de datos. Todo se iba guardando en esa base de datos para que no estuviera disponible sólo en papel. En ese momento se nos ocurrió ligarlo al simulador que generaba la información para la base de datos.” (R. Cerro, entrevista personal, 28 de mayo de 2015).

⁵⁸ Entrevista al Dr. Mario Chiovetta, 2015.

⁵⁹ El Intec se creó el 25 de junio de 1975, pero su nacimiento data de 1968, cuando un pequeño grupo de investigación dentro del Departamento de Química Industrial de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, comenzó a desarrollar sus investigaciones. Hoy, tiene una planta compuesta por casi 200 personas – investigadores, personal de apoyo, becarios y administrativos–, y es reconocido como uno de los tres mayores centros de investigación de ingeniería en Argentina. El Intec fue, además, un gran semillero de otros institutos de doble dependencia que nacieron como grupos de investigación en su interior. Así, en 1999 se creó el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral a partir del Programa Especial de Matemática Aplicada del Intec, y en 2013 nacieron el Instituto de Física del Litoral y el Centro de Investigación de Métodos Computacionales. INGAR hoy, es conducido a través de un acuerdo firmado entre el CONICET y la Universidad Tecnológica Nacional, con sus Facultades Regionales Santa Fe (FRSF) y Rosario (FRR), y ARCIEN se ha consolidado como Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT). Desempeñan sus tareas en el instituto alrededor de 70 personas, entre investigadores, profesionales, técnicos y becarios (doctorales y posdoctorales) del CONICET. Actualmente se encuentra consolidado como instituto de investigación y transferencia de tecnología con líneas de investigación y desarrollo en ingeniería de procesos, nuevas tecnologías y sistemas de información, gracias a su experiencia y experticia asumió a pedido de CNEA –durante los años 90– las tareas de asesoramiento para el desguace de la planta.

⁶⁰ INTEC, Convenio de Constitución UNL-CONICET, Archivo INTEC, 1976.

en ingeniería de la Argentina, establecido en 1981 con un plantel docente que pertenecía al INTEC y al INGAR.⁶¹ Un doctorado con un plan de acción a largo plazo, y una reconocida actualidad, que retomaba las propuestas de formación de recursos humanos altamente calificados, anticipadas en la creación del instituto 40 años atrás.

Bibliografía

ALBORNOZ, M. y GORDON, A.: “La política de ciencia y tecnología en Argentina desde la recuperación de la democracia (1983–2009)”, En ALBORNOZ, M y SEBASTIAN, J. (ed.) *Trayectorias de las políticas científicas y universitarias de Argentina y España*, Madrid, CSIC, 2011, pp. 1-46.

BEKERMAN, F.: “Reestructuración y dinámica del campo científico argentino durante la dictadura militar: el rol del financiamiento externo y las trayectorias académicas”. IECSAL-UNESCO, 2012, pp. s/n. Disponible en: <http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=201&Itemid=770&lang=es> [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2015].

CASSANO, A.: “Las atracciones de la ingeniería química: Una profesión que reclama por todo”, Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ed.) *Logros y errores en Ingeniería y la educación del Ingeniero*, Buenos Aires, Ediciones ANCFN, Buenos Aires, 2015, pp.1-42.

--- “El sociólogo y político que nunca fue”, *Revista Ciencia e Investigación-Reseñas*, Tomo I, N.º 1, 2013, pp. 59-72.

CASTRO, V.: *Memoria Colectiva y Espacios Públicos: Una mirada comunicacional* (Santa Fe, 1983-1996), Ediciones UNL, Revista *Culturas*, N.º 3, 2001, pp. 31-38.

---“El Peso (paso) del tiempo en el INTEC. Relatos de Compromiso, Autonomía e independencia Tecnológica en dictadura”. INTEC, 1.º Edición ISBN N.º 978-987-45865-0-6, 2015, Santa Fe, 2015.

DAGNINO, R.; THOMAS, H. y DAVYT, A.: “El pensamiento en ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica una interpretación política de su trayectoria”, Centro REDES, Buenos Aires *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, Vol. III, N.º 7, 1996, pp. 13-51.

FRASCH, C. A.: “Carlos Castro Madero Hombre y Circunstancia (20 años después)”. *Boletín del Centro Naval de Buenos Aires*, Número 833, 2012, pp. 137-154.

HURTADO, D.: “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol. 5, N.º 13, 2009, pp. 27-64. Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92415269003>> ISSN 1668-0030 [Fecha de consulta: 7 de marzo de 2015].

--- “Cultura tecnológico-política sectorial en contexto semiperiférico: el desarrollo nuclear en la Argentina (1945-1994)”, *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, vol.7, N.º 21, Buenos Aires, 2012, pp. 163-192.

MATHARAN, G.: “Investigación y Universidad. El caso de la investigación química en catálisis heterogénea (1959-1972)”, VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 2012, p.15, Disponible en: <http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/actas/Matharan.pdf/at_download/file> ISSN 2250-8465 [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2015].

NOCHTEFF, H.: “Reestructuración industrial en la Argentina: regresión estructural e insuficiencia de los enfoques predominantes”, *Desarrollo Económico*, Instituto de Desarrollo Económico y Social, vol. 31, N.º 123, Buenos Aires, 1991, pp. 339-358.

NUN, J.: *Argentina: El estado y las actividades científicas y tecnológicas*. REDES, Vol. II, N.º 3, pp. 59-98, Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1995.

OTEIZA, E.: *La Política de Investigación Científica y Tecnológica Argentina. Historia y Perspectivas*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.

SABATO, J.: *Estado, política y gestión de la tecnología: obras escogidas 1962-1983*, HARRIAGUE, S. y QUILICI, D. (comps.), UNSAM EDITA, Buenos Aires. 2014.

SABATO, J.; WORTMAN, O. y GARGIULO, G. (1978): “Energía atómica e industria nacional”, SG/P.1, PTT/47. OEA. En QUESADA, L. (ed.) *Instituto de Tecnología “Profesor Jorge A. Sabato”*. CNEA-UNSAM, Buenos Aires, 1996.

⁶¹ Cassano, A., op. cit, 2013.

SCHORR, M.: "La desindustrialización como eje del proyecto refundacional de la economía y la sociedad en Argentina, 1976-1983", *Revista de Investigación América Latina en la Historia Económica*, vol. 19, N.º3, México, 2012, pp. 31-56, Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279123576002>> ISSN 2007-3496 [Fecha de consulta: 15 de marzo de 2015].

SPIVAK L´HOSTE, A.: El Balseiro. Memoria y emotividad en una institución científica argentina. Colección La otra ventana. Ediciones Al Margen y CAS-IDES, La Plata, 2010.

--- Fondos públicos, proyectos tecnológicos y violencia estatal: tensión de memorias de dictadura en una institución tecnocientífica argentina. *Revista Mana*. Río de Janeiro, En Prensa, 2015.

YANUZZI, M. de los A.: Política y Dictadura. Los partidos políticos y el 'Proceso de Reorganización Nacional' 1976-1982, Rosario, FUNDACIÓN ROSS, 1996.

Fuentes

APCNEA: Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, Seccional Arroyito. http://www.apcnean.org.ar/publicacion.php?id_publicacion=174.

ARCHIVO INGAR. Memoria Anual. 1981.

ARCHIVO INTEC. Organigrama de Trabajo Programa Planta Piloto de Agua Pesada, 1976.

---Aclaraciones sobre fuentes de financiamiento institucionales del Programa "Planta Piloto de Agua Pesada". Refuerzos Necesarios. 1976.

---Memoria Anual y Cuenta de Inversiones del INTEC. 1978.

---Convenio CNEA-INTEC. 1976.

---Convenio CNEA-INTEC. 1977.

---Programa Planta Modelo Experimental de Agua Pesada. Personal, Materiales, Procedimientos. INTEC. 1978.

---Pliego de Licitación. 1978.

---CNEA. Anteproyecto de Planta Industrial de Producción de Agua Pesada. 1980.

---Cassano, A. La integración del esfuerzo científico-técnico: El Instituto Tecnológico para la Industria Nacional de la UNL. 1973.

---Cassano, A. Análisis de un caso de Transferencia Tecnológica.1980.

CONICET. Informe sobre Investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET, período 76-83. EUDEBA, 1989.

CNEA, Resumen de Actividades 1950-1983, Dirección Proyectos Agua Pesada, Buenos Aires, 1984.

DIARIO EL LITORAL, Sección Opinión, Edición 13/01/2011. <http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/01/13/opinion/OPIN-03.html>.

DIARIO EL LITORAL, Sección Opinión. Edición 14/03/2011. <http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/03/14/opinion/OPIN-03.html>

FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA, Manual de Tecnología Nuclear para periodistas, 2004, http://www.nuclenor.org/public/otros/manual_tecnologia_periodistas.pdf. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, base de datos del Centro de Documentación e Información, InfoLEG, <http://www.infoleg.gov.ar/>

Entrevistas

Dr. Miguel Baltanás, actualmente investigador principal del CONICET en INTEC, participó durante dos meses del Proyecto de Agua Pesada hasta su exilio en 1977, regresó al país en 1985.

Dr. Ramón Cerro, actualmente profesor y asesor de posgrado de Ingeniería Química de la Universidad de Alabama en Huntsville (Estados Unidos), fue director técnico del Proyecto de Agua Pesada y fue director del INGAR entre 1980 y 1984.

Ing. Carlos Chiliberti, jubilado de la Carrera de Personal de Apoyo del CONICET, tesorero de Fundación ARCIEN y director del CERIDE entre 1979 y 1985.

Dr. Mario Chiovetta, actualmente Investigador Principal del CONICET en INTEC y director del Centro de Investigación y Transferencia de Formosa, Misiones (CIT-Formosa/CONICET), participó del Proyecto de Agua Pesada desempeñándose como Responsable de Lógica.

Dr. Roberto Pozo, actualmente profesor de la Facultad de Ingeniería Química, integrante de la Comisión para la Recuperación de la Memoria por la Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral.

Investigación, Dictadura y Universidad. El caso del Departamento de Hidrología General y Aplicada de la Universidad Nacional del Litoral (1970-1983)

Gabriel Matharan
(UNL-Centro CTS/UM)
Oscar Vallejos (UNL)

Introducción

Este trabajo analiza la constitución de un área de investigación vinculada a lo hidrológico que emerge en el ámbito del Departamento de Hidrología General y Aplicada (DHGyA) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El período indagado comprende desde la creación del Departamento en 1970 hasta la culminación de la última dictadura cívico-militar a fines de 1983. Este está construido a partir del interés de dar cuenta de las relaciones Universidad-Dictadura en la Argentina, comprender las actividades científicas y la naturaleza del conocimiento producido en esa relación. El estudio de este caso es relevante ya que permite hacer visible cómo un área de investigación se constituyó y desarrolló durante los períodos dictatoriales puesto que la creación del Departamento se produjo en 1970 en el contexto del período dictatorial iniciado en 1966 y finalizado en 1973 atraviesa el período democrático que va desde 1973 hasta 1976 y se afianzó durante el período completo de la última dictadura cívico-militar que va desde marzo de 1976 y concluye a fines de 1983. La heurística que organiza esta investigación tiene que ver con las modalidades en que la regulación de los universos científicos están relacionadas con las formas de regulación social, en particular de los regímenes de gobiernos y los valores sostenidos por ellos;¹ la pregunta que organiza el trabajo es la siguiente: ¿qué vínculos establecieron las dictaduras argentinas, a partir de 1966, con la ciencia en general y con la investigación científica y tecnológica en particular? y ¿cómo se manifestaron en la relación Universidad-Estado y en las modalidades de producción de conocimiento? La puesta en primer plano de las dictaduras argentinas no implica dejar de lado dimensiones internacionales de la regulación del universo científico en tanto la constitución del área de investigación hidrológica es parte de un armado internacional en el que intervinieron agencias multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otras.

Ciencia-Dictadura: elementos conceptuales

La problemática de los vínculos de la ciencia con los regímenes políticos constituye

¹ Pestre, D.: Ciencia, política y dinero, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.

uno de los núcleos duraderos de las indagaciones acerca de las relaciones entre la ciencia y la sociedad.² Sin embargo, fue Merton en el clima de la Segunda Gran Guerra quien planteó un programa de indagación sobre esos vínculos. En el contexto del avance del nazismo, este autor plantea la observación general: “El desarrollo continuo de la ciencia ocurre únicamente en sociedades de cierta estructura, sujeto a un complejo peculiar de presuposiciones tácitas y constricciones institucionales”.³ Además, observó que por razones militares, económicas y políticas, la ciencia teórica no es fácilmente descartable; la ciencia es poder y su potencial utilidad requiere de un interés “mínimo” en ella por parte del Estado y de la industria. Esta situación supone una tensión con la ciencia pura cuando la estructura social exige la aquiescencia a valores establecidos por las autoridades políticas o el Estado y, por ende, el rechazo de las normas o valores que entren en conflicto con ellos: “Las normas del ethos científico deben ser sacrificadas, en los casos en que ellas demanden el repudio de los criterios de validez científica o de relevancia científica políticamente impuestos”.⁴ Estas observaciones plantean un programa de estudios sobre las relaciones entre el ethos científico y el orden social general; programa que se amplió a partir de los nuevos enfoques socio-históricos de la ciencia. Retomando y ampliando la tesis mertoniana, Shapin y Schaffer sostienen: “Soluciones al problema del conocimiento son soluciones al problema del orden social”.⁵ De esta forma, el nuevo programa de sociología de la ciencia va mucho más allá del conflicto entre el ethos social y el ethos científico. Como estos autores reconocen, sobre la base del estudio del enfrentamiento entre Hobbes y Boyle, los problemas abordados corresponden tanto a la historia de la política como a la historia de la ciencia. De manera que, como Shapin remarca, el modo en que se organiza la producción de conocimiento está asociado a modos de vida específicos y las formas en que la autoridad cultural de la ciencia es asegurada es parte de esa construcción.⁶ De manera que la indagación sobre cómo la producción de conocimiento científico se vincula con la producción de un régimen de vida bajo las últimas dictaduras argentinas implica una revisión sustantiva de la historiografía de las relaciones entre ciencia y sociedad en el país.

La identificación de los estudios que abordan la problemática ciencia-dictadura en Argentina es dificultosa puesto que la variedad, amplitud y especificidad con la que se trata ofrecen un corpus difuso. Las investigaciones enmarcadas en los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología que comparten preocupaciones con la investigación que da origen a este trabajo centran su atención en la conformación e institucionalización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y otras agencias estatales que emergieron después del golpe de estado que derrocó al gobierno de Perón y proscribió al peronismo de la escena política. De

² Salomon, J.J.: *Ciencia y política, México, Siglo XXI, México, 1970.*

³ Merton, R. K.: “Science and Social Order”, en *Social Theory and Social Structure*. New York, The Free Press, 1968, p. 591.

⁴ Merton, R. K., ob.cit, p.594.

⁵ Shapin, S, Schaffer, S.: *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*. London, Princeton University Press, 1985, P.332.

⁶ Shapin, S.: *The scientific life. A moral history of a late modern vocation*, Chicago, The University of Chicago Press, 2008.

manera particular, los trabajos sobre la ciencia durante la última dictadura cívico-militar están indagando instituciones diferentes que brindan distintas imágenes sobre las actividades científicas del período. Según Bekerman, el CONICET llevó a cabo una “modernización conservadora” mediante la expansión de las capacidades de investigación con la creación de Institutos que modificó la estructura del sistema científico argentino (1974-1983).⁷ Por su parte Gárgano, plantea que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue sometido a la lógica del recorte del gasto estatal, la pérdida de autarquía presupuestaria y que el incremento en la apropiación privada de los trabajos de investigación favoreció la consolidación de los sectores más concentrados del agro, en concordancia con los requerimientos de las condiciones de acumulación del capital del momento.⁸ Hurtado indica que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) no estuvo al margen de las formas más violentas de represión a la vez que lo nuclear tuvo un desarrollo inédito en cuanto era concebida como un área central para la industrialización del país.⁹

A diferencia de estas instituciones, los estudios sobre las universidades nacionales durante ese período las muestran más integradas a la escena pública más general; intervenidas por el régimen dictatorial, organizadas a partir de la represión y el terror. Sin embargo, la indagación sobre las actividades de investigación dentro de las universidades nacionales exige que se revise la imagen según la cual la ciencia fue diezmada por una serie de operaciones como el desmantelamiento de grupos y centros de investigación, el traspaso de fondos hacia el CONICET, etc. En efecto, hubo esas operaciones, sin embargo, también hubo otros casos en las que las actividades se mantuvieron e inclusive crecieron. Por otra parte, el aumento progresivo de asignación de recursos de investigación hacia ámbitos extrauniversitarios se articuló también con algunas experiencias de recursos provenientes desde las esferas del Estado hacia las actividades de investigación universitarias que adquirían, con ello, una nueva significación. Esto se trasuntó en una nueva manera de organización de la producción de conocimiento en torno de la idea de “proyecto” con asignación de recursos especiales por fuera del sostenimiento de las actividades académicas tradicionales.

En términos generales la literatura internacional y local aborda las relaciones ciencia-

⁷ Véanse Bekerman, F.: “Investigación científica bajo el signo militar (1976- 1983): la bisagra entre el CONICET y la Universidad”. Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, Número 2, Año 1, 2009, pp. 189-206; Bekerman, F.: Modernización conservadora: los designios de la investigación científica durante el último gobierno militar en Argentina”, en Beigel, F (Coord.): *Autonomía y dependencia de las ciencias sociales: Chile y Argentina (1957-1980)*, Buenos Aires, Biblos, 2010a, pp. 207-232; Bekerman, F.: La expansión de las research capacities en tiempos de dictadura: la política de creación de institutos en el CONICET y su impacto en la estructura del sistema científico argentino (1974-1983) en *ESTUDIOS*, N.º 25, 2011, pp. 121-139; Bekerman, F; Algañaraz V.: “El préstamo BID-CONICET: Un caso de dependencia financiera en la política científica de la dictadura militar argentina (1976-1983)”, *Ponencia presentada en el II Workshop sobre Dependencia Académica*, Mendoza, 2010.

⁸ Gárgano C.: “Ciencia y Dictadura: producción pública y apropiación privada de conocimiento científico-tecnológico. Dinámicas de cooptación y transferencia en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)”, *Crítica y Emancipación*, Año V, N.º 10, 2013, pp.137-174; GÁRGANO, C.: “Ciencia, tecnología y Dictadura: la reorganización de las agendas de investigación y extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)”, *Realidad Económica* N.º 258, 2011, pp.120-149.

⁹ Hurtado, D.: *El sueño de la Argentina atómica. Política, tecnología nuclear y desarrollo nacional 1945-2006*, Buenos Aires, Edhasa, 2014.

dictadura fundamentalmente de dos maneras. La primera pone en visibilidad cómo lo autoritario se expresó en las represiones sobre los cuerpos de los investigadores, cesantías, persecuciones y controles ideológicos que implicaron el desarme de grupos y una subordinación de sus agendas de investigación a los intereses políticos de la dictadura. La segunda, la que adoptaremos, busca indagar en las modalidades en que lo autoritario, que atravesó y organizó toda la vida social, configuró un modo de relación del conocimiento científico-tecnológico con la sociedad (ciudadanía) y el Estado y un tipo de formación profesional. La hipótesis interpretativa que se propone en este trabajo es que el régimen dictatorial mediante una cultura represiva logró que se generara un conocimiento científico-tecnológico de carácter híbrido: por una parte se producía conocimiento siguiendo un modelo disciplinar para el foro académico cuyos productos eran papers, formación de nuevos investigadores, participación en congresos, etc.;¹⁰ por otro, se producía conocimiento en el formato de informes técnicos o de consultorías, fundamentalmente, para el Estado. Este conocimiento se presentaba como estrictamente técnico, no politizado,¹¹ cuyo contenido permitía producir intervenciones políticas presentadas, fundamentalmente, en el contexto de dos configuraciones: el desarrollo y la modernización; el otro tópico menos pregnante, pero con relevancia fue el de la “seguridad nacional”. Es decir, la dictadura estableció una forma de producción de conocimiento que generaba para los sujetos involucrados un espacio desvinculado de las condiciones sociales más amplias de producción de la vida social. Esta condición híbrida habilitaba ya sea la construcción del carácter de “confidencialidad” del conocimiento producido o un destinatario específico: los gobiernos o las autoridades gubernamentales.

Autoritarismo y conocimiento híbrido (1966-1973)

La constitución de lo híbrido, en la Argentina, como problema social y como tema de conocimiento se produce en un ensamblaje de condiciones locales, nacionales, regionales e internacionales. Lo que podemos llamar en términos generales cuestiones socio-cognitivas del agua emergen como parte de esta compleja trama que articula procesos con diferentes dinámicas, temporalidades y escalas. En este sentido, es relevante considerar que lo híbrido fue parte del proceso de “armado de los problemas globales”, propio del establecimiento de un nuevo régimen epistémico;¹²

¹⁰ Véanse Gibbons, M.; Limoges, C.; Nowotny, H.; Schwatzman, S.; Scott, P, Trow, P.: *La nueva producción del conocimiento*, Barcelona, Pomares-Corredor, 1997; Shinn, T.: «Formes de division du travail scientifique et convergence intellectuelle», *Revue Française de Sociologie*, N ° 41, 2000, pp. 447-473.

¹¹ Resulta relevante la distinción entre lo técnico y lo político que plantea un abogado asesor de la OEA y que interviene de manera decisiva en el armado de la Cuenca del Plata: “En lo que respecta a los asesores técnicos, o al asesoramiento técnico, la redacción particular de la fase en la Declaración Conjunta como hemos dicho, deja amplia libertad operativa: «Cada país podrá acreditar los asesores técnicos que crea conveniente». Los problemas técnicos que necesitan discutirse en el desarrollo integrado de una región multinacional son de la más diversa naturaleza. En este plano de acción, todo lo que no es político es técnico. Y tratar políticamente cuestiones técnicas no es lo más aconsejable; aunque no se deja de reconocer que a veces es difícil trazar una línea clara de separación entre los problemas. Pero es indudable que habrá problemas de transporte, de comunicaciones, económicos, sociales, jurídicos y de otros tipos, que deberán ser tratados y discutidos por especialistas” (Ferrer Vieyra, E.: “La Cuenca del Plata: problemática jurídica de un desarrollo multinacional”, *Revista de Política Internacional*. Instituto de Estudios Políticos. Madrid. N.º 96, 1968. p.288)

¹² Vallejos, O.: “Universidad-empresa: un estudio histórico-político de la conformación del

de modo tal que en tanto problema global, lo hídrico, permitió articular e influir en la estructuración de las distintas disciplinas científicas y tecnológicas que reclaman pertinencia y experticia tanto para configurar el problema como plantear soluciones cognitivas o tecnológicas. En este sentido es relevante cómo lo que se va a configurar como disciplinas hidrológicas contribuye a la vez a fijar el objeto agua y a establecer un orden concéntrico de disciplinas que son capaces de organizar una agenda de investigación y formación en torno de la naturaleza y los problemas del agua.¹³

En este sentido, el armado de lo hídrico como problema global se mueve en dos direcciones ensambladas: lo cognitivo y lo institucional. Como plantea Eagleson¹⁴ (1994), hasta mediados del siglo pasado la hidrología estaba asociada a una escala de problemas locales y era un saber secundario de las ingenierías hidráulica y la agronómica. Pero a partir de la idea de ciclo hidrológico se produce un cambio de escala hacia la identificación de la “superficie terrestre” –en una escala que se movía de la atmósfera →superficie terrestre →humanos– como la escala apropiada para el desarrollo de la comprensión de este. Con ello se reconoció “la necesidad de cooperación internacional para el uso razonable y eficaz de los recursos hídricos y la adquisición de datos hidrológicos a gran escala” (Eagleson, 1994:6).¹⁵ Esta necesidad se puso de manifiesto cuando en la decimocuarta reunión (conferencia general) de la UNESCO se declaró el Decenio Hidrológico Internacional para el período entre 1965 y 1974. Los objetivos fijados para el Decenio fueron: “a) intensificar el estudio de los recursos hídricos y de su régimen con miras a su explotación racional; b) intensificar la investigación científica en todas las ramas de la hidrología a fin de mejorar los métodos de estudio de los recursos hídricos; y c) fomentar la enseñanza de la hidrología y formar especialistas, necesarios de todas las categorías”.¹⁶ Este andamiaje institucional permitió elaborar una “nueva agenda de investigación” en torno de lo hidrológico centrado en dos polos: cuantificar el ciclo del agua a gran escala espacial y temporal y analizar las interacciones entre la superficie terrestre, la atmósfera y la geología. Además, la salida de la posguerra estuvo marcada por el impulso hacia el diseño y construcción de obras para el aprovechamiento del agua en tanto recurso, o bien obras de contención del agua como las presas, obras de irrigación, barreras contra mareas, plantas hidroeléctricas, trasvase de cuencas o drenaje de humedales, entre otras obras ambiciosas y de gran escala.

La traducción local de este armado de lo hídrico como problema global fue la constitución del sistema multilateral subregional de la Cuenca del Plata. Este tratado empezó a construirse con la Declaración Conjunta de Buenos Aires del 27 de febrero

CETRI-Litoral”, *Revista Ibero Americana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, N.º 16, Vol. 6, Buenos Aires, Diciembre 2010, pp.123-152.

¹³ Lynton, J.: *What is Water? The History and Crisis of a Modern Abstraction*. Tesis doctoral. Department of Geography and Environmental Studies. Carleton University, 2006.

¹⁴ Eagleson, P.: “The evolution of modern hydrology”, *Advances in Water Resources*. N.º 17, 1994, pp. 3-18.

¹⁵ Eagleson, P., ob.cit., p.6.

¹⁶ UNESCO: Declaración del Decenio Hidrológico internacional para el período 1965-1974, UNESCO, 1966, Anexo 1-2.

de 1967; con el Acta de Santa Cruz de la Sierra del 20 de mayo de 1968 y se consolidó con la firma del Tratado de Brasilia, en abril de 1969, por parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. De todos modos, el *Informe Preliminar Regional Programa BID-Cuenca del Plata*, construye una genealogía del tratado que se remonta hasta 1898, la Conferencia Interamericana desarrollada en México. En la Declaración Conjunta firmada por los Ministros de Relaciones Exteriores se expresa: “Que es decisión de sus gobiernos llevar a cabo el estudio conjunto e integral de la Cuenca del Plata, con miras a la realización de un programa de obras multinacionales, bilaterales y nacionales, útiles al progreso de la región”.¹⁷ Con este Tratado estos países buscaron “maximizar la utilización de los recursos naturales de la región” como, por ejemplo, el establecimiento de vías navegables o el aprovechamiento energético de los ríos, lo cual implicaba “el conocimiento integral de la Cuenca”.¹⁸ La Secretaría de la OEA, en el contexto de este armado, realizó en 1967 un estudio básico inicial sobre el cual planificar el desarrollo hídrico, agrícola e industrial de la Cuenca del Plata, y que fue presentado como informe con el nombre *Inventario Analítico de los Datos Hidrológicos y Climatológicos*.¹⁹ También el BID llevó a cabo un *Programa BID-Cuenca del Plata un estudio “integral” de la Cuenca del Plata* que fue presentado también en un informe de 8 volúmenes: *Información Preliminar Regional*. Aquí se suministró información sobre los recursos hídricos, los recursos hidráulicos, el transporte, la energía, algunos proyectos de infraestructura y datos estadísticos, entre otros aspectos, de la Cuenca del Plata.²⁰

La firma del Tratado marcó un momento importante para el armado de la estructura científica y tecnológica respecto de lo hídrico en la región; como dicen varios actores entrevistados para esta investigación se iniciaba una problemática nueva: el estudio de los ríos de llanura. Al tiempo que se avanzaba en el andamiaje jurídico e institucional que permitiera la constitución del gobierno de los ríos para el que se creaba la necesidad de una base de conocimiento/investigación. Como muestran los informes presentados por las agencias internacionales que brindaban asistencia técnica, esta tarea trascendía la capacidad de cada uno de los países con participación territorial en la Cuenca.

El armado de este objeto, la Cuenca del Plata, a escala regional se vincula con la estrategia política de la dictadura que preside Onganía; lo hídrico es visto como una oportunidad para proyectar posiciones de política exterior y como una forma de regionalizar la política interna del país. En efecto, la firma de ese Tratado es parte de la configuración política que emerge durante esta dictadura identificada por O'Donnell como Estado Burocrático Autoritario (BA).²¹ Este se caracterizó por

¹⁷ OEA: *Cuenca del Río de la Plata. Estudio para su planificación y desarrollo. Inventario de datos hidrológicos y climatológicos*, Unión Panamericana Washington D.C., 1969, p. III.

¹⁸ Nohlen, D., Fernández, B, M.: “Cooperación y conflicto en la Cuenca del Plata”, *Estudios Internacionales*, 14, 1981, pp. 412-443.

¹⁹ OEA, ob.cit

²⁰ BID: *Programa BID-Cuenca del Plata, Informe Preliminar Regional*, Buenos Aires, Ocho tomos, 1969.

²¹ O'Donnell, G.: *El Estado Burocrático Autoritario*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 2009.

un régimen político que implicó el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno y, junto con ellos, de los criterios de representación popular o de clase. Dicho acceso quedó limitado a quienes ocupaban un lugar en la cúpula de grandes organizaciones, especialmente las Fuerzas Armadas y grandes empresas privadas y públicas.²² De esta manera la primera medida de este gobierno de facto fue el de producir un “shock autoritario” con la disolución del parlamento y los partidos políticos y la concentración del poder. Los ministerios fueron reducidos a cinco, y se creó una suerte de Estado Mayor de la Presidencia, integrado por los Consejos de Seguridad, Desarrollo Económico y Ciencia y Técnica.²³

En este período, el binomio seguridad nacional-desarrollo económico pasó a justificar un férreo sistema de control y dominación social para la implantación del “orden” mediante un proyecto de subordinación social de los sectores populares insurrectos.²⁴ De esta forma, la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) legitimó una intervención novedosa de las universidades nacionales con marcas de autoritarismo extremo y pacto de continuidad. Si bien existen imágenes homogeneizantes sobre el período, hay matices importantes en cada una de las universidades nacionales. Sin embargo, la ciencia y la técnica fueron consideradas pilares del desarrollo y de la seguridad²⁵ y parte de una estrategia política de sostenimiento del régimen. Para ello, en el marco de un Estado planificador, se creó en 1968 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que tuvo a su cargo una Secretaría (SECONACYT), como órgano máximo de gobierno de las actividades científicas y tecnológicas, presidido por el responsable del poder ejecutivo e integrado por sus ministros. Este consejo buscó “centralizar a la vez que planificar las actividades de investigación, al modo como se había diagramado el sistema general del gobierno” (Memoria Crítica de una Gestión, 1989: 25).²⁶

Los recursos hídricos fueron parte de este sistema de políticas y de creación de agencias estatales. En 1968, con el apoyo financiero y técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la UNESCO, se creó el Laboratorio Nacional de Hidráulica Aplicada (LNHA) para el desarrollo de investigaciones hidráulicas e hidrológicas. Alfonso Pujol y Eduardo Bustamante, ambos ingenieros civiles que realizaron estudios en sus campos de especialización en Estados Unidos y Brasil, organizaron las investigaciones en estas dos áreas. La construcción del gobierno de los recursos hídricos comienza a tener dos grandes frentes: a) la constitución de un andamiaje científico-tecnológico en la esfera estatal, y b) la construcción de grandes obras de ingeniería. En efecto, entre 1968 y 1969 se inició la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, puertos y se habilitaron vías navegables. Estas acciones eran consideradas condiciones de posibilidad para el desarrollo económico

²² O´Donnell, G., ob.cit.

²³ Romero, L. A.: *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p.170.

²⁴ O´Donnell, G., ob.cit.

²⁵ Hurtado, D., ob.cit, p.11.

²⁶ Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación: *Memoria crítica de una gestión (1983-1989)*, Buenos Aires, 1989.

del país. Para la gestión de estos grandes emprendimientos, como el de la Cuenca del Plata, se creó una Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, como organismo específico en materia de política hídrica, abarcando cuestiones de conocimiento, aprovechamiento, control y conservación del agua (los ríos) como recurso. Aquí funcionará la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata.

1.1 *Los recursos hídricos en las Políticas del Estado BA*²⁷

La conformación inicial del Estado BA tuvo un primer período que va desde la presidencia de Onganía hasta el inicio del corto período constitucional que va desde 1973 hasta marzo de 1976. Durante el período que presidió el general Levingston (1970-1971) se promulgaron las llamadas Políticas Nacionales que respondían a los objetivos nacionales contenidos en el Acta de la Revolución Argentina. Entre los “fines revolucionarios” que se aluden en esta Acta se destaca, en primer lugar, la necesidad de “consolidar los valores espirituales y morales” constitutivos del “patrimonio de la civilización espiritual y cristiana”.²⁸ Sobre estos valores se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad (1971-1975) (PNDyS) en donde se establecieron las cuatro tareas que conformaban y explicitaban el horizonte ideológico de este Estado BA: la realización del hombre (acceso a los bienes necesarios para su realización espiritual y material), la integración nacional (una nación sin diferencias regionales), la seguridad nacional (contra el enemigo interno y externo) y el desarrollo nacional (en los moldes de las naciones democráticas; esto es: capitalistas).

Para nuestro trabajo es relevante que en el PNDyS la cuestión de los recursos hídricos era un tema de interés nacional vinculado al desarrollo económico. En este Plan se sostenía que hasta ese momento la explotación de los recursos hídricos era deficiente y distorsionado, impidiendo el aprovechamiento integral y coordinado de estos. Como consecuencia se presentaban diferentes problemas tales como: la falta de riego y drenaje que limitaban el desarrollo agrícola; el escaso aprovechamiento del potencial hidroeléctrico; el déficit en los servicios sanitarios en el país; el aprovechamiento de las vías fluviales interiores de navegación; y los demás usos generales del agua.²⁹ Para superar esta situación se impulsaría, a través de un conjunto adecuado de medidas científicas, técnicas y financieras, las acciones tendientes a lograr el conocimiento, manejo, defensa y aprovechamiento integral de los recursos superficiales y subterráneos y marítimos costeros. Entre ellas podemos nombrar la creación del Laboratorio Nacional de Hidráulica Aplicada, estructura institucional que emerge en la esfera estatal para canalizar tanto las investigaciones como la formación especializada. Por otra parte, en el Plan Nacional de Ciencia y Técnica (1971-1975), que buscaba asegurar la consolidación de la estructura científico-tecnológica del país y un constante flujo de conocimientos e innovaciones hacia los sectores productivos

²⁷ Estado burocrático-autoritario (BA)

²⁸ Tach, C.: “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en James, D (director del Tomo IX): *Violencia, Proscripción y Autoritarismo (1955-1976)*, Colección Nueva Historia Argentina, editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003, p.50.

²⁹ Secretarías del Consejo Nacional de Desarrollo y del Consejo Nacional de Seguridad: *Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo 1971-1975*, Buenos Aires, 1971, p.161.

(Plan Nacional de Ciencia y Técnica, 1971:18), se establecieron los recursos hídricos como un tema prioritario de investigación, no solo por su relevancia científica, sino también por tener una finalidad de “aplicación económico-social”.³⁰

1.2 La creación del Departamento de Hidrología General y Aplicada

La creación del Departamento de Hidrología General y Aplicada se produce en un momento de profunda transformación de la UNL. Sobre la base de la Universidad Provincial de Santa Fe (1890), la Universidad Nacional del Litoral se constituyó con sedes en Santa Fe, Rosario, Paraná y Corrientes. Luego del golpe que derrocó a Perón, se creó la Universidad Nacional de Nordeste por lo que se pierde la Sede Corrientes. Durante la dictadura de Onganía, se creó la Universidad Nacional de Rosario por lo que la Universidad del Litoral perdió aproximadamente la mitad de sus facultades y más de la mitad de sus estudiantes. Ante esto, se buscó una nueva regionalización sobre Entre Ríos, pero prontamente comenzó en esta provincia un movimiento fuerte procreación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por lo que la UNL se ve obligada a refundarse. En este contexto, se buscan nuevas bases para la universidad sobre una organización departamental. Así se crearon, sobre cátedras preexistentes los departamentos de Matemática y Filosofía y nuevos departamentos como el de Agronomía y Producción Animal³¹ y el de Hidrología General y Aplicada (Resolución Consejo Superior N.º 55/70).³² Los departamentos canalizan un impulso modernizador autoritario. Además de este proceso interno de refundación, el DHGyA respondió a la instalación de la Cuenca del Plata como un complejo institucional por donde canalizar la solución a los problemas locales que tenían que ver con la inundación y la provisión de agua potable, entre otros. De hecho, hay una organización civil que canaliza los impulsos de “servicio” –vinculada con la asistencia a los inundados–, la Comisión Permanente Pro Estudio Integrado de la Cuenca del Plata que tuvo un papel importante en la creación del Departamento.³³

Como director interino (1970-1973) fue nombrado el Ingeniero Carlos Guillermo Villa Uría, quien provenía de la Dirección de Hidráulica de la provincia. Este es un indicador de las fluidas relaciones entre el gobierno de la provincia que estaba en manos del contraalmirante Eladio Modesto Vázquez y la UNL. También en ese entramado de relaciones la Universidad crea el Centro de Planeamiento que tenía como uno de sus objetivos el desarrollar capacitación para funcionarios públicos “de alto nivel”.³⁴

De manera que la creación del DHGyA vinculó relaciones locales y los problemas

³⁰ Secretaría del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: Plan Nacional de Ciencia y Técnica 1971-1975: objetivos, metas, líneas de acción, Buenos Aires, 1971, p.40.

³¹ Resolución Consejo Superior N.º 66/70.

³² Resolución Consejo Superior N.º 55/70.

³³ En la memoria de la Comisión de año 1968, se informa que la UNL tiene “el deseo de plantear la necesidad de establecer un centro universitario de altos estudios de Hidrología, etc.” Comisión Pro estudio integrado de la Cuenca del Plata, Memoria 1968-1970. Por su parte, en la memoria de Abril-Mayo de 1970 consta como inciso g) “Apoyo a la creación del Departamento de Hidrología de la Universidad Nacional del Litoral” Comisión Pro-Estudio Integrado de la Cuenca del Plata, ob. cit.

³⁴ Resolución Consejo Superior N.º 51/70.

generales de la Cuenca del Plata. Como afirmó un actor que participó en esta creación:

“A Comienzos de los ´70, los que fuimos los fundadores del entonces Departamento de Hidrología General y Aplicada de la Universidad Nacional del Litoral lo imaginamos como el futuro centro de irradiación académica en lo referente a los recursos hídricos de la Cuenca del Plata argentina”.³⁵

Los objetivos del Departamento expresados en la Resolución de creación eran: “a) desarrollar carreras profesionales; b) profundizar en la investigación básica y servir al desarrollo de los planes nacionales y regionales que se proyectaban por entonces, y, por último, c) asesorar a los poderes públicos, entidades empresariales o privadas, en orden a las disciplinas de su competencia” (Resolución Consejo Superior N.º 55/70).³⁶ Conforme estos objetivos inmediatamente se crearon las carreras de Técnico Auxiliar en Hidrología, Licenciado en Hidrología e Ingeniero Hidráulico. Dos años más tarde, se suprimieron las de Técnico Auxiliar en Hidrología e Ingeniería Hidráulica y fueron aprobados los planes de estudios de las carreras de Ingeniería en Recursos Hídricos y de Hidrotécnico. El hecho de que el Departamento se abocara al tratamiento de las cuestiones hidrológicas y a la formación en hidrología (y no específicamente hidráulicas) es comprensible en este contexto más amplio que había hecho de la cuestión del agua y su organización natural y social un problema central.

Lo que resulta relevante es que las actividades de investigación vinculadas con lo hidrológico se acoplan al ethos político del Estado que O’ Donnell caracteriza como sigue:

“Desde sus instituciones se llevan a cabo intentos sistemáticos de ‘despolitizar’ el tratamiento de cuestiones sociales, sometiéndolas a los que se proclama son criterios neutros y objetivos de racionalidad técnica”.³⁷

De esta forma cuando los funcionarios del gobierno de la autodenominada “Revolución Argentina” hacían referencia a la técnica la asociaban a dos polos de su concepción de la política: la racionalización y la autonomización de los procesos administrativos y del estado, y la utopía de la resolución “técnica” de los problemas de la comunidad.³⁸ En consecuencia, empezaron a jugar un rol preponderante en las instituciones del Estado actores civiles que fueron presentados como “técnicos” y

³⁵ Pujol, A.: “Presentación”, en Paoli, C., Schreirder (editores): *El río Paraná en su tramo medio. Contribución al conocimiento y prácticas ingenieriles en un gran río de llanura*, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2000.

³⁶ Resolución Consejo Superior N.º 55/70.

³⁷ O’ Donnell, G., ob.cit, p.58.

³⁸ Osuna, F.: “Entre el pasado colonial y el futuro espacial. Ideas y actores en torno a las políticas de seguridad social del “Onganiato”, en Galván, V., Osuna, F. (Comp.): *Política y cultura durante el “Onganiato”. Nuevas perspectivas para la investigación de Juan Carlos Onganía*, Rosario, Prohistoria ediciones, 2014, p.178.

“apolíticos”, es decir, como aquellos especialistas que poseían una capacidad o una racionalidad técnica para resolver los complejos problemas de las sociedades.³⁹ Pero esta condición, tuvo una configuración específica para el sostenimiento de la actividad de investigación. En efecto, a la vez que era eficaz para contener los reclamos ciudadanos de intervención en los procesos de decisión y reforzar así una estrategia autoritaria era capaz de orientar positivamente a los investigadores a producir conocimientos alineados a ese ethos autoritario.

El armado de la Cuenca del Plata como un proyecto de desarrollo y modernización, la dotación de recursos económicos importantes que pudieran sostener las actividades de investigación, la posibilidad de participar en foros académicos de alcance regional o global y de intervenir en las decisiones gubernamentales sobre las obras de ingeniería construyó una esfera que opacaba la visibilidad –desde adentro– del régimen autoritario que regulaba la vida social más amplia y al mismo tiempo se alineaba con él. Nuestra conjetura es que con la emergencia el DHGyA esta condición se tradujo en una manera de concebir y abordar los problemas hidrológicos que contrasta con otras imágenes integrales e interdisciplinarias del problema de la Cuenca del Plata.⁴⁰ Por otro, se consideran relevantes las Primeras Jornadas de Ingeniería de la Cuenca del Plata realizadas en Santa Fe en junio de 1968 en donde se ofrecen una concepción amplia de los problemas técnicos vinculados a la Cuenca del Plata; desarrolladas durante tres días contó con ocho paneles: 1. Planeamiento; 2. Recursos Naturales y potencial humano; 3. Posibilidades hidráulicas y energéticas; 4. Posibilidades del transporte y su estructura; 5. La vivienda del hombre y saneamiento; 6. Posibilidades industriales; 7. Posibilidades en el orden nacional y provincial; 8. Aspectos Jurídicos.⁴¹

A pesar de estas representaciones el DHGyA solo tuvo en cuenta los aspectos de la Cuenca del Plata que se reconocen como técnicos. El análisis de la currícula diseñada para la formación de profesionales que se pensaban parte de los cuadros

³⁹ Osuna, F., ob.cit.

⁴⁰ Los Informes que habían producido las agencias internacionales (OEA, BID, UNESCO) proponían estudios integrales de la Cuenca; aunque dirigidos a los gobiernos, estos informes consideraban las condiciones socio-institucionales en las que sería posible un proyecto de desarrollo para la cuenca. Incluso el estudio más específico, *Inventario de datos hidrológicos y climatológicos* (1969), hace referencia en el Capítulo I: Conclusiones y recomendaciones, a cuestiones de población, económicas, administrativas y de coordinación. Además en la Memoria 1966-1968 de la Comisión Permanente Pro-Estudio de la Cuenca del Plata se afirma la necesidad de crear una Universidad de la Cuenca del Plata para la investigación interdisciplinaria de los problemas de la Cuenca.

⁴¹ Según la reseña publicada en la *Revista Carretera* las Jornadas fueron acordadas a partir de una resolución de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) que declaraba la Cuenca del Plata de interés primordial para la ingeniería; la Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros (UADI) encarga a la Asociación de Ingenieros de Santa Fe la organización de estas (*Revista Carretera*, Asociación Argentina de Carreteras, Año XIII, N.º 47, julio-septiembre 1968, p. 56). La Comisión Permanente Pro-Estudio Integrado de la Cuenca del Plata participa de la organización. A estas jornadas asistieron funcionarios provinciales, nacionales y de los organismos internacionales como el director del INTAL –responsable del *Informe Preliminar Regional de la Cuenca del Plata*– Julio Rodríguez Árias y como jefe de la delegación de la OEA Enrique Ferrer Vieyra que fue uno de los organizadores de la Primera Reunión de Juristas de la Cuenca del Plata desarrollada en Río de Janeiro en 1967 (Diario El Litoral, 13 de junio 1968) “Quedaron inauguradas esta mañana las Primeras Jornadas de Ingeniería de la Cuenca del Plata”. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/28927/?page=4>). Consultada el 28 de mayo del 2015; Diario El Litoral, (14 de junio 1968) “Continúan hoy las Primeras Jornadas de Ingenierías de la Cuenca del Plata. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/28928/?page=4>). Consultada el 28 de mayo del 2015; Diario El Litoral, (15 de junio 1968) “Se realizó anoche la clausura de las Jornadas de Ingeniería de la Cuenca del Plata”. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/28928/?page=4>). Consultada el 28 de mayo del 2015.

técnicos del estado y las modalidades de producción de conocimiento vinculadas fundamentalmente al “asesoramiento técnico” de los poderes públicos (o privados)⁴² permite ver el modo en que las condiciones constriñen el modo en que se organizaba la producción de conocimiento con la solución de los problemas sociales. En efecto, como señala uno de los primeros egresados del Departamento:

“la Carrera de Recursos Hídricos (...), se creó para aportar profesionales de formación específica a los requerimientos de las grandes obras hidráulicas iniciadas o planificadas en ese entonces: El Chocón, Salto Grande, Corpus, Yaciretá, Paraná Medio. Los egresados de las carreras de ingeniería se ubicaban rápidamente. La Gerencia Paraná Medio de Agua y Energía absorbió a muchos profesionales y estudiantes”.⁴³

Con esta visión de formar técnicos para el Estado y de articularse a las demandas estatales, el DHGyA buscó desarrollar una infraestructura para las actividades de investigación y con ello poder abordar cuestiones de hidromecánica asociadas a los emprendimientos hidráulicos que se estaban llevando a cabo en ese momento. En este sentido, ocupan un lugar central los informes técnicos frutos del trabajo de consultoría. Sin embargo, el conocimiento producido por el DHGyA adquirió un carácter híbrido en la medida que estaba destinado no solo al foro de las demandas estatales, sino también al académico/disciplinar.

Actividades de investigación y producción de conocimientos híbridos

Si la problemática de los recursos hídricos, expresada en el Tratado de la Cuenca del Plata, se volvió un tema de prioritario para el gobierno dictatorial, esta fue asumida también durante el período democrático peronista (1973-1976). En efecto, siguiendo con la política de generar conocimiento para el gobierno del agua, en 1973 se creó el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnologías Hídricas (INCYTH), el cual centralizó varias agencias existentes, entre ellas al Laboratorio Nacional de Hidrología que se había creado en 1972. El INCYTH se abocó a la investigación hidráulica integrando para ello diferentes especialistas y constituyendo una importante infraestructura edilicia, equipamiento e instrumental. Ese mismo año se creó el Centro Regional Litoral del INCYTH con la llegada a Santa Fe de los ingenieros Alfonso Pujol y Eduardo Bustamante que se incorporaron al DHGyA. En 1974, Pujol proyectó el diseño del Laboratorio de Hidráulica (LH) que recién tendría un efectivo funcionamiento hacia 1976.⁴⁴ Además, en 1974 se creó Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca

⁴² Resolución Consejo Superior N.º 55/70.

⁴³ Fratti, R.: “Testimonio”, en Bacolla, A.; Pujol, M. y Lozeco, C. (Comp.) (2005) Crónicas de la FICH 35 años, Santa Fe, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral, p. 188.

⁴⁴ Véase El laboratorio de hidráulica. Infraestructura y equipos mayores: Santa Fe, Publicación de la Universidad Nacional del Litoral-Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, 1974. Hay que señalar que en 1972 el director del DHGyA le había solicitado a Pujol la confección de un laboratorio de hidráulica: “El Laboratorio de Hidráulica Aplicada de la Universidad Nacional del Litoral. Informe del Anteproyecto”.

del Plata y la propuesta de realizar estudios hidrogeográficos integrales en los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y de la Plata.⁴⁵ Sin embargo, este ensamblaje se vio conmovido por las características de la inundación de 1973.

Si hasta ese momento el agua aparece como un recurso hídrico, las importantes lluvias que provocaron una gran inundación en la región de los Bajos Submeridionales en 1972 y la crecida extraordinaria del río Salado en 1973 que inundó el oeste de la ciudad de Santa Fe y derrumbó el puente de la autopista Rosario-Santa Fe, pusieron en crisis esta conceptualización. Estas situaciones produjeron una “alarma social” en ciertos sectores de la población y tuvieron una importante repercusión en los medios de comunicación, sin embargo el grupo de hidrólogos santafesinos vieron allí una nueva oportunidad para reforzar su posición y plantear que el problema social del “agua” requería una base cognitiva que permitiera resolverlo. El Convenio Bajos Submeridionales en 1973 fue el armado que permitió articular la nueva posición del Departamento en el contexto local. Este Convenio fue suscripto entre las provincias de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y el Consejo Federal de Inversiones. El objetivo de este instrumento consistía en realizar un estudio integral de la llamada Región de los Bajos Submeridionales.⁴⁶ El Programa de Desarrollo desde su inicio planteó como objetivos generales el integrar social y económicamente la región en el seno de las economías provinciales, persiguiendo los siguientes objetivos específicos: a) estabilizar e incrementar los niveles de producción de la región a partir de la disminución de la recurrencia y el impacto social y económico que provocan los eventos hidrológicos extremos, tanto por exceso como por déficit hídrico, b) mejorar los circuitos de comercialización, c) garantizar mejores condiciones de vida dentro del área, d) ocupar el espacio y aprovechar plenamente los recursos disponibles en la región, e) frenar y revertir las corrientes migratorias de la población rural y urbana hacia los grandes centros urbanos nacionales, f) desarrollar estudios e investigaciones básicas y aplicadas que tiendan a incrementar la productividad de los recursos del área, y g) preservar y mejorar las condiciones ecológicas y ambientales en la región.

Para abordar el punto f) el Comité Coordinador del Programa de Estudios de

⁴⁵ Diario El Litoral, (12 de junio de 1974) “Reunión de la Cuenca del Plata”. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/31050/?page=4&zl=4&xp=-995&yp=-1537>). Consultada el 20 de mayo del 2015.

⁴⁶ Cada uno de los informes técnicos analizados para la presente investigación realiza una identificación de la región. Los estudios realizados fueron aportando elementos para la identificación de la zona. Para marcar el contraste entre una primera identificación para el gran público que se realiza en el Diario El Litoral compárese la que se expresa en la nota que informa la firma del convenio: “delimitándose la zona del siguiente modo: al norte, el paralelo 28; al sur el paralelo 30; al oeste, la vía férrea que une al general Pinedo con Tostado, y al oeste el Río Paraná. Estimó que lo que debe estudiarse alcanza a unos doce millones de hectáreas” (Diario El Litoral (27 de octubre de 1973) “Se firmó un acta-acuerdo sobre la región de los bajos submeridionales”. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/30830/?page=4>). Consultada el 27 de mayo del 2015) y la que consta en una Editorial del mismo diario del día 3 de julio de 1974: “la región que se comprende dentro de la denominación bajos submeridionales, clasificados geográficamente como sabanas inundables obra de factores geológicos y sedimentarios que le dan sus características con la presencia de las aguas pluviales y las lacustres y salinización de las subterráneas. El fenómeno meteorológico contribuyó a agravar estas condiciones, con suelos poco aptos para la fertilidad y con vegetación rala, matizada por isletas arbóreas. En un sector que acusa una disminución demográfica, no obstante sus actividades concentradas en ganadería, agricultura y forestación, permitieron una identificación más precisa de la zona, que comprende territorios de las provincias mencionadas, se encuentra en la cuenca baja del río que sucesivamente se denomina Pasaje-Juramento-Salado y está sometida a periódicas inundaciones con la previsible secuela de daños y pérdidas de todo orden” (Diario El Litoral, (3 de julio de 1974) Editorial “Los Submeridionales”. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/31069/?page=4>). Consultada el 27 de mayo del 2015.

los Bajos Submeridionales –conformado por representantes de las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco, del INCYTH, y el Consejo Federal de Inversiones– firmó un convenio con la UNL y la Universidad del Nordeste para que lleven a cabo investigaciones geológicas, geomorfológicas, de dinámicas de aguas, hidrogeológicas, hidrológica y de fotointerpretación de los bajos correspondientes a Santa Fe.⁴⁷ El Informe del Comité Coordinador del Programa es importante en este sentido puesto que coloca los Convenios con las universidades como parte de la estructura orgánica para “formular un plan de soluciones para la evacuación de los excedentes perjudiciales”⁴⁸, pero sin una dependencia clara respecto del resto de las agencias que intervienen.

Resulta relevante el modo en que la posición del Departamento de Hidrología construye una posición híbrida a partir de convertir la cuestión cognitiva como fundamental para la toma de decisiones en términos de las obras de infraestructura que había que realizar para la “evacuación de los excedentes perjudiciales”. Como señala un integrante de DHGyA, “los hechos indicaron que era imprescindible encarar estudios hidrológicos sobre estas cuencas, habida cuenta de lo poco que se conocía de las mismas”.⁴⁹ Esta condición cognitiva previa tensa la visión integral del problema que expresó el gobernador de la provincia, Silvestre Begnis en la ocasión de firmarse el Convenio que permite el estudio:

“el estudio siempre se había ido postergando por entender que un tema así no debía ser tratado con ligereza; sino que requería un estudio de carácter integral, especialmente por las consecuencias que podían seguirse según las medidas que se adoptaran en la zona con relación al uso del agua. (...) Dijo que el proyecto está dividido en dos etapas; en la primera se podrán hacer los grandes desagües, es decir, se puntualizará lo relativo al sentido que habrá que darle al desagüe principal para poder crear el sistema de canales secundarios que sirvan a las necesidades de cada zona. Apuntó que esta obra será encarada de forma práctica”.⁵⁰

Como se verá en el Informe (Informe General, 1980) elaborado por el Consejo Federal de Inversiones para el Programa de desarrollo agropecuario para la región de los Bajos Submeridionales: 2.^{da} etapa de inversión, esta concepción entra en conflicto. Como se plantea en el Informe: “Se habla de evacuar el excedente, pero el buen sentido nos dice que toda agua dulce disponible debe preservarse y no salinizarse permitiendo

⁴⁷ Diario El Litoral, (28 de agosto de 1974) “Se llevó a cabo la reunión del Comité Coordinador de los Bajos Submeridionales”. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/31122/?page=5>). Consultada el 27 de mayo del 2015

⁴⁸ Comité Coordinador Programa de Estudios Bajos Submeridionales: *Programa para el Estudio Integral de Bajos Submeridionales*. Consejo Federal de Inversiones, abril 1975, p.7.

⁴⁹ Paoli, C.: “Investigación”, en Bacolla, A.; Pujol, M. y Lozeco, C.(Comp.): *Crónicas de la FICH*. 35 años, Santa Fe, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral, 2005, p. 60.

⁵⁰ Diario El Litoral, (15 de diciembre de 1973) “Firmóse el acuerdo sobre los bajos submeridionales”. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/30878/?page=4>). Consultada el 27 de mayo del 2015.

su escape hacia el mar. De allí que el concepto de excedente debe ser aplicado estrictamente al agua que no puede ser retenida, infiltrada, o sea imprescindible para el funcionamiento del sistema fluvial. Los montos de precipitación del área son uno de sus mayores recursos naturales y no la causa de sus problemas como se los quiere presentar”.⁵¹ Por ello es que cuando los hidrólogos formularon el problema en términos cognitivos contribuyeron a su formación como un problema social a la vez que también condicionaron la forma de solucionarlo (Cf. Kreimer y Zabala, 2006).⁵² Como explicitan Bielsa y Frati: “el estudio como sustentación básica del plan de obras”.⁵³ En el caso analizado, estos problematizaron la cuestión de la inundación desde una matriz disciplinar, es decir, propusieron abordar el problema como un tema hidrológico necesario para que los gobiernos tomaran decisiones constreñidos por ese conocimiento. Para ello el DHGyA creó un programa de investigación, el “Programa 08 Bajos Submeridionales”, el cual contó con un importante financiamiento y con recursos humanos provenientes de la UNL y del Comité Coordinador del Programa de Estudios de los Bajos Submeridionales. El objetivo principal de este Programa era contribuir al conocimiento del funcionamiento hidrológico de la región, según el análisis del modelado del paisaje y al procesamiento y análisis de la información hidrológica e hidrogeológica existente. La composición del Programa, que se conformaba con tres proyectos, refleja la naturaleza disciplinar del abordaje del problema: Dinámica Hídrica y Cartografía, Hidrometeorología e Hidrología de Superficie, e Hidrogeología. Sus actividades, que se desarrollaron entre 1974 y 1977-1978, permitieron la conformación de grupos de investigación; el conocimiento producido está incorporado en los informes técnicos realizados para los gobiernos; como se explicita en el Informe del Comité Coordinador Programa de Estudios Bajos Submeridionales: “La edición y difusión de la presente publicación lleva el propósito de que todos los sectores gubernamentales, como así también los de actividad privada, conozcan el Programa de Estudios encarado”.⁵⁴ También integrantes del Departamento produjeron informes técnicos con recomendaciones y los informes de los resultados de investigación incorporan recomendaciones de obra.⁵⁵ De esta forma al tematizarse el problema de las inundaciones como una cuestión disciplinar, los productos de esas investigaciones fueron disciplinares en el sentido de la acumulación de materiales para el mejor conocimiento de los objetos de estudio y de la aplicación de las metodologías de recolección de los datos científicos.⁵⁶ Es decir, se produjo un aumento del conocimiento disciplinar sobre el problema, pero no de la problemática en toda su complejidad. De manera que aquí se opera sobre un modelo

⁵¹ Consejo Federal de Inversiones: *Programa de desarrollo agropecuario para la región de los Bajos Submeridionales: 2.ª etapa de inversión*, Volumen III, 1980, p.1.

⁵² Kreimer, P., Zabala, J.P.: “¿Qué conocimiento y para quién? Problemas sociales, producción y uso social de conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas en Argentina”, *Revista Redes*, Vol. 12, N.º 23, 2006, pp. 49-78.

⁵³ Bielsa, L., Fratti, R.: *Determinación del comportamiento del sistema natural y modificado con obras en temas referentes a calidad de agua*, Convenio Bajos Submeridionales, Consejo Federal de Inversiones, 1981.

⁵⁴ Comité Coordinador Programa de Estudios Bajos Submeridionales. ob, cit. p.5

⁵⁵ Entre ellos podemos nombrar: “Bajos Submeridionales-Contribución al Conocimiento Hidrogeológico de la Región” (1981) y “Caracterización hidrometeorológica de la región de los bajos submeridionales” (1981).

⁵⁶ Shinn, T., ob.cit

de producción de conocimiento pensada como “conocimiento de base” para que la política venga después; aunque sea un conocimiento parcial de la problemática. La información consultada muestra que la investigación sobre los Bajos Submeridionales atravesó dos etapas, la primera que va desde 1974 y llega hasta fines de 1975 y la segunda que comienza a mediados de 1976 y atraviesa toda la dictadura. En términos cognitivos, la primera etapa corresponde al armado de una base científica y de adquisición de experiencia para interactuar con las agencias estatales y la segunda a la consolidación y profundización del conocimiento hidrológico de la región y la participación en los proyectos de estudios requeridos por los organismos multilaterales de financiamiento. Este contraste puede verse analizando los Informes de 1975 y el de 1980 del Consejo Federal de Inversiones. De manera que la investigación en el DHGyA emergió en el breve período democrático que va de 1973 hasta 1976, pero se consolidó y adquirió su identidad en el período de la última dictadura cívico-militar.

En efecto, la consolidación de las investigaciones estuvo asociada a dos situaciones. Por un lado, la nueva modalidad de financiamiento instaurada desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación estableció que las actividades de investigación debían basarse en proyectos independientes, no ya en programas. Conforme a ello se estableció el Programa de Investigaciones en Áreas de Llanuras que constaba de seis proyectos, muchos de ellos referidos al tramo medio del río Paraná, en las áreas de hidrología, hidrogeología, hidráulica fluvial y contaminación.

Por otro lado, a la realización de actividades de consultaría en el marco del desarrollo del Proyecto del Paraná Medio que fue impulsado por la última dictadura cívico-militar.⁵⁷ Este proyecto, cuyo objetivo era el aprovechamiento hidroeléctrico del Paraná en su tramo medio, involucró una serie de instituciones estatales como Agua y Energía Eléctrica (AyEE) quien tuvo a su cargo determinar la factibilidad técnica y económica del proyecto. El tramo medio del Paraná quedaba comprendido por los ejes trazados entre las ciudades de Paraná-Santa Fe hasta la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay.⁵⁸ Para el gobierno militar era una zona geopolítica de vital importancia para la estrategia de desarrollo nacional en la Cuenca del Plata. De esta manera, en 1978, el presidente de la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata, general de división retirado Jaime de Nevaes afirmó que era una zona

⁵⁷ Para el gobierno de facto de 1976 la cuestión de los recursos hídricos, y la Cuenca del Plata de manera específica, siguió siendo una preocupación prioritaria. Como lo afirmó el Almirante Armando Lambruschini, integrante de la Junta Militar, afirmó refiriéndose a la política energética que “que junto a la petrolera y la nuclear, la Argentina debe poner en marcha perentoriamente, las realizaciones de la Cuenca del Plata” Lambruschini, A.: “Alocución del señor miembro de la Junta Militar y Comandante en Jefe de la Armada”, en *Segundas Jornadas del Paraná Medio*, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1979, pp.23-34.

⁵⁸ El proyecto del Paraná Medio implicaba la construcción de dos presas frontales y sus respectivas presas laterales. El primer cierre frontal, denominado aprovechamiento Norte, Cierre “Isla Pati” se encontraba a la altura de la ciudad de Romang, provincia de Santa Fe. Este cierre frontal, acompañado de dos cierres laterales, que inclusive llegaban a proteger a las ciudades de Reconquista y Goya de las grandes crecidas, creaba el embalse norte que se extendería hasta la ciudad correntina de Paso de la Patria. El segundo cierre frontal, denominado aprovechamiento Sur, “Cierre Chapetón”, tenía su emplazamiento en la isla Chapetón, que se encuentra a unos 30 km de la ciudad de Paraná (Beretta, M.: “Descripción General”, en *Primeras jornadas del Paraná Medio*, Paraná, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, 1978, pp. 33-38.)

geopolítica por su importancia cultural, política y económica para las provincias que se verían afectas por esta obra, pero también por ser una política que permitiría un acercamiento y eventual integración con Paraguay y Bolivia y frenar el avance que Brasil había realizado en la Alta Cuenca del Plata (Jaime de Nevares, 1978). Esta visión geopolítica justificó que a fines de 1976 la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata pasara a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.⁵⁹ Aquí se aprecia nuevamente el uso que el gobierno de facto realizó sobre la problemática de la Cuenca del Plata para legitimar su política exterior e interna.

Desde la UNL, en diciembre de 1976, el rector interventor Douglas Maldonado expresó que “que en este momento las autoridades nacionales han puesto especial hincapié en la necesidad del uso y explotación de nuestros recursos naturales” por lo cual adquiriría mucha importancia el DHGyA.⁶⁰ Para ello el Ing. Jorge Ramoneda, quien se desempeñaba como director del Departamento, planteó un programa de trabajo integrado en las condiciones estratégicas establecidas por el régimen de facto: “la cuenca del Plata es la quinta cuenca hídrica en importancia del mundo y la primera en asentamientos humanos y que el epicentro argentino de la misma está precisamente en el área de influencia directa de la UNL”.⁶¹

Es importante el anclaje que plantea Ramoneda en términos del ámbito de referencia: de la cuenca del Paraná –propia de la regionalización establecida en torno del emprendimiento del Tunel Subfluvial– y ámbito de acción directa de la Universidad del Litoral hacia la Cuenca del Plata que era la construcción regional que planteaban estratégicamente los militares. El anclaje permite articular un plan de desarrollo del conocimiento:

“Sin adecuadas medidas científicas y técnicas tendientes a lograr el conocimiento, manejo, defensa y uso racional de este privilegiado potencial, será muy difícil pretender un desarrollo acorde con las posibilidades de la región y del país, siendo esto válido para los recursos superficiales como subterráneos. Esto exige un estudio intensivo de las aguas, la evaluación en términos de calidad, caudal, duración de recursos y finalmente la elaboración de un inventario general de cada cuenca hídrica, lo que presupone contar con un capital humano altamente capacitado que cubra los aspectos de investigación básica y especializada”.⁶²

⁵⁹ Jaime de Nevares, M.: “Importancia geopolítica del proyecto del Paraná Medio” en *Primeras jornadas del Paraná Medio, Paraná*, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, 1978, pp.147-152.

⁶⁰ Diario El Litoral, (3 de diciembre de 1976), “Universitarias. Único de jerarquía universitaria es el país es el Departamento de Hidrología de la UNL”. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/31913/?page=4>). Consultada el 27 de mayo del 2015.

⁶¹ Diario El Litoral, (3 de diciembre de 1976), ob.cit.

⁶² Diario El Litoral, (3 de diciembre de 1976), ob. cit.

En este pasaje, Ramoneda concentra la expectativa de producción de conocimientos que el Departamento esperaba realizar y la articulación de los grupos de trabajo que habían ido estableciéndose. Pero esta expectativa tenía limitaciones ya que sostuvo que, hasta ese momento, la infraestructura, los recursos locales, los materiales y la organización eran todavía “mínimos como para encarar responsablemente este prioritario problema nacional”. Con el fin de remedir esta situación trazó como objetivo de su gestión en materia institucional consolidar, desarrollar y perfeccionar el DHGyA; promover un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles; obtener una cantidad substancial en la cantidad de investigadores; efectivizar la mayor interrelación posible con los sectores productivos, ya sea públicos o privados, y definir áreas prioritarias de investigación y de formación de especialistas”.

Participar del proyecto del Paraná Medio permitió empezar a desarrollar estos objetivos. Esto tuvo lugar con la firma de un convenio con AyEE, la cual contaba en Santa Fe con una gerencia de Proyectos dedicada a diseñar la obra hidroeléctrica Paraná Medio, Cierre Sur del Chapetón. Mediante este convenio AyEE demandó modelos hidráulicos necesarios para proyectar esta obra hidroeléctrica. Estos modelos fueron desarrollados por Alfonso Pujol en el Laboratorio de Hidráulica.⁶³ Como contraparte, AyEE realizó un importante inversión económica destinada a implementar tanto la obra de conducción y almacenamiento de agua del Laboratorio, como la construcción de un el Laboratorio de Sedimentología, por entonces único en su tipo en el país.

El desarrollo de los modelos físicos sirvieron para el entrenamiento en investigación de los estudiantes, que luego se incorporaron como docentes-investigadores en el Departamento o como ingenieros contratados para trabajar en AyEE. Es importante resaltar que en el marco de este convenio, en el año de 1980 fueron contratados los primeros docentes con dedicación exclusiva del DHGyA, época en que la totalidad de la planta docente era *part-time*. Esta medida permitió que las actividades de investigación comenzaran a institucionalizarse y, en algunos casos, a profesionalizarse.

Es importante resaltar, por último, que en 1980, desde el Rectorado de la universidad se gestionó para que DHGyA dictara el “Curso Internacional de Hidrología General con Énfasis en la Hidrología Subterránea” con la participación de las Universidades de Cuyo y San Juan. Este Curso formaba parte del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. A partir de ese año, el curso se dictó primero anualmente y posteriormente cada dos años, con la incorporación de otras universidades e instituciones públicas. Que este curso se llevara a cabo en Santa Fe hace visible tres cuestiones: el entramado político que sustentaba, y en cierta manera, ofrecía un paraguas protector para las

⁶³ Por otra parte se firmaron diferentes convenios con diversas instituciones que demandaban conocimientos. El primer convenio se firmó, en 1977, con el Consejo Federal de Inversiones e implicó el relevamiento hidrográfico y sedimentológico del río Gualaguay, con la idea de construir un modelo numérico sedimentológico de ese curso de agua. Este trabajo se desarrolló en conjunto con el INCYTH desarrollándose el informe técnico en cuatro tomos: “Estudio sedimentológico del Río Gualaguay y sus principales afluentes”.

actividades que se llevaban a cabo en el Departamento; el reconocimiento de la especialización que iba adquiriendo lo hídrico en Santa Fe y en el país; y por último, la participación local/nacional en el armado de los problemas globales.

A modo de cierre

En este trabajo hemos analizado la constitución y el desarrollo de un área de investigación vinculada a lo hidrológico en el ámbito del DHGyA de la UNL en contextos de regímenes dictatoriales. Para ello mostramos cómo el armado de problemas como el de la Cuenca del Plata, los Bajos Submeridionales, el del Paraná Medio están asociados a procesos internacionales que tienen que ver con la configuración internacional de las disciplinas, las acciones desplegadas desde las agencias internacionales –UNESCO, OEA, BID, etc.– y las modalidades en que estos permitía canalizar y configurar un ethos autoritario. En un período relativamente largo que va desde la dictadura gobernada por Onganía, pasa por el breve período constitucional y atraviesa toda la última dictadura del siglo pasado, se construye lo hídrico como problema social y cognitivo y se constituye una modalidad de producción de un conocimiento de carácter híbrido destinado a dos foros: el académico y el gubernamental.

El armado de los problemas hídricos se entretendió con políticas internas y regionales sostenidas por los gobiernos autoritarios del país. Es decir, lo hídrico fue parte del horizonte ideológico dominante en cuanto al desarrollo, la modernización y la seguridad nacional. Si bien los gobiernos de las dictaduras establecieron y dirigieron políticas altamente represivas respecto de diferentes grupos e instituciones de investigación académicas preexistentes, en el caso de la investigación hidrológica en Santa Fe se abrió un espacio, se destinaron importantes recursos financieros y se la ingresó como conocimiento de base para la toma de decisiones.

De manera que si bien la creación del DHGyA se vinculó con procesos internacionales, a nivel local estuvo asociado a la institucionalización de una infraestructura para el gobierno de lo hídrico; un gobierno necesitado conocimientos hidrológicos y una modalidad de producción de conocimiento que se expresaba fundamentalmente en informes técnicos destinados al foro estatal. Pero más allá de esta regulación de los regímenes autoritarios la investigación hidrológica presentó una dinámica que no se puede reducir a esta. En la medida que los problemas se abordaron de un modo disciplinar, más allá de la eficacia que esto pudo haber tenido con la solución de los problemas vinculados con lo hídrico, esto permitió una acumulación cognitiva y la consolidación de una tradición de investigación hidrológica híbrida.

Bibliografía

BACOLLA, A.; PUJOL, M.; LOZECO, C. (Comp.): *Crónicas de la FICH 35 años*, Santa Fe. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2005.

BAJOS SUBMERIDIONALES CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN: Santa Fe,

- Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, 1981.
- BEKERMAN, F.: “Investigación científica bajo el signo militar (1976-1983): la bisagra entre el CONICET y la Universidad». *Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, N.º 2, Año 1, 2009, pp. 189-206.
- BEKERMAN, F.: “Modernización conservadora: los designios de la investigación científica durante el último gobierno militar en Argentina”, en BEIGEL, F (Coord.): *Autonomía y dependencia de las ciencias sociales: Chile y Argentina (1957-1980)*, Buenos Aires, Biblos, 2010a, pp. 207-232.
- BEKERMAN, F.: “La expansión de las research capacities en tiempos de dictadura: la política de creación de institutos en el CONICET y su impacto en la estructura del sistema científico argentino (1974-1983) en *ESTUDIOS*, N.º 25, 2011, pp.121-139.
- BEKERMAN, F.; ALGAÑARAZ, V.: “El préstamo BID-CONICET: Un caso de dependencia financiera en la política científica de la dictadura militar argentina (1976-1983)”, *Ponencia presentada en el II Workshop sobre Dependencia Académica*, Mendoza, 2010b.
- BERETTA, M.: “Descripción General”, en *Primeras jornadas del Paraná Medio*, Paraná, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, 1978, pp.33-38.
- BID: Programa BID-Cuenca del Plata, Informe Preliminar Regional, Buenos Aires, Ocho tomos, 1969.
- COMITÉ COORDINADOR PROGRAMA DE ESTUDIOS BAJOS SUBMERIDIONALES.: *Programa para el Estudio Integral de Bajos Submeridionales*. Consejo Federal de Inversiones, Abril 1975.
- COMISIÓN PRO ESTUDIO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL PLATA: Memoria 1968-1970. Santa Fe.
- CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES: *Programa de desarrollo agropecuario para la región de los Bajos Submeridionales: 2.º etapa de inversión*, Doce Volúmenes, 1980.
- CARACTERIZACION HIDROMETEROLÓGICA DE LA REGIÓN DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES: Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral-Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, 1981.
- “ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO DEL RÍO GUALEGUAY Y SUS PRINCIPALES AFLUENTES”, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral-Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Cuatro tomos, 1977.
- EAGLESON, P.: “The evolution of modern hydrology”, *Advances in Water Resources*. N.º 17, 1994, pp. 3-18.
- EL LABORATORIO DE HIDRÁULICA. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS MAYORES: Santa Fe, Publicación de la Universidad Nacional del Litoral-Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, 1974.
- FERRER VIEYRA, E.: “La Cuenca del Plata: problemática jurídica de un desarrollo multinacional”, *Revista de Política Internacional*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, N.º 96, 1968. pp. 263-289.
- FRATTI, R.: “Testimonio”, en BACOLLA, A.; PUJOL, M. y LOZECO, C. (Comp.) *Crónicas de la FICH 35 años*, Santa Fe, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral, 2005, pp. 188-191.
- GIBBONS, M.; LIMOGES, C.; NOWOTNY, H.; SCHWATZMAN, S.; SCOTT, P.; TROW, P.: *La nueva producción del conocimiento*, Barcelona, Pomares-Corredor, 1997.
- BIELSA, L.; FRATTI, R.: *Determinación del comportamiento del sistema natural y modificado con obras en temas referentes a calidad de agua*, Convenio Bajos Submeridionales, Consejo Federal de Inversiones, 1981.
- GÁRGANO, C.: “Ciencia y Dictadura: producción pública y apropiación privada de conocimiento científico-tecnológico. Dinámicas de cooptación y transferencia en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)”, *Crítica y Emancipación*, Año V, N.º 10, 2013, pp.137-174.
- GÁRGANO, C.: “Ciencia, tecnología y Dictadura: la reorganización de las agendas de investigación y extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)”, *Realidad Económica* N.º 258, 2011, pp.120-149.
- HURTADO, D.: *El sueño de la Argentina atómica. Política, tecnología nuclear y desarrollo nacional 1945-2006*, Buenos Aires, Edhasa, 2014.
- JAIME DE NEVARES, M.: “Importancia geopolítica del proyecto del Paraná Medio” en *Primeras Jornadas del Paraná Medio*, Paraná, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, 1978, pp.147-152.
- KREIMER, P.; ZABALA, J.P.: “¿Qué conocimiento y para quién? Problemas sociales, producción y uso social de conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas en Argentina”, *Revista Redes*, Vol. 12, N.º 23, 2006, pp. 49-78.
- LAMBRUSCHINI, A.: “Alocución del señor miembro de la Junta Militar y Comandante en Jefe de la Armada”, en *Segundas Jornadas del Paraná Medio*, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1979, pp.23-34.
- LYNTON, J.: *What is Water? The History and Crisis of a Modern Abstraction*, Tesis doctoral, Department of Geography and Environmental Studies, Carleton University, 2006.
- MERTON, R. K.: “Science and Social Order”, en *Social Theory and Social Structure*. New York, The Free Press, 1968, pp. 592-604.
- NOHLEN, D.; FERNÁNDEZ, B.M.: “Cooperación y conflicto en la Cuenca del Plata”, *Estudios Internacionales*, 14, 1981, pp. 412-443.

- O' DONNELL, G.: El Estado Burocrático Autoritario, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 2009.
- OEA: *Cuenca del Río de la Plata. Estudio para su planificación y desarrollo. Inventario de datos hidrológicos y climatológicos*, Unión Panamericana Washington D.C, 1969.
- OSUNA, F.: "Entre el pasado colonial y el futuro espacial. Ideas y actores en torno a las políticas de seguridad social del "Onganiato", en GALVÁN, V.; OSUNA, F. (Comp.): *Política y cultura durante el "Onganiato". Nuevas perspectivas para la investigación de Juan Carlos Onganía*, Rosario, Prohistoria ediciones, 2014, pp.177-193.
- PAOLI, C.: "Investigación", en BACOLLA, A.; PUJOL, M. y LOZECO, C. (Comp.): *Crónicas de la FICH 35 años, Santa Fe, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas*, Universidad Nacional del Litoral, 2005, pp. 60-61.
- PESTRE, D.: *Ciencia, política y dinero*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.
- PUJOL, A.: "Presentación", en PAOLI, C.; SCHREIRDER (editores): *El río Paraná en su tramo medio. Contribución al conocimiento y prácticas ingenieriles en un gran río de llanura*, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2000.
- SALOMON, J.J.: *Ciencia y política, México, Siglo XXI, México, 1970.*
- SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA DE LA NACIÓN: *Memoria crítica de una gestión (1983-1989)*, Buenos Aires, 1989.
- SECRETARÍA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: *Plan Nacional de Ciencia y Técnica 1971-1975: objetivos, metas, líneas de acción*, Buenos Aires, 1971.
- SECRETARÍAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD: *Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo 1971-1975*, Buenos Aires, 1971.
- SHAPIN, S.: *The scientific life. A moral history of a late modern vocation*, Chicago, The University of Chicago Press, 2008.
- SHAPIN, S.; SCHAFFER, S.: *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*. London, Princeton University Press, 1985.
- SHINN, T.: «Formes de division du travail scientifique et convergence intellectuelle», *Revue Française de Sociologie*, N.º41, 2000, pp. 447-473.
- TACH, C.: "Golpes, proscripciones y partidos políticos", en JAMES, D (director del Tomo IX): *Violencia, Proscripción y Autoritarismo (1955-1976)*, Colección Nueva Historia Argentina, editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003, pp.17-62.
- VALLEJOS, O.: «Universidad-empresa: un estudio histórico-político de la conformación del CETRI-Litoral», *Revista Ibero Americana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, Número 16, Volumen 6, Buenos Aires, Diciembre 2010, pp.123-152.
- ROMERO, L.A.: *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- UNESCO: *Declaración del Decenio Hidrológico internacional para el período 1965-1974*, UNESCO, 1966, Anexo 1-2.

Fuentes Documentales

- Diario El Litoral (13 de junio 1968) "Quedaron inauguradas esta mañana las Primeras Jornadas de Ingeniería de la Cuenca del Plata". Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/28927/?page=4>). Consultada el 28 de mayo del 2015.
- Diario El Litoral (14 de junio 1968) "Continúan hoy las Primeras Jornadas de Ingenierías de la Cuenca del Plata". Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/28928/?page=4>). Consultada el 28 de mayo del 2015.
- Diario El Litoral (15 de junio 1968) "Se realizó anoche la clausura de las Jornadas de Ingeniería de la Cuenca del Plata". Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/28928/?page=4>). Consultada el 28 de mayo del 2015.
- Diario El Litoral, (3 de julio de 1973) Editorial "Los Submeridionales". Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/31069/?page=4>). Consultada el 27 de mayo del 2015.
- Diario El Litoral, (27 de octubre de 1973) "Se firmó un acta-acuerdo sobre la región de los bajos submeridionales". Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/30830/?page=4>). Consultada el 27 de mayo del 2015.

Diario El Litoral, (15 de diciembre de 1973) “Firmóse el acuerdo sobre los bajos submeridionales”. Disponible en:

(<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/30878/?page=4>). Consultada el 27 de mayo del 2015.

Diario El Litoral, (12 de junio de 1974) “Reunión de la Cuenca del Plata”. Disponible en:

(<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/31050/?page=4&zl=4&xp=-995&yp=-1537>). Consultada el 20 de mayo del 2015.

Diario El Litoral, (28 de agosto de 1974) “Se llevó a cabo la reunión del Comité Coordinador de los Bajos Submeridionales”. Disponible en:

(<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/31122/?page=5>). Consultada el 27 de mayo del 2015.

Diario El Litoral, (3 de diciembre de 1976), “Universitarias. Único de jerarquía universitaria es el país es el Departamento de Hidrología de la UNL”. Disponible en: (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/31913/?page=4>). Consultada el 27 de mayo del 2015.

REVISTA CARRETERA, Asociación Argentina de Carreteras, Año XIII, N.º 47, julio-septiembre 1968, p. 56.

RESOLUCIÓN CONSEJO SUPERIOR N.º 66/70

RESOLUCIÓN CONSEJO SUPERIOR N.º 55/70

RESOLUCIÓN CONSEJO SUPERIOR N.º 51/70

Tecnología agropecuaria y dictadura.

La intervención militar del INTA

Cecilia Gárgano
(CONICET-UNSAM-UBA)

Introducción

Escribir sobre la intervención del INTA durante la última dictadura remite, necesariamente, a una serie de problemas. Algunos, históricos. Otros, aquellos que se sitúan desde la propia construcción de la investigación, metodológicos. Antes de abordar de lleno el objetivo de este capítulo, vale la pena detenernos brevemente en ambos ejes.

En el primero, es necesario mencionar que la actividad agropecuaria ha sido, y continúa siendo, central, tanto en el funcionamiento de la estructura productiva, como en las disputas políticas asociadas a su protagonismo en el funcionamiento del capitalismo argentino. Al mismo tiempo, junto con la relevancia económica y a los conflictos políticos que lo atraviesan, el espacio rural fue objeto de diversos imaginarios culturales, unidos desde los comienzos de la conformación del Estado a la construcción de una identidad nacional, también en tensión. En medio, la puesta en producción de la tierra ha generado, históricamente, dinámicas y sujetos diversos, atravesados también por numerosos conflictos sociales. La organización de un espacio de investigación y extensión específicamente abocado a la actividad agropecuaria, el INTA, no estuvo desvinculado de esta serie de problemáticas. Tampoco su historia reciente.

En el segundo plano, cabe mencionar que, si los estudios que abordan la relación ciencia-tecnología-dictadura en el caso argentino son incipientes y poco abundantes, no existen indagaciones previas sobre la historia del INTA que contemplen su intervención militar, fuera de la presente investigación. Por esta razón, fue necesario, como condición necesaria para abordar los ejes analíticos que este estudio persiguió, realizar una reconstrucción histórica de los acontecimientos ligados a la intervención. Este capítulo se propone, junto con la presentación de un recorte de algunos de los principales problemas y resultados de la investigación, dar a conocer esa reconstrucción. El *corpus*, amplio y heterogéneo, de fuentes documentales y entrevistas utilizado, fue construido en función de esta necesidad y de los diferentes interrogantes que motivaron la indagación.¹

¹ El conjunto de los materiales documentales relevados en mi investigación doctoral fueron cedidos al Archivo Nacional de la Memoria, donde pueden ser públicamente consultados. Parte de este apéndice documental fue seleccionado para su publicación en Gárgano, C.: *El INTA en dictadura. Violencia estatal, reorganización de la investigación y concentración de poder en el agro argentino*, Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria, Buenos Aires, Archivo Nacional de la Memoria, en prensa.

El primer apartado aborda los años previos al comienzo del último golpe militar, reseñando la situación al interior del INTA, su vinculación con el paquete agropecuario elaborado por la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, y su lugar como objeto de actividades de espionaje por parte de servicios de inteligencia del Estado. El segundo, relata el comienzo de la intervención militar y la puesta en práctica de un conjunto de mecanismos represivos dirigidos contra trabajadores del organismo. El tercer apartado analiza la transformación de algunas de las principales agendas de investigación del organismo, en relación con sus contenidos y destinatarios, y el cuarto profundiza en la orientación de la extensión rural.

Los años previos: tecnología, política e infiltración

En 1973, el gobierno de Héctor Cámpora protagonizó el retorno del peronismo al gobierno, luego de casi 18 años de proscripción. El comienzo de su mandato estuvo acompañado por una fuerte reordenación de las burocracias estatales. En el caso del INTA, la reconfiguración institucional fue un proceso complejo, en el que convivieron la renovación parcial de buena parte de su cuerpo directivo, el ingreso de nuevos integrantes, el desarrollo de conflictos de base y la articulación con los proyectos de la cartera agropecuaria nacional. Al mismo tiempo, tanto la intensa movilización gremial impulsada desde algunas de sus unidades, como el accionar de investigadores y extensionistas que planteaban una revisión crítica de la orientación tradicional y, en ocasiones, intentaban utilizar esta reordenación institucional para operar en sus intersticios, supusieron un escenario conflictivo. Al mismo tiempo, la permanencia de representantes de las principales corporaciones agropecuarias dentro de la estructura directiva del instituto expresó la resistencia, detrás de la que también se alinearon otros sectores, a las iniciativas que, desde distintas posiciones, ponían en cuestión para qué y para quiénes debía trabajar el INTA. Estos conflictos se enmarcaban, no casualmente, en un momento histórico, local y regional, de intensa movilización política y grandes expectativas de transformación social.

La articulación entre el INTA y las políticas agropecuarias tuvo en este período un hito conflictivo. La cartera agropecuaria impulsada entre 1973 y 1974 reservaba un lugar específico para el INTA, en tanto encargado de llevar adelante las investigaciones e implementaciones técnicas necesarias (cálculos de rendimientos por hectáreas según zonas, delimitación catastral, organización de colonizaciones agrícolas, etc.) como brazo ejecutor de las iniciativas. Algunas de las medidas elaboradas, si bien no proponían una reestructuración radical de la estructura agraria, fueron particularmente atacadas por las corporaciones agropecuarias. En especial, las que apuntaban a un reordenamiento, como el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra o el anteproyecto de Ley Agraria, de uno de los recursos más disputados: la tierra. En este sentido, una asociación directa entre las medidas de la cartera agropecuaria planteadas en estos años y una supuesta “infiltración” en las filas del INTA fue un argumento recurrente en la prensa del período, y también motivó actividades de espionaje político en su interior.² La renuncia de Giberti, secretario de Agricultura

² Esta articulación es analizada en Gárgano, C.: “La cartera agropecuaria en tiempos de Giberti y el rol del INTA

y uno de los primeros presidentes de INTA, se produjo en medio de la depuración instaurada al interior del peronismo y de una progresiva escalada represiva a nivel nacional, que tendría su corolario y redimensión con el advenimiento del golpe de Estado en 1976.

Al interior del INTA, los años previos al golpe también estuvieron acompañados por la introducción de diversos mecanismos que promovieron su seguimiento y control. Por un lado, fue objeto de infiltración por parte de servicios de inteligencia del Estado, que dieron cuenta del accionar de algunos de sus integrantes, registraron actividades, construyeron caracterizaciones e hipótesis y confeccionaron el mapa sobre el que se desplegaría posteriormente el accionar militar. Por otro, fue terreno de aplicación de distintas normativas que rigieron para el conjunto de la administración pública y de los espacios laborales, a través de las cuales se instrumentaron cesantías, traslados y reordenación de equipos de trabajo. A nivel nacional, tanto la violencia paraestatal como la proliferación de leyes y disposiciones que radicalizaron la función represiva del Estado crecieron, definiendo y normalizando desde el propio estado de derecho la necesidad de combatir la “subversión”. En este sentido, también en INTA es necesario enmarcar la represión en un proceso de larga duración para comprender sus alcances, instrumentación e implicancias.

El personal del instituto se vio afectado por sucesivas disposiciones, situación que no fue privativa del INTA. Como ha señalado Marina Franco, en este período tanto la administración pública como el conjunto de los espacios laborales fueron objeto de diversas normativas que iniciaron una escalada represiva, conformando una trama donde las medidas de excepción pronto se convirtieron en norma.³ Su trasfondo era la rechazación de la conducción del movimiento peronista y la creciente represión del conflicto social. Como ya había sucedido en la década previa, durante la dictadura encabezada por Onganía, los pedidos de informes a la SIDE fueron el trámite inmediato anterior a la contratación de personal técnico del Estado, como vía de veto a potenciales candidatos con antecedentes políticos indeseables. Las primeras cesantías enmarcadas en estas medidas se registraron el 31 de diciembre de 1974, y afectaron a personal de distintas estaciones experimentales y agencias de extensión rural.⁴ En palabras de un investigador del instituto, antes de producido el golpe de Estado, “el huevo de la serpiente ya estaba en la institución”.⁵ Estas disposiciones tendrían una continuidad en la Ley 21.260, sancionada y promulgada

en la política estatal. Intereses, recursos y sujetos sociales agrarios en disputa”, *Realidad Económica*, 289, 2015, pp. 108-132.

³ Franco, M.: *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*, Buenos Aires, FCE, 2012.

⁴ Dentro de los incluidos, se encontraban el jefe de la agencia de extensión rural de Pergamino, activistas gremiales, e investigadores que habían colaborado en la primera etapa del tercer gobierno peronista en actividades del área agropecuaria. Los cesanteados fueron Jorge Adámoli (EEA Salta), Dina Sejzer (EEA Salta), René Benavidez (EEA Paraná), Julián Pabón (EEA Paraná), Dina Foguelman (EEA Pergamino), Jorge Eduardo Ratcliffe (EEA Pergamino), Alberto Kippen (AER Pergamino), Héctor Luis Ferreyra (EEA Mendoza), Pedro y Félix Rojo (EEA Manfredi), Eduardo Salles (EEA Oliveros), Octavio Loor Zambrano (EEA Oliveros), Carlos Soler Prats (AER San José de la Esquina). Véase, INTA, Res. 835, 1974.

⁵ Investigador de la estación experimental de Paraná, en entrevista colectiva a graduados de la Escuela para Graduados del INTA, Buenos Aires, 15-06-2010.

el 24 de marzo de 1976, que se dirigía especialmente al personal del sector público, para el que autorizaría la implementación de bajas “por razones de seguridad”.

También en 1974, un extensionista de INTA denunciaba ser parte de una persecución ideológica dentro del organismo, sostenida por los poderes locales ligados al medio rural. En una carta abierta titulada “Sucede en Dorrego”, afirmaba que luego de prestar servicios durante tres años en actividades propias de su rol como extensionista, se le había pedido sin previo aviso la renuncia, que se negaba a presentar por haber obtenido el cargo por concurso y considerar que se trababa de una forma de persecución política. Remarcando que “fuera de una institución estatal tendría que trabajar al servicio de empresas privadas, muchas veces no argentinas, aunque mejor remunerado”, explicaba que en la dirección de la estación experimental del INTA de la que dependía le había sido presentada una nota firmada, por representantes de entidades agropecuarias, en la que se exigía su renuncia. Como respuesta, llamaba públicamente a la conformación de una mesa redonda, señalando que la situación debía resolverse “por medios civilizados donde predomine la razón y no la fuerza”.⁶ Carlos Llerena Rosas fue primero relevado de su cargo como jefe de la agencia de extensión rural de Maipú, y reubicado luego en la estación experimental de Balcarce. Tiempo después, el 30 de octubre de 1974, era asesinado por la organización paraestatal Alianza Anticomunista Argentina (AAA).⁷

Como en otros espacios, también en INTA toda actividad gremial, política y partidaria fue foco específico de seguimiento. Las tareas de inteligencia realizadas al interior del organismo en los años previos al golpe militar reiteran referencias a las asociaciones gremiales presentes, ATE (Asociaciones de Trabajadores del Estado) y APINTA (Asociación de Profesionales del INTA), junto con averiguaciones vinculadas a la militancia o a la participación política de los trabajadores del instituto en organizaciones y partidos políticos.⁸ Además, proliferó un recurso: el traslado de personal. Propio del funcionamiento institucional, adquirió un sesgo punitivo. Activistas gremiales, investigadores identificados como conflictivos por sus cuestionamientos, y cuadros institucionales cercanos a la gestión anterior, integraron los múltiples casos de reubicación, en donde se modificaba el lugar de trabajo habitual por un nuevo y distante destino. Como parte de estas tareas de inteligencia, en noviembre de 1975, el Batallón 601 –servicio de inteligencia militar del ejército– solicitó a la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA) un informe sobre un grupo de personas pertenecientes al Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA ubicado en Castelar. Titulado “Adoctrinamiento marxista

⁶ Llerena Rosas, C.: “Sucede en Dorrego”, Coronel Dorrego, 03-11-1972.

⁷ Militante del Frente de Izquierda Popular (FIP) fuera del INTA y secretario gremial del área de prensa de APINTA, según recuerdan familiares, su posición también se destacaba en ese momento por sostener –a diferencia de otras posiciones mayoritarias dentro del gremio– una rotunda negativa ante la posibilidad que la asociación gremial del instituto, APINTA, se integrase a la CGT, en línea con las tensiones sindicales que por entonces enfrentaban a la burocracia sindical alineada detrás del dirigente Lorenzo Miguel y a los sectores más combativos del movimiento obrero. Entrevista a José Llerena Rosas, City Bell, 28/06/2011.

⁸ Véase archivo DIPBA, registro de la nómina de la comisión directiva del sindicato de APINTA en Pergamino, con datos personales e ideología política atribuida a cada uno, DIPBA, “Asociación del personal del INTA, APINTA”, Mesa B, legajo 156; sobre el CNIA y la estación experimental San Pedro, véase DIPBA, “Infiltración Extremista INTA Castelar y San Pedro”, Mesa DS, Varios, Legajo 1785. También el Batallón 601 informaba “sobre infiltración extremista en el INTA” y brindaba “información sobre delegados gremiales de ATE INTA”, véase DIPBA, “ATE”, Mesa B, Carpeta 90, legajo 5.

en INTA Castelar”, comenzaba con un cable en el que se afirmaba la existencia de una escuela de adultos, en donde, según el informe, “se impartiría instrucción marxista”.⁹ Como explicaba el personal de inteligencia, en una construcción lindera, también dentro de la propiedad del INTA, funcionaba, una escuela para adultos organizada por trabajadores del instituto agremiados en ATE y en contacto con la JTP. A partir de esta información, se procedió a investigar a los trabajadores de INTA que participaban, y su posible vinculación con alguna organización política. Entre los integrantes de la “Escuelita”, figuraban miembros de un grupo de investigación en Ecología del CNIA, dirigido por Jorge Morello.¹⁰ Sobre este grupo de trabajo, del que dos integrantes serían víctimas del terrorismo del Estado, se sucedieron sucesivos pedidos de informes desde la DIPBA. En medio de conflictos al interior del instituto, fue desarticulado tiempo después.

En este marco, el INTA fue intervenido por primera vez en su historia en mayo de 1975, por disposición del Poder Ejecutivo, encabezado entonces por María Estela Martínez de Perón. Poco menos de un año después, el gobierno era derrocado por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Comenzaba también la intervención militar del INTA.

Intervención militar e instrumentación de la violencia estatal

Con la concreción del golpe, iniciado en marzo de 1976, al frente del instituto fue designado primero un interventor militar. Permaneció cinco meses, en los que se implementaron el grueso de las cesantías y se coordinó un fuerte operativo militar en el CNIA de Castelar.¹¹ La intervención recayó luego en un civil, David Arias, de profesión abogado y activo inversor del grupo La Martona S. A.

En 1976, la Ley 21.260 autorizó a dar de baja por “razones de seguridad” a empleados públicos sospechados, según fundamentaba su texto, de estar vinculados a actividades “de carácter subversivo o disociadoras”. Las bajas alcanzaban a personal de planta permanente, transitorio o contratado que prestara servicios en la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, autárquicos, empresas del Estado, y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo. En el INTA, el interventor militar firmó la primera resolución enmarcada en esta ley el 31 de marzo de 1976, dictaminado la “baja por razones de seguridad” a 153 personas en las distintas unidades del organismo a nivel nacional.¹² Estas cesantías se sumaron a las que venían registrándose en el organismo, y serían acompañadas por sucesivas oleadas posteriores, dando como resultado al menos 794 integrantes del INTA separados del organismo entre 1974 y 1981 por razones políticas e ideológicas. La

⁹ DIPBA, “Adoctrinamiento marxista en INTA Castelar”, Mesa DS, Varios, Legajo 4082, 1975.

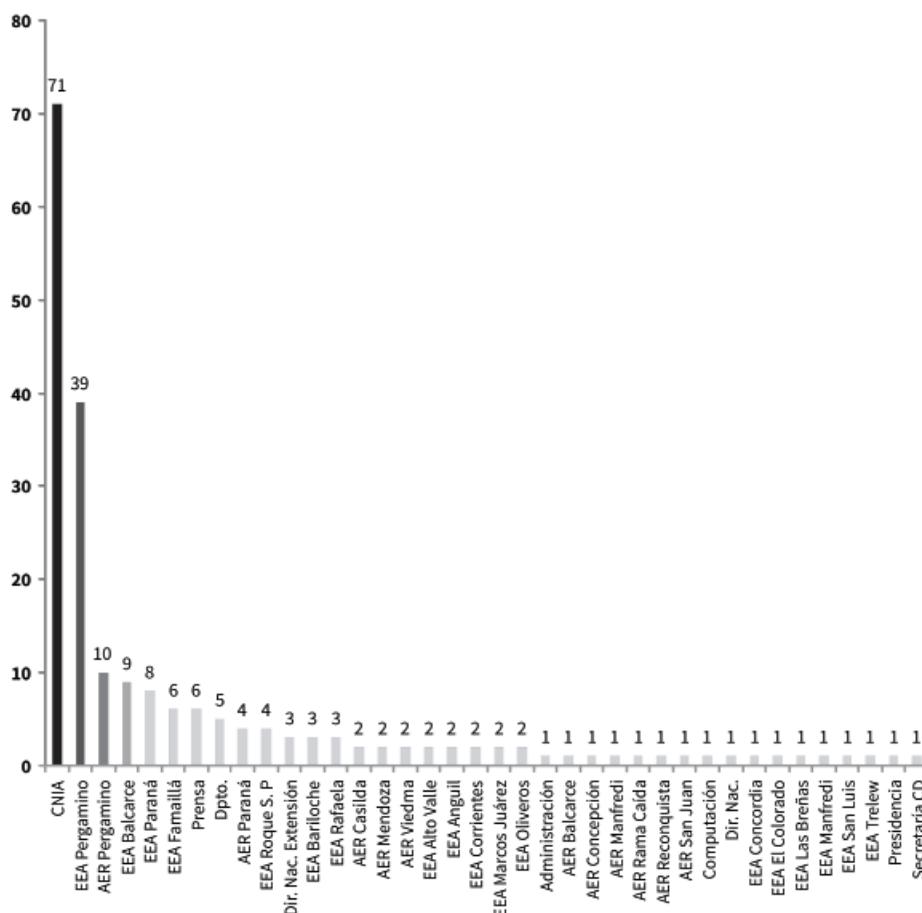
¹⁰ Exinvestigador INTA Castelar, Dr. en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de la Plata, miembro profesor emérito de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA hasta su fallecimiento el 27 de agosto de 2013.

¹¹ El capitán de Fragata de Infantería de Marina Alberto Rafael Heredia. Asesor del Ministerio de Bienestar Social (1977), jefe de la Comisión de las FF. AA. en el Congreso (1978). En 1981 solicitó el retiro voluntario. Había ingresado en 1947 a la Marina de Guerra como cadete del escalafón de infantería de marina. Véase, legajo militar, Archivo General de la Armada (AGA).

¹² INTA, Resolución 1/76, 1976.

cantidad de cesantías que afectaron las dos áreas nodales de acción del organismo, investigación y extensión, fue significativa. A diferencia de los datos consignados en las disposiciones posteriores, esta primera lista de personal cesante fue la única resolución en la que se consignó en forma detallada la procedencia del personal implicado, incluyendo lugares de trabajo de las distintas dependencias del organismo a nivel nacional. La distribución territorial de las cesantías puede observarse en el siguiente gráfico:

Cesantías: distribución territorial de cesantías del INTA (1976)



Fuente: elaboración propia según INTA, Resolución 1/76.

El 29 de marzo de 1976, día de cobro, el CNIA fue objeto de un operativo militar de gran despliegue. Gran parte del personal fue conducido al comedor del Centro e interrogado, sometidos algunos a simulacros de fusilamiento. Decenas fueron detenidos posteriormente y permanecieron por sesenta días en una comisaría de la zona. Los testimonios registrados judicialmente se refieren a alrededor de doscientas detenciones.¹³ En cuanto a integrantes del INTA detenidos-desaparecidos,

¹³ Muchos de los cuales figuran en la causa judicial llevada adelante por los hijos de Marta Sierra, técnica del INTA que integraba el equipo de Ecología del Instituto. Agradezco a los querellantes, Guido y Nicolás Prividera, el acceso a la documentación de la causa.

al momento, los casos ascienden a seis, cuatro de ellos pertenecientes al mismo Centro de Investigaciones ubicado en Castelar.¹⁴ A los asesinatos de Carlos A. Llerena Rosas y Néstor Mocoeroa, producidos antes del golpe militar, se sumó el de Juan Carlos Prádanos, investigador de la estación experimental de Ascasubi, secuestrado por un grupo de tareas tres días antes del golpe y posteriormente asesinado.¹⁵ Simultáneamente al operativo en Castelar, fue ocupada por personal militar la estación experimental de Famallá, en la provincia de Tucumán, presencia que se extendería por dos años. La estación experimental de Pergamino registró, también, presencia militar en dos oportunidades. Seis trabajadores fueron detenidos. Entre ellos se encontraba el jefe de la agencia de extensión rural, que ya había sido dejado cesante, y técnicos que habían participado de la conformación seccional del gremio, APINTA.¹⁶ En el accionar represivo desplegado durante la intervención se fueron acoplado mecanismos que ya habían sido puestos en acción desde la esfera civil (las cesantías y los traslados de personal), con nuevos elementos ligados al accionar militar (operativos, detenciones y secuestros). Después de la primera resolución de marzo de 1976, la circulación de “listas” de cesantías fue haciéndose progresiva. Según relataba en abril de 1976, en una carta familiar, una integrante del INTA, que luego iba a ser detenida y desaparecida:

“Llegó hoy a la tarde una lista de prescindibles que dicen que es sanguinaria y que serían 150 personas. Ya han echado cerca de 500 aplicando la ley de seguridad del Estado y prescindibilidad. Temblamos desde hace un mes por cada lista... Dicen ‘viene hoy’ y cuando llega nos desinflamamos hasta la próxima, en este caso es mañana jueves”.¹⁷

¹⁴ Gustavo Giombini y Carlos Costa, técnicos del Instituto de Suelos, delegados gremiales y militantes políticos, fueron detenidos en la vía pública y en su puesto de trabajo de INTA, respectivamente. Carlos Costa, de 26 años, fue detenido el 13/08/1976 en el CNIA. Gustavo Rodolfo Giombini, de 28 años, en su domicilio el 11/08/1976. Ambos militaban fuera del INTA en OCPO. María José Rapela, bibliotecaria del mismo instituto, fue detenida junto con su esposo el 30/07/1977 e ingresó embarazada a la ESMA. Marta Sierra había integrado el equipo de Ecología del CNIA y para entonces cumplía funciones en la guardería del Centro. Fue detenida en su domicilio mientras cumplía licencia por maternidad el 30/03/1976. Miembro de la agencia de extensión rural de Río Cuarto, Rita Alés de Espíndola fue secuestrada junto con su marido, a fines de 1977 en Los Sauces, Córdoba, desde donde fueron llevados al centro clandestino La Perla. Rita Alés estaba embarazada, su hija nació en cautiverio y fue recuperada por sus familiares. Hilda Leikis fue secuestrada junto con su esposo Federico Álvarez Rojas, físico de la CNEA, el 1 de octubre de 1976. Analista de sistemas, había trabajado en el CNIA como contratada poco tiempo antes.

¹⁵ En junio de 1976 fue asesinado el jefe del Departamento de Suelos del CNIA de Castelar. Según integrantes del Departamento, su muerte fue atribuida a alguna organización política armada, en gran parte por su apoyo manifiesto al régimen y por haber sido reconocido como provisor de las listas usadas en la organización de las cesantías de su Departamento. Si bien ninguna organización se atribuyó el hecho, integrantes del Centro recuerdan la presencia de volantes y gacetillas distribuidos aludiendo al caso. El velatorio fue llevado a cabo en la sala de reunión del Consejo Directivo, y en nombre de la institución fue orador el director nacional, Fernando Spinelli Zinni. Véase INTA, Resolución de Consejo Directivo, 40/1976.

¹⁶ Durante el mes de mayo de 1973, antes de que se desarrollaran los comicios nacionales, había sido designado como nuevo jefe de la estación experimental de Pergamino, el ingeniero agrónomo Jorge Alejandro Josifovich. El conjunto de los testimonios de exintegrantes e integrantes cesantes de la estación experimental, que registra el mayor índice de cesantías de todo el INTA, alude a su responsabilidad en la confección de las “listas negras”.

¹⁷ Rapela, M. J.: correspondencia familiar, 28-04-1976.

Al día siguiente, incluía una posdata en la que aclaraba: “PD. 29/4/76. Me aplicaron la ley de prescindibilidad. Estoy cesante”.¹⁸ Dos meses después agregaba, “Todavía estoy sin trabajar, pero me indemnizaron, me pagaron ‘en cuotas’ durante 6 meses”.¹⁹ No concretaría el cobro, un mes después era secuestrada por un grupo de tareas y retenida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), último centro clandestino del que provienen referencias sobre su persona.²⁰

La intervención del instituto fue acompañada por la designación de directores interinos en sus distintas unidades experimentales y la renovación de la conducción de departamentos, centros de investigación y agencias de extensión rural. Esta situación se combinó con la explicitación de “nuevos criterios de ingreso de personal”²¹ utilizados para cubrir nuevas convocatorias de cargos, que fueron la contracara de la depuración institucional inicial. Según consta en documentos de Estado desclasificados, los acontecimientos fueron seguidos de cerca por el gobierno estadounidense.

Mediante diversos telegramas se informaba la existencia de arrestos en institutos de investigación. Bajo el título “*Firings and Arrest in Argentina Technological Institutes*”, un telegrama emitido el 12 de abril de 1976 mencionaba la existencia de arrestos y de 300 cesantías en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y describía la situación del INTA.²² Refería la existencia de una “vendetta” durante la presidencia de Cámpora, que había afectado a investigadores del instituto con antecedentes de vínculos con los Estados Unidos, situación que estaba revirtiéndose siendo los “anti-americanos” y “extremistas izquierdistas” los despedidos. Afirmaba que el “saneamiento” sería favorable a las colaboraciones entre Estados Unidos y Argentina, al tiempo que reconocía la existencia de algunos “errores”, entre los que incluía a antiguos becarios de programas financiados por agencias norteamericanas alcanzados por las medidas.²³ En cuanto a la comunidad científica internacional, años después comenzaría a hacerse eco de las denuncias recibidas por colegas argentinos. El informe de la *American Association for the Advancement of Science* iba a

¹⁸ Rapela, M. J.: correspondencia familiar, 29-04-1976.

¹⁹ Rapela, M. J.: correspondencia familiar, 17-06-1976.

²⁰ En algunos casos, integrantes del INTA alcanzados por las cesantías dispuestas en la primera resolución de la intervención militar interpusieron recursos de reconsideración contra la medida. En ocasiones se hacía lugar al pedido, lo que implicaba que dejaban de estar considerados en las bajas por “razones de seguridad”, y pasaban a estar comprendidos en las bajas “por razones de servicio”, enmarcadas en la Ley 21.274. En los hechos, continuaban fuera del organismo, aunque se autorizaba la liquidación de una indemnización, que no solía concretarse. En respuesta a un pedido de reconsideración, el interventor militar respondía afirmando que pasaba a reubicar el caso “con la finalidad de producir por razones de servicio un real y completo proceso depurativo de la Administración Pública”, véase INTA, Resolución 52/1976.

²¹ INTA, *Dos Años de labor*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1978, 2.

²² Los documentos citados pertenecen a los materiales desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos que integran la colección *State Argentina Declassification Project (1975-1984)*, disponibles en <http://foia.state.gov/SearchColls/CollsSearch.asp>.

²³ “(...) particularly in INTA, there was an anti American vendetta during Campora presidency wich resulted in considerable difficulty for researchers to be surprised, how ever, if mistakes were made in some borderline cases. Thus, while general thrust of current clean out will improve U.S-Argentine collaboration possibilities, there may will be individual cases of nature cited refetel [reference telegram], and Embassy will endeavor to report as suggested”. FOIA, web.

incluir menciones a investigadores de la CNEA y del INTI, aunque no contó con datos sobre la situación del INTA.²⁴

Por otro lado, durante la intervención militar, además de incrementar los convenios con el sector privado, el INTA no vio mermar su presupuesto. Sin embargo, esto no lo protegió del ascendente proceso inflacionario en curso. Los datos analizados muestran que, si bien su presupuesto no tuvo una reducción lineal, entre 1973 y 1983 registró una marcada tendencia a la baja, debido a que el aumento nominal de este no logró contrarrestar la creciente inflación.²⁵ Además, en 1980 fue derogado por decreto (Decreto Ley 22.294) el gravamen del 1.5 por ciento a las exportaciones agropecuarias, establecido por la ley de creación del INTA como base de su financiamiento, suspendiendo así su autarquía financiera. Esta recién sería recuperada con el retorno de la democracia en 1983, mediante una disposición, el Decreto Ley 23.058, que restituyó el gravamen, que permanecería vigente hasta el embate neoliberal concretado en la década de 1990.

En cuanto a los contenidos y los destinatarios de las actividades de investigación y extensión rural, estos no permanecieron al margen de los cambios políticos, económicos y sociales. ¿Qué transformaciones registraron en estos años algunas de las principales agendas del INTA?

Agendas de investigación: contenidos y destinatarios

En 1978, un informe, producido como balance de los primeros dos años de intervención, refería a la situación en la que se encontraba el INTA cuando el advenimiento del golpe de Estado. Destacaba que, previamente, “(...) el organismo había sufrido, tal vez como pocos, las lamentables consecuencias soportadas por el país en su conjunto que hiciera necesaria la intervención de las FF. AA.”, ya que señalaba que había sido “elegido como objetivo y medio para un accionar ajeno a los fines de su creación”.²⁶ Esta argumentación era acompañada por una descripción del rol del organismo. En relación con los programas de trabajo llevados adelante por la institución, se afirmaba que estos “(...) se hallaban paralizados o semi-paralizados. El material de trabajo era escaso, obsoleto, y a veces inexistente”.²⁷ Este diagnóstico, de parálisis y atraso, era contrastado con las acciones emprendidas a partir de 1976 sobre la base de la utilización del presupuesto y a partir de una “estrategia de intervención”. En esta, tanto los cuadros directivos como los medios y los nuevos ingresos de personal pasaron a estar orientados según el enfoque que tendría que tener el INTA, centrado en el impulso de “una política de investigación básica, aplicada y de extensión al productor” centrada en aquellos productos agropecuarios demandados internacionalmente”.²⁸ En este sentido, junto con la introducción de un

²⁴ American Association For The Advancement Of Science, *Scientists and Human Rights in Argentina since 1976*. Washington, AAAS, 1981.

²⁵ Gárgano, C. *Ciencia, tecnología y dictadura: producción de conocimiento e intervención militar en el INTA (1973-1983)*. Tesis doctoral en Historia, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2014.

²⁶ INTA, *Dos años*, 5.

²⁷ INTA, *Dos años*, 5.

²⁸ INTA, *Dos años*, 6.

entramado represivo dirigido contra trabajadores del organismo, los contenidos de investigación y extensión del INTA experimentaron en este período transformaciones cualitativas.

La agenda de estudios en Economía Agraria y Sociología Rural dejó de lado problemas estructurales del sector, y la acuciante desintegración a nivel nacional. Pasó a concentrarse en cálculos y costos a nivel micro de explotaciones rurales, en forma fragmentada y en desconexión con las grandes problemáticas sociales y económicas del agro. En estas áreas de investigación fueron profundizadas orientaciones previas, centradas en la Administración Rural y, simultáneamente, fueron obturados los debates en curso que, desde diversas posiciones, buscaban problematizar el fin último de la actividad, sus objetos de estudio y su articulación como insumo de las políticas agropecuarias. La preocupación en torno a problemáticas situadas local y regionalmente, la revisión de la adopción acrítica de categorías importadas, la preocupación en torno al relevamiento de las condiciones de vida y trabajo de diversas franjas sociales de agricultores, y del grado de acceso a los recursos naturales, en los que la tierra ocupaba un rol destacado, quedaron fuera de la agenda. El perfil fue así modificado y desmantelados buena parte de los equipos. Esta situación fue acompañada por la clausura de una instancia de posgrado, la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, que funcionaba desde 1969.²⁹

En cuanto al accionar del INTA en otras líneas fundamentales de su agenda, la producción de conocimiento científico-tecnológico también registró continuidades y sufrió rupturas. Un caso de experimentación científica en genética aviar, asentado en la estación experimental de Pergamino, una de las principales del instituto y de las más afectadas por las políticas represivas, fue desmantelado luego de casi dos décadas de trabajo. Orientada a generar una línea genética local en un área sensible debido a su gran concentración comercial y escaso desarrollo local, fue discontinuada en un momento en el que comenzaba a mostrar avances relevantes. Específicamente ideados en función de generar gallinas ponedoras destinadas a zonas geográfica y socioeconómicamente periféricas, los ensayos científicos se basaban en una selección dirigida a partir de una nueva alimentación basándose en elementos disponibles en estas regiones (sorgo y harina de algodón), orientados a lograr aves que prescindieran del uso de balanceado e insumos farmacológicos. La experiencia terminó, luego de diecisiete años de experimentación, como producto de la cesantía del investigador principal en 1976, el desmantelamiento de su equipo y la faena de los animales que integraban la selección.³⁰

Por otro lado, el área de fitomejoramiento vegetal, una de las principales del INTA

²⁹ Esta área de estudios es analizada en Gárgano, C.: "Ciencia, Tecnología y Dictadura: la *reorganización* de las agendas de investigación y extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)", *Realidad Económica*, 258, 2013, pp. 120- 149.

³⁰ Véase Gárgano, C.: "Experimentación científica, genética aviar y dictadura militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956-1976)", *Mundo Agrario* 28, 2014. Disponible en: <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv15n01>

desde su creación y de suma relevancia en las transformaciones operadas por entonces en el agro, también experimentó modificaciones. La apropiación, por parte de una fracción del sector privado, de los conocimientos científicos y tecnológicos producidos en el ámbito público ya venía jugando un rol destacado en la década previa, y había sido fundamental para la conformación de la industria semillera local. Durante la intervención militar, se procedió a impulsar la cesión de recursos fitogenéticos al ámbito privado, que concentró la fase (altamente rentable) de terminación de las variedades. Cristalizada y explicitada por una resolución de la intervención militar del año 1979, después de años de fuertes inversiones públicas, y con altas capacidades de investigación, el INTA apuntaló a los capitales de mayor proyección, consolidó su rol en el traspaso de estos conocimientos y continuó incursionado en actividades de investigación poco atractivas comercialmente. En particular, en la producción de híbridos de maíz y en la introducción de trigos de origen mexicano, el INTA venía ocupando posiciones destacadas. Su rol fue relegado a la entrega de materiales genéticos, y a la cobertura de aquellas instancias de investigación que –como las investigaciones en especies autógamas, en especial de la soja, en una fase en que aún no gozaba de rédito comercial– eran poco atractivas para el sector privado. Fuera del arco temporal de la intervención militar, ya en democracia, el instituto iba a ser pionero en la formalización de los Convenios de Vinculación Tecnológica, desde 1987. A partir de estos, al mismo tiempo que accedió al cobro de regalías por la cesión de sus investigaciones, consolidó una estrategia de “articulación” con empresas, utilizada en parte como estrategia de supervivencia, que intensificó la migración de resultados, conocimientos e inversiones a la esfera privada.³¹

En cuanto a la extensión rural, la presencia a nivel territorial disminuyó y transformó su perfil, alentando en forma creciente el contacto con productores fuertemente capitalizados. Nos adentraremos en estas transformaciones en el siguiente apartado.

Debates y disputas en la extensión

Con la creación del sistema de extensión del INTA, la actividad oficial había sido concentrada en su interior a partir del funcionamiento de las agencias de extensión rural, repartidas a lo largo del territorio nacional. Los equipos de trabajo lo integraban el jefe de cada agencia (ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas o veterinarios), junto con otros dos integrantes. Uno de ellos era el “asesor de Clubes 4-A”, un técnico agrícola especialmente dedicado al trabajo con las juventudes rurales. Otra, la asesora de “Hogar Rural”, era generalmente maestra rural o técnica del instituto especializada en “Economía doméstica”. Estos dos canales institucionales, los Clubes 4-A y Hogar Rural, estaban dirigidos a dos colectivos sociales, mujeres y jóvenes. A

³¹ Este proceso es indagado en Gárgano, C.: “Ciencia y dictadura: producción pública y apropiación privada de conocimiento científico-tecnológico. Dinámicas de cooptación y transferencia en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)”, *Crítica y Emancipación*, 10, pp. 131-170; y en Gárgano, C.: “Semillas, ciencia y propiedad”, *REDES*, en prensa.

partir de 1954, se habían organizado los Clubes Juveniles Rurales, que dos años más tarde tomaron el nombre de Clubes Juveniles Rurales 4-A (Acción, Adiestramiento, Amistad, Ayuda) y pasaron a depender del INTA. El modelo provenía del sistema de extensión rural estadounidense. Destinados a jóvenes de ambos sexos de 10 años en adelante, el emblema de los Clubes fue un trébol, con una “A” en cada uno de sus pétalos: “Acción para el progreso rural, Adiestramiento para capacitarme, Amistad para el mejor entendimiento y Ayuda para el bien común”.³² Su objetivo era “trabajar con la juventud para su desarrollo como ciudadanos, ayudarlos a encontrar soluciones adecuadas para sus problemas y crear en ellos una actitud favorable hacia el uso de la nueva tecnología”.³³ Centrados en actividades recreativas (campamentos, deportivas, culturales) y de difusión de técnicas agronómicas, en 1967 existían 445, con la participación de 11.628 jóvenes de ambos sexos y 90 asesores del INTA.³⁴ Otro de los objetivos del servicio de extensión del INTA consistía en “ayudar a las amas de casa a mejorar los aspectos sociales, económicos y sanitarios del hogar y la vida familiar”.³⁵ Con este espíritu fueron promovidos en INTA los llamados “Club de Hogar Rural”. En 1966 funcionaban 407 en los que participaban 7.640 mujeres.³⁶ Como señala Gutiérrez³⁷, mientras que la “familia rural” era entendida en tanto familia nuclear (el productor, su esposa y sus hijos), el trabajo con jóvenes y mujeres poseía una fuerte impronta de género, que promovía el lugar de estas en tanto amas de casa, esposas y madres. Sobre estas prácticas y concepciones iniciales fue definiendo su rol la extensión rural. Manteniendo su núcleo de atención en la familia como unidad social básica, frecuentemente de agricultores medianos, y su accionar en actividades que incluían las prácticas agronómicas, problemas habitacionales, sanitarios y nutricionales de la población rural. Su sentido iba a ponerse en cuestión al calor de las transformaciones políticas y socioeconómicas que atravesarían al país y a la región.

Como ha señalado Alemany, durante la década de 1970 se incorporaron “elementos de la teoría de la concientización y de educación popular”, especialmente en el trabajo con juventudes y mujeres.³⁸ Bajo un mismo andamiaje institucional convivieron proyectos y orientaciones diversas, e iniciativas encarnadas en grupos o figuras que tradujeron de modo disímil, y en ocasiones antagónico, el mandato institucional. Como recuerda una

³² INTA, Usted también es responsable, *Serie Clubes Juveniles Rurales 4-A, Grupo y Comunidad*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1969, p.1 Folleto destinado a padres e instituciones de la comunidad rural. Sobre los comienzos de la extensión rural en el INTA, véase Losada, F.: “La institucionalización de la extensión rural con la creación del INTA (1957)”, *Documentos del CIEA*, 1, 2003, pp. 27-35.

³³ INTA, *Usted también es*, 2.

³⁴ INTA, *Desarrollo integral de jóvenes rurales*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1967, 10.

³⁵ INTA, Amistad, noviazgo, matrimonio, *Serie Clubes 4-A Relaciones Humanas*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1962. Folleto destinado a los Clubes Juveniles Rurales 4-A y a grupos rurales del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina.

³⁶ INTA, *Usted también es*, 1.

³⁷ Gutiérrez, T. V.: “Agro pampeano y roles familiares en la década de 1960”, *Mundo Agrario*, 2009. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-59942009000200012&script=sci_arttext

³⁸ Alemany, C. E.: “Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la Extensión Rural del INTA”, en Cimadevilla, G. y Thornton, R. (Ed.), *La Extensión Rural en debate: concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 2003, 137-17.

exintegrante del INTA, “Nunca se definió *qué era la familia rural*” (énfasis propio).³⁹ Socióloga de formación, ingresó en 1962 como extensionista a Pergamino. Años después, pasó a integrar el área de investigación en Economía y Sociología rural de la estación experimental, hasta su cesantía en 1976. Una de sus funciones era la de docencia en los cursos inductivos, que el INTA organizaba para los extensionistas ingresantes de todo el país. “Yo hablaba de la estructura social agraria por regiones y del cambio social”.⁴⁰ Los canales institucionales comenzaban a ser utilizados para intentar instalar nuevas agendas. Avanzar sobre definiciones asibles sobre la “familia rural” y problematizar quiénes eran los interlocutores a los que se dirigía el INTA requería indagar sobre el mapa de sujetos agrarios existente: quiénes, cuántos, bajo qué condiciones de acceso a los recursos, involucrados en qué dinámicas productivas. La inserción comunitaria de los extensionistas incluía distintos frentes. Fuertes articulaciones con las escuelas rurales en muchas ocasiones eran el vector, a partir del que se facilitaba el contacto con los pobladores. Los docentes eran frecuentemente quienes ponían a funcionar propuestas del servicio de extensión. Según puntualiza un exintegrante de la agencia de extensión rural del INTA en Venado Tuerto, en funciones entre 1961 y 1976, cuando fue cesanteado y pasó a recorrer los mismos territorios, pero como vendedor de productos de la firma Cargill, y desde su reincorporación en 1988:

“La escuela rural era nuestra base para iniciar cualquier entrada en la zona de su cobertura. Nos presentábamos ante la o el docente a cargo, que en general de lunes a viernes vivía en el mismo medio rural. En general las actividades se realizaban en la escuela, salvo cuando el evento era una charla técnica o la visita a un lote experimental, para lo que se iba al campo”.⁴¹

En este sentido, el contenido educativo también estaba presente en las modalidades de contacto. En palabras de otro integrante del INTA: “Los equipos de extensión hacían extensión como educación no formal. No estaba pensado como una transferencia de tecnología”.⁴² Este par dicotómico, educación no formal/transferencia de tecnología, alude a dos circunstancias: una retrospectiva y otra ligada a las transformaciones por las que iba a transitar la actividad. En la retrospectiva, se pone de manifiesto el rol que los extensionistas cumplían mediante su inserción territorial, rebasando el asesoramiento meramente técnico. En este sentido, el accionar de la extensión rural estaba acompañado por la promoción de diversos ámbitos de socialización. Quien fuera durante quince años supervisora del servicio de Extensión del área pampeana, recuerda el cine como estrategia de acercamiento: “Metíamos un documental, o un corto, o una película entera que nos permitiera una buena discusión de los temas que

³⁹ Exintegrante del INTA, Buenos Aires, 03-06-2011.

⁴⁰ Exintegrante del INTA, Buenos Aires, 05-07-2012.

⁴¹ Zorzín, H.: *El medio rural que yo conocí*, Pergamino, Mana, 2012, p. 20.

⁴² Exintegrante del INTA, Buenos Aires, 9-10-2010.

nos importaban. Pero con una citación para ver cine, se te llenaba. Todo el mundo iba. Todos los estratos de la comunidad rural iban porque no había otra cosa mejor. Y *dar cine en una chacra era una fiesta*”.⁴³

En cuanto a los clubes juveniles 4-A, si bien accionaban institucionalmente, tenían su propia sede física en ámbitos ligados a la socialización de los jóvenes. Mayormente en escuelas rurales, que habitualmente cobijaban muchas de las actividades sociales del lugar, o bien en clubes sociales o deportivos. La particularidad de este funcionamiento otorgaba al INTA una mayor capilaridad en sus estrategias de contacto. Para 1970, bajo el título “El futuro es de los jóvenes”, una publicación del INTA explicaba el rol de los Clubes 4-A. Entendidos como entes educacionales, tendientes a “favorecer la socialización juvenil a través de la mutua cooperación”, establecían como objetivo principal la formación integral de la juventud rural.⁴⁴ Esta máxima era entendida como un acompañamiento en “la definición en el orden vocacional” y en “la integración social de cada uno de ellos con su medio”.⁴⁵ En términos concretos, para entonces funcionaban como canales de difusión de conocimientos sobre tareas agrícolas, brindando cursos de capacitación, pasantías y becas, y centrando su labor en proyectos por zona abocados a la realización de cultivos mejorados, crianza de animales, trabajos de huerta, preparación y conservación de alimentos, mejoramiento de la vivienda y planes sanitarios. La finalidad de los Clubes era entendida como una misión educativa, destinada a fomentar actividades que desarrollaran “el espíritu de la comunidad”. Este andamiaje institucional adquirió contenidos diversos, signados por su historicidad, por el contexto social y político de su accionar, y por los modos diversos en los que fue encarnada por sujetos individuales y colectivos.

Los contenidos de las tareas de extensión no solamente se transformaron al calor de la difusión de los enfoques dominantes y su adaptación al medio local. También lo hicieron en interacción con las transformaciones socioeconómicas del espacio rural, y con los cambios políticos que signaban por entonces el marco referencial de su accionar: “En el 73, 74, 75 se trabajó con temas calientes, más comprometidos. Acá hubo momentos en que muchos querían comprometerse con un cambio real de la situación del país” señala una extensionista del organismo.⁴⁶ De la mano de la reorganización institucional que se vivía en el INTA desde 1973 a raíz del retorno del peronismo al gobierno, fueron generados algunos cambios en la conducción del sistema de extensión. El cargo fue ocupado por Jacinto Vellani, un extensionista perteneciente a la estación experimental Pergamino. En la dirección del área de extensión también asumió un maestro normal nacional, responsable a nivel nacional del trabajo con las juventudes rurales, y una maestra normal nacional, como jefa de extensión del servicio de Hogar Rural. Precisamente, este último canal aparecía como línea de acción destacada del INTA dentro de su participación en las medidas surgidas

⁴³ Exsupervisora de Hogar Rural, 9 de Julio, 4-09-2011.

⁴⁴ INTA: “El futuro es de los jóvenes”, *Serie Clubes Juveniles Rurales 4-A- Grupo y Comunidad*. Buenos Aires, Ediciones INTA, 1970, p. 5. [folleto destinado a dirigentes de la comunidad. 3000 ejemplares].

⁴⁵ INTA, *El futuro es de*, 5.

⁴⁶ Exextensionista del INTA, Buenos Aires, 4 de septiembre de 2011.

del Acta de Compromiso Nacional. Allí se informaba sobre este rol, señalando que el INTA garantizaba una acción directa a través del Servicio de Hogar Rural, “por medio de la mujer, que se convierte así en un verdadero agente de cambio, y la acción se orienta principalmente hacia los problemas relacionados con la educación para la salud, vivienda y saneamiento básico rural”.⁴⁷ Formación de cooperativas para construir viviendas, provisión de agua potable, eliminación de aguas hervidas y residuos, y electrificación hogareña eran mencionadas como las principales tareas. El rol de la mujer, ligado en los comienzos del INTA a concepciones sobre su “misión” en la vida familiar emanadas de la doctrina católica, aparecía ahora enlazado a su importancia como “agente de cambio” en función de problemáticas ligadas a necesidades sociales de la población rural. Por entonces, el servicio de Hogar Rural era también el encargado, mediante un convenio celebrado con el Instituto Biológico y Laboratorios de Salud Pública, de tomar muestras de agua en las zonas de influencia de las agencias de extensión destinadas a realizar análisis químicos y bacteriológicos.⁴⁸ Asimismo, durante 1973, fue elaborado por el INTA el “Programa de Promoción de Servicios Familiares y Comunitarios Rurales”. Presentado a comienzos de 1974, señalaba como antecedente “el continuo deterioro experimentado en las condiciones de vida del poblador rural”, por lo que se proponía dotar al habitante rural “no sólo de apoyo tecnológico sino también y, fundamentalmente, de aquellos elementos esenciales que constituyen la promoción social integral de la familia rural”.⁴⁹ En este plan de acciones se criticaban acciones previas “de tipo asistencialistas en las que el individuo constituía un agente pasivo del proceso”.⁵⁰ Tenía como eje el trabajo sobre la vivienda rural, y la organización de actividades de capacitación complementarias. El proyecto, que no llegó a ser ejecutado, estaba destinado a comunidades rurales que agruparan un mínimo de 40 a 50 familias, previsto para ser desarrollado por tres años y coordinado por la red de agencias de extensión rural del INTA. Las críticas al proyecto provinieron de dos de los consejeros que integraban el Consejo Directivo. Uno de ellos, representante de la SRA, afirmó que “los servicios de Asistencia Social” estaban “desvirtuando en cierta manera las funciones principales del INTA”; cuya función principal identificaba con “hacer tecnología agropecuaria, y su consecuencia traerá beneficios para la población rural”.⁵¹ Se evidenciaba así la línea “productivista”, como era mencionada en el lenguaje nativo, una óptica cercana al determinismo tecnológico, en tanto proponía que la difusión de tecnología *per se* podría generar un “derrame” hacia la sociedad, conjugada con una firme oposición a que el INTA tuviera injerencia en las políticas públicas destinadas al sector. Un segundo consejero secundó esta posición, señalando su preocupación sobre nuevas designaciones de profesionales producidas en el organismo. Según la transcripción del acta, “algunas designaciones con títulos que en algunos casos le causaron preocupación, entre ellos sociólogos, arquitectos, antropólogos, psicólogos, etc. Y no

⁴⁷ INTA: El rol de INTA en el Acta de Compromiso Nacional, Buenos Aires, INTA, 1973, p. 5.

⁴⁸ INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 260, 1973.

⁴⁹ INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 631, 1974.

⁵⁰ INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 631, 1974.

⁵¹ Véase INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 632, 1974.

veía por ningún lado técnicos agrícolas, veterinarios, etc.”.⁵² Las críticas evidenciaban la resistencia interna que un sector, con fuerte capacidad de decisión, oponía a las transformaciones impulsadas.

En relación con la articulación entre el INTA y las políticas sectoriales en curso, se destacaba el énfasis puesto sobre acciones de regionalización y la necesidad de profundizar la llegada a áreas alejadas del centro neurálgico pampeano. En este accionar, jugaba un rol destacado la regionalización del INTA que se estaba poniendo en marcha. A partir de la estructuración de zonas estratégicas, se buscaba priorizar el funcionamiento de los circuitos regionales. En este sentido, el INTA también contemplaba por entonces su actuación en zonas de frontera, como en el caso de la estación experimental de Misiones, en donde técnicos y funcionarios del INTA se reunieron en más de una oportunidad para coordinar acciones. En una de ellas afirmaban que debían cumplir “más allá de la difusión de técnicas de producción, una tarea de índole comunitaria”, haciendo hincapié en la baja densidad de población de la zona, la “inadecuada distribución de la tierra”, la existencia de explotaciones agrarias de subsistencia, alto índice de analfabetismo, y un bajo nivel de vida.⁵³ De este diagnóstico se desprendía que el rol del INTA debía cumplir un papel “protagónico y dinámico” en la “organización y consolidación de comunidades rurales”, “difusión de una tecnología que permita el manejo racional de nuestros recursos”, “desarrollo socio-económico de las zonas críticas y el bienestar efectivo de sus habitantes”, “presencia activa [del INTA] en los planes de colonización”.⁵⁴ El Plan de Acción en áreas de Frontera fue finalmente aprobado por el Consejo Directivo del INTA el 17 de septiembre de 1974.

Al mismo tiempo, la coyuntura dentro del INTA era vista por algunos de sus integrantes como una posibilidad de utilizar los intersticios, abiertos por el recambio de autoridades y la falta de definición de una política institucional, para generar nuevos planteos sobre la orientación del INTA. Incorporado como asesor de la presidencia del INTA en 1973, un sociólogo tuvo a su cargo la organización de actividades específicamente dedicadas a la reconfiguración del área de extensión rural del instituto. A partir de una estadía en Chile a fines de la década de 1960, había tomado contacto con el método extensionista impulsado por Paulo Freire.⁵⁵ El plan era implementar algunas de las herramientas elaboradas por Freire para la extensión rural y tomar contacto con la realidad del medio. En el marco de la discusión de la orientación tradicional del INTA, el contacto con los extensionistas tenía por objetivo

⁵² Véase INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta 632, 1974.

⁵³ INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 625, 1974.

⁵⁴ INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 625, 1974.

⁵⁵ El educador brasileño publicó en 1969 *¿Extensión o Comunicación? Sobre los profesionales y el conocimiento en el (no) diálogo de saberes*, en donde —en un contexto de reforma agraria enmarcada en las propuestas de la Alianza para el Progreso— centraba su concepción educacional libertaria en la cuestión agraria. El planteo partía de un análisis crítico de la extensión rural en tanto expansión unidireccional de conocimiento. En particular, Freire problematizaba el rol en el cambio social de los ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas dedicados a tareas de extensión rural, con el objetivo de contribuir a la democratización de la vida rural. Véase Paulo Freire. *¿Extensión o Comunicación? Sobre los profesionales y el conocimiento en el (no) diálogo de saberes*. Santiago de Chile: Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, 1969.

generar una política de extensión por regiones, para que “dejara de ser una máquina de ofrecer productos extranjeros”.⁵⁶ Organizados en talleres y reuniones de discusión a lo largo del país, llegó a elaborarse un documento con los principales lineamientos propuestos para la tarea de los extensionistas. En este sentido, junto con los cambios desde arriba —introducidos mediante la realineación de cuadros institucionales en las distintas burocracias estatales a partir de 1973— existían experiencias desde abajo, protagonizadas por personal de la institución, que desbordaban los cauces institucionales. El reconocimiento social con el que contaban los técnicos y extensionistas por parte de las comunidades rurales estaba ligado a su fuerte presencia territorial, al contacto directo con las condiciones de existencia de las poblaciones rurales. Este reconocimiento tenía su basamento en la propia práctica, y no siempre dependía del institucional:

“El vernos circular por el medio, la oportunidad de bajar y estar al pie de la camioneta consultando un problema hacía que el acceso fuese muy aceptado, muy fácil. Entonces el reconocimiento también estaba en una relación más personalizada, *a través de las personas y no de la institución* (énfasis propio).”⁵⁷

A partir de la escalada represiva que recaería sobre el instituto desde mediados de la década de 1970, el margen de acción de los extensionistas fue mermando. “El *dejar hacer del INTA* se va limitando cada vez más, pero es a la vez una toma de conciencia de lo difícil que se estaba poniendo la situación, sobre todo para los técnicos con mayor compromiso político”, agrega. La cobertura institucional tuvo un primer quiebre a fines de 1974. Ese año, un equipo de trabajo de la estación experimental Famaillá, que realizaba una tarea de acompañamiento y formación a la primera cooperativa agropecuaria de trabajo del país (Campo de Herrera), fue desmantelado, sus principales integrantes encarcelados y luego, ya desde el exilio, exonerados del organismo.

En simultáneo, el espacio rural atravesaría profundas transformaciones. Junto con la crisis de la pequeña producción familiar, la transformación en los patrones productivos inició un complejo proceso de tercerización de actividades que alteró sustancialmente la composición de la estructura social agraria, profundizó la explotación de la fuerza de trabajo rural y comenzó a generar un conjunto de problemáticas sociales y ambientales que alcanzaría su pico de conflicto en las décadas posteriores.⁵⁸ Los contenidos y destinatarios de la extensión rural no permanecieron al margen.

⁵⁶ Exasesor de presidencia, Buenos Aires, 05-0-2013.

⁵⁷ Ex extensionista, Buenos Aires, 04-09-2011.

⁵⁸ La literatura que aborda estas transformaciones es numerosa y variada. Entre otros, véase Martínez Dougnac, G.: De los márgenes al boom. Apuntes para una historia de la sojización. En *De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina* (Cap. I., pp.1-39). Buenos Aires: Imago Mundi; Rofman, A.; Quintar, A.; Marques, N. y Manzanal, M., *Políticas estatales y desarrollo regional. La experiencia del gobierno militar en la región del NEA (1976-1981)*. Buenos Aires: CEUR, 1987; Balsa, J.: *El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense. 1937-1988*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2006.

Extensión rural y dictadura militar

La intervención del INTA iniciada en marzo de 1976 situó algunos puntos prioritarios considerados necesarios para “reorganizar” el accionar del organismo, que fueron recogidos y sintetizados en materiales producidos durante su intervención. La extensión rural fue uno de ellos. Entre los puntos más destacados de la estrategia enunciada se encontraba la designación de directores interinos en las unidades experimentales, con el objeto de “implementar un proceso de cambio en la conducción y manejo de las experimentales”⁵⁹, la renovación de la conducción de departamentos y centros de investigación y de las 225 agencias de extensión rural, así como la “modificación de los criterios de selección del personal”.⁶⁰ Esto era argumentado, según dejaba constancia un informe sobre los primeros dos años de intervención, en función de un funcionamiento deficitario atribuido al área: “En los últimos años el Servicio de Extensión padeció un acentuado déficit en el cumplimiento de funciones de jefes regionales y supervisores de área, lo que se traducía en deterioro de coordinación y control”⁶¹. Este diagnóstico redundó en un notable incremento de “las funciones de supervisión”⁶² sobre los extensionistas, y una fuerte centralización nacional de las actividades de extensión de las distintas regiones.

En 1975, luego de la primera intervención del INTA dispuesta en mayo por el Poder Ejecutivo, el Departamento de Comunicaciones en Extensión Rural había comenzado a editar una revista, destinada a los extensionistas del INTA y de otros organismos. Si bien retomaba una experiencia de publicación anterior, se proponía —según el editorial a cargo del director nacional del INTA (el ingeniero Spinelli Zinni)— dejar sentados los fundamentos que la extensión iba a tener en “El INTA NUEVO” que se prometía como una “avanzada de la tecnología agropecuaria, al servicio de la Nación y el hombre argentino”⁶³ (mayúsculas en original). En julio del año siguiente, el director interino del Servicio de Extensión se refería en la misma publicación a una reciente campaña del trigo, reseñando el rol de la extensión del INTA en conexión a los cambios en materia de políticas agropecuarias. Aludiendo a un incremento en la producción de granos, señalaba: “El nuevo nivel de precios, *unido a un conjunto de medidas que se están implementando*, abre nuevas posibilidades a una actividad que durante mucho tiempo encontró serias limitaciones económicas para su desarrollo”.⁶⁴ El incremento del área sembrada era entendido en el marco de una revalorización de los granos a escala nacional y un “replanteo en los esquemas productivos”, que influía directamente en el quehacer extensionista: “Apenas anunciado este *cambio radical de la política agropecuaria*, el extensionista se encontró de pronto en su trabajo ante un panorama nuevo, mucho más permeable y receptivo: *su audiencia*

⁵⁹ INTA. *Dos años de labor*. Buenos Aires, Ediciones INTA [informe de los primeros dos años de intervención militar], 1978, 5.

⁶⁰ INTA. *Dos años*, 6.

⁶¹ INTA. *Dos años*, 11.

⁶² INTA. *Dos años*, 12.

⁶³ Dirección Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agropecuario, INTA, *Extensión Rural*, 1, 1975, p.1.

⁶⁴ Lemos, O. R.: “Editorial”, *Extensión Rural*, 1976, p.7

comenzó a cambiar tornándose más numerosa y más interesada”.⁶⁵ ¿De qué se trataba el cambio? ¿En qué sentido había comenzado a “cambiar la audiencia” de los extensionistas del INTA?

Por entonces, los cambios en las políticas sectoriales acompañaban la intensificación de la producción cerealera, signada por la modernización agrícola que incrementaba la polarización social en el medio rural y la expulsión de productores poco capitalizados y trabajadores rurales.⁶⁶ En este sentido, desde el INTA se señalaba la necesidad de impulsar la “expansión de la frontera agropecuaria”, advirtiendo no obstante sobre la necesidad de conservar el suelo, “para que a través de las generaciones *pueda seguir sirviendo rentablemente a la empresa privada, al país y al mundo*”⁶⁷ (énfasis propio). Según afirma una entrevistada, “el trabajo de extensión y de investigación estuvo menos ligado a problemáticas de la comunidad y de los pequeños productores”.⁶⁸ ¿Cuál fue, entonces, el enfoque previsto para la extensión? La entrada masiva de becarios en el área con un “perfil apropiado para la transferencia de tecnología”⁶⁹ produjo un fuerte impacto en las agencias de extensión, y fue la contracara de la depuración inicial que se realizó en el área. En 1979 se afirmaba desde las autoridades del servicio que existía una gran expectativa “con respecto a la acción futura de los técnicos que está capacitando el INTA. El enfoque físico-económico social de la empresa permite abarcar todos los aspectos que influyen y determinan su desarrollo”.⁷⁰ Entrevistado para una publicación del INTA en 1982, quien fuera designado jefe regional de extensión en el área de incumbencia de la estación experimental Pergamino mencionaba sobre las implicancias de este “enfoque”:

“Mi llegada en el año 1976 coincidió con una serie de cambios que se produjeron en el organismo, y en tal sentido comenzamos un *replanteo de nuestra estrategia de trabajo*, dentro del marco del *proceso de reprogramación encarado por el INTA en todo el país* (...). En el desarrollo de los objetivos de enseñanza se utilizaron las metodologías conocidas pero *se trató de enfatizar la acción con los profesionales de la actividad privada*. Este grupo de técnicos, que es muy numeroso, se convirtió en una de las clientelas a las que dedicamos preferente atención”.⁷¹ (Énfasis propio).

⁶⁵ Lemos, O. R.; “Editorial”, *Extensión Rural*, 1976, p.7

⁶⁶ Véase, Aparicio, S.: “Evidencias e interrogantes acerca de las transformaciones sociales en la zona extrapampeana”, ponencia presentada en las III Jornadas de Actualización, ILEA, Buenos Aires, Argentina, diciembre, 1982; Hocsmán, L. D.: “Menos extranjeros, más extranjerización. Agronegocios, reflexiones a partir de leyes de tierras rurales y de emergencias de las comunidades originarias”, *Realidad Económica*, 257, pp. 78-102, entre otros.

⁶⁷ INTA. *Dos años*, 6.

⁶⁸ Investigadora del INTA, Buenos Aires, 15-06-2010.

⁶⁹ Alemany, C.: *Apuntes para*, 8.

⁷⁰ *Extensión Rural*, 4, 1979, p. 2.

⁷¹ Baqué, *Extensión Rural*, 1982, p. 3, énfasis propio.

Esta alusión a la transformación del perfil de los interlocutores de las actividades de extensión del INTA ponía en evidencia la incorporación de un nuevo público, los técnicos del sector privado, como “clientela” a la que se dirigía el instituto. Indirectamente, se dirigía a un destinatario final, las empresas agropecuarias, de las que los técnicos eran meros intermediarios. Esta orientación fue acompañada por otras estrategias de extensión que priorizaron el contacto con productores fuertemente capitalizados, al tiempo que fueron dejando atrás las inserciones comunitarias destinadas a la población rural. En este sentido, desde 1977 se intensificaron las experiencias en campos de productores efectuadas por las agencias de extensión rural del INTA. Tratamientos de fertilizantes, introducción de variedades y de diversas prácticas de manejo fueron ensayados en estas propiedades, caracterizadas por su extensión, lo que permitió a esta franja de productores incrementar sus niveles de productividad y rendimiento.⁷² Por otro lado, en 1982, el mismo responsable de uno de los principales servicios de extensión del INTA en todo el país señalaba: “Hoy en día prácticamente no quedan técnicos afectados al trabajo con jóvenes”.⁷³ Según se proponía, la labor con juventudes debía ser canalizada en otras instituciones. En este sentido, según reconstruye un actual investigador, extensionista y voluntario en un grupo de colaboradores del INTA dedicado al contacto con jóvenes que funcionaba bajo la coordinación de una maestra rural en la provincia de Buenos Aires:

“Con el gobierno militar el trabajo con la familia rural empieza a decaer fuertemente y a perder toda línea conductora. Reconvierten a los asesores de Juventudes en otra cosa, pasan a ser ayudantes técnicos, y se empieza a premiar el trabajo de transferencia tecnológica. Y empieza a separarse, en los hechos, no así en el discurso, el trabajo con el productor rural y su familia (que es el mandato de la ley del INTA). El doble discurso se mantuvo, pero en los hechos no”.⁷⁴

Esta escisión entre discurso y práctica, vinculada a los objetivos y contenidos de la extensión rural desarrollada por el INTA, es referida también en relación con la organización interna del servicio. Al decir de otro extensionista del instituto: “La extensión en terreno permanece institucionalmente, pero todas las cabezas que ideaban qué hacer se eliminan totalmente”.⁷⁵ Una exintegrante de Hogar Rural señala que, si bien el servicio continuó, “nos cambiaron las funciones. Lo que se perdió fue el servicio de trabajo social, más que ningún otro”.⁷⁶ Con relación al impacto regional sobre la extensión, agrega que en la región pampeana la intervención “no afectó tanto como en el NOA o como en ciertos lugares del NEA, pero se sintió mucho más el

⁷² INTA. *Dos años*.

⁷³ Baqué, *Extensión Rural*, 1982, p. 31, énfasis propio.

⁷⁴ Ex extensionista en la década de 1970, investigador del INTA. Buenos Aires, 9-10-2009.

⁷⁵ Ex extensionista, Buenos Aires, 17-07-2011.

⁷⁶ Ex asesora de Hogar Rural, 9 de Julio, 02-09-2011.

Golpe para los extensionistas que para los investigadores, aún en esta zona. Porque trabajábamos justamente en lo estructural y no tanto las mejoras técnicas”.⁷⁷ Lo que se generó, entonces, fue un divorcio entre el discurso institucional, que continuaba dirigiéndose a “la familia rural” y la práctica de la inserción en territorio del INTA, que fue adquiriendo un perfil empresarial tanto en el mensaje promovido como en su *modus operandi*.

El rol del extensionista, que al decir de una agrónoma integrante de INTA desde 1969, antes era “el médico clínico local, que estaba asentado en cada pueblo”⁷⁸, se alejó del contacto directo con las comunidades rurales y sus problemáticas, y fue redefinido drásticamente. Pasó de ser “el agrónomo de terreno” instalado en la comunidad, a ser asesor técnico de terratenientes. La producción de tipo minifundista y las necesidades de los agricultores de subsistencia quedaron fuera de la agenda. Al fines de la década de 1970 ya era frecuente que se pensara al espacio rural en tanto despoblado, por ende “que había menos gente viviendo en el campo y que había que intensificar la productividad”.⁷⁹ Como señalan los propios investigadores, en el INTA prevaleció una visión de la extensión concebida como asistencia técnica destinada a mejorar el rendimiento de determinados cultivos. La presencia a nivel territorial disminuyó y transformó su perfil. Las mismas retóricas ligadas a la importancia de las actividades socioculturales, al papel de la juventud rural y a la educación cooperativa continuaban siendo abundantemente mencionadas. En la práctica, muchas de estas instancias se iban modificando, llegando algunas —como los Clubes 4-A— a desaparecer. Buena parte de los valores asociados al cooperativismo y al trabajo con juventudes (solidaridad, ayuda mutua, etc.) se articulaba crecientemente con una visión de corte empresarial, que bien entroncaría con el nuevo perfil dado a la extensión. El supervisor de Juventudes de la experimental Pergamino señalaba: “Apelar a los valores de la cooperación, al idealismo de los pioneros, la nobleza y humanismo de sus principios no tiene mayor trascendencia si en la práctica no va acompañado de una sólida conciencia del manejo empresarial”. Las acciones “de los pioneros”, entendidos como los fundadores del INTA en general y del Sistema de Extensión en particular perdían, en esta visión, todo sentido si no se amoldaban a la nueva lógica definida para la extensión y su público. El logro de una “administración eficiente” y de una “conducta empresarial” estaba ahora entre las directrices de los extensionistas.

La relación con la población rural todavía hoy es fuertemente recordada por los extensionistas del organismo: “Los extensionistas tenían actividades de todo tipo, desde técnicas hasta socio-culturales. Cuando yo fui de becario a San Pedro se hablaba mucho todavía del cine que pasaba el INTA en el pueblo, iban los sábados y pasaban (...) En el 83 eso no estaba más...”. En cambio:

“En la época del gobierno militar empieza con más fuerza *esta cuestión de la transferencia y el bombo*. Esto de pensar que con grandes reuniones, con muchos

⁷⁷ Ex asesora de Hogar Rural, 9 de Julio, 02-09-2011.

⁷⁸ Investigadora del INTA, Buenos Aires, 12-07-2010.

⁷⁹ Ex extensionista, Buenos Aires, 09-10-2009.

folletos, vas a cambiar la mentalidad del productor... Hacer Marketing, mejorar la venta, que todos los productores sean pequeños empresarios. Ese discurso que ya estaba, pero que recibe cada vez más énfasis”.⁸⁰

En este sentido, mientras que se reforzó un aspecto presente dentro de la extensión tradicional ya desarrollada por el INTA, se debilitó otro y, simultáneamente, se des-estructuraron los debates y las experiencias que ponían en cuestión cuál tenía que ser la orientación del organismo. En el primer caso, se reforzó la idea de que era necesario cambiar la mentalidad del productor. Mientras que en los primeros tiempos este enfoque estaba asociado a la difusión de la modernidad por vía de las nuevas técnicas en un agro social y económicamente atrasado, ahora esta idea fuerza se inscribió plenamente en la lógica mercantil y en la reconfiguración de un espacio rural signado por la concentración de capital y la polarización social. Este aspecto conservó, al menos en un plano retórico, una justificación cercana al determinismo tecnológico, que asociaba linealmente mayor difusión tecnológica, mayores rendimientos, elevación del nivel de vida de la población. Simultáneamente, el aspecto de la extensión que instaba a un trabajo integral, con un fuerte contenido socio-cultural dirigido a diversos sujetos rurales, fue desalentado progresivamente. El decaimiento progresivo de las actividades con jóvenes (principalmente) y mujeres, y de las estrategias de contacto que los acompañaban, es parte de este proceso. Al mismo tiempo, las disputas que habían surgido a partir de experiencias alternativas, que reforzaban la inserción territorial y comunitaria al tiempo que criticaban sus fundamentos previos en pos de trascender la asistencia y contribuir al replanteo de las condiciones de vida de la población implicada, fueron desestructuradas de raíz. El nuevo perfil, “de la transferencia y el bombo”, cuyas metodologías serán las “grandes reuniones” y masivas tiradas de “folletos” tendrá su esplendor en las décadas subsiguientes. Así, según apunta una integrante del INTA, se irían “privatizando los propios técnicos del INTA, ‘te asesoro, pero facturo’. Se pierde el rol de lo que era la extensión, que queda como un departamento de publicaciones que recibe los folletos (...)”.⁸¹ En relación con este perfil, un ingeniero agrónomo recuerda su ingreso como becario en 1977:

“El sistema de extensión se desmanteló en la época en la que entré. Hubo un desarme *coincidente con la creación de consorcios en el campo*, los grupos CREA, pero agarraban 10 ganaderos y le pagaban a un asesor para que fuera a sus campos (...) pero no al nivel de pequeños productores, ni mucho menos” (énfasis propio).⁸²

Inspirado en los grupos franceses CETA (*Centre d'Études de Techniques Agricoles*), integrados por reducidos números de agricultores, el primer Consorcio Regional

⁸⁰ Ex extensionista en la década de 1970, investigador del INTA. Buenos Aires, 9-10- 2009.

⁸¹ Investigadora del INTA, Buenos Aires, 12-06-2010.

⁸² Extensionista del INTA desde 1978. Río Cuarto, 07-05- 2013.

de Experimentación Agrícola (CREA) del país se fundó en 1957.⁸³ En 1960, siendo ya cuatro los grupos, se fundó la Federación Argentina de Grupos CREA, luego denominada Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), que nuclea todos los CREA. En este sentido, el accionar de estos emprendimientos privados, los consorcios regionales, no era nuevo para la década de 1980, pero sí tuvo por entonces un impulso creciente. Cada grupo operó conformado por diez o doce empresarios del sector agropecuario. La extensión fue asumida por un asesor, profesional de las ciencias agropecuarias, encargado de gerenciar el plan de trabajo para las empresas del grupo, recopilar información técnica y económica, hacer un seguimiento de las innovaciones adoptadas, preparar reuniones mensuales y articular con otros asesores de la misma región. Su función fue la de “ayudar al empresario en el ajuste de la tecnología que aplica”, considerando que “tan importante como la tecnología, es el *desarrollo del empresario y de la empresa*. Esto posibilita el avance tecnológico y la búsqueda de respuestas concretas a los problemas de la empresa”.⁸⁴ En cuanto a las metodologías, la misión de transferencia fue garantizada fundamentalmente multiplicando la realización de experiencias en los campos de los miembros de los CREA, y a través de publicaciones técnicas y programas para el control de las empresas agropecuarias. En este sentido, más que reemplazar funciones de extensión rural que antes desarrollaba el INTA, el accionar de los CREA fue convergente con el perfil de la actividad impulsada por el organismo. Esta situación también coincidió con la incorporación de un vocal de AACREA al Consejo Directivo del INTA. En 1977, estando intervenido el organismo, el Decreto-Ley 21.673/77 aumentó a diez el número de miembros del Consejo Directivo, designando un vocal más por los productores y otro por las Universidades Nacionales al separarse las carreras de Veterinaria y Agronomía. En 1980, el Decreto 1.428/80 dispuso que el representante de los productores fuera designado por la AACREA, que se sumó así al Consejo. En el marco de una dinámica de acumulación signada por la disputa de las ganancias provenientes de la actividad agroexportadora y un medio rural caracterizado por la existencia de profundas inequidades sociales, la presencia de estas corporaciones no sería menor. La franja de agricultores que no alcanzó a instrumentar los insumos tecnológicos, de alta concentración de capital, así como la población rural que era antes objeto de diversos planes de extensión quedó prácticamente sin cobertura.

Reflexiones finales

El embate represivo que acompañó la intervención del INTA durante la última dictadura redundó en una depuración institucional, que alcanzó a sus integrantes y también a sus orientaciones. Los mecanismos represivos, desplegados con mayor sistematicidad a partir de 1976, se sirvieron de datos sobre los trabajadores del instituto recabados por los servicios de inteligencia en los años previos al golpe

⁸³ Caracciolo de Basco, M., *Modalidades de asistencia técnica a los productores agropecuarios en la Argentina*. Buenos Aires, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 1998.

⁸⁴ AACREA, *Todo empieza por el grupo CREA*, <http://www.aacrea.org.ar/index.php/todo-empieza-por-el-grupo> (énfasis propio).

de Estado. Lejos de reducirse a la esfera militar, existieron otros dispositivos de un alcance temporal más amplio, que acompañaron y se acoplaron a la represión ejercida por las fuerzas armadas y de seguridad. Este fue el caso de las cesantías y los traslados de personal, que funcionaron instrumentando un disciplinamiento y contribuyendo a obturar debates en torno a la orientación de las actividades de investigación y extensión rural.

En este contexto, también muchos programas de investigación experimentaron durante la intervención militar una continuidad. En este sentido, durante este período, hubo quienes desarrollaron tramos fundamentales de sus carreras de investigación, equipos que continuaron trabajando y otros que crecieron o nacieron en estos años. Estas situaciones se produjeron en paralelo a la clausura de las disputas en torno cómo —para qué y para quiénes— era necesario orientar las actividades del organismo. Su efecto, lejos de acotarse a los casos individuales, tuvo una fuerte impronta en la trayectoria del INTA.

La histórica centralidad del sector agropecuario contribuyó a la estabilidad del INTA a lo largo del tiempo, situación que es remarcada por muchos de sus miembros como un alto grado de adaptabilidad del organismo a las diversas coyunturas políticas y económicas nacionales. En este sentido, ¿es el mismo INTA el que emerge después de la dictadura? Si bien la identidad institucional continuó apelando a algunos de los mismos imaginarios, (la “camiseta del INTA”, la “familia rural”), su continuidad se sostuvo a costa de la expulsión de los sujetos y los debates críticos. Situación que, inevitablemente, dejó su marca en la trayectoria institucional.

Asimismo, durante este período se produjo una progresiva mercantilización de las actividades científicas y tecnológicas. En un área estratégica, los planes de mejoramiento vegetal, fue incrementada la apropiación privada del conocimiento (y de los materiales) producidos por el INTA. También fue desmantelada una experiencia, situada en una estación experimental (Pergamino), que apuntaba a un rubro de histórica dependencia tecnológica, la genética aviar.

La orientación de las agendas interactuó también con la reorganización en ciernes del espacio rural. La agenda de estudios de economía y sociología rural, que había experimentado un desplazamiento, novedoso para su trayectoria de investigación, hacia el abordaje integral de aspectos nodales de la cuestión agraria, tales como la distribución y uso de los recursos naturales, los sistemas de tenencia de la tierra y la composición de la estructura social agraria, retomó y profundizó los estudios microeconómicos de administración rural, desconectados de las principales problemáticas sociales y económicas del agro.

Por su parte, la extensión rural reorientó su perfil, disminuyendo notablemente su inserción territorial y privilegiando la transferencia de paquetes tecnológicos a agricultores capitalizados. La reorganización de sus funciones implicó el descabezamiento de parte de sus directivos, cesantías y reubicación extensionistas,

el abandono del trabajo con las juventudes rurales y la interrupción de la única actividad del organismo dirigida a trabajadores rurales. Las estrategias de extensión registraron una continuidad en relación con una orientación vigente desde el comienzo de las actividades del INTA: aquella que se proponía cambiar la “mentalidad” del productor. Este enfoque se profundizó, promoviendo un discurso que se dedicó a fomentar conductas “empresariales”. Al mismo tiempo, se produjo una ruptura en los planteos críticos que, motivados por el contacto directo con las condiciones de vida de la población, buscaban problematizar cuál debía ser el sentido del trabajo con “la familia rural”. El cuestionamiento al carácter verticalista y paternalista del trabajo de extensión impulsado previamente por el INTA y el énfasis en la tarea del extensionista como vector de concientización fueron marginados, apuntalando orientaciones de asistencia técnica que no implicaban un debate en torno a problemas centrales del sector y acotando su margen de acción en las comunidades rurales. La apelación a una nueva “clientela”, como pasó a ser denominada en la jerga institucional, se produjo en simultáneo al progresivo despoblamiento rural, que por entonces conformaba el reverso del proceso de agriculturización en ciernes. En forma tal vez más visible que en otras actividades del INTA en este mismo período, las prácticas de la extensión se vieron afectadas tanto por las políticas represivas, como por la crisis que golpeaba a las economías de menor escala. Alejándose del agrónomo de terreno y de la constitución de la práctica como una arena en disputa, la extensión rural se replegó tranqueras adentro.

Se produjo así una reestructuración de contenidos, objetivos y destinatarios de las tareas de investigación y extensión, que clausuró disputas sobre la orientación de las agendas del INTA e incrementó la fragmentación y mercantilización del conocimiento producido. Este proceso operó articulado a cambios sincrónicos, en distintos niveles. Por un lado, lo hizo en conexión a transformaciones en el proceso de acumulación en general y del sector agropecuario en particular, que dieron como resultado una mayor concentración y polarización del espacio rural, en donde resultaron desplazados y perjudicados los productores de menor capitalización, también desplazados de las agendas de trabajo del organismo, y los asalariados rurales. Al mismo tiempo, se correspondió con transformaciones políticas sectoriales (agropecuarias y científico-tecnológicas), a las que alimentó y de las cuales fue resultado. Finalmente, fue posibilitado por la introducción de mecanismos represivos, que garantizaron la obturación de los debates críticos en torno a la orientación de los conocimientos generados. Como resultado, perdieron terreno los planteos que, en forma heterogénea pero crítica, ponían en cuestión su orientación tradicional.

Como señalamos, esta reorientación de enfoques, problemáticas y objetivos de las agendas de investigación y extensión rural fue simultánea a la intensificación del proceso de concentración del capital agrario, y a la consecuente desaparición de explotaciones y productores. Destinatarios de los conocimientos producidos y protagonistas de la expansión agrícola coincidieron, al igual que lo hicieron los sujetos agrarios que quedaron fuera de las agendas de trabajo y aquellos desplazados por los principales efectos socio-económicos. Si bien esta ecuación tuvo saltos y

fluctuaciones, los contenidos de investigación y extensión estuvieron marcados por la reordenación del espacio rural y, simultáneamente, fueron insumos de las transformaciones que apuntalaron el fortalecimiento de la pampa húmeda, bajo un patrón extractivista que continuaría profundizándose.

Bibliografía

AACREA, Todo empieza por el grupo CREA, disponible en <http://www.aacrea.org.ar/index.php/todo-empezar-por-el-grupo>

ALEMANY, C. E.: Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la Extensión Rural del INTA, en CIMADEVILLA, G. y THORNTON, R. (Ed.) *La Extensión Rural en debate: concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur*. Buenos Aires, Ediciones INTA, 2003, pp. 137-173.

ALEMANY, C. E. y SEVILLA GUZMÁN, E. “¿Vuelve la extensión rural?: Reflexiones y propuestas agroecológicas vinculadas al retorno y fortalecimiento de la extensión rural en Latinoamérica” *Realidad Económica* 227, 2007, pp. 52-74.

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, *Scientists and Human Rights in Argentina since 1976*, Washington, AAAS, 1981.

APARICIO, S.: *Evidencias e interrogantes acerca de las transformaciones sociales en la zona extrapampeana*, ponencia presentada en las III Jornadas de Actualización, ILEA, Buenos Aires, Argentina, diciembre, 1982.

BALSA, J.: *El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense. 1937-1988*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2006.

CARACCILO DE BASCO, M., *Modalidades de asistencia técnica a los productores agropecuarios en la Argentina*. Buenos Aires, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 1988.

FRANCO, M.: *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*. Buenos Aires, FCE, 2012.

FREIRE, P.: *¿Extensión o Comunicación? Sobre los profesionales y el conocimiento en el (no) diálogo de saberes*, Santiago de Chile, Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, 1969.

GÁRGANO, C.: Semillas, ciencia y propiedad. Una mirada al ciclo de producción de conocimiento en el INTA de Argentina, *REDES*, en prensa.

GÁRGANO, C.: La cartera agropecuaria en tiempos de Giberti y el rol del INTA en la política estatal. Intereses, recursos y sujetos sociales agrarios en disputa, *Realidad Económica*, 289, 2015, pp. 108-132.

GÁRGANO, C.: Experimentación científica, genética aviar y dictadura militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956-1976), *Mundo Agrario*, vol. 15, n.º 28, abril 2014. Disponible en: <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv15n01>

GÁRGANO, C.: Producción de conocimiento y construcción de una cartografía represiva en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentino (1973-1983). *RBBA Diálogos entre las Ciencias*, 2014, disponible en <http://periodicos.uesb.br/index.php/rbba/article/download/2762/2685>

GÁRGANO, C.: *Ciencia, tecnología y dictadura. Producción de conocimiento e intervención militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973-1983)*, Tesis doctoral en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2014.

GÁRGANO, C.: Ciencia y dictadura: producción pública y apropiación privada de conocimiento científico-tecnológico. Dinámicas de cooptación y transferencia en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). *Crítica y Emancipación*, 10, 2013, pp. 131-170. Disponible en <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20131223055751/CyEN10.pdf>

GÁRGANO, C.: Ciencia, Tecnología y Dictadura: la reorganización de las agendas de investigación y extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). *Realidad Económica*, 258, 201, pp.120- 149.

GUTIÉRREZ, T. V.: Agro pampeano y roles familiares en la década de 1960, *Mundo Agrario*, 10 (19), 2009. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-59942009000200012&script=sci_arttext

HOCSMAN, L. D.: Menos extranjeros, más extranjerización. Agronegocios, reflexiones a partir de leyes de tierras rurales y de emergencias de las comunidades originarias, *Revista Realidad Económica*, 257, 2013, pp. 78-102.

LOSADA, F.: La institucionalización de la extensión rural con la creación del INTA (1957), *Documentos del*

CIEA, 1, 2003, pp. 27-35.

MARTÍNEZ DOUGNAC, G.: De los márgenes al boom. Apuntes para una historia de la sojización, en *De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2013, pp. 1-39.

ROFMAN, A.; QUINTAR, A.; MARQUES, N. y MANZANAL, M.: *Políticas estatales y desarrollo regional. La experiencia del gobierno militar en la región del NEA (1976-1981)*. Buenos Aires, CEUR, 1987.

ZORZIN, H.: *El medio rural que yo conocí*, Pergamino, Mana, 2012.

Fuentes

Extensión Rural, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1975.

Extensión Rural, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1979.

Extensión Rural, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1982.

INTA, Amistad, noviazgo, matrimonio, *Serie Clubes 4-A Relaciones Humanas*. Buenos Aires, Ediciones INTA, 1962.

INTA, ¿Qué es un Club Juvenil Rural 4-A? *Hoja de divulgación N.º 13*, Villa Ángela, Agencia de Extensión Rural Villa Ángela, 1964.

INTA, Estatutos y reglamentos de clubes juveniles rurales 4-A, *Serie Clubes Juveniles Rurales 4-A, Grupo y Comunidad*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1964.

INTA, *Desarrollo integral de jóvenes rurales*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1967.

INTA, Usted también es responsable, *Serie Clubes Juveniles Rurales 4-A, Grupo y Comunidad*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1969.

INTA, El futuro es de los jóvenes, *Serie Clubes Juveniles Rurales 4-A-Grupo y Comunidad*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1970.

INTA, El rol de INTA en el Acta de Compromiso Nacional. Buenos Aires, 1973.

INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 260, 1973.

INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 613, 1974.

INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 616, 1974.

INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 625, 1974.

INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 630, 1974.

INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 631, 1974.

INTA, Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n.º 632, 1974.

INTA, Resoluciones del interventor dispuesto por el Poder Ejecutivo [7-05 al 1-09-1975].

INTA, Resoluciones de la intervención militar, [24-04-1976 al 27-11-1980].

INTA, Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, capitán de fragata Alberto Rafael Heredia [interventor], Resolución N.º 1/76 y Planilla Anexa, 31-04-1976 [cesantías].

INTA, *Dos años de labor*, Buenos Aires, Ediciones INTA, 1978.

LEMOS, O. R., Editorial, *Extensión Rural* 1, 1976, pp. 1-7.

Documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos. Colección *State Argentina Declassification Project* (1975-1984). Recuperados de: <http://foia.state.gov/SearchColls/CollsSearch.asp>

FIRINGS AND ARREST IN ARGENTINA TECHNOLOGICAL INSTITUTES

Buenos Aires, 04-12-1976. [Telegrama].

REPORTED ARREST OF AGRICULTURAL RESEARCHES

Buenos Aires, 04-09-1976. [Telegrama].

FORD FOUNDATION CALL RE EMPLOYEES AT CASTELAR

Buenos Aires, 04-08-1976. [Memorándum del agregado agrícola James Rudbeck a la embajada estadounidense].

DETENTION OF FORMER FORD FOUNDATION GRANTEEES IN ARGENTINA. Buenos Aires, 4-04-1976.

Documentos del Archivo General de la Armada (AGA):

Archivo General de la Armada, Legajo MR 016775, capitán de navío Alberto Rafael Heredia.

Archivo General de la Armada, Dirección General del personal Naval, Legajo de servicio de Alberto Rafael Heredia.

Archivo General de la Armada, Foja de conceptos, Alberto Rafael Heredia.

Archivo General de la Armada, nota dirigida por Mario Cadenas Madariaga [secretario de Estado de Agricultura y Ganadería de la nación] al capitán de navío Hugo Montagni [delegado naval de la Junta Militar en el Ministerio de Economía], en Legajo MR 016775, folio 132. Bs. As., 3 de septiembre, 1976.

Documentos del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)

DIPBA, *INTA de Pergamino. Posible actuación de célula izquierdista. 1972-1974*. Mesa C, Carpeta Varios, Legajo N.º 451, folios 1 a 30. Fechas extremas del legajo: 1972/1974.

DIPBA, *Información sobre delegados gremiales de ATE INTA*, Mesa B, Carpeta 90, legajo 5, 1973.

DIPBA, *Infiltración de Elementos Comunistas en el INTA*, Mesa C, Varios, Legajo 451, 1974.

DIPBA (s/f). Mesa DS, Varios, Legajo 3769 [Referencias al equipo de Ecología de INTA Castelar].

DIPBA, *Informes sobre el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INTA Castelar*, Mesa DS, Carpeta Varios, Legajo N.º 4082, folios 35, 1974.

DIPBA, *Infiltración extremista en INTA Castelar y San Pedro*, abril-junio 1974, Mesa DS, Varios, Legajo 1785.

DIPBA, *Se solicita actividades del Dr. Hugo Morello en Castelar*, Mesa DS, Varios, Legajo 3769.

DIPBA, *Adoctrinamiento marxista en INTA Castelar*, Mesa DS, Varios, Legajo 4082, noviembre, 1975.

DIPBA, *Asociación del personal del INTA, APINTA*, Mesa B, legajo 156, 1976. [Registro de la nómina de la comisión directiva del sindicato APINTA].

DIPBA, Fichas personales de Gustavo Rodolfo Giombini, MESA "D(s)", Carpeta Varios, Legajos N.º 8460, 8260, 11656, 16261, 8050. 6558, 1425, 14412, 16883, 2224.

DIPBA, Fichas personales de Carlos Rafael Llerena Rosas, Mesa D, legajos 6558, 1425, 14412, 16883, 2224, Diario del Juicio a las Juntas.

Otras Fuentes:

Ley Nacional 23.058/84 [Restituye al INTA su autarquía institucional y financiera], Buenos Aires, 16 de diciembre, 1983.

LLERENA ROSAS, C.: *Sucede en Dorrego. Carta a la Comunidad*. Coronel Dorrego, 3 de noviembre, 1972.

RAPELA DE MANGONE, M. J.: correspondencia, archivo privado familiar, Buenos Aires.

El período comprendido por la última y más traumática dictadura militar (1976-1983) que tuvo la Argentina ha sido analizado en forma creciente desde variados y valiosos enfoques. El crecimiento, cuantitativo y cualitativo, de estas indagaciones ha consolidado un campo de estudio en torno a la historia reciente. Mientras que la cuestión científica y tecnológica se encuentra prácticamente ausente en los trabajos centrados en la historia argentina reciente, la dimensión histórica ligada al período comprendido por la última dictadura aparece en los estudios sociales de la ciencia de modo fragmentario. Es a estas problemáticas que este libro busca contribuir, a través de diversos estudios de caso, que recuperan trayectorias institucionales, académicas, políticas, de investigación, en diferentes ámbitos. ¿Cuál fue la situación del complejo científico y tecnológico argentino durante la última dictadura militar? ¿Qué ocurrió durante la intervención de los organismos de ciencia y técnica con la orientación de las investigaciones? ¿Cómo dialogaron estas transformaciones con los cambios económicos, políticos y sociales en curso? ¿Qué continuidades, y qué rupturas, son posibles identificar en la producción de conocimiento y en las políticas científicas? ¿Qué similitudes y qué particularidades pueden observarse en las distintas trayectorias institucionales y áreas de investigación? Estos son algunos de los interrogantes a partir de los que se origina esta producción colectiva. Al mismo tiempo, lejos de presentar un conjunto cerrado de afirmaciones, los trabajos reunidos en este libro presentan realidades y miradas diversas, y buscan generar nuevos cuestionamientos que contribuyan a profundizar y ampliar esta incipiente línea de investigación.

CONICET



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación